

Revista de Derecho Procesal y Derechos Humanos

Journal of Procedural Law and Human Rights

Directora: Prof. Dra. H.c. Dra. Rosa Avila Paz de Robledo

**Los actos
procesales y
las nuevas
tecnologías:
hacia el
expediente
electrónico en el
fuero civil y
comercial en la
Nación
Argentina y en
la Provincia de
Córdoba**

Proyecto CONSOLIDAR
Aprobado por la Secretaría
de Ciencia y Tecnología de
la Universidad Nacional de
Córdoba, Res. 411/2018
y concordantes.

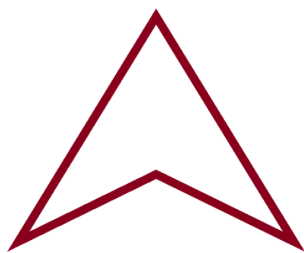
**Universidad Nacional de Córdoba, Argentina,
Año 2022, Vol. 1, N°1 ISSN en trámite**



Revista de Derecho Procesal y de Derechos Humanos
Journal of Procedural Law and Human Rights,
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina,
Año 2022, Vol. 1, N°1

1

ISSN en trámite



**Revista de Derecho Procesal
y Derechos Humanos**

**Journal of Procedural Law
and Human Rights**

Prof. Dra. H.c. Dra. Rosa A. Avila Paz de Robledo
Directora



REVISTA DE DERECHO PROCESAL Y DERECHOS HUMANOS
JOURNAL OF PROCEDURAL LAW AND HUMAN RIGHTS

Dirección

Prof. Dra. H.C. Dra. Rosa A. Avila Paz de Robledo (Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de La Rioja, Argentina)

Coordinación

Prof. Dr. Diego Robledo (Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de La Rioja, Argentina)

Comité Académico

Prof. Dra. H.C. Dra. Rosa A. Avila Paz de Robledo (Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de La Rioja, Argentina)

Prof. Dra. H.C. Dra. Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense, España)

Prof. Dr. José Bonet Navarro (Universidad de Valencia, España)

Prof. Dr. Lorenzo Mateo Bujosa Vadell (Universidad de Salamanca, España – Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal)

Prof. Dra. Mónica Bustamante Rúa (Universidad de Medellín, Colombia)

Prof. Dr. Loïc Cadiet (Université Panthéon-Sorbonne Paris 1, Francia – Presidente honorario de la Asociación Internacional de Derecho Procesal)

Prof. Dra. Amalia Patricia Cobos Campos (Universidad Autónoma de Chihuahua, México)

Prof. Dr. Antonio Gidi (Syracuse University, Estados Unidos)

Prof. Dr. Alexandre Godoy Dotta (Pont. Universidade Cat. do Paraná, Brasil)

Prof. Dr. Miguel Gualano de Godoy (Universidade Federal do Paraná, Brasil)

Prof. Dra. Coral Arangüena Fanego (Universidad de Valladolid, España)

Prof. Dra. Vera Karam de Chueri (Universidade Federal do Paraná, Brasil)

Prof. Dr. Luiz Guilherme Marinoni (Universidade Federal do Paraná, Brasil)



Prof. Dr. Javier Martínez-Torrón (Universidad Complutense, España)
 Prof. Dra. Soraya Amrani Mekki (Université Paris Nanterre, Francia)
 Prof. Dr. Enrique Letelier Loyola (Universidad de Valparaíso, Chile)
 Prof. Dr. Guillermo Ormazabal Sánchez (Universidad de Girona, España)
 Prof. Dr. Diego I. Palomo Vélez (Universidad de Talca, Chile)
 Prof. Dra. María Cristina Patiño González (Universidad Nacional de Colombia, Colombia)
 Prof. Dra. Silvia Barona Vilar (Universitat de València, España)
 Prof. Dr. Roberto Wesley Zapata Durán (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México)

Comité Editorial

Prof. Dra. Claudia González (Universidad Autónoma de Chihuahua, México)
 Prof. Dr. Walter Reifart Muñoz (Universidad de Salamanca, España)
 Prof. Dr. Federico Robledo (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
 Prof. Dr. Miguel Robledo (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

Comité de Jurisprudencia

Prof. Dr. Federico M. Arce (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
 Prof. Esp. Adriana J. Almagro (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
 Prof. Mario Lescano (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

Diseño, Arte de Portada y Gestión OJS

Prof. Dr. Diego Robledo (Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de La Rioja, Argentina)
 Prof. Tec. Juan Pablo Gorostiaga (Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de La Rioja, Argentina).



Agradecimiento especial

Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba.

Oficina de Conocimiento Abierto de la Universidad Nacional de Córdoba.

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.

Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho de UNC.

Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la FD de UNC.



Presentación

La *Revista de Derecho Procesal y Derechos Humanos* es una publicación científica, arbitrada, periódica, de acceso libre cuyo propósito es el estudio del Derecho Procesal y Derechos Humanos en diálogo entre saberes.

A través de esta publicación académica nos proponemos colaborar en la construcción de un espacio editorial de excelencia para la difusión e integración regional e internacional de las producciones científicas tecnológicas de Derecho Procesal con enfoque de Derechos Humanos.

Esta revista nace en el marco del Proyecto de Investigación CONSOLIDAR “*Los Actos Procesales y las nuevas Tecnologías: hacia el Expediente Electrónico en el Fuero Civil y Comercial en el Poder Judicial de la Nación y de la Provincia de Córdoba*” bajo la dirección de la Prof. Dra. H.C. Dra. Rosa A. Avila Paz de Robledo, que fue aprobada por Res. 266/2018 de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, y concordantes Res. 411/18, 455/18 y 472/18, SECYT UNC).

Con el compromiso de presentar a la comunidad científica, académica, jurídica y universitaria, los resultados y avances de procesos de investigación, con el propósito de estimular el diálogo interdisciplinario y con perspectiva pluralista. A través de esta publicación se abre un diálogo de saberes con la comunidad científica y en forma activa a través del de acceso libre digital.

Sólo admite trabajos inéditos y publica aportes científicos originales.



REGLAMENTO - NORMAS EDITORIALES

A) Temática y alcance

A través de esta publicación académica se abarca el estudio de la Constitución, los Tratados de Derechos Humanos, el Derecho Procesal, la Teoría General del Proceso, el Derecho Procesal Civil, el Derecho Procesal Penal, el Derecho Procesal Comercial, el Derecho Procesal Transnacional, el Derecho Procesal Ambiental, el Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal de los Derechos Humanos, Epistemología Jurídica, Derecho Comparado, Teoría de los Derechos Humanos, Argumentación Jurídica, Filosofía del Derecho, Razonamiento y Derecho Probatorio, Bioética de los Derechos Humanos, Derecho de las Personas en estado de vulnerabilidad (discapacidad, vejez, infancia y adolescencia, género y diversidad, víctimas, entre muchas otras), Derecho y Tecnologías, Métodos de Solución de Controversias, Enseñanza del Derecho e Investigación Jurídica, así como los estudios interdisciplinarios, transdisciplinarios y multidisciplinarios.

B) Contenido

En cada número se ofrece varias secciones brindando la oportunidad de publicar trabajos en diversos campos del saber:

- Artículos doctrinales de docentes e investigadores/as
- Comentarios de Legislación y Jurisprudencia
- Reseñas bibliográficas

La Revista Derecho Procesal y Derechos Humanos no se hace responsable por los contenidos de los artículos publicados, ni por las opiniones emitidas por los/as autores/as.



C) Lineamientos del manuscrito

El manuscrito deberá seguir los siguientes lineamientos:

Portada: a) Título en español e inglés (opcionalmente puede ser en portugués, italiano, francés); b) Nombre del Autor/a o Autores/as acompañándose al pie con asterisco las referencias relativas a la máxima titulación, filiación institucional o lugar de trabajo, correo electrónico; c) Resumen en español e inglés con un máximo de 200 palabras cada uno; d) Palabras clave (en español y en inglés "key words") con máximo diez expresiones.

Formato: fuente a utilizar en el cuerpo del texto Arial, tamaño 12, con interlineado simple y márgenes de 3 centímetros.

El título tendrá tamaño 14 con negrita y en el centro.

Debajo del título y en el centro, en fuente tamaño 12 y sin negrita, se indicará autor/a o autores/as y entre paréntesis la filiación institucional.

Los títulos de los epígrafes son precedidos de números romanos utilizando fuente Arial, mayúscula, negrita. (Ejemplo: I. INTRODUCCIÓN). Y los subepígrafes usan fuente Arial, tamaño 12, en minúscula y negrita, precedidos de número arábigo (Ejemplo: 1. Derechos Humanos). Los subsiguientes subepígrafes aparecerán en Arial, tamaño 12, en minúscula y cursiva, precedido de número arábigo sucesivo.

Todas las abreviaturas que se empleen deben ser explicadas la primera vez que se las utilice.

En caso de utilizar tablas y gráficos deben incluir entre paréntesis y fuente Arial, tamaño 10, la explicación de sus abreviaturas, así como la indicación de la fuente de los datos. Si utiliza más de una, debe numerar las tablas y figuras (ejemplo: Tabla N°1: ...)



La revista utiliza sistema de citas ISO 690 (https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_une).

Cuando se pongan, las notas de pie de página deben indicar:

- el apellido y nombre del autor con versalita;
- el título del trabajo en cursiva sin comillas, si es de un título de libro;
- el título del trabajo entre comillas y en letra de imprenta cuando se trata de una publicación periódica u obra conjunta. Cuando se trate de publicación periódica se indicará en cursiva el nombre de la publicación, completándose con letra de imprenta los datos de volumen, número, año de edición, página/páginas. Cuando se trata de obra conjunta, se indicará con letras versalita el nombre del responsable de la obra y en cursiva el título de la obra conjunta.
- Cuando se trata de una publicación electrónica además debe incluir la dirección de URL y su fecha de consulta.
- Toda aclaración respecto al trabajo (colaboradores, agradecimientos, etc.) debe ponerse en una nota al pie, señalada con un asterisco y no con un número.
- El escrito debe presentarse electrónicamente en hojas blancas, en papel tamaño A4, escrito de un solo lado. El envío electrónico se recibe en formato en Word para Windows.

D) Extensión de los originales

Se sugiere la extensión de 15 páginas. Los originales sobre temas específicos no deberán sobrepasar la cantidad de 50 páginas, tamaño A4, a simple espacio con márgenes de 3 cm. En esta extensión quedan comprendidas notas y referencias.

Cuando sea comentario de legislación o jurisprudencia, debe acompañar la misma en adjunto por correo electrónico debe dirigirse a



revistaderechoprocesalyddhh@derecho.unc.edu.ar , así como también debe indicar la fuente de donde ha sido obtenida.

E) Material a presentar

Nota dirigida a la Directora de la ***Revista de Derecho Procesal y Derechos Humanos***, solicitando la publicación del trabajo, acompañada de declaración jurada en la que el autor haga presente que ha respetado las normas vigentes en materia de propiedad intelectual y se hace responsable de cualquier violación a las mismas. Los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la Licencia de reconocimiento de Creative Commons (CC Reconocimiento-NoComercial 4.0) permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga con fines comerciales. Se solicita acompañar un breve currículum vitae o resumen ejecutivo.

Asimismo, debe enviarse por correo electrónico debe dirigirse a revistaderechoprocesalyddhh@derecho.unc.edu.ar en archivos adjuntos (Word y PDF).

Proceso de revisión por pares

Aquellas producciones escritas originales remitidos por los/as autores/as que cumplan con el presente reglamento serán informados a dos evaluadores/as externos en lo que refiere a su relevancia académica, su originalidad y su estructura formal. Si hubiera un dictamen positivo y uno negativo, se remitirá al Comité Editorial para su decisión. Se comunicará a los/as autores/as la aceptación para publicar, o en su caso, la conveniencia de una revisión del original, o el rechazo de los originales. Los/as autores/as serán informados/as de la fecha de



recepción y de la fecha de aceptación de sus trabajos, lo que será asentado en la publicación.

Los originales que no se adapten a las normas de publicación adjuntas serán devueltos a su autor/a.

Frecuencia de publicación

La Revista de Derecho Procesal y Derechos Humanos publica dos números al año y sus convocatorias son -generalmente-, en primer lugar, hasta el día 15 de marzo y, en segundo lugar, 15 de septiembre de cada año, sin embargo, la convocatoria se encuentra abierta todo el año y en forma permanente.

Política de acceso abierto

Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente la investigación al público a través del Portal de Revistas de UNC en <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/procesal/>

La publicación en la revista no da derecho a remuneración alguna a los/as autores/as.

Cada autor/a de trabajo publicado recibirá o tendrá puesto a su disposición un ejemplar de la Revista en formato electrónico en el Portal de Revistas de la UNC y en soporte papel cuando se encuentre impreso.

Las opiniones vertidas en los artículos corresponden exclusivamente a sus respectivos/as autores/as, quien asume la responsabilidad del respeto a la propiedad intelectual al reproducir aquello que no sea de su autoría.



La presentación de un original en la Revista conlleva la aceptación de todas estas normas por parte del autor

Archivado

Esta revista utiliza el sistema LOCKSS para crear un archivo distribuido entre las bibliotecas participantes, permitiendo a dichas bibliotecas crear archivos permanentes de la revista con fines de preservación y restauración.

Responsabilidad y Acceso abierto

Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente la investigación al público a través del Portal de Revistas de UNC <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/procesal/>

La publicación en la revista no da derecho a remuneración alguna a los/as autores/as.

Cada autor/a de trabajo publicado recibirá o tendrá puesto a su disposición un ejemplar de la publicación en formato electrónico en el Portal de Revistas de la UNC y en soporte papel cuando se encuentre impreso.

Las opiniones vertidas en los artículos corresponden exclusivamente a sus respectivos/as autores/as, quien asume la responsabilidad del respeto a la propiedad intelectual al reproducir aquello que no sea de su autoría.

La presentación de un original en la Revista conlleva la aceptación de todas estas normas por parte del autor/a/es.



ÍNDICE / INDEX

- **PORTADA / COVER**
- **AUTORIDADES DE LA REVISTA DE DERECHO PROCESAL Y DERECHOS HUMANOS** / AUTHORITIES OF THE JOURNAL OF PROCEDURAL LAW AND HUMAN RIGHTS
- **REGLAMENTO Y NORMAS EDITORIALES** / EDITORIAL RULES FOR AUTHORS
- **EDITORIAL: DERECHO PROCESAL Y DERECHOS HUMANOS** / **EDITORIAL: PROCEDURAL LAW AND HUMAN RIGHTS** a cargo de la Prof. Dra. H.c. Dra. Rosa Avila Paz de Robledo



SECCIÓN ARTÍCULOS DOCTRINALES DE DOCENTES E INVESTIGADORES/AS

- **CIBERATAQUE VS CIBERSEGURIDAD EN TORNO AL PROCESO JUDICIAL Y LA MEDIACIÓN JUDICIAL / CYBER-ATTACKS VS CYBER-SECURITY: ABOUT JUDICIAL PROCESS AND JUDICIAL MEDIATION** por la Prof. Dra. Rosa Avila Paz de Robledo y Prof. Dr. Diego Robledo
- **DIRITTO (CIVILE) "ALGORITMICO": SUPUNTI RICOSTRUTTIVI / DERECHO (CIVIL) "ALGORÍTIMICO": IDEAS RECONSTRUCTIVAS** por el Prof. Dr. Remo Trezza
- **LA SENTENCIA Y LA TECNOLOGÍA: NUEVOS PARADIGMAS EN EL PROCESO DE LA ORALIDAD EN EL SIGLO XXI / JUDGMENT AND TECHNOLOGY. NEW PARADIGMS IN THE ORAL JUDICIAL PROCESS OF THE 21ST CENTURY** por la Prof. Mónica Gloria Ibarra y por la Prof. Gladys Elder Gauna Donalisio



- **PRUEBA DE WHATSAPP. CUESTIONES PROCESALES Y CONSTITUCIONALES / WHATSAPP AS EVIDENCE: PROCEDURAL AND CONSTITUTIONAL QUESTIONS**, por el Prof. Dr. Miguel Robledo y el Prof. Dr. Federico Robledo
- **LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA / THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE EXECUTION OF JUDGMENT** por el Prof. Esp. Santiago Molina Sandoval
- **EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN LOS JUZGADOS DE JUICIOS DE COBROS PARTICULARES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA / E-FILES IN THE JUDICIARY FOR EXECUTION OF PAYMENT IN THE PROVINCE OF CÓRDOBA (ARGENTINA)** por el Prof. Dr. Federico Martín Arce
- **LA SUBASTA JUDICIAL ELECTRÓNICA EN ARGENTINA / ELECTRONIC JUDICIAL AUCTION IN ARGENTINA** por la Prof. Esp. Carolina del Valle Vallania



EDITORIAL: DERECHO PROCESAL Y DERECHOS HUMANOS

EDITORIAL: PROCEDURAL LAW AND HUMAN RIGHTS

Prof. Dra. H.C. Dra. Rosa A. Avila Paz de Robledo*

(Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de La Rioja,
Argentina)

La investigación es una de las funciones vitales de la Universidad no solo en cuanto a la producción de conocimiento sino también a la producción de información y diálogos con la comunidad.

Esta Revista de Derecho Procesal y Derechos Humanos nace precisamente de un proyecto de investigación enmarcado en la convocatoria de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba por la cual se aprobó en 2018 el proyecto de investigación CONSOLIDAR titulado “*Los actos procesales y las nuevas tecnologías: hacia un expediente electrónico en el fuero civil y comercial en la Nación y en la Provincia de Córdoba*”.

Esta investigación cuenta como consultor académico al Prof. Dr. Lorenzo Bujosa Vadell, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, España, a quien agradecemos muchísimo sus valiosas

* Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, UNC. Doctora Honoris Causae, Universidad Nacional de La Rioja, UNLaR. Docente Investigadora, UNC Categoría 1- Ministerio de Educación de la Nación. Profesora Titular de Teoría General del Proceso y de Derecho Procesal Civil y Comercial y del Posgrado de la Facultad de Derecho U.N.C. Profesora Titular regular, Directora del Instituto de Derecho Procesal, Directora de la Maestría en Derecho Procesal y Directora del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Rioja. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. E-mail: rosa.avila@unc.edu.ar ravila@unlar.edu.ar



contribuciones. Y cuenta con un equipo, integrado por investigadores e investigadoras y dirigido por la suscripta.

Desde la etapa del diseño del proyecto de investigación las preguntas se enfocaban en una realidad enmarcada con un desarrollo progresivo y gradual. Todo cambió desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia. A partir de una nueva realidad de aislamientos y distanciamientos, el uso de las tecnologías de información y comunicación aumentó como respuesta a nuevas necesidades. Un proceso disruptivo generó un nuevo *modus vivendi* y un nuevo *modus operandi*. Una digitalización de tareas generó un salto de innovación disruptiva en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Y más aún, la humanidad se supo vulnerable, se supo expuesta a nuevos riesgos y expone las crisis de las certezas y de lo conocido hasta el momento.

Desde la Ciencia Procesal se describen realidades observables en un contexto concreto, así como los problemas que emergen, en base a un método, se plantean preguntas y se ensayan respuestas, en teorías, juicios, valoraciones y propuestas de mejora, de corrección, de innovación o de mantenimiento de un estado. Se trata de una tarea de alteridad que requiere de participación, intercambio y colaboración en comunidad y a la vez responsabilidad social sobre el proceso y los resultados. Se trata de una acción dialógica y relacional que produce una situación de encuentro y conexión.

Edgar Morin ¹ plantea aprender a afrontar las incertidumbres del conocimiento, de la situación, de la acción. Una comprensión desde la complejidad, en el que el todo es mucho más que la suma de las partes al valorar

¹ MORIN, EDGAR, *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, Ed. Santillana, 1999, p. 43 y ss. (traducción de Mercedes Vallejo-Gomez, con la contribución de Nelson Vallejo-Gomez y Francois Girard), accedida en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000117740_spa (consulta 20/06/2022).



la vinculación y la interconexión que permite superar la fragmentación y la reducción de la especialización del conocimiento.

Se trata de una oportunidad para producir conocimiento nuevo para tiempos nuevos. Se trata entonces de un diálogo de saberes, que revaloriza la interconexión en lugar de la parcialización del conocimiento.

Un desafío actual abrir el diálogo a nuevos fenómenos y problemas, pero también a dialogar con todas las voces. El futuro se construye con actos presentes de personas concretas.

Por ello, se afirma como un espacio de encuentro y diálogo como es la Revista de Derecho Procesal y Derechos Humanos. De investigación-acción situada en territorio que toma como eje la premisa fundamental de construir el Derecho Procesal con enfoque de Derechos Humanos. De vincular, de aprehender a la luz del paradigma convencional de los derechos humanos.

Desde el Proyecto de investigación CONSOLIDAR aprobado por la SECyT de UNC, tenemos en especial consideración el derecho humano a participar en el progreso científico y en los beneficios que de este progreso resulten como expresan, entre otros, el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 13 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y se enriquece con el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través de su artículo 14 y se afirman en la Constitución de la Nación Argentina.

Por ello, el diálogo y encuentro que se propone con esta Revista, se afirma en la Ciencia Abierta. Por ello, se opera con una Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial– Sin Obra Derivada 4.0 Internacional <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



Se investiga, se dialoga, se interactúa con la comunidad en territorio, se interpela ante las vulnerabilidades de las personas y pueblos para el ejercicio de sus derechos, deberes y garantías.

Se construye, en el día a día, con la esperanza de que, como reza el mandato impreso en el Escudo de la Universidad Nacional de Córdoba, “*ut portet nomen meum coram gentibus*”, para que el mensaje universitario llegue al corazón de la gente.

Dra. H. C. Dra. Rosa A. Avila Paz de Robledo

Directora de la Revista de Derecho Procesal y Derechos Humanos,
Journal of Procedural Law and Human Rights,
Directora del Proyecto de Investigación CONSOLIDAR SECYT UNC
Doctora Honoris Causae, UNLaR
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, UNC
Docente Investigadora Categoría 1, Ministerio de Educación de la Nación Argentina



CIBERATAQUE VS CIBERSEGURIDAD

EN TORNO AL PROCESO JUDICIAL Y LA MEDIACIÓN JUDICIAL

CYBER-ATTACK VS CYBER-SECURITY

ABOUT THE JUDICIAL PROCESS AND THE JUDICIAL MEDIATION

Prof. Dra. Rosa Avila Paz de Robledo*

(Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de La Rioja,
Argentina)

Prof. Dr. Diego Robledo*

(Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de La Rioja,
Argentina)

* Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, UNC. Doctora Honoris Causae, Universidad Nacional de La Rioja, UNLaR. Docente Investigadora, UNC Categoría 1- Ministerio de Educación de la Nación. Profesora Titular de Teoría General del Proceso y de Derecho Procesal Civil y Comercial y del Posgrado de la Facultad de Derecho U.N.C. Directora del Proyecto de Investigación CONSOLIDAR “Los actos procesales y las nuevas tecnologías: hacia el expediente electrónico en la Nación y en la Provincia de Córdoba” SECYT UNC. Profesora Titular regular, Directora del Instituto de Derecho Procesal, Directora de la Maestría en Derecho Procesal y Directora del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Rioja. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. E-mail: ravila@unlar.edu.ar y rosa.avila@unc.edu.ar

* Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, Pos Doctor del Centro de Estudios Avanzados CEA, UNC. Docente Investigador UNLaR Categoría 3 -Ministerio de Educación de la Nación. Profesor de Teoría General del Proceso y de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho, UNC. Director del Proyecto FORMAR “La mediación electrónica en la Nación y en la Provincia de Córdoba” e integrante del equipo del Proyecto de Investigación CONSOLIDAR “Los actos procesales y las nuevas tecnologías: hacia el expediente electrónico en la Nación y en la Provincia de Córdoba” SECYT UNC. Profesor Adjunto regular, Coordinador Académico de la Maestría en Derecho Procesal y Coordinador Académico del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Rioja. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. E-mails : drobledo@unlar.edu.ar y diego.robledo@unc.edu.ar
Aceptado para su publicación: 01/03/2023.



Resumen

El presente artículo reflexiona sobre la transversalidad del paradigma tecnológico en el Derecho Procesal. Particularmente, se enfoca en torno al proceso judicial y la mediación judicial respecto a los ciberataques y la ciberseguridad como una premisa para construir el ecosistema de justicia digital. Se analizan casos de experiencias de algunas provincias de Argentina cuyas contingencias han tomado estado público y en base a ello desarrollado planes, normativa de contingencia y medidas concretas para desarrollar la cultura de ciberseguridad. La vulnerabilidad digital y cibernética es una premisa para desarrollar un diseño adecuado a las garantías y derechos humanos en próximas reformas procesales.

Palabras clave

ciberataque al Poder Judicial; ciberseguridad; proceso judicial; mediación judicial; vulnerabilidad digital

Abstract

This article presents reflections about the transversality of the paradigm of technology in the Procedural Law. It focuses on the judicial process and de mediation in cyber-attacks scenarios and in cyber-security as a premise to build the Digital Justice Ecosystem. Public experiences of cybernetics contingencies at Provinces of Argentina are analyzed taking in consideration the plans, the normative and concrete actions taken to develop the culture of cybersecurity. Digital and cybernetics vulnerability is the premise to develop the adequate design for warrants and human rights.

Keywords

cyber-attack to the Judiciary; cyber-security; judicial process; judicial mediation; digital vulnerability

I. INTRODUCCIÓN

Las personas tienen una necesidad creciente de acceder a un servicio (eficaz) que permita solucionar las controversias que se generan en la vida en comunidad.

El Estado a través del contrato social -llamado Constitución- diseña un sistema mediante el cual el Estado es gerente -en tanto administra recursos escasos para satisfacer necesidades particulares y generales- pero también es garante de todos los derechos humanos a los que se comprometió mediante este pacto y nuevos tratados internacionales. El debido proceso, la defensa en juicio, el acceso a justicia, el derecho a ser oído, a ser juzgado por un tribunal imparcial



e independiente, a recibir un trato adecuado en base a la igualdad y no discriminación, el derecho a la duración razonable de las causas, a presentar pruebas, a presentar las correspondientes impugnaciones, a no ser juzgado dos veces por lo mismo, son algunos de los mandatos de derechos humanos a los que el Estado es responsable de que se cumpla.

Para ello, el Estado como República parte de la premisa básica, para poder cumplir con esos compromisos y mandatos, es necesaria una división de funciones estatales, y ha encargado, principalmente, al Poder Judicial la administración de justicia². La historia reciente refleja que ante la necesidad social de solucionar conflictos intersubjetivos de modo eficiente han (re)surgido los métodos de solución de controversias, entre los que se encuentra la negociación, la mediación, la conciliación. Y, de hecho, en el diseño de administración de justicia se desarrollan los Centros Judiciales de Mediación, al punto que la doctrina reconoce que el acceso a justicia es más comprensivo que solo de lo jurisdiccional³.

Este diseño constitucional es atravesado transversalmente por nuevos paradigmas como las perspectivas de vulnerabilidades (de infancia, adolescencia, vejez, género y diversidades, de discapacidades, de pueblos indígenas, de raza y situación de migración, de pacientes, usuarios/as, consumidores/as, entre muchísimas otras). Estas vulnerabilidades se vuelven visibles a medida que se va tomando consciencia del estatus de derechos

² La Constitución de la Nación Argentina además diseñó un sistema federal, por el cual existe la Nación y las Provincias, quienes han reservado el poder de administrar justicia. De esta manera, en el sistema federal argentino existen múltiples sujetos que conforman la regla federal. Visto el diseño federal como un gobierno multinivel, es posible señalar que existen distintos sujetos - Nación, Provincias, Municipios, entre otros- quienes tienen a su cargo responden a las demandas y necesidades sociales. Y este reparto de funciones se hace de acuerdo a una división de poderes exclusivos, compartidos y reservados. Funciona de acuerdo al principio de subsidiariedad con un esquema por el cual, si uno de los sujetos falla en responder a una obligación a la que se había comprometido jurídicamente, otro sujeto federal debe responder. Cfr. ROBLEDO, FEDERICO JUSTINIANO. "La necesaria revitalización del Federalismo Argentino" en *Homenaje al Sesquicentenario de la Constitución Nacional (1853-2003)*, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Ed. Advocatus, Córdoba, Argentina, 2003, p. 154.

³ Cfr. ÁLVAREZ, Gladys *La mediación y el acceso a la justicia*, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 47.



humanos, que han marcado desde la segunda mitad del siglo XX y continúan en permanente construcción, deconstrucción y aprehensión de enfoques en sintonía con sociedades más justas, pacíficas e inclusivas, como se establece en los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030.

La otra gran transformación que atraviesa al sistema de justicia es la transformación tecnológica y la civilización en red, situación que creció disruptivamente en la pandemia.

Por ello, en este artículo se reflexiona acerca de paradigmas que atraviesan transversalmente al proceso judicial y a la mediación judicial, como son el tecnológico y ante ello nuevas formas de vulnerabilidad de las cuales la Ciencia Procesal no es ajena, el paradigma de justicia restaurativo.

Respecto a la llamada Justicia digital se analiza en función de los ciberataques versus ciberseguridad a los Poderes Judiciales en Argentina con referencia a la Provincias de Córdoba, La Pampa, La Rioja, y San Juan y su capacidad de respuesta en torno al proceso judicial y a la mediación judicial. A modo de cierre propiciamos conclusiones propuestas, con enfoque de derechos humanos.

II. CIENCIA PROCESAL Y EL PARADIGMA TECNOLÓGICO

A la comunidad procesalista incumbe preguntarse por una serie de nuevos desafíos en la Ciencia Procesal. Compartimos la reflexión de Didier⁴ que la

⁴ “O objeto das preocupações dos processualistas vem-se transformando muito rapidamente, e com muita intensidade. Se comparamos a extensão da área de investigação desse ramo da ciência jurídica no final do século XX com o que temos hoje, a diferença é realmente significativa (...) Desde a inserção de temas dogmáticos tradicionalmente ligados a outras disciplinas (direitos fundamentais, controle de constitucionalidade, teoria das fontes do Direito, hermenêutica jurídica), até o reconhecimento de objetos novos de investigação (como as relações entre o processo e a tecnologia), parece clara uma tendência de ampliação do objeto epistêmico das ciências do processo. (...) É inevitável pensar, ainda, de que modo a tecnologia impacta em todos esses objetos de investigação (normas, participantes, ensino/doutrina, administração judiciária e portas do acesso à justiça). As relações entre o processo e a tecnologia atravessam todos os possíveis objetos de estudo de um processualista” Cfr. DIDIER, FREDIE JR. “Do que se ocupa um(a) processualista?” en *Civil Procedure Review, Ab omnibus pro omnibus*, Asociación Internacional de Derecho Procesal, Brasil, 2021, Vol. 12, N° 3: set.-dez. 2021, pp. 119-126.



relación entre la tecnología y el proceso atraviesan todos los posibles objetos de estudio de un(a) procesalista.

El estudio del Derecho Procesal abierto a la complejidad y a la incertidumbre se ha vuelto tierra fértil para nuevas líneas de investigación, una de ellas vincula el Derecho Procesal a las dinámicas y disruptivas transformaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación⁵.

Se afirma que transitamos un cambio de era y la doctrina intenta explicar estos cambios a través de diferentes conceptos como la “era digital”, “ la civilización de la red”, la “cuarta revolución industrial”, la “sociedad de la información”, la “sociedad del conocimiento”, “era exponencial”. La irrupción de la computadora y de internet generó un universo digital, un ciberespacio de alcance global y local, una cibercultura, una mutación tecnológica acelerada que da sustento a sociedad en red con la posibilidad de comunicarse con instantaneidad espacio-tiempo.

En Argentina, la Ley 27.078 declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes. La finalidad de la norma apunta a

garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones, reconocer a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de nuestra Nación, promover el rol del Estado como planificador, incentivando la función social que dichas tecnologías poseen, como así también la competencia y la generación de empleo mediante el establecimiento de pautas claras y transparentes que favorezcan el desarrollo sustentable del sector, procurando la accesibilidad y asequibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el pueblo⁶.

⁵ Cfr. AVILA PAZ DE ROBLEDO, ROSA A. (directora) *Manual de Teoría General del Proceso*, Advocatus, Argentina, 2006, T. II, p. 207 y ss.

⁶ República Argentina, Congreso de la Nación, Ley 27078, sancionada 16/12/2014 y publicada en Boletín Oficial el 19/12/2014.



En este aspecto se señala que el ciberespacio se ha transformado en la piedra angular de la interacción entre las personas, de las infraestructuras nacionales e internacionales de comunicación, de las transacciones comerciales y financieras, los servicios de emergencia, entre otros ámbitos de la vida en sociedad, convirtiéndose en un campo de actuación de los Estados. Que, a partir de este cambio de entorno, las relaciones jurídicas, económicas, administrativas, civiles, comerciales, laborales y todas aquellas que son necesarias para el desarrollo humano, se gestan dentro del ámbito del ciberespacio⁷.

Asimismo, la UNESCO sostiene que el concepto de universalidad de internet se sostiene en los Principios ROAM-X (por sus siglas en inglés), y su uso debe basarse en los derechos humanos (Rights-based), además debe ser una red abierta (Open), accesible para todos/as (Accessible) y contar con la participación de múltiples partes interesadas (Multi-stakeholder participation)⁸.

La transformación digital durante la pandemia global impactó transversalmente en todos los aspectos la vida de las personas, pero también de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. A las capacidades tecnológicas con las que se contaba, se creó un innovador abanico de tecnologías digitales avanzadas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, el metaverso⁹, la internet de las cosas, computación en la nube, la computación cuántica, entre muchas otras.

No lo inventó la pandemia, pero sí aceleró la implementación de estrategias camino a una Justicia Digital. El teletrabajo, la firma digital, el expediente electrónico y las audiencias virtuales pusieron en evidencia las capacidades de

⁷ República Argentina, Poder Ejecutivo de la Nación, Ministerio de Seguridad, Resolución 175/2022, Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022 consultada en <https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/260204/20220401> (consulta 10/02/2023).

⁸ Cfr. UNESCO, *Internet Universality Indicators* en <https://www.unesco.org/en/internet-universality-indicators?hub=66940> (consulta 10/02/2023).

⁹ De “meta” más allá de y “verso” haciendo referencia al universo. El término tiene su origen en el Gaming y ha recuperado relevancia desde la transformación de una red social como Facebook a Meta.



gestión tanto de infraestructura como de capacidades de usuarios y usuarias del sistema de administración de justicia.

Las metodologías de trabajo ágiles han revolucionado la cultura organizacional judicial ya que *“en lugar de seguir una secuencia “vertical”, por etapas o top down, los procesos de implementación de políticas y proyectos (concepción, iniciación, análisis, diseño, desarrollo, testeo y puesta en marcha) se basan en una iteración y ajuste permanentes en todas las etapas, con equipos trabajando de manera coordinada e integrada, con intervención de los (...) destinatarios”*¹⁰.

El *case management*, el gerenciamiento de casos y la gestión judicial atraviesan una transformación digital que expande cada vez más el universo de actos procesales y supone una serie de nuevos desafíos entre la transición y la proyección al futuro.

Uno de los desafíos de construir una Justicia Inteligente es precisamente, responder a las necesidades actuales que demanda una sociedad diversa, que por un lado se desarrolla como una comunidad hiperconectada y algoritmizada, y por el otro lado, es atravesada por una brecha digital, una barrera de acceso a justicia para personas en condiciones de vulnerabilidad.

III. ECOSISTEMA DE JUSTICIA DIGITAL

Si se acepta que el acceso a justicia abarca más que solo acceder a la jurisdicción judicial y se considera que abarca desde las capacidades jurisdiccionales hasta las no jurisdiccionales, entonces, nos encontramos ante un enfoque macro. A este enfoque atravesado por el paradigma tecnológico digital se le llama Ecosistema de Justicia Digital, porque abarca el abanico de capacidades de responder a la necesidad de las personas y de la comunidad de solucionar las controversias de manera civilizada, e incluye tanto capacidades estatales como por ejemplo a través del proceso judicial (del sector público)

¹⁰ OSZLAK, OSCAR. *El Estado en la era exponencial*, ed. Instituto Nacional de Administración Pública, Buenos Aires, 2020, p.135.



como no estatales (del sector privado y tercer sector) como por ejemplo la mediación desde un centro privado, o el arbitraje que surge de un contrato entre particulares, entre otras formas).

Ello supone repensar a la administración de justicia como sistema complejo¹¹. El sentido está en el acceso a justicia en su acepción amplia, *“la posibilidad de hacer uso, como ciudadanos, de los mecanismos y estructuras del sistema judicial del Estado para la defensa de los derechos legalmente reconocidos. Implica analizar los diferentes hechos que posibilitan (o no) el vínculo entre los individuos como ciudadanos y el sistema judicial, para la defensa de los derechos legalmente consagrados por el principio de igualdad ante la ley”*¹², pero también en las garantías procesales del debido proceso y defensa en juicio, de las cuales se derivan las demás.

Una reconfiguración del ecosistema judicial digital supone considerar:

- a) un diseño institucional en la normativa que enmarca principios, derechos, garantías, procesos generales y especiales, como así también facultades y deberes de usuarios y usuarias;
- b) un diseño organizacional que defina el uso racional de las capacidades de los recursos humanos en base a funciones y tareas, así como de la infraestructura necesaria para brindar un servicio eficiente;
- c) un diseño de dinámica funcional que atiende a la planificación, ejecución, evaluación a la luz de estándares de calidad¹³, así como la gestión de

¹¹ Como expresa en este sentido Ludwig von Bertalanffy en su Teoría General de los Sistemas: *“La tecnología y la sociedad se han vuelto tan complejas que los caminos y medios tradicionales no son ya suficientes y se imponen actitudes de naturaleza holística, o de sistemas, y generalista o interdisciplinaria. (...) Los requerimientos tecnológicos han conducido a nuevos conceptos y disciplinas, y en parte, muy originales y que implantan nuevas nociones básicas como las teorías de control y la información, de los juegos y de la decisión, de los circuitos y de las colas, etc.”*. Cfr. BERTANLAFFY, LUDWIG VON, *Teoría general de los sistemas. Fundamentos, desarrollo, aplicaciones*, Fondo de Cultura Económica, México, 7ª reimpresión 1989, pp. XIV y XV.

¹² GERLERO, MARIO “Acceso a la justicia en la gestión social de calidad” en Humberto Quiroga Lavié y Cecilia Federico (directores) *Gestión Social de Calidad en la Justicia*, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2005, p. 28.

¹³ La calidad entendida como “bien social destinado a desarrollar valores y principios tales como solidaridad, participación, creatividad, en fin el bienestar de quienes trabajan por la justicia y de aquellos que la demandan, podemos decir que Gestión Social en la Justicia es intervenir en todo el ámbito judicial, esto es, juzgados, Corte, Cámara, Consejos de la Magistratura, etc., tratando



procesos y casos, así como el desarrollo de indicadores y el desarrollo de planes de contingencia;

- d) un diseño de competencias enfocado en el desarrollo de la idoneidad de las personas que brindan el servicio de justicia potenciando a través de la capacitación¹⁴ (buenas prácticas, protocolos de trato adecuado de acceso a justicia), tanto competencias jurídicas como las no jurídicas (escucha activa, motivación, liderazgo, comunicación eficaz y asertiva, lenguaje jurídico claro y sencillo, entre otras) para el desarrollo de una justicia cordial, una justicia cercana y con rostro humano.

La innovación judicial no se limita a la incorporación de la tecnología o la algoritmización de las tareas sino a potenciar el desarrollo de nuevas capacidades de la organización, es decir a generar la capacidad judicial de innovar para hacer frente a nuevas necesidades de la sociedad. Ello supone un diálogo recíproco y continuo entre la Justicia y la sociedad, una justicia próxima, ya que como sostiene Gerlero “*La gestión social está pensada en función del otro*”¹⁵. Por ello, la innovación y la gestión judicial de calidad requiere optimizar el acceso a justicia y la tutela judicial eficiente, oportuna y adecuada.

El concepto de innovación en sí lleva implícito la idea de reforma¹⁶. Por eso, una reforma procesal no alcanza para transformar la realidad procesal, supone pensar a la institución, a la organización, a las personas (usuarios/as), y al proceso/producto. No se puede transformar la realidad solo a partir de una

de lograr un funcionamiento óptimo para brindar un mejor servicio pensado en los demás, es decir, en el ciudadano que recurre a ellos, ya sea peticionando su intervención en una controversia, o bien como acusado sometándose a la justicia”. Cfr. GERLERO, MARIO “Acceso a la justicia en la gestión social de calidad” ob. cit., p. 31.

¹⁴ Cfr. AVILA PAZ DE ROBLEDO, ROSA A. “Formación de operadores en oralidad y proceso por audiencias atendiendo el acceso a justicia de colectivos vulnerables, para construir “sociedades justas, pacíficas e inclusivas” -ODS 2030-” en *XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal. Un procoeso para una nueva justicia. Homenaje a los Dres. Efraín Quevedo Mendoza y Mario Kaminker. In memoriam Dres. Julio B. J. Maier, Eduardo de Lazzari y Carlos Alberto Carbone*, Asociación Argentina de Derecho Procesal, Poder Judicial de Mendoza, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2022, pp. 364 a 371.

¹⁵ GERLERO, MARIO “Acceso a la justicia en la gestión social de calidad” ob.cit., p. 31.

¹⁶ Cfr. OTEIZA, EDUARDO “Reformas procesales en América Latina. Tendencias y tensiones entre los Estados Nación y la Comunidad internacional” en Eduardo Oteiza (coord.) *Sendas de las reformas de la justicia a principios del siglo XXI*, Ed. Trotta, Madrid, 2018, p. 43.



reforma procesal normativa, ni se puede abordar una reforma procesal integral enfocada solo en un aspecto.

Una buena estrategia judicial, que parte de un diagnóstico integral de las capacidades estatales y de la participación de otros/as operadores(as) jurídicos para diseñar una planificación y trazar metas y objetivos. En todos los casos, la evaluación forma parte de ese proceso de innovación para determinar, valorar, si ha alcanzado las metas propuestas, si ha satisfecho necesidades jurídicas, si hubo barreras de acceso a justicia o algún grado de fortalecimiento en el cumplimiento de los estándares de derechos humanos. Para ello, es necesario desarrollar el aprendizaje organizacional, ya que ningún proceso está exento de error, pero el error necesita ser aprehendido para transformar el servicio.

IV. VULNERABILIDADES Y DERECHOS DIGITALES EN EL ÁMBITO PROCESAL

Los derechos humanos como límite al poder estatal adquieren una dimensión innovadora en el ciberespacio y metaverso. Los derechos digitales se manifiestan en el Derecho Procesal al reconocer en el ordenamiento jurídico, derechos, garantías y deberes, como mandato de optimización de los derechos humanos.

La dignidad digital¹⁷ que tiene toda persona, por el hecho de ser persona, es una derivación de la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo primero reconoce que *“Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”*. Existo junto con la imagen y reputación digital¹⁸, que integra la protección de los datos personales, al honor, a la intimidad personal y familiar, (en el caso de personas humanas) y de marca y patentes (en el caso de

¹⁷ Cfr. AVILA PAZ DE ROBLEDO, ROSA A. “La Persona Humana y el Bien Común en el Siglo XXI. La tutela jurídica de Internet y las nuevas tecnologías desde el humanismo de Jacques Maritain” en *La Persona humana y el Bien común*, Ed. Alveroni, Córdoba, Argentina, 2012, p. 194 y ss.

¹⁸ Cfr. GERLERO, MARIO S., LEZCANO, JOSÉ M. Y LICEDA, ERNESTO (comp.) *Los derechos en la sociedad digital. Las redes sociales, la privacidad y la intimidad como fenómenos socio-jurídico problemáticos*, Grupo de Estudio de la Complejidad en la Sociedad de la Información, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina, 2019, p. 126.



personas jurídicas, por ejemplo, empresas). También abarca modalidades de teletrabajo como modalidades de trabajo fortalecidas como fruto de la pandemia global.

Existe una vulnerabilidad digital a la que las personas están potencialmente expuestas al interaccionar en el ciberespacio. La pandemia acentuó estas vulnerabilidades digitales¹⁹.

La vulnerabilidad digital de niñas, niños y adolescentes a través del delito de grooming²⁰ o ciberacoso escolar. En el espacio judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se creó la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes a través de la Resolución 1674/2004 con el propósito de coordinar el sistema informático de la base general de datos que fue implementada por la Resolución 747/2007 que *“permite a jueces de diferentes jurisdicciones con competencia en materia de menores acceder de inmediato, en forma segura y sencilla, a la información registrada”*²¹.

Desde un Derecho Procesal transversalmente atravesado por el género y diversidad²² se identifican diversas manifestaciones de violencia de género digital. En este sentido, la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil sentencia que *“la violencia de género digital es una actividad dañosa que se encuentra en aumento en los últimos años. Es una forma de violencia que se perpetúa valiéndose de herramientas tecnológicas y se ejerce a través de acciones directas o indirectas, de ámbito privado o público, basadas en una*

¹⁹ Cfr. AVILA PAZ DE ROBLEDO, ROSA A. et. al. “La Justicia y las personas en condiciones de vulnerabilidad frente a la pandemia y post pandemia covid-19” en G. Barrera Buteler (director) *El derecho argentino frente a la pandemia y post pandemia*, Colección Ciencia, Derecho y Sociedad, Editorial de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, Advocatus, Argentina, 2020, T. 3, pp. 189-258.

²⁰ República Argentina, Congreso de la Nación, Ley 27.590, “Mica Ortega”, sancionada el 16/12/2020. Esta ley creó el programa “Clic Derechos - Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes”.

²¹ República Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, *Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes*, en <https://www.csjn.gov.ar/bgd/> (consulta 30/01/2023).

²² El artículo 3° de la Convención Belem do Pará reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, sancionada 13/03/1996 y promulgada 01/04/1996



*relación desigual de poder del género masculino sobre el femenino*²³. En este sentido, es valioso reconocer que la CSJN creó una Oficina de la Mujer, encargada de incorporar la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos en aras de lograr la equidad en el espacio judicial.

Existe una vulnerabilidad digital en los derechos de las personas con discapacidad toda vez que en el diseño de una política pública judicial o en un acto procesal digital no se repara en las barreras que pueda generar un entorno digital en la diversidad funcional y discapacidades. La Convención de Derechos de las Personas con discapacidad ha sido incorporada a los tratados internacionales con jerarquía constitucional del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional²⁴.

De la misma manera, sucede con las personas mayores (por ejemplo, cuando se repara en la dicotomía nativos y migrantes digitales) protegidos por la Convención Interamericana de sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, también reconocida con jerarquía constitucional del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional²⁵. De allí que es necesario desarrollar ajustes razonables al proceso judicial vigente y partir de un diseño universal ante una eventual reforma procesal que contemple estas vulnerabilidades como una proyección del principio de igualdad.

Asimismo, se considera necesario que para hacer efectiva esta igualdad es preciso generar y aplicar protocolos de trato adecuado en el acceso a justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. Las 100 reglas de acceso a justicia

²³ Poder Judicial de la Nación, Cámara Civil – Sala M, Causa 33626/2022 “Q C, E S c/ T, B s/DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR”, Buenos Aires, 15 de julio de 2022 [https://repositorio.mpd.gov.ar/documentos/QCES%20\(Causa%20N%C2%BA%2033626\).pdf](https://repositorio.mpd.gov.ar/documentos/QCES%20(Causa%20N%C2%BA%2033626).pdf)

²⁴ La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por la Ley Nacional 26.378/2008 (sanc. 21/05/2008, B.O. 09/06/2008) y años después se le otorgó jerarquía constitucional a través de la Ley 27.044 (sanc. 19-11-2014, B.O.22-12-2014).

²⁵ Cfr. H. Congreso de la Nación, Ley 27700 que otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45ª Asamblea General de la OEA, el 15 de junio de 2015, Boletín Oficial de la República Argentina, 30/11/2022 en <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27700-375740> En este sentido, LETELIER LOYOLA, ENRIQUE “Acceso a la justicia y brecha digital en los adultos mayores. Informe sintético sobre la cuestión en Chile” en Trayectorias Humanas Trascontinentales, Chile, 2019, N°5.



para las personas en condición de vulnerabilidad son un punto de apoyo en este sentido, que no se encierran a un concepto determinado, sino que en forma dinámica se actualizan, estas reglas dadas en Brasilia en el año 2008 fueron actualizadas en Quito, Ecuador, en 2018.

También, a partir de las relaciones en el ciberespacio surgen otras vulnerabilidades como emergen ante el comercio electrónico, y las finanzas digitales -FinTech- consumidores/as digitales. Así como en materia de servicios, como por ejemplo en la salud, usuarios/as digitales.

Estas vulnerabilidades -y muchas otras más- a partir de su reconocimiento y de la toma de conciencia permiten construir un Derecho Procesal con enfoque de derechos humanos. En definitiva, son una expresión de la humanización del proceso digital.

En este sentido, las garantías del debido proceso digital y la defensa en juicio tutelan la dignidad en los entornos digitales. Es preciso reconocer que en ejercicio de una función pública estos derechos digitales requieren el desarrollo de un ejercicio responsable y comprometido con ética digital de cada persona que interviene y el ejercicio de actos procesales con buena fe digital.

Más aún, una innovación desde el complejo ecosistema en construcción llamado Justicia Digital supone la comprensión que la resolución de conflictos requiere un diseño procesal integrado tanto por mecanismos jurisdiccionales como por los métodos participativos de resolución de conflictos (mediación electrónica²⁶, arbitraje en línea, así como otras formas de las llamadas *online dispute resolution*)²⁷. Resulta relevante esta estrategia procesal para construir soluciones a partir de la autonomía de la voluntad o como le llaman Folger y Baruch Bush *empowerment* o *self-determination*:

²⁶ Cfr. BUJOSA-VADELL, LORENZO M.; PALOMO VÉLEZ, DIEGO “Mediación electrónica: Perspectiva europea”. *Revista Ius et Praxis*, Universidad de Talca, Chile, 2017, vol. 23, N° 2, p. 51-78, <https://www.redalyc.org/pdf/197/19754349003.pdf>

²⁷ Cfr. AVILA PAZ DE ROBLEDO, ROSA A. “La justicia de paz cordobesa y la resolución de conflictos mediante sistemas mixtos: mediación-arbitraje (Med-Arb y Arb-Med)” en XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, “Modelos de Justicia: Estado Actual y Reformas Procesales” Jujuy, 10, 11 y 12 de septiembre de 2015, ponencias seleccionadas, Asociación Argentina de Derecho Procesal y Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, Jujuy, Argentina, 2015.



our first premise has always been that self-determination, or what we call empowerment, is the central and supreme value of mediation—a premise probably shared by many in the field. This is what we were struck by when we began and believed was uniquely served by mediation. Empowerment is the heart of the mediator's mission, and we value self-determination above all. We believe in the value of upholding party choice, and we also believe that increasing understanding, reaching sustainable resolution, and other goals all rest on the foundation of genuine party self-determination. And we believe that the experience of self-determination is what parties themselves value most in the mediation process—and most mediation as currently practiced does not provide that experience to mediation clients²⁸.

En este sentido, resulta innovador (re)pensar métodos de solución de controversias como una vía posible y complementaria en el ecosistema judicial digital. Asimismo, esta autonomía de la voluntad se proyecta en la autodeterminación de la información que receipta, gestiona y almacena el Poder Judicial. En este sentido, es conveniente atender las Reglas de Heredia que establecen pautas mínimas para la difusión de información judicial en Internet. A través de estas reglas se establece que

debe protegerse la privacidad e intimidad cuando se traten datos personales referidos a menores o incapaces; asuntos de familia o que revelen origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos; datos relativos a la salud o a la sexualidad, datos sensibles o de publicación restringida según cada legislación y jurisprudencia nacionales aplicables. Que, para estos casos, dichas Reglas prevén que los datos personales de las partes, terceros y testigos intervinientes sean suprimidos, anonimizados o inicializados²⁹.

²⁸ FOLGER, JOSEPH P.; BARUCH BUSH, ROBERT A. "Reclaiming Mediation's Future: Re-Focusing on Party Self-Determination" in *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, U.S.A., 2014, Vol. 16, p. 742.

²⁹ Cfr. Disposición 12/2010 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, República Argentina, en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/168772/norma.htm> (consulta 10/02/2023).



La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (en adelante CSJN) a través de la Guía de buenas prácticas para el tratamiento y difusión de la información judicial expresa que:

La información que se genera en los tribunales debe ser suministrada a las partes que intervienen en un proceso judicial y corresponde su difusión a la sociedad, en cuanto contribuya al conocimiento y comprensión de la forma en que el Poder Judicial aplica el derecho y toma decisiones jurisdiccionales, de gobierno y administrativas, facilitando de esta manera un adecuado control ciudadano. Los procesos que se desarrollan ante los tribunales son públicos. Por ende, una vez que los expedientes han sido tramitados en los términos de la legislación vigente, las resoluciones dictadas y las sentencias constituyen documentos públicos. Los órganos judiciales deberán procurar la difusión en Internet de todas las resoluciones y sentencias, salvo las relacionadas con menores o incapaces, causas en las que esté comprometida la intimidad o la seguridad de las personas, los casos de protección de datos personales y toda actuación en que la publicidad pueda perjudicar a los intereses jurídicos que deban ser protegidos. El acceso a los expedientes y a las resoluciones y sentencias no publicadas deberá ser solicitado al tribunal que entiende en cada caso particular, el que analizará la procedencia de la petición³⁰.

En este sentido, la CSJN³¹ dispuso una regla de transparencia en aras de garantizar el derecho a la información en casos judiciales de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía que sea transmitidos por medios audiovisuales; siendo ponderada esta regla de difusión pública de juicios orales a la luz del debido proceso y el respeto del principio de inocencia e intimidad de las personas acusadas.

Y más aún, corresponde pensar que no solo las personas pueden ser vulnerables. Las instituciones como el Poder Judicial también pueden ser

³⁰ Poder Judicial de la Nación, *Guía de buenas prácticas para el tratamiento y difusión de la información judicial*, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 9.

³¹ República Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Acordada 29/08, de fecha 28/10/2008.



vulnerables. Y esto impacta en la garantía procesales y derechos digitales al debido proceso y defensa en juicio.

V. CIBERATAQUES VS CIBERSEGURIDAD EN EL ECOSISTEMA DE JUSTICIA DIGITAL

La vulnerabilidad informática es la potencialidad de un sistema informático de ser transgredido de acuerdo a estándares de seguridad. Los ciberdelitos que aumentaron en la pandemia expusieron no solo a particulares a ser víctimas de estafas o robos mediante entornos tecnológicos, sino también a instituciones a convertirse en objetivos de ciberataques.

La ciberseguridad permite identificar diferentes amenazas y riesgos que pueden afectar el Ecosistema de Justicia Digital a partir de códigos maliciosos, como explica la Dirección Nacional de Ciberseguridad ³². La seguridad informática tiene tres ejes fundamentales:

- a) la confidencialidad: una manera de que se vea vulnerada es a partir de accesos no autorizados con la finalidad de obtener información;
- b) la integridad: que puede ser vulnerada si a través de un código malicioso se realizan acciones tales como cifrar, modificar, borrar datos o sistemas de software;
- c) la disponibilidad: que puede ser transgredida al interrumpir mediante un acto informático el funcionamiento de una plataforma, una red o un sistema ya sea en forma temporal o definitiva.

³² El ransomware es un tipo de software utilizado generalmente por los cibercriminales para cifrar archivos o sistemas informáticos. El término incluye a todas las formas de código malicioso, como virus y gusanos informáticos. Su finalidad es “secuestrar información” y, de esta manera, impedir a una persona u organización el acceso a sus datos o dispositivos hasta que se haya pagado un dinero como rescate, que frecuentemente suele ser en criptomonedas para permitir al ciberdelincuente ocultar su rastro. República Argentina, Jefatura de Gabinete de Ministros, Innovación Pública Tecnologías de la Información, Ciberseguridad, “El ransomware, el software malicioso usado para atacar a las organizaciones”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2022, p. 18 en <https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/ssetic/direccion-nacional-ciberseguridad/informes-de-la-direccion-6>



Para poner a prueba la seguridad del ecosistema digital es posible desarrollar el hacking ético, a través del cual se busca, con autorización de la parte propietaria o administradora, maneras de invadir o superar las defensas. Siguiendo la lógica, si la tecnología tiene un dinamismo acelerado y creciente, las posibilidades de seguridad y de ataque informático debe seguir la misma lógica y avanzar al ritmo de los cambios tecnológicos.

En Argentina se identifican casos de ciberataques al Poder Judicial y ello lleva a una serie de lecciones y aprendizajes. Tomamos en cuenta el caso de las Provincias de Córdoba, La Pampa, La Rioja, y San Juan que desarrollaron acciones y medidas en materia de ciberseguridad del ecosistema judicial digital.

V.1. Provincia de Córdoba: ciberataque como contingencia

El 13 de agosto de 2022 un ciberataque bloqueó el acceso al sitio web del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Según trascendió en forma pública se trató de un ransomware, cuyo código malicioso produjo incertidumbre entre los y las operadores jurídicos. Ello afectó el funcionamiento y emergió una serie de respuestas sobre las cuales es posible reflexionar, evaluar y aprender institucionalmente.

V.1.1. En torno al proceso judicial

Ante la contingencia el Tribunal Superior de Justicia además de hacer la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Cibercrimen, también desarrolló un Plan de contingencia³³ a través del cual se dispuso medidas para intentar mantener el funcionamiento del servicio de justicia. Aunque dispuso declarar inhábiles primeros días inmediatos al ciberataque, también se establecieron mecanismos para presentar nuevas actuaciones judiciales, celebrar actos procesales como audiencias. En cuanto a las cautelares, se dispuso su prórroga

³³ Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (2022) Acuerdo Reglamentario N°1778 Serie A de fecha 15 de agosto de 2022, Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, Año CIX - Tomo DCXCII - N° 164, Córdoba, República Argentina, edición extraordinaria, <http://boletinoficial.cba.gov.ar>



automática. En pocas palabras, se pasó de la noche a la mañana de una justicia digital a una justicia reconstruida a partir del papel, la firma ológrafa y la presencialidad³⁴.

Del proceso de digitalización del Poder Judicial había expedientes que nacieron como electrónicos, otros que nacieron como papel y se transformaron y otros que no llegaron a transformarse. Para los tres supuestos, el plan dispuso continuar a través del papel, así como para el cuarto supuesto, las causas nuevas que nacían durante la contingencia. El papel se volvió regla para los actos procesales durante la contingencia.

Se destaca la participación de múltiples actores a la mesa de la contingencia. Un actor cuya participación fue destacada fue la del Colegio de Abogados de Córdoba, que representa a abogados y abogados ante esta situación de crisis, creó un Comité de Crisis mediante el A.R. N°1778/2022.

Con gradualidad se fue reincorporando funciones a la plataforma del ecosistema judicial digital hasta que el Tribunal Superior de Justicia a través del A.R. 1783, de fecha 24/08/2022³⁵ estableció la operatividad del sistema de administración de causas. Y se ordenó escanear y subir al sistema todo lo producido en soporte papel.

V.1.2. En torno a la mediación judicial: Plan de contingencia en el Centro Judicial de Mediación

El Centro Judicial de Mediación del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba utiliza las mismas plataformas que el Poder Judicial. En este sentido, es preciso señalar que conforme la Ley Provincial 10.543 que incorporó la mediación como etapa prejurisdiccional obligatoria y se implementó la mediación

³⁴ La Administración General del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, mediante la Resolución N°230 de fecha 15/08/2022 estableció pautas para las actuaciones judiciales que se realicen durante los días 16, 17, 18 y 19 -declarados inhábiles a los fines procesales y administrativos- se hagan en soporte papel, con firma ológrafa y aclaración.

³⁵ Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (2022) Acuerdo Reglamentario N°1783 Serie A de fecha 24 de agosto de 2022 (s/ restablecimiento de la operatividad del SAC).



electrónica prevista en el artículo 20. A su vez, en la pandemia se puso en marcha una experiencia piloto de mediación virtual.

En cuanto a la gestión se destaca que dentro del Centro Judicial de Mediación de Capital se creó una Oficina de Gestión y Apoyo (OGA) por Acuerdo 514/A del 2 de julio de 2019. Asimismo, se destaca como política de acceso a justicia el beneficio de mediar sin gastos cuya tramitación es electrónica, implementado por Acuerdo N°1594/A de fecha 1 de octubre de 2019.

En el contexto del ciberataque al Poder Judicial y a los fines de continuar brindando el servicio de mediación desde el Centro Judicial de Mediación el Secretario Coordinador dispuso un plan de contingencia a través de la Resolución General del CJM N°5 de fecha 17 de agosto de 2022 aplicable a la sede Capital y sedes del interior en la medida que resulte compatible con la legislación y realidad de cada jurisdicción. Ello permitió dar continuidad al trámite de protocolización de las actas de cierre que se realicen por ante el Centro Judicial de Mediación por los mediadores y mediadoras a los fines de tutelar el acceso a la justicia de los usuarios/as y el progreso del trámite jurisdiccional en los supuestos de los procesos intrajudiciales.

La Coordinación del CJM de Capital señala en los considerandos que es *“propicio generar buenas prácticas de trabajo y comunicación entre todos los involucrados”*. Asimismo, ante la imposibilidad de notificar por e cédula a los auxiliares (mediadores/as y abogados/as) *“se procurará en lo posible la notificación vía correo electrónico conforme lo autorizan los artículos 10, 11 y 14 de la Ley 10543 y su reglamentación por Decreto 1705/18”*. En este sentido, se dispuso a habilitar la comunicación con los distintos sujetos a través de un correo electrónico provisorio para comunicar el plan de contingencia.

Durante esta contingencia se procedió a recibir solicitudes de mediación prejudicial obligatoria mediante presentación en soporte papel, con firma ológrafa de requirentes y su letrado/a patrocinante, consignando números telefónicos y correos electrónicos, indicando si tienen WhatsApp, si aceptan la mediación virtual y si hubo violencia de género. Los sorteos de mediadores se desarrollaron



en forma manual garantizando una distribución equitativa entre los inscriptos/as para mediar en el Centro Judicial de Mediación.

Para el caso de las mediaciones iniciadas antes de la contingencia, frente al pedido de partes, abogados/as, mediadores/as se solicitó acompañar todos los instrumentos para colaborar con la tramitación (solicitud de mediación, cédulas de, notificación, actas de audiencia). Ante la necesidad de fijar nueva audiencia, se fija con la declaración jurada del equipo mediador dejando constancia que las partes han sido notificadas. A los fines de agregar a la agenda se comunica por correo electrónico al CJM. En las mediaciones con modalidad presencial, si se fija nueva audiencia, se consigna en el acta, sirviendo ello de notificación a las partes (art. 21 de Ley 10543) entregando el acta al Responsable de Piso del CJM para su calendarización.

Respecto del acta de cierre, se prevé que la protocolización (art. 37 de Ley 10543) se haga en forma manual en el mismo cuerpo del acta en tantos ejemplares como partes haya y dos más para agregar al expediente y protocolo respectivo. Cuando el acta de cierre fuera con audiencia presencial durante la contingencia se prevé que se firmen por las partes (con aclaración, firma, DNI y carácter), mediadores/as y letrados/as, juntamente con el convenio de confidencialidad y la documentación que hubiere) y se entregue al Responsable de Piso y se requiere contar con dos copias más a los fines de agregar al expte. y al protocolo. En el caso de cierre con audiencias virtuales, se envía por correo con toda la documentación en adjunto, con la declaración jurada por parte del equipo de mediadores que corresponde con lo actuado. A su vez, se pide al equipo mediador resguarde los archivos informáticos, las capturas de pantalla con las ratificaciones efectuadas por las partes de lo actuado y eventualmente del acuerdo arribado, y el convenio de confidencialidad.

Ante supuestos de incomparecencia, solo se procede al cierre por incomparecencia en los casos en los que se adjunte la cédula de notificación válidamente diligenciada, junto al acta de cierre.



Se trata de un plan eficiente basado en la cooperación de los actores y actoras involucradas en el proceso de mediación con base en la garantía de los derechos humanos, principalmente del acceso a justicia, y de la autonomía de la voluntad (o “*empowerment*” como le llaman Folger y Baruch Bush).

V.2. Provincia de la Pampa: Ciberseguridad en el Poder Judicial

El Poder Judicial de la Provincia de La Pampa, adhirió a los “Requisitos mínimos de Seguridad de la Información para Organismos” establecidos por la Decisión Administrativa 641/2021 de la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Esta decisión hace posible que el Poder Judicial de La Pampa sea asistido por la Dirección Nacional de Ciberseguridad en el desarrollo de su política judicial de ciberseguridad.

Ello implica que el proceso judicial electrónico se sostiene con una política pública en camino a cumplir con estándares de seguridad de la información, nacionales e internacionales.

En este sentido, se destaca como valioso que la Secretaría de Sistemas del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa organizó las “Jornadas en ciberseguridad” desarrolladas con 6 horas el 30 de junio y 1 de julio de 2022³⁶.

Ello implica que está construyendo cultura de ciberseguridad entre los y las operadores judiciales. La capacitación es un elemento muy importante en el desarrollo de esta política pública ya que los/as usuarios desinformados son un eslabón vulnerable en la cadena de seguridad y estabilidad de la infraestructura judicial.

V.3. Provincia de La Rioja: Ciberseguridad en la Función Judicial

³⁶ Provincia de La Pampa, Poder Judicial, Jornadas de Ciberseguridad, 2022 en https://justicia.lapampa.gob.ar/images/Disposicion_6.2022_Jornadas_Ciberseguridad.pdf (consulta 10/02/2023).



El Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia viene desarrollando capacitación a través de la Unidad Ejecutora Contra Ciberdelincuencia a operarios/as jurídicos en la provincia.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen, desarrolló una capacitación al Ministerio Público Fiscal en La Rioja en noviembre de 2022³⁷.

Asimismo, se realizó la segunda reunión del Consejo de Seguridad Interior desarrollada en la Provincia de La Rioja en el mes de noviembre de 2022 encabezado por el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, el Gobernador de la Provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, junto a todo su equipo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, Claudio Saúl, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Karina Becerra, así como magistrados/as de la Función Judicial, jueces federales, y autoridades de las Fuerzas de Seguridad, entre otras autoridades³⁸. Y en esta reunión la Provincia firmó el Convenio de Adhesión al Sistema Automático del Circuito de Identificación (SASI), Convenio Marco para la Articulación entre la Líneas 144 y SAE 911, el Convenio de Colaboración en la Prevención e Investigación de Delitos Económicos y Convenio Marco de Colaboración para la Implementación del Programas de Animales de Apoyo Profesional.

La Función Judicial de la Provincia de La Rioja a través del Centro de Información Judicial desarrollan una capacitación a la sociedad con consejos y recomendaciones ante ciberdelitos y ciberseguridad³⁹. Resulta valioso el diálogo

³⁷ Provincia de La Rioja, Ministerio Público de la Defensa, El Ministerio Público Fiscal se capacitó en ciberdelitos en <https://www.mpflarioja.gob.ar/2022/11/24/el-ministerio-publico-fiscal-se-capacito-en-ciberdelitos/> (consulta 10/02/2023).

³⁸ <https://www.argentina.gob.ar/noticias/anibal-fernandez-y-el-gobernador-quintela-encabezaron-la-apertura-del-consejo-de-seguridad> (consulta 10/02/2023).

³⁹ Provincia de La Rioja, Función Judicial, Centro de Información Judicial, “Ciberdelito: daño o sabotaje a los sistemas o dispositivos informáticos” primera parte en <https://justicialarioja.gob.ar/index.php/typography/noticias-e-informacion-general/653-ciberdelito-dano-o-sabotaje-a-los-sistemas-o-dispositivos-informaticos> y segunda parte en <https://justicialarioja.gob.ar/index.php/typography/noticias-e-informacion-general/662-ciberdelito-dano-o-sabotaje-a-los-sistemas-o-dispositivos-informaticos-segunda-parte;>



que desde la Función Judicial se puede desarrollar con la sociedad para construir una cultura de ciberseguridad con un lenguaje claro y sencillo.

V.4. Provincia de Catamarca: Ciberseguridad en el Poder Judicial

El caso de la Provincia de Catamarca al igual que La Pampa adhirió a “Requisitos mínimos de Seguridad de la Información para Organismos” establecidos por la Decisión Administrativa 641/2021 de la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Y ello se complementa con que además el Gobierno de Catamarca y el Ministerio Público también se encuentran adheridos a estos requisitos, lo que completa aún más la seguridad en el ecosistema judicial digital conformado a partir de la Ley Provincial N°5658 de Digitalización Integral de la Justicia.

La Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca implementó el expediente electrónico⁴⁰ conforme a las Acordadas 4575/22, 4576/22 y 4582/22. Y se implementó el Sistema de Expte. Digital (SED) en septiembre de 2022, lo que implica que abogadas y abogados accedan a los expedientes a través del portal de causas judiciales.

Vale señalar que la Acordada 4576/2022 prevé el plan de contingencia en los artículos 50 a 55. A través de estas normas establece que el Departamento de Informática Jurídica esté a cargo de supervisar el funcionamiento de la plataforma, reportando a la Secretaría de Superintendencia Institucional del

“Ciberdelito: recomendaciones para no sufrir ciberestafas” en <https://justicialarioja.gob.ar/index.php/typography/noticias-e-informacion-general/650-ciberdelito-recomendaciones-para-no-sufrir-ciberestafas> “Ciberdelitos: estafas informáticas” en <https://justicialarioja.gob.ar/index.php/typography/noticias-e-informacion-general/648-ciberdelito-estafas-informaticas> ; “¿Qué hacer ante un ciberdelito?” en <https://justicialarioja.gob.ar/index.php/typography/noticias-e-informacion-general/561-que-hacer-ante-un-ciberdelito> ; “Peligros en la web: el avance de ciberdelitos” en <https://justicialarioja.gob.ar/index.php/typography/noticias-e-informacion-general/558-peligros-en-la-web-el-avance-de-los-ciberdelitos> (consulta 10/02/2023).

⁴⁰ Provincia de Catamarca, Poder Judicial, Corte de Justicia, Acordada 4576/2022 de fecha 03/08/2022 en <https://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/104/508/000104508.pdf> (consulta 10/02/2023).



Poder Judicial, a quien encarga comunicar a las autoridades correspondientes. Ante una contingencia, debe interrumpir el servicio y colocar un aviso en el portal del sistema de expediente electrónico.

Se dispone que mientras dure la contingencia, todo acto procesal (audiencia, providencia, actuación judicial) se realice en soporte papel, debiendo incorporarse al SED una vez restablecido el sistema. Ante algún eventual planteo de las partes respecto de inconvenientes técnicos vinculados al SED, previo informe del Departamento de Informática Jurídica resolverá el juez o jueza.

Si un usuario/a externo presenta dificultades técnicas para el acceso al sistema de expediente digital, que imposibiliten absolutamente y por un tiempo razonable la tramitación digital, se establece que el usuario externo lo reporte al Dpto. de Informática Jurídica para que verifique y tome las medidas correspondientes.

Asimismo, se establece que se fije metas periódicas para auditar y evaluar cuantitativa y cualitativamente el funcionamiento del sistema de expediente digital a partir de información válida y confiable que pueda extraerse de la aplicación del SED. En este sentido, se asigna al Dpto. de Informática Jurídica que el control y mejoras al sistema, arbitrando los medios necesarios, tales como la capacitación a usuarios y usuarias del sistema, la revisión, mejora y resolución de incidencias técnicas que afecten el funcionamiento del sistema.

En este mismo sentido, las acordadas subsiguientes extienden la aplicación del Sistema de Expediente Digital IURIX (SED) en forma progresiva a los diferentes fueros como lo dispone el Acuerdo N°4591 del 23 de noviembre de 2022⁴¹.

⁴¹ Provincia de Catamarca, Poder Judicial, Corte de Justicia, Acuerdo N°4591 de fecha 23/11/2022 en <https://juscataamarca.gob.ar/PDF/acordadas/ACORD4591.pdf> (consulta 10/02/2022).



Mas aún, la Corte de Justicia implementó Justa⁴², un chatbot de inteligencia artificial con el que se puede chatear para acceder a la información judicial pública.

V.5. Provincia de San Juan: Ciberataque al Poder Judicial

El Poder Judicial de San Juan viene desarrollando una política de seguridad informática en aras de garantizar el servicio de justicia a través del Acuerdo General N°126/2022 implementó el Protocolo de Uso de Recursos Informáticos y Telecomunicaciones, en el marco de su política de seguridad informática. Asimismo, en la educación a usuarios/as dispuso la capacitación obligatoria en materia de ciberseguridad a todo el personal que integra el Poder Judicial conforme la Resolución de Presidencia N° 94/2022, el Sr. Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Juan José Victoria, dispuso “*la capacitación en ciberseguridad de todo el personal que integra el Poder Judicial, cualquiera sea su escalafón, función y categoría*”⁴³. Asimismo, se destaca que por Resolución de Presidencia de la Corte Suprema N°72/2022⁴⁴ se dispuso co-organizar junto al Foro de Abogados de San Juan con modalidad presencial una “Capacitación en ciberseguridad” a cargo de Jorge Litvin quien se desempeña como consultor de la Organización de Estados Americanos (OEA) en ciberseguridad.

El Poder Judicial de San Juan informó que, a principio de la feria judicial de enero de 2023, activó el protocolo de actuación frente a incidentes de alto impacto en materia de seguridad informática.

⁴² Provincia de Catamarca, Poder Judicial, Justa en <https://juscatamarca.gob.ar/> (consulta 10/02/2023).

⁴³ Provincia de San Juan, Corte de Justicia, Resolución de Presidente de C.J.S.J., Res. 94/2022 de fecha 16/09/2022 en <https://www.jussanjuan.gov.ar/acuerdos/resoluciones/resolucion-de-presidencia-n-94-2/022/> (consulta 10/02/2023); asimismo ha sido comunicado como noticia respecto de las primeras jornadas de capacitación del 19 de septiembre de y 26 de septiembre de 2022 en <https://www.jussanjuan.gov.ar/informacion-destacada/ciberseguridad-segunda-jornada-de-capacitacion-obligatoria/> (consulta 10/02/2023).

⁴⁴ Provincia de San Juan, Corte de Justicia, Resolución de Presidente de C.J.S.J., Res. 72/2022 de fecha 01/06/2022 en <https://www.jussanjuan.gov.ar/acuerdos/resoluciones/resolucion-de-presidencia-n-72-2022/> (consulta 10/02/2023).



La Dirección de Investigación de Cibercriminalidad del Ministerio de Seguridad de la República Argentina alertó a la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de la Provincia de San Juan, y ésta a la Corte de Justicia de la Provincia, sobre una posible vulneración a la seguridad, confiabilidad o disponibilidad de datos.

Del diagnóstico efectuado por la Dirección de Informática del Poder Judicial provincial se concluyó que *“no hubo afectación en el normal funcionamiento de los sistemas del Poder Judicial, como tampoco incidencia alguna en la prestación del Servicio de Justicia, manteniéndose sustentables sus plataformas y sistemas. En tal sentido, se determinó que el evento se limitó a una filtración ocurrida en una plataforma externa contratada por el Poder Judicial, y de la cual se extrajo una copia de base de datos que correspondía al personal de planta del Poder Judicial, conteniendo 1983 registros vinculados al Concurso interno de ascensos del año 2019”*⁴⁵. Onocko expresa que en una noticia local el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, explicó que *“el ataque se produjo en el mes de noviembre y que la alerta emitida por el Ministerio de Seguridad llegó luego de que se detectara la publicación de la base de datos en un sitio web ruso, y que, si bien se filtraron algunos datos sobre un concurso de ascenso de 2019 donde se pidió a los empleados inscribirse con nombre y apellido, domicilio y mail, no incluían los DNI de los mismos”*⁴⁶.

Asimismo, se dispusieron medidas de seguridad y se declaró cerrado el incidente.

VI. CONCLUSIONES

La construcción de un Ecosistema Judicial Digital requiere además de un marco normativo que sirva como sustento una serie de decisiones y políticas públicas en sintonía. A nivel nacional, se viene desarrollando una política judicial

⁴⁵ <https://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/106/547/000106547.pdf>

⁴⁶ ONOCKO, SEBASTIÁN G. “San Juan bajo ciberataques” en Diario Judicial, publicado 06/01/2023 en <https://www.diariojudicial.com/nota/94044> (10/02/2023).



de gobierno judicial abierto, que es sostenida a partir de un plexo normativo que surge de diversas leyes, entre otras la Ley 26.685 que autoriza el expediente judicial electrónico en sintonía con una política pública nacional de construir una Argentina Digital.

Los ciberataques y la ciberseguridad judicial requieren formar parte en cuanto al sistema de respuestas jurisdiccionales y no jurisdiccionales que puede ofrecerse desde las capacidades del Estado y puntualmente a través del proceso judicial y de la mediación judicial.

Comprendiendo que en un ecosistema digital cuestiones referidas a la ciberseguridad tienen una autoridad de aplicación la Dirección Nacional de Ciberseguridad⁴⁷ y a través de la Decisión Adm. 641/21 se estableció los “Requisitos mínimos de Seguridad de la Información para Organismos” estableciendo buenas prácticas y estándares acorde al crecimiento y profundización en el uso del espacio digital, así como amenazas y riesgos que puedan comprometer o afectar activos de información. Y dado que en torno a que en los diversos procesos judiciales que se sustancian en Tribunales y en la mediación que se desarrolla en los Centros Judiciales de Mediación se recibe, se procesa y se resguarda información en sistemas informáticos, bases de datos y archivos, es necesario construir consciencia y responsabilidad en materia de seguridad informática. Al vivir en el federalismo desde la decisión administrativa de la Dirección Nacional de Ciberseguridad invita a instituciones provinciales a adherir a estas reglas mínimas. Algunos Poderes Judiciales de las Provincias de Argentina han adherido.

También la Dirección Nacional de Ciberseguridad a través del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en investigación del Ciberdelito (ForCIC)⁴⁸ pone a disposición el asesoramiento en técnicas de seguridad de las infraestructuras digitales y en técnicas de investigación en materia de ciberdelitos

⁴⁷ <https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/direccion-nacional-ciberseguridad/normativa> (consulta 10/11/2022).

⁴⁸ <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/360000-364999/360878/res86.pdf> (consulta 10/11/2022).



y delitos con presencia de la tecnología y/o utilización de tecnologías. En el marco de este programa se desarrolla el Centro de investigación de ciberdelitos de alta tecnología (CICAT) con la finalidad de capacitar, prevenir, analizar e investigar acerca de ciberdelitos, con áreas específicas de forense digital, unidades regionales federales, entre otras.

Sin duda alguna, las contingencias en materia de ciberseguridad junto a las vulnerabilidades digitales y cibernéticas deben formar parte de la agenda del Ecosistema de Justicia Digital. En este sentido, se pronunciaron las conclusiones del XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal, celebrado los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2022 en Mendoza, y entre las conclusiones se expresó que *“Las nuevas tecnologías deben implementarse en los procesos de manera posible teniendo en cuenta la brecha digital, la protección de datos personales, el principio de transparencia y el principio de corrección de sesgos”*⁴⁹.

Entonces, en este artículo se ha considerado la relación entre los ciberataques y la ciberseguridad en torno al proceso judicial y a la mediación judicial. Se ha registrado casos en la experiencia del derecho interno de Argentina a partir de casos que han tomado estado público y se analizaron las medidas desarrolladas.

En cuanto al proceso judicial, se valora positivamente la capacidad de respuesta frente a la contingencia de desarrollar un plan de acción con la participación de diferentes actores. También es muy importante resaltar como valioso entre las medidas que se puede tomar en forma preventiva, desarrollar capacitación a usuarios y usuarias del sistema jurisdiccional como se viene desarrollando en algunas provincias.

Asimismo, en torno a la mediación judicial, se valora positivamente el plan de contingencia desarrollado por el Centro Judicial de Mediación de la Provincia de Córdoba, que a los fines de mantener en funcionamiento el servicio de

⁴⁹ ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO PROCESAL, XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal, celebrado en Mendoza los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2022, Conclusiones en <https://www.aadproc.org.ar/admin/files/conclusiones/11/CONCLUSIONES.pdf> (consulta 10/02/2023).



mediación implementó medidas adecuadas para garantizar los derechos de las personas e instituciones invitadas a mediación. Más aún, cuando en el contexto normativo en el que se desarrolla, la Ley Provincial 10.543 que incorporó la mediación electrónica en su artículo 20, utiliza en el ámbito del Centro Judicial de Mediación la misma página y plataforma para la recepción y tramitación del procedimiento de mediación.

El ecosistema de justicia digital se encuentra en permanente y progresiva construcción requiere construir con seguridad para brindar confianza. Ambos métodos de diálogo, ya sea el proceso judicial o la mediación judicial, requieren que se contemple la contingencia de un ciberataque a través de códigos maliciosos, para dotar de seguridad a la confidencialidad, integridad y protección de los datos sensibles y personales.

Ambos métodos requieren contemplar la vulnerabilidad digital y cibernética a la que se expone una institución como el Poder Judicial y diseñar procesos con ciberseguridad. Y considerar a la seguridad como una piedra fundamental para construir la infraestructura sobre la que se produce el gerenciamiento de casos. Asimismo, considerar los principios de eficiencia procesal, de transparencia, de buena fe digital y la autodeterminación informativa como una proyección racional de los recursos y capacidades para la solución de controversias.

En definitiva, ha llegado la hora de contemplar en las próximas reformas procesales la transversalidad del paradigma tecnológico y desarrollar estrategias que garanticen tanto en el proceso judicial como en la mediación judicial los derechos humanos.

BIBLIOGRAFÍA

Doctrina

ALTAMIRA, MATÍAS “Justicia y tecnología” en *Diario Comercio y Justicia*, Córdoba, 31/10/2022 en <https://comercioyjusticia.info/opinion/justicia-y-tecnologia/>

ÁLVAREZ, Gladys *La mediación y el acceso a la justicia*, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO PROCESAL, *XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal, celebrado en Mendoza los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2022, Conclusiones en <https://www.aadproc.org.ar/admin/files/conclusiones/11/CONCLUSIONES.pdf>* (consulta 10/12/2022).

AVILA PAZ DE ROBLEDO, ROSA A. (directora) *Manual de Teoría General del Proceso*, Advocatus, Argentina, 2006, T. II.

AVILA PAZ DE ROBLEDO, ROSA A. "Formación de operadores en oralidad y proceso por audiencias atendiendo el acceso a justicia de colectivos vulnerables, para construir "sociedades justas, pacíficas e inclusivas" -ODS 2030-" en *XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal. Un proceso para una nueva justicia. Homenaje a los Dres. Efraín Quevedo Mendoza y Mario Kaminker. In memoriam Dres. Julio B. J. Maier, Eduardo de Lazzari y Carlos Alberto Carbone*, Asociación Argentina de Derecho Procesal, Poder Judicial de Mendoza, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2022, pp. 364 a 371.

AVILA PAZ DE ROBLEDO, ROSA A. "La justicia de paz cordobesa y la resolución de conflictos mediante sistemas mixtos: mediación-arbitraje (Med-Arb y Arb-Med)" en *XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, "Modelos de Justicia: Estado Actual y Reformas Procesales"* Jujuy, 10, 11 y 12 de septiembre de 2015, ponencias seleccionadas, Asociación Argentina de Derecho Procesal y Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, Jujuy, Argentina, 2015.

AVILA PAZ DE ROBLEDO, ROSA A. "La Persona Humana y el Bien Común en el Siglo XXI. La tutela jurídica de Internet y las nuevas tecnologías desde el humanismo de Jacques Maritain" en *La Persona humana y el Bien común*, Ed. Alveroni, Córdoba, Argentina, 2012.

AVILA PAZ DE ROBLEDO, ROSA A. et. al. "La Justicia y las personas en condiciones de vulnerabilidad frente a la pandemia y post pandemia covid-19" en G. Barrera Buteler (director) *El derecho argentino frente a la pandemia y post pandemia*, Colección Ciencia, Derecho y Sociedad, Editorial de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, Advocatus, Argentina, 2020, T. 3, pp. 189-258.

BERTANLANFFY, LUDWIG VON, *Teoría general de los sistemas. Fundamentos, desarrollo, aplicaciones*, Fondo de Cultura Económica, México, 7ª reimpresión 1989.

BUJOSA-VADELL, LORENZO M.; PALOMO VÉLEZ, DIEGO "Mediación electrónica: Perspectiva europea". *Revista Ius et Praxis*, Universidad de Talca, Chile, 2017, vol. 23, N° 2, p. 51-78, <https://www.redalyc.org/pdf/197/19754349003.pdf>

CALVO SOLER, RAÚL, *Donde la justicia no llega*, Ed. Gedisa, Buenos Aires, 2018.

DAMASKA, MIRJAN, *Las cara de la justicia y el poder del Estado: análisis comparado del proceso legal*, Editorial Jurídica de Chile, Chile, 2000.



DIDIER, FREDIE JR. “Do que se ocupa um(a) processualista?” en *Civil Procedure Review, Ab omnibus pro omnibus*, Asociación Internacional de Derecho Procesal, Brasil, 2021, Vol. 12, N° 3: set.-dez. 2021, pp. 119-126.

FOLGER, JOSEPH P.; BARUCH BUSH, ROBERT A. “Reclaiming Mediation’s Future: Re-Focusing on Party Self-Determination” in *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, U.S.A., 2014, Vol. 16.

GERLERO, MARIO “Acceso a la justicia en la gestión social de calidad” en Humberto Quiroga Lavié y Cecilia Federico (directores) *Gestión Social de Calidad en la Justicia*, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2005.

GERLERO, MARIO S.; LEZCANO, JOSÉ M.; LICEDA, ERNESTO (comp.) *Los derechos en la sociedad digital. Las redes sociales, la privacidad y la intimidad como fenómenos socio-jurídico problemáticos*, Grupo de Estudio de la Complejidad en la Sociedad de la Información, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina, 2019.

LETELIER LOYOLA, ENRIQUE “Acceso a la justicia y brecha digital en los adultos mayores. Informe sintético sobre la cuestión en Chile” en *Trayectorias Humanas Trascontinentales*, Chile, 2019, N°5.

ONOCKO, SEBASTIÁN G. “San Juan bajo ciberataques” en *Diario Judicial*, publicado 06/01/2023 en <https://www.diariojudicial.com/nota/94044> (10/02/2023).

OSZLAK, OSCAR. *El Estado en la era exponencial*, ed. Instituto Nacional de Administración Pública, Buenos Aires, 2020.

OTEIZA, EDUARDO “Reformas procesales en América Latina. Tendencias y tensiones entre los Estados Nación y la Comunidad internacional” en Eduardo Oteiza (coord.) *Sendas de las reformas de la justicia a principios del siglo XXI*, Ed. Trotta, Madrid, 2018.

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, *Guía de buenas prácticas para el tratamiento y difusión de la información judicial*, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009.

ROBLEDO, FEDERICO JUSTINIANO. “La necesaria revitalización del Federalismo Argentino” en *Homenaje al Sesquicentenario de la Constitución Nacional (1853-2003)*, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Ed. Advocatus, Córdoba, Argentina, 2003.

TAVIP, GABRIEL, MARÍA BELÉN MIGNON, JULIA ROSSI, CONSTANZA FIRBANK, MONICA PARRELLO, MARCELA MENTA CECILIA FERRERO, MARÍA ALEJANDRA MORA (2022) “Comunicación de las juezas y el juez de Familia de la ciudad de Córdoba” en <https://www.justiciacordoba.gob.ar/ExtranetLanding/doc/Com-juez.pdf>



UNESCO, *Internet Universality Indicators* en <https://www.unesco.org/en/internet-universality-indicators?hub=66940> (consulta 10/02/2023).

Normativa y reglamentaciones

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, sancionada 13/03/1996 y promulgada 01/04/1996

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por la Ley Nacional 26.378/2008 (sanc. 21/05/2008, B.O. 09/06/2008) y años después se le otorgó jerarquía constitucional a través de la Ley 27.044 (sanc. 19-11-2014, B.O.22-12-2014).

Poder Ejecutivo de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Disposición 12/2010, República Argentina, en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/168772/norma.htm> (consulta 01/12/2022).

Poder Judicial de la Nación, Cámara Civil – Sala M, Causa 33626/2022 “Q C, E S c/ T, B s/DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR”, Buenos Aires, 15 de julio de 2022 [https://repositorio.mpd.gov.ar/documentos/QCES%20\(Causa%20N%C2%BA%2033626\).pdf](https://repositorio.mpd.gov.ar/documentos/QCES%20(Causa%20N%C2%BA%2033626).pdf)

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, Administración General (2022) Resolución General N° 232 de fecha 17/08/2022 (s/ órdenes de pago, derogada por Res. 232/2022).

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, Administración General (2022) Resolución General N° 232 de fecha 17/08/2022 (s/ órdenes de pago) accedido en https://www.abogado.org.ar/files_down/Res.%20232%20AG.pdf (consulta 30/08/2022).

Provincia de Catamarca, Poder Judicial, Corte de Justicia, Acordada 4576/2022 de fecha 03/08/2022 en <https://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/104/508/000104508.pdf> (consulta 10/02/2023).

Provincia de Catamarca, Poder Judicial, Corte de Justicia, Acuerdo N°4591 de fecha 23/11/2022 en <https://juscatamarca.gob.ar/PDF/acordadas/ACORD4591.pdf> (consulta 10/02/2022).

Provincia de Catamarca, Poder Judicial, Justa en <https://juscatamarca.gob.ar/> (consulta 10/02/2023).

Provincia de Chaco, Poder Judicial, “Amplia convocatoria de las jornadas sobre ciberseguridad en el STJ” publicada el 28/04/2022 en https://www.justiciachaco.gov.ar/index.php?action=noticia_simple¬icia_id=331 (consulta 10/02/2023).

Provincia de Córdoba, Poder Judicial, Centro Judicial de Mediación – Capital-, Resolución General del CJM N°5 de fecha 17 de agosto de 2022 07/2022.

Provincia de Córdoba, H. Legislatura, Ley 10543.



Provincia de La Pampa, Poder Judicial, “Convenio para prevenir los delitos informáticos” publicado 04/07/2022 en <https://justicia.lapampa.gob.ar/mas-noticias/1599-convenio-para-prevenir-los-delitos-informaticos.html> (consulta 10/02/2023).

Provincia de La Pampa, Poder Judicial, Jornadas de Ciberseguridad, 2022 en https://justicia.lapampa.gob.ar/images/Disposicion_6.2022_Jornadas_Ciberseguridad.pdf (consulta 10/02/2023).

Provincia de La Rioja, Función Judicial, Centro de Información Judicial, “Ciberdelito: daño o sabotaje a los sistemas o dispositivos informativos” primera parte en <https://justicialarioja.gob.ar/index.php/typography/noticias-e-informacion-general/653-ciberdelito-dano-o-sabotaje-a-los-sistemas-o-dispositivos-informaticos> y segunda parte en <https://justicialarioja.gob.ar/index.php/typography/noticias-e-informacion-general/662-ciberdelito-dano-o-sabotaje-a-los-sistemas-o-dispositivos-informaticos-segunda-parte>; “Ciberdelito: recomendaciones para no sufrir ciberestafas” en <https://justicialarioja.gob.ar/index.php/typography/noticias-e-informacion-general/650-ciberdelito-recomendaciones-para-no-sufrir-ciberestafas> “Ciberdelitos: estafas informáticas” en <https://justicialarioja.gob.ar/index.php/typography/noticias-e-informacion-general/648-ciberdelito-estafas-informaticas> ; “¿Qué hacer ante un ciberdelito?” en <https://justicialarioja.gob.ar/index.php/typography/noticias-e-informacion-general/561-que-hacer-ante-un-ciberdelito> ; “Peligros en la web: el avance de ciberdelitos” en <https://justicialarioja.gob.ar/index.php/typography/noticias-e-informacion-general/558-peligros-en-la-web-el-avance-de-los-ciberdelitos> (consulta 10/02/2023).

Provincia de La Rioja, Ministerio Público de la Defensa, El Ministerio Público Fiscal se capacitó en ciberdelitos en <https://www.mpflarioja.gob.ar/2022/11/24/el-ministerio-publico-fiscal-se-capacito-en-ciberdelitos/> (consulta 10/02/2023).

Provincia de San Juan, Corte de Justicia, Resolución de Presidente de C.J.S.J., Res. 94/2022 de fecha 16/09/2022 en <https://www.jussanjuan.gov.ar/acuerdos/resoluciones/resolucion-de-presidencia-n-94-2/022/> (consulta 10/02/2023); asimismo ha sido comunicado como noticia respecto de las primeras jornadas de capacitación del 19 de septiembre de y 26 de septiembre de 2022 en <https://www.jussanjuan.gov.ar/informacion-destacada/ciberseguridad-segunda-jornada-de-capacitacion-obligatoria/> (consulta 10/02/2023).

Provincia de San Juan, Corte de Justicia, Resolución de Presidente de C.J.S.J., Res. 72/2022 de fecha 01/06/2022 en <https://www.jussanjuan.gov.ar/acuerdos/resoluciones/resolucion-de-presidencia-n-72-2022/> (consulta 10/02/2023).

República Argentina, Congreso de la Nación, Ley 27.590, “Mica Ortega”, sancionada el 16/12/2020. Esta ley creó el programa “Clic Derechos - Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes”.



República Argentina, Congreso de la Nación, Ley 27078, sancionada 16/12/2014 y publicada en Boletín Oficial el 19/12/2014.

República Argentina, Congreso de la Nación, Ley 27700 sancionada en diciembre de 2022.

República Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Acordada 29/08, de fecha 28/10/2008.

República Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, *Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes*, en <https://www.csjn.gov.ar/bgd/> (consulta 30/01/2023).

República Argentina, Dirección Nacional de Ciberseguridad, “Requisitos mínimos de seguridad de la información para organismos” Decisión Administrativa 641/2021 de fecha 25/06/2021 y publicada en BORA N° 44521/21 de fecha 28/06/2021 en <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246104/20210628> (10/02/2023).

República Argentina, Jefatura de Gabinete de Ministros, Innovación Pública Tecnologías de la Información, Ciberseguridad, “El ransomware, el software malicioso usado para atacar a las organizaciones”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2022, p. 18 en <https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/ssetic/direccion-nacional-ciberseguridad/informes-de-la-direccion-6> consulta 10/02/2022.

República Argentina, Jefatura de Gabinete de Ministros, Innovación Pública Tecnologías de la Información, Ciberseguridad, “Se recomendará a los poderes judiciales provinciales adherir a los Requisitos Mínimos de Seguridad de la Información” en <https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-recomendara-los-poderes-judiciales-provinciales-adherir-los-requisitos-minimos-de> (consulta 10/02/2023); Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus) “La JU.FE.JUS promoverá la adhesión a los Requisitos Mínimos de Seguridad de la Información” en <http://www.jufejus.org.ar/index.php/jufejus/1000-la-ju-fe-jus-promovera-la-adhesion-a-los-requisitos-minimos-de-seguridad-de-la-informacion> (consulta 10/02/2023).

República Argentina, Jefatura de Gabinete de Ministros, Innovación Pública Tecnologías de la Información, Ciberseguridad, “El Poder Judicial de Chaco adhirió a la norma de los Requisitos Mínimos de Seguridad de la Información” publicado el 05/05/2022 en <https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-poder-judicial-de-chaco-adhirio-la-norma-de-los-requisitos-minimos-de-seguridad-de-la> (consulta 10/02/2023);

República Argentina, Jefatura de Gabinete de Ministros, Innovación Pública Tecnologías de la Información, Ciberseguridad, “La Corte de Justicia y el Ministerio Público del Poder Judicial de Catamarca adhirieron a los Requisitos Mínimos de Seguridad de la Información” en <https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-corte-de-justicia-y-el-ministerio-publico-del-poder-judicial-de-catamarca-adhirieron-los>



República Argentina, Ministerio de Seguridad, Resolución 175/2022 de fecha 29/03/2022 en <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/260204/20220401> (consulta 10/02/2023).

República Argentina, Poder Ejecutivo de la Nación, Ministerio de Seguridad, Resolución 175/2022, Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022 consultada en <https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/260204/20220401> (consulta 10/02/2023).

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (2022) “Ante el ciberataque, la Justicia de Córdoba aprobó plan para garantizar el servicio de justicia” en <https://www.justiciacordoba.gob.ar/ExtranetLanding/doc/Cibertaque%20Plan%20Contingencia%20TSJ.pdf> (consulta 30/08/2022).

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (2022) Acuerdo N°204 Serie C de fecha 25 de agosto de 2022 (s/ prórroga del Plan de Contingencia).

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (2022) Acuerdo Reglamentario N°1778 Serie A de fecha 15 de agosto de 2022, Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, Año CIX - Tomo DCXCII - N° 164, Córdoba, República Argentina, edición extraordinaria, <http://boletinoficial.cba.gov.ar>

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (2022) Acuerdo Reglamentario N°1783 Serie A de fecha 24 de agosto de 2022 (s/ restablecimiento de la operatividad del SAC).



DIRITTO (CIVILE) “ALGORITMICO”: SPUNTI RICOSTRUTTIVI

DERECHO (CIVIL) “ALGORÍTIMICO”: IDEAS RECONSTRUCTIVAS

ALGORITHMIC (CIVIL) LAW: CONCEPTUAL RECONSTRUCTION

Prof. Dr. Remo Trezza *

(Università degli Studi di Salerno, Italia)

Abstract dei contenuti

Il contributo intende offrire una disamina della multiforme varietà degli algoritmi, individuarne la natura e cercare di costruire un “vaglio di meritevolezza” per i sistemi intelligenti. Si passa dall’analisi ontologica degli ordinamenti (giuridico ed elettronico) per approdare alla dicotomia inscindibile “valori giuridici-variabili algoritmiche”. Inoltre, si cerca di approfondire, attraverso esempi concreti, quale debba essere la funzionalizzazione dei nuovi sistemi di intelligenza artificiale e quali, invece, debbano essere i principi sui quali una I.A. eticamente e personalisticamente orientata debba fondarsi. Infine, si perviene ad uno statuto responsabilistico dei sistemi intelligenti e a nuove configurazioni civilistiche che, nell’era quanto mai galoppante dell’I.A., vanno indirizzate alla promozione e alla tutela della persona umana e della sua intima dignità.

Parole chiave: algoritmi, diritto civile, responsabilità, giudizio di meritevolezza, persona umana

Resumen:

La contribución tiene como objetivo ofrecer un examen de la variedad multifacética de algoritmos, identificar su naturaleza y tratar de construir una "selección de mérito" para sistemas inteligentes. Pasamos del análisis ontológico de los sistemas jurídicos y electrónicos a llegar a la inseparable dicotomía "valores jurídicos-variables algorítmicas". Además, tratamos de profundizar, a través de ejemplos concretos, en lo que debe ser la

* Dottore in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Salerno, Italia. Enviado 10/05/2022, Aceptado para su publicación: 01/03/2023.



funcionalización de los nuevos sistemas de inteligencia artificial y cuáles, en cambio, deben ser los principios en los que debe basarse una IA orientada ética y personalmente. Finalmente, llegamos a un estatus responsable de sistemas inteligentes y nuevas configuraciones civiles que, en la era galopante de la IA, deben dirigirse a la promoción y protección de la persona humana y su dignidad íntima.

La contribución pretende ofrecer un examen de la variedad multiforme de algoritmos, identificar su naturaleza y tratar de construir una "pantalla de mérito" para sistemas inteligentes. Se pasa del análisis ontológico de sistemas (legales y electrónicos) a llegar a la inseparable dicotomía "valores legales-variables algorítmicas". Además, trata de investigar, a través de ejemplos concretos, cuál debe ser la funcionalización de los nuevos sistemas de inteligencia artificial y cuáles, en cambio, deben ser los principios sobre los que debe basarse una IA, orientada ética y personalmente. Finalmente, se llega a un estatuto responsable de sistemas inteligentes y nuevas configuraciones civiles que, en la era desbocada de la IA, debe dirigirse a la promoción y protección de la persona humana y su dignidad íntima.

Palabras clave: algoritmos, derecho civil, responsabilidad, juicio de mérito, persona humana

Abstract

The contribution intends to offer an examination of the multiform variety of algorithms, identify their nature and try to build a "merit screen" for intelligent systems. It moves from the ontological analysis of systems (legal and electronic) to arrive at the inseparable dichotomy "legal values-algorithmic variables". Furthermore, it tries to investigate, through concrete examples, what should be the functionalization of the new artificial intelligence systems and what, instead, should be the principles on which an AI, ethically and personalistically oriented, must be founded. Finally, it arrives at a responsible statute of intelligent systems and new civil configurations which, in the very runaway era of AI, must be addressed to the promotion and protection of the human person and its intimate dignity.

Keywords: algorithms, civil law, liability, judgment of merit, human person



SOMMARIO: 1. Una premessa metodologica: differenza ontologica tra “informatica giuridica” e “intelligenza artificiale e diritto”. – 2. Il nuovo mondo “globale” e l’avvento delle nuove coordinate tecnologiche: de-materializzazione, de-spazializzazione e de-temporalizzazione. – 3. La differenza ontologica tra ordinamento elettronico e ordinamento giuridico. – 4. I valori giuridici e la variabili algoritmiche: profili “algor-etici” e pregiudizi dei pregiudizi (c.d. *bias* dei *bias*). – 5. Panoramica generale sulla responsabilità delle macchine e tripartizione categoriale. La responsabilità algoritmica. – 6. L’Intelligenza Artificiale e il processo. Dall’algoritmo “predittivo” e il relativo *vulnus* nella tutela giudiziale della persona all’algoritmo “ausiliario”. Cenni sul c.d. “algoritmo captativo”. – 7. L’Intelligenza Artificiale e il principio di uguaglianza. L’algoritmo “discriminatorio” e l’algoritmo “caporale”. – 8. L’Intelligenza Artificiale e la cura della persona umana. L’algoritmo “protettivo”. – 9. La necro-robotica eticamente orientata. L’Intelligenza Artificiale e la tutela “psicologica” della persona. – 10. La tutela della persona nella dimensione neuro-scientifica. L’*habeas mentem* e la c.d. *privacy* neuronale. – 11. L’Intelligenza Artificiale e il diritto civile: primissimi spunti ricostruttivi in tema di *smart contract*, arbitraggio elettronico, eredità digitale e circolazione *post mortem* dei dati personali. 12. Conclusioni. Per una coesistenza antropomeccanica: i “principi di interazione uomo-robot” per una sempre più convinta centralità della persona umana. L’algoritmo “pensante” e l’uomo “antro-nomo”. L’algoritmo “definitorio” e l’algoritmo “ottimizzatore”.

1. In prima battuta, è d’uopo differenziare, per una comprensione più attenta per il prosieguo della trattazione, l’informatica giuridica¹ dal rapporto intelligenza artificiale e diritto².

¹ Sulla definizione e sulla disciplina dell’informatica giuridica, che a sua volta si distingue dal diritto dell’informatica, si veda R. BIN, N. LUCCHI, *Informatica per le scienze giuridiche*, Padova, 2009; S. RUSSO, R. SCAVIZZI, *Manuale di diritto comunitario dell’informatica*, Milano, 2010; G. ZICCARDI, *Il Computer e il giurista*, Milano, 2014; D. VALENTINO (a cura di), *Manuale di diritto dell’informatica*, Napoli, 2016; G. SARTOR, *L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione*, Torino, 2016; F. FAINI, S. PIETROPAOLI, *Scienza giuridica e tecnologie informatiche*, Torino, 2017; AA. VV., *Informatica giuridica e informatica forense al servizio della società della conoscenza. Scritti in onore di Cesare Maioli*, Roma, 2018; A. M. GAMBINO, A. STAZI, D. MULA, *Diritto dell’informatica e della comunicazione*, Torino, 2019; G. ZICCARDI, P. PERRI, *Dizionario Legal tech. Informatica giuridica, protezione dei dati, investigazioni digitali, criminalità informatica, cybersecurity e digital transformation law*, Milano, 2020; T. CASADEI, S. PIETROPAOLI, *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Padova, 2021.

² Si consenta rinviare a R. TREZZA, *Diritto e intelligenza artificiale. Etica, Privacy, Responsabilità, Decisione*, Pisa, 2020. Si veda anche G. TADDEI ELMI, A. CONTALDO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Algoritmi giuridici. Ius condendum o “fantadiritto”?*, Pisa, 2020; U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale Il diritto, i diritti, l’etica*, Milano, 2020; G. ALPA (a cura di), *Diritto e intelligenza artificiale. Profili generali, soggetti, contratti, responsabilità civile, diritto bancario e finanziario, processo civile*, Pisa, 2020; A. SANTOSUOSSO, *Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie*



In merito alla prima questione, va subito detto che l'informatica giuridica è quella branca del diritto che, ormai da molti anni, si occupa dei meccanismi e degli strumenti tecnologici e digitali nel mondo del diritto in generale, specie quello processuale. Si pensi, infatti, al Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005)³, il quale, tra i tanti, prevede gli istituti della "firma digitale" e del "documento elettronico", soffermandosi sulla loro disciplina e sui loro risvolti validistici e probatori⁴.

Si ponga mente, ad esempio, anche a tutta la gestione telematica (mezzi tecnologici per il funzionamento del diritto) relativa ai processi. Oltre alla normativa in tema di processo civile telematico⁵ (c.d. PCT), vi è anche una serie

di IA sono una grande opportunità per il diritto, Milano, 2020; M. CUPERSITO, *Intelligenza artificiale e diritto: profili normativi, etici e politici*, in *Opinio Iuris*, 1° giugno 2020, consultabile *online*; A. LONGO, G. SCORZA, *Intelligenza artificiale. L'impatto sulle nostre vite, diritti e libertà*, Milano, 2020; A. D'ALOIA, *Intelligenza artificiale e diritto: Come regolare un mondo nuovo*, Milano, 2021; U. RUFFOLO (a cura di), *XXVI lezioni di Diritto dell'Intelligenza Artificiale*, Torino, 2021; G. SCHNEIDER, N. ABRIANI, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech*, Bologna, 2021; G. TADDEI ELMI, *Il Quid, il Quomodo e il Quid iuris dell'IA. Una riflessione a partire dal volume "Diritto e tecnologie informatiche"*, in *Riv. it. inf. dir.*, n. 2/2021, p. 131 ss.; E. BASSOLI, *Algoritmica giuridica. Intelligenza artificiale e diritto*, Modena, 2022; P. SEVERINO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Politica, economia, diritto, tecnologia*, Roma, 2022; R. M. AGOSTINO, G. DALIA, M. IMBRENDA, S. PIETROPAOLI (a cura di), *Frontiere digitali del diritto. Esperienze giuridiche a confronto su libertà e solidarietà*, Torino, 2022.

³ Sul c.d. CDA, si rinvia, *ex multis*, a G. CASSANO, C. GIURDANELLA, *Il codice della pubblica amministrazione digitale. Commentario al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005*, Milano, 2005; F. TROJANI, *Il nuovo codice dell'amministrazione digitale*, Santarcangelo di Romagna, 2016.

⁴ Sui due istituti menzionati, si rinvia a G. D'AIETTI, *Il documento elettronico: profili giuridici, civili e penali*, in *www.privacy.it*, Relazione presentata al Convegno Nazionale su "Informatica e riservatezza" del CNUCE – Pisa 26/27 settembre 1998, consultabile *online*; V. RIZZO (a cura di), *Documento informatico, firma digitale e commercio elettronico*, Napoli, 2000; N. GRAZIANO, *Il disconoscimento del documento informatico sottoscritto con firma digitale*, in *Inf. dir.*, 17 gennaio 2001, consultabile *online*; C. FISCALE, F. DEL MONTE, A. FELICIANI E G. ARENACCIO, *La firma elettronica e il documento informatico: come semplificare la sottoscrizione e conclusione dei contratti durante il lockdown*, in *Dir. banc.*, 26 marzo 2020, consultabile *online*; M. MILANESE, *L'atto pubblico informatico*, in *Comp. dir. civ.*, consultabile *online*; F. DELISI, *Forma digitale, contratto e commercio elettronico*, Padova, 2020; F. CICLOSI, *I documenti informatici dopo le nuove Linee guida AgID*, Santarcangelo di Romagna, 2021.

⁵ Sul punto, A. DIDONE (a cura di), *Le riforme del processo civile: dalla digitalizzazione del processo alla negoziazione assistita*, Milano, 2014; E. M. FORNER, *Procedura civile digitale. Prontuario teorico-pratico del processo telematico*, Milano, 2015; S. ROSSETTI, M. SANTOPIETRO, D. MURADORE, *Il processo esecutivo telematico*, Milano, 2016. A parte i lavori monografici e collettanei, si rinvia anche a P. DELLA VEDOVA, *La deriva telematica nel processo civile*, in *Judicium*, consultabile *online*. Si veda, di recente, anche A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *La giustizia*



di strumenti tecnologici che possono coadiuvare gli operatori del diritto, come per esempio i servizi Italgire Web⁶, Sentenze Web⁷, Sigico⁸ e il CED⁹.

In merito alla Corte di Cassazione¹⁰, vertice di legittimità nell'ordinamento, i servizi Italgire e Sentenze Web, meccanismi funzionali alla più veloce e fruibile ricerca delle sentenze, sono stati messi a punto proprio dal Centro Elettronico di Documentazione (CED)¹¹, il quale si occupa di “telematizzare” i procedimenti e rendere quanto più funzionale il servizio-giustizia¹².

digitale. Determinismo tecnologico e libertà, Bologna, 2021; G. BUCCARELLA, F. FIMMANÒ, I. PISANO, I. SIMONA, *Giustizia digitale. Processi telematici e udienza da remoto*, Milano, 2021.

⁶ Sul suo funzionamento, si rinvia a G. LAX, *ItalgireWeb: la banca dati per gli avvocati*, in *www.studiocataldi.it*, 30 dicembre 2021, consultabile *online*.

⁷ Sui rischi di una informazione giudiziaria così accessibile a tutti, si rinvia all' intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, del 3 novembre 2014, il quale già metteva in evidenza che: “La pubblicazione in rete cambia profondamente l'informazione – anche quella giuridica – nel significato, nel fine, nel valore, ma anche nei rischi. La pubblicazione sul *web* di dati preziosi quali quelli ricavabili da una sentenza e dai principi che vi sono affermati è indubbiamente più “democratica” perché raggiunge (potenzialmente) tutti i cittadini, mettendo a disposizione un patrimonio informativo importante, anche a coloro i quali, probabilmente, non si sarebbero mai avvicinati a una rivista giuridica. Ma questa facilità nell'accesso – che è una straordinaria risorsa per i singoli e le istituzioni – è anche, paradossalmente, la più grande fonte di rischio delle pubblicazioni *on-line*, suscettibili di indicizzazione, riproduzione decontestualizzata, alterazione, finanche manipolazione e per questo in alcun modo assimilabili alle pubblicazioni cartacee”. Su tali rischi, anche M. SENOR, *SentenzeWeb: ricerca libera tra le sentenze della Corte*, in *Media Laws*, 21 ottobre 2014, consultabile *online*, per la quale: “(...) pare verosimile ipotizzare che la base normativa del trattamento sia stata individuata dal CED nell'art. 52 del codice *privacy*, il cui ultimo comma prevede che, fuori dai casi indicati (richiesta di oscuramento delle generalità da parte dell'interessato, dati identificativi delle persone offese di violenza sessuale, dei minori e delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone), è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, per finalità di informazione giuridica”.

⁸ Sul punto, si rinvia, per un approfondimento, a F. ROLLERI, *I sistemi di gestione documentale della Corte Costituzionale*, in *Il processo telematico*, 8 marzo 2016, consultabile *online*.

⁹ Sugli strumenti “tecnologici” funzionali alla giustizia, si veda il dossier curato da D. PIANA, *Percorsi e strumenti per una giustizia digitale al servizio del cittadino*, Roma, 2021.

¹⁰ Tra tutti, si veda G. ALPA, V. CARBONE, *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, Bologna, 2011; U. DE MARTINO, N. PICARDI, P. RESCIGNO, G. P. TRIFONE, *La corte di cassazione dalle origini ai giorni nostri*, Roma, 2016; P. CURZIO, *Il palazzo della Cassazione*, Bari, 2021.

¹¹ Sul punto, si veda G. MAMMONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018*, 25 gennaio 2019, Roma, 2019, pp. 95-98. Sulla stessa lunghezza d'onda anche ID., *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019*, 31 gennaio 2020, Roma, p. 21.

¹² Il Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) costituisce, nell'ambito della Corte di cassazione, una struttura autonoma, alle dirette dipendenze della Prima Presidenza, il cui



compito consiste: a) nel fornire a tutti i magistrati italiani (ed in particolare a quelli della Corte di cassazione), ai magistrati europei che ne facciano richiesta ed al pubblico degli abbonati (avvocati, istituzioni pubbliche e private, quali Ministeri, Università, etc.) servizi informatici aventi ad oggetto la realizzazione, la gestione e la messa a disposizione per la consultazione degli archivi di giurisprudenza e di legislazione (c.d. informatica giuridica); b) nel fornire alle strutture amministrative e ai magistrati della Corte servizi informatici destinati concernenti la gestione informatica dei processi (sia civili che penali) dal momento del deposito del ricorso al momento della pubblicazione della sentenza e della restituzione degli atti al giudice a quo (c.d. informatica giudiziaria). In termini teorici, sul punto, si veda L. IZZO, *Ced Cassazione: cos'è e come funziona*, in www.studiocataldi.it, 19 giugno 2018, consultabile *online*. Completa è la disamina che fa F. FIANDANESE, *Il Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione*, in G. PERUGINELLI, M. RAGONA (a cura di), *L'informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze*, Napoli, 2014, pp. 151-168. Ancora, si veda V. DI CERBO, *Banche dati di giurisprudenza, nomofilachia e trasparenza dell'attività giurisdizionale. L'esperienza del Ced della Corte di cassazione*, in *Questione Giustizia*, consultabile *online*, ove si legge: "Appare quindi evidente il ruolo della banca dati come strumento fondamentale per l'affermazione un «diritto certo e stabile», ciò che dà la cifra della sua finalità ultima, di rendere tangibile nell'applicazione del diritto, e dunque nella costruzione di un «diritto vivente», quel principio di eguaglianza che è sotteso alla vita democratica di una società civile, per cui la prevedibilità delle decisioni è alla base di un trattamento uniforme dei cittadini dinanzi al giudice". Da un punto di vista della tutela della *privacy* e dell'accesso alle banche dati, il Garante della *Privacy*, già nel 2003, aveva avuto modo di sottolineare l'esigenza di assicurare un uso legittimo dei dati personali consultati nelle banche dati da parte degli utenti del Ced. Ciò si rende necessario in particolare per la consultazione di provvedimenti giudiziari che riportano generalità delle parti e dati riferiti a particolari condizioni o *status*, anche di natura sensibile. I dati consultabili attraverso l'accesso al Ced possono essere utilizzati dagli utenti per scopi di documentazione e ricerca in ambito giudiziario o professionale, di studio o per eventuali statistiche. Ma non anche, in mancanza di una specifica previsione e di una previa informativa agli interessati, per altre finalità indebite, quali potrebbero essere, ad esempio, il monitoraggio della giurisprudenza di alcuni uffici giudiziari che miri alla profilazione del comportamento del singolo imputato o magistrato o la valutazione a fini disciplinari della produttività dell'organo decidente". Sul rischio di profilazione, od anche della c.d. "sorveglianza di massa", su cui lo stesso Garante si è espresso con un Parere del 25 marzo 2021, sul c.d. Sistema Sari Real Time, si veda, seppur in tema di pubblicità targettizzata, G. D'IPPOLITO, *Profilazione e pubblicità targettizzata* *online*. Real-Time Bidding e behavioural advertising, Napoli, 2022. Il Garante, a proposito del sistema di cui sopra, ha specificato che: "Occorre in particolare considerare che il sistema in argomento realizza un trattamento automatizzato su larga scala che può riguardare, tra l'altro, anche coloro che siano presenti a manifestazioni politiche e sociali, che non sono oggetto di "attenzione" da parte delle forze di Polizia; ancorché la valutazione di impatto indica che i dati di questi ultimi sarebbero immediatamente cancellati, nondimeno, l'identificazione di una persona in un luogo pubblico comporta il trattamento biometrico di tutte le persone che circolano nello spazio pubblico monitorato, al fine di generare i modelli di tutti per confrontarli con quelli delle persone incluse nella "watch-list". Pertanto, si determina una evoluzione della natura stessa dell'attività di sorveglianza, passando dalla sorveglianza mirata di alcuni individui alla possibilità di sorveglianza universale allo scopo di identificare alcuni individui". Tale profilazione potrebbe valere, ad esempio, anche per i lavoratori. Sul punto, si veda A. DONINI, *Profilazione reputazionale e tutela del lavoratore: la parola al Garante della Privacy*, in *Labour Law & Law Issues*, n. 1/2017, p. 49, ove, in maniera del tutto condivisibile, si legge che: "Il riconoscimento della tecnica di protezione dei dati fin dalla progettazione potrebbe comprendere forme di filtro e tutela *by design* delle prerogative personali del cittadino e del prestatore, come quelle ricavabili dall'art. 8 St. lav. Gli stessi sistemi di *advanced data analytics* possono dunque fornire adeguati strumenti di tutela dei diritti fondamentali, se finalizzati alla *compliance* normativa. Per raggiungere tale obiettivo, è utile orientare la progettazione delle strumentazioni informatiche in modo da stralciare ogni dato rilevatore delle attitudini personali del lavoratore, sperimentando in



Allo stesso modo, anche la Corte costituzionale¹³, la quale, aiutata dagli uffici informatici, ha “digitalizzato” tutte le procedure – specie nel contesto emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19¹⁴ –, dando la possibilità di accesso, non solo alle sentenze pubblicate, ma anche ai comunicati ufficiali della Corte¹⁵, alle ordinanze di ammissibilità o meno degli interventi (*ad adiuvandum* o *ad opponendum*¹⁶), oppure ancora alla possibilità telematica di usufruire delle

tal modo una regolazione veicolata dai codici informatici che attribuisca alla tecnologia una funzione indiretta ma essenziale di tutela delle posizioni giuridiche”.

¹³ Sul punto, si veda S. CASSESE, *Dentro la Corte: Diario di un giudice costituzionale*, Bologna, 2015; B. BARBISAN, G. AMATO, *Corte costituzionale e Corti europee. Fra diversità nazionali e visione comune*, Bologna, 2015; A. CELOTTO, *La Corte costituzionale. Quando il diritto giudica la politica*, Bologna, 2018; E. LAMARQUE, *Corte costituzionale e giudici nell'Italia repubblicana. Nuova stagione, altri episodi*, Napoli, 2021; A. MORRONE (a cura di), *La corte costituzionale. Antologia di classici della letteratura italiana*, Torino, 2021.

¹⁴ Interessante è l'opera di A. DIDONE, F. DE SANTIS (a cura di), *Il processo civile solidale. Dopo la pandemia*, Milano, 2020. Gli A. dell'opera, infatti, mettono in luce tutte le criticità che l'emergenza sanitaria ha innescato sul processo civile, mediante l'analisi di tutti i provvedimenti normativi adottati per fronteggiare la pandemia e per garantire il diritto di difesa e la continuazione dell'esercizio della giustizia. Sul fronte del processo penale, si veda L. G. VELANI, *Gestione dell'emergenza Covid-19 e processo penale: un prodotto discutibile destinato a imporsi stabilmente?*, in *Leg. pen.*, 7 maggio 2020, pp. 1-42, consultabile *online*. Sui risvolti giuridici della pandemia da covid-19, tra tanti, si rinvia a M. FRIGESSI DI RATTALMA (a cura di), *La pandemia da Covid-19. Profili di diritto nazionale, dell'Unione Europea ed internazionale*, Torino, 2020; G. A. CHIESI, M. SANTISE, *Diritto e Covid-19*, Torino, 2021; R. MARINI (a cura di), *Pandemia e diritto delle persone*, Padova, 2021.

¹⁵ La Corte costituzionale, infatti, da un po' di tempo a questa parte, ha adottato, tramite l'Ufficio comunicazioni, la linea per cui, al termine delle udienze più delicate, i cui temi hanno un'attinenza specifica e “calda” dal punto di vista sociale, economico e politico, pubblica dei Comunicati per rendere partecipe la collettività (in anteprima) della decisione adottata e le brevi motivazioni che l'hanno spinta ad approdare ad una pronuncia piuttosto che ad un'altra. Si faccia l'esempio dei Comunicati in relazione al mancato accoglimento dei referendum costituzionali in tema di “cannabis” e di “suicidio assistito”.

¹⁶ Su tale aspetto, si rinvia a P. PASSAGLIA (a cura di), *L'intervento di terzi nei giudizi di costituzionalità concreti*, Roma, 2016, p. 9 ss.; E. ROSSI, *L'intervento di terzi nel giudizio in via principale dopo la modifica delle norme integrative*, in *Rivista AIC*, n. 3/2020, p. 406 ss.; M. ROMAGNOLI, *Il modello di partecipazione a “triplo binario” della Corte costituzionale italiana: la riforma delle norme integrative riguardo a interventi dei terzi, amici curiae ed esperti, nel segno del dialogo con la società civile e della rilegittimazione continua*, in *Revista de la Facultad de derecho de México*, n. 277/2020, p. 1047 ss.; L. M. TONELLI, *Le nuove Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: fra recepimento della costante giurisprudenza in materia di interventi di terzo in giudizio, alcune importanti innovazioni e... non pochi rischi applicativi*, in *Judicium*, n. 3/2021, consultabile *online*; A. VUOLO, *Il contraddittorio nei giudizi costituzionali alla luce delle recenti modifiche alle Norme integrative*, in *Federalismi*, n. 16/2020, p. 407 ss.



ordinanze di ammissibilità o meno degli interventi degli *amici curiae*¹⁷ o, ancora, di consultare, con delle credenziali di accesso¹⁸, gli atti dei processi costituzionali (c.d. fascicolo elettronico¹⁹).

Questi citati sono soltanto alcuni casi di ciò che viene definita “informatica giuridica”, ovvero quell’insieme di norme che tendono a “digitalizzare” e, dunque, a snellire le fasi procedimentali e processuali²⁰.

Diversamente, invece, dall’informatica giuridica, vi è l’Intelligenza Artificiale²¹, che contempla in sé svariate apparecchiature, mezzi, *software*, applicazioni, variabili che hanno un impatto vantaggioso – il più delle volte – ma

¹⁷ Sull’apertura della Corte alla cittadinanza attiva e alla società, si rinvia a E. OLIVITO, *Invito a Corte, con cautela. Il processo costituzionale si apre alla società civile?*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, n. 10/2019, p. 485 ss.; L. SALVATO, *L’amicus curiae nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale: il Procuratore Generale della Corte di cassazione*, in *Quaderni costituzionali*, 2020, p. 727 ss.; R. CONTI, *La Corte costituzionale aperta alla società civile Intervista a Valerio Onida e Vladimiro Zagrebelsky*, in *Giustizia insieme*, 4 aprile 2020, consultabile *online*; M. D’AMICO, *Gli amici curiae*, in *Questione Giustizia*, n. 4/2020, consultabile *online*; C. DELLA GIUSTINA, *Amicus curiae: dalle origini alle modifiche delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”*, in *Rivista AIC*, n. 3/2020, p. 506 ss.; A. M. LECIS, *La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte finalmente pronta ad accogliere amicus curiae e esperti dalla porta principale*, in *Rivista di diritti comparati*, 23 gennaio 2020, consultabile *online*; G. BERGONZINI, *Una Corte costituzionale aperta? Comunicazione partecipazione contraddittorio*, Napoli, 2021, p. 1 ss.

¹⁸ Sul punto, si veda I. FERRANTI, *Processo costituzionale telematico, ecco come funziona*, in *Agenda digitale*, 23 febbraio 2022, consultabile *online*.

¹⁹ Sul fascicolo elettronico e sulla sua “dematerializzazione”, si rinvia a I. FERRANTI, *Fascicolo del processo civile telematico, come dematerializzarlo: le regole tecniche*, in *Agenda digitale*, 4 aprile 2020, consultabile *online*.

²⁰ Sul punto, si rinvia a D. PIANA, *Costo, ritualità, valore. Le qualità della giustizia nell’era digitale*, in *Giustizia insieme*, 16 settembre 2021, consultabile *online*. Inoltre, una delle richieste provenienti a più voci dall’Unione europea, specie nel solco del P.N.R.R. adottato a causa dell’emergenza epidemiologica, è proprio la “digitalizzazione” della giustizia italiana. In tema, si rinvia a G. BERTOLA, *La digitalizzazione del processo nel Pnrr*, in *www.lamagistratura.it*, 23 luglio 2021, consultabile *online*.

²¹ Su cosa sia l’Intelligenza Artificiale, si rinvia, tra tanti, a S. QUINTARELLI, *Intelligenza artificiale: Cos’è davvero, come funziona, che effetti avrà*, Milano, 2020; A. LONGO, G. SCORZA, *Intelligenza artificiale. L’impatto sulle nostre vite, diritti e libertà*, Milano, 2020; R. MARMO, *Algoritmi per l’intelligenza artificiale: Progettazione dell’algoritmo – Dati e Machine Learning – Neural Network – Deep Learning*, Milano, 2020; F. CABITZA, L. FLORIDI, *Intelligenza artificiale: L’uso delle nuove macchine*, Roma, 2021; M. PIERANI, M. SCIALDONE, *Vivere con l’Intelligenza Artificiale. Società, consumatori e mercato*, Torino, 2021; G. BARONE, *Machine Learning e Intelligenza Artificiale – Metodologie per lo sviluppo di sistemi automatici*, Palermo, 2021.



anche – altre volte – svantaggioso sul sistema sociale e sulle persone²². Tale è la ragione per la quale i sistemi intelligenti vanno vagliati nella loro meritevolezza²³. Bisogna comprendere, dunque, se questi siano in grado di essere “funzionali” allo sviluppo e alla tutela della personalità umana²⁴. La meritevolezza meccanicistica, quindi, deve assurgere ad elemento valutativo necessario ed indefettibile per la costruzione – ciò che ci si augura – di un diritto intelligente per le persone²⁵.

2. La società nella quale ci si trova a risolvere conflitti²⁶ – che, se prima erano maggiormente visibili e percepibili tra persone, oggi sono anche tra

²² Si pensi, ad esempio, alla nuova Proposta di Regolamento europeo dell'aprile 2021, con la quale l'Unione europea intende uniformare la disciplina dell'I.A., con cui, in particolar modo all'art. 5, si vietano delle pratiche generali di utilizzo dell'I.A. qualora non siano funzionali al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti dalla cornice europea delle fonti. Sul punto, si rinvia a G. PROIETTI, *Intelligenza artificiale: una prima analisi della proposta di regolamento europeo*, in www.dirittobancario.it, 27 maggio 2021, consultabile *online*, ove si sottolinea la possibilità di una configurabilità di una responsabilità da contatto sociale: “Il paradigma normativo proposto, dunque, per le sue peculiarità, pone indirettamente una questione riguardante il tema dell'imputabilità di una responsabilità per la violazione di uno degli obblighi che si traducono in una regola di condotta, ovvero la possibilità o meno di generare una fattispecie di responsabilità da contatto sociale qualificato. Siffatta fattispecie di responsabilità si configurerebbe allorché l'ordinamento imponga ad un soggetto un'obbligazione, in ragione dell'attività o funzione esercitata, affinché osservi specifici comportamenti in determinate situazioni, generando quindi obblighi di protezione «nei confronti di tutti coloro che siano titolari degli interessi la cui tutela costituisce la ragione della prescrizione di quelle specifiche condotte”. Sulla necessità di leggere il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, si rinvia a P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006, p. 265 ss.

²³ Sulla necessità di un giudizio “ciclico di meritevolezza” dei sistemi intelligenti, si consenta rinviare a R. TREZZA, *Artificial Intelligence Act. Giudizio “ciclico” di meritevolezza e accountability intelligenti*, Roma, 2021.

²⁴ Sul concetto di meritevolezza, tra gli ultimi, si veda P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., pp. 346-351; I. MARTONE, *Il giudizio di meritevolezza. Questioni aperte e profili applicativi*, Napoli, 2017; E. MINERVINI, *La «meritevolezza» del contratto. Una lettura dell'art. 1322 comma 2 c.c.*, Torino, 2019; R. TREZZA, *Multiproprietà azionaria e tutela del consumatore: risvolti processuali e funzioni della causa negoziale*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, n. 7/2020, pp. 2-13.

²⁵ Sul punto, si consenta rinviare a R. TREZZA, *I diritti della persona tra “tecniche” e “intelligenze” artificiali. Casi, questioni, prospettive*, Cile, 2021, p. 19.

²⁶ Sul punto, si rinvia a M. R. FERRARESE, *Gestire i conflitti. Diritto, cultura, rituale*, Bari-Roma, 2009; A. RUFINO, *Norma e conflitto. Cultura giuridica e regole sociali, dallo Stato moderno alla società globale*, Milano, 2009; G. AZZARITI, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Bari-



persone e macchine artificiali²⁷ – è una società fortemente “globalizzata²⁸”, nella quale è in atto una vera e propria “rivoluzione digitale²⁹”.

Come si sa, il fenomeno della globalizzazione ha innescato un “accorciamento” della velocità inter-relazionale, in quanto, semplicemente con un *click*, oggi è possibile addirittura interfacciarsi con un’altra parte del mondo.

La sociologa del diritto Ferrarese, dopo Giddens, il quale già definiva la globalizzazione come un fenomeno di “abbassamento chilometrico delle

Roma, 2010; B. BILOTTA, *Conflitti e istanze di giustizia nelle società contemporanee*, Milano, 2014; C. SARRA, F. REGGIO, *Diritto, metodologia giuridica e composizione del conflitto*, Padova, 2020.

²⁷ Ciò ha spinto chi scrive a coniare il nuovo brocardo giuridico “ex robot oritur ius”. Si veda R. TREZZA, E. QUARTA, *Coche sin conductor o ley sin conductor: ¿qué dirección tomará la ley para evitar los accidentes sistemáticos?*, in *Revista de derecho del transporte*, n. 28/2021, p. 221.

²⁸ Anche il lavoro dell’interprete deve evolversi alla luce della c.d. “globalizzazione giuridica”. Si rinvia, sul punto, all’attenta riflessione di A. OCCHIPINTI, *Interpreti e fonti del diritto nella globalizzazione giuridica*, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 1/2019, p. 23, per il quale: “Il cammino è iniziato da tempo e rappresenta una strada ormai irrinunciabile affinché permanga “un legame funzionale fra il diritto positivo e la sua funzione sociale” e “il diritto legislativo non sia fine a sé stesso, non trovi in se stesso il proprio valore, ma sia essenzialmente regola pratica, posta ad un fine regolativo concreto di rapporti sociali”. Non può, sul tema, non rinviarsi a P. GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *For. it.*, n. 5/2002, pp. 151-164. Ancora di recente, si rinvia a G. PALLOTTA, *La globalizzazione del diritto*, in *Cammino Diritto*, n. 9/2019, pp. 1-17; G. CONTALDI (a cura di), *Sovranità e diritti al tempo della globalizzazione*, Roma, 2021.

²⁹ Si veda E. TOSI, *High tech law. The digital legal frame in Italy. An overview of contracts, digital content protection and ISP liabilities emerging issues*, Milano, 2015; P. CELLINI, C. RATTI, L. DE BIASE, *La rivoluzione digitale. Economia di internet dallo Sputnik al machine learning*, Roma, 2018; F. RULLANI, E. RULLANI, *Dentro la rivoluzione digitale. Per una nuova cultura dell’impresa del management*, Torino, 2018; G. GIORGETTI, *Rivoluzione Digitale Italiana: dal colonialismo all’indipendenza tecnologica*, Roma, 2019; G. PASCUZZI, *Il diritto dell’era digitale*, Bologna, 2020; R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI, M. PROTO, *Il diritto nell’era digitale. Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Milano, 2022. Il volume, davvero recentissimo, prende innanzitutto in esame la Persona e la sua sfera di diritti e tutele, anche dopo la morte, senza dimenticare il baluardo del diritto all’oblio.



relazioni³⁰, ha sottolineato che il fenomeno del diritto nel mondo globale sia da attribuire allo “spostamento della sovranità dagli Stati ai mercati³¹”.

Il mercato, che di per sé dovrebbe essere regolato dal diritto statale³², nel mondo galoppante della globalizzazione³³, rischia di annichilire lo Stato, appropriandosi di una sovranità autolegittimante che impone misure economiche

³⁰ La filosofia di Giddens è ben sintetizzata da L. RE, *Approcci europei alla globalizzazione*, in *Jura Gentium*, consultabile *online*, ove si legge che: “Le definizioni del termine globalizzazione sono numerosissime; una delle più note è stata data da Anthony Giddens nel suo saggio intitolato *Le conseguenze della modernità*. Secondo Giddens, il termine globalizzazione designa “l’intensificazione di relazioni sociali mondiali che collegano tra loro località distanti, facendo sì che gli eventi locali vengano modellati dagli eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza e viceversa”. Nonostante le numerose critiche che le sono state mosse, questa definizione appare ancora oggi una delle più esaustive. Essa rappresenta infatti un tentativo di descrivere il processo di globalizzazione, senza attribuire un ruolo predominante a una sola dimensione. La “interconnectedness” di Giddens presuppone la rivoluzione informatica e tecnologica, ma non esclude il contemporaneo verificarsi di dinamiche altrettanto rilevanti in altri settori dell’agire istituzionale (come l’economia, la politica internazionale, la cultura). La definizione di Giddens inoltre ha il pregio di indicare l’effetto principale del processo di globalizzazione: la globalizzazione modifica la percezione della “distanza” e ridisegna i confini esistenti. Ridisegnare i confini non significa tuttavia abatterli, ma collegare fra loro, “connettere”, luoghi un tempo distanti e, contemporaneamente, allontanare, “disconnettere”, luoghi che erano ritenuti vicini”. Sul punto, si rinvia ancora a N. DE FEDERICIS, *Modernità e globalizzazione nella teoria critica di Anthony Giddens*, in *Ragion pratica*, n. 1/2003, pp. 253-272.

³¹ Sul punto, si veda M. R. FERRARESE, *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi del mondo globale*, Roma-Bari, 2006, p. 102. In una chiave innovativa e più recente, ID., *Nomofilachia ed evoluzione giuridica. Corti supreme, legalità e riassetamenti post-globalizzazione*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2021, consultabile *online*.

³² P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 471 ss., sul rapporto tra mercato, solidarietà e diritti umani.

³³ Si rinvia nuovamente a P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., specie p. 481, ove l’A. discorre di “pervasività del mercato” e, dunque, della necessità di una regolazione correttiva al fine di distribuire, redistribuire e raggiungere un principio stabile di “solidarietà sociale”. Non vi deve solo essere una giustizia “retributiva”, ma anche e soprattutto una giustizia “distributiva”. Inoltre, a p. 505, l’A. sottolinea che: “Non bastano politiche di coesione e di armonizzazione legislativa: sarà necessario garantire i diritti dell’uomo in modo uniforme e ciò sarà possibile in maniera piena con l’adozione di una Costituzione rigida europea (...) che preveda una Corte Costituzionale europea la quale possa svolgere un’attività di garanzia, in una prospettiva diversa da quella prevalentemente mercantile tipica delle funzioni della Corte di giustizia europea”.



sregolate³⁴, talvolta – in realtà il più delle volte – sgretolanti la tutela piena della persona umana³⁵.

Il diritto, ma ancor prima la persona, deve essere *prius* nella dinamica mercantile (*lex mercatoria*³⁶) e regolare quanto più adeguatamente possibile il *posterius* del mercato³⁷.

Il diritto non può venire dopo, deve acquisire la capacità di “lungimiranza³⁸”. È vero che “*ex facto oritur ius*”, ma è anche vero che le dinamiche sociali e

³⁴ M. R. FERRARESE, *Diritto sconfinato*, cit., p. 102 ss.; A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell'età globale*, Roma-Bari, 2008, p. 47 ss.

³⁵ Sul punto, si rinvia a M. R. FERRARESE, *Diritto e mercato. Il caso degli Stati Uniti*, Torino, 1992, specie p. 17. In accordo P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 478, il quale sottolinea che: “Il buon diritto non si pone all'esclusivo o prevalente servizio delle ragioni economiche, ma sa contrapporsi ad esse, impedendo la mercantilizzazione della società e la identificazione dei diritti civili e dei diritti umani naturali con quelli economici (...). Il buon diritto è giusto, equo, solidale, ha una sua giustificazione sociale, non esaurisce i diritti nel loro contenuto patrimonialistico, facendone dei privilegi, ma nel contribuire a migliorare la qualità della via (...)”. Il mercato, dunque, va “giuridificato”. In tal senso, si veda G. ALPA, *La c.d. giuridificazione delle logiche dell'economia di mercato*, in *Riv. trim.*, 1999, p. 725 ss.

³⁶ Sul punto, si veda G. SAPUTELLI, *Stato, Unione Europea e lex mercatoria*, Torino, 2015; F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 2016.

³⁷ Si legga la relazione tenuta da G. LA PIRA sui principi costituzionali: “La risposta è evidente: riaffermare solennemente i diritti naturali – imprescrittibili, sacri, originari – della persona umana e costruire la struttura dello Stato in funzione di essi. *Lo Stato per la persona e non la persona per lo Stato: ecco la premessa ineliminabile di uno Stato essenzialmente democratico*”. Si può rinvenire tale considerazione in www.lanscitadellacostituzione.it. Nella medesima direzione, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., specie p. 508, laddove si afferma che: “Il mercato vale per ciò che è; non semplicemente perché c'è esso merita un elogio debole ovvero condizionato, senza confondere le ragioni economiche e gli argomenti etici: sono questi ultimi che meritano priorità e forniscono all'economia un fondamento etico che, nella concreta realtà storia, sappia coniugare efficienza economica e diritti umani, mercato e democrazia”.

³⁸ Cfr. lo scritto di N. OCCHIOCUPO, *Una intesa lungimirante: la centralità della persona*, in *Nuova Antologia*, n. 619/2018, p. 2287, ove l'A. auspica: “che siano realizzate riforme, costituzionali e non, dirette a costruire compiutamente l'ordinamento statale, delineato nella Costituzione del 1948, per dare maggiore, incisiva e diffusa effettività al processo di liberazione, di promozione, di pieno sviluppo della persona umana, nella multidimensionalità dei suoi bisogni, materiali e spirituali, fine preminente su cui le forze politiche presenti all'Assemblea Costituente raggiunsero l'intesa, rivelatasi lungimirante”.



tecnologiche in atto non possono che far muovere il diritto verso un approccio risolutorio-dinamico piuttosto che di inerzia, frutto di un immobilismo comodo³⁹.

I sistemi intelligenti hanno già mutato le coordinate spazio-temporali, nonché fisiche e mentali delle componenti umane⁴⁰. Hanno penetrato il sistema, sempre più intriso di allocazioni fondate sulla velocità di accaparramento, portando a tre coordinate fattuali ormai evidenti: la de-materializzazione, la de-spazializzazione e la de-temporalizzazione.

L'Intelligenza Artificiale, dietro la quale vi è sempre l'uomo-elaboratore, non ha a che fare più con la dimensione tradizionale della materialità perché la trascende (dematerializzazione)⁴¹.

Inoltre, il poter comunicare – come soprattutto il periodo emergenziale ha fatto percepire⁴² – in qualsiasi modo possibile pur di raggiungere un uditorio

³⁹ Si veda, sul punto, R. TREZZA, E. QUARTA, *Driverless car o driverless law: quale direzione prenderà il diritto per evitare "incidenti sistematici"?*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, n. 2/2021, p. 2 ss.

⁴⁰ Ciò venne messo in evidenza già da A. FAZIO, *Globalizzazione, diritto, persona, Lectio magistralis* tenuta in occasione del conferimento *ad honorem* del titolo di *Doctor of Laws*, Roma, 21 luglio, 2002, consultabile *online*, p. 12, ove si legge che: "L'efficacia di regole comuni, improntate al rispetto della dignità umana e della solidarietà, lo sviluppo di circuiti virtuosi di espansione e di progresso dipendono dall'impegno e dalla volontà di ciascun paese, soprattutto dei più avanzati, dalla politica e dalla coscienza sociale. Le persone sono titolari di diritti che precedono il momento della decisione statale. *Persona comparatur ad comunitatem sicut pars ad totum*".

⁴¹ Sulla c.d. dematerializzazione delle attività umana, non si può non rinviare a P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 916 ss. Si faccia il caso delle banconote, ormai completamente sostituite dalle monete elettroniche (*bitcoin*). Sul punto, si rinvia a S. CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin. Un'analisi giuridica*, Milano, 2015; R. RAZZANTE (a cura di), *Bitcoin e criptovalute. Profili fiscali, giuridici e finanziari*, Santarcangelo di Romagna, 2018; F. PONTANI, *Criptovalute. Tecnicità, diritto ed economia*, Roma, 2019. Anche le opere d'arte, ad esempio, vengono dematerializzate. Sul punto si veda G. VULPIANI, *Non fungible tokens, smart contracts e blockchain nell'arte e nella moda: crypto art e digital fashion*, in *Cammino Diritto*, n. 11/2021, pp. 1-18; M. RUBINO DE RITIS, *L'espansione economica nel Metaverso: i No Fungible Token (NFT)*, in *Giustiziacivile.com*, 16 novembre 2021, consultabile *online*. Si consenta rinviare, in tal senso, anche a I. ALLEGRANTI, R. TREZZA, *I non-fungible token (NFT) come trampolino di lancio per le città devastate a causa dei disastri ambientali. Un'analisi del fenomeno nella legalità reticolare*, in *Il diritto dell'economia*, n. 1/2022.

⁴² Tale cambiamento è messo in luce da G. RIZZUTI, *La comunicazione ai tempi del coronavirus*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, 31 marzo 2020, consultabile *online*; E. MANGONE, *La comunicazione del rischio: la pandemia da COVID-19*, in *Mediascapes Journal*, n. 15/2020, p. 132 ss.; D. SALZANO, I. SCOGNAMIGLIO (a cura di), *Voci nel silenzio. La comunicazione al tempo*



internazionale, ha fatto venire meno le coordinate tradizionali dello spazio, circoscritto non più alla fisicità, ma alla dinamicità telematica che consente di rendere “spazio virtuale” l’ormai del quasi tutto assente “spazio fisico-relazionale⁴³”. Inoltre, nei sistemi intelligenti non esiste tempo. Essi, salvo il *click* di spegnimento, sarebbero in grado di elaborazioni continue, frenetiche, con non pochi risvolti sulla salute e sullo sviluppo armonico della persona umana⁴⁴.

del Coronavirus, Milano, 2020; J. SIERRA-SÁNCHEZ, N. ABUÍN VENCES, J. MILÁN FITERA, *Trattamento informativo della pandemia del Coronavirus nei media digitali italiani*, in *Journal of Science Communication*, n. 20/2021, p. 1 ss.

⁴³ La gran parte del tempo passata in rete, “navigando” per tutte le attività umana, crea un “io virtuale” traslato nella virtualità dall’“io fisico”. In tal senso, si veda I. MARTONE, *Sulla trasmissibilità a causa di morte dei “dati personali”: l’intricato rapporto tra digitalizzazione e riservatezza*, in *Dir. succ. fam.*, 2021. In tale direzione, si veda anche G. ALPA, *L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contr. impr.*, 2017, p. 723 ss.; C. CAMARDI, *L’eredità digitale. Tra realtà e virtuale*, in *Dir. inf.*, 2018, p. 662 ss.; A. A. MOLLO, *Successione “mortis causa” nel patrimonio digitale e diritto alla protezione dei dati personali*, in *Famiglia*, 2020, p. 181 ss.; S. DEPLANO, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, in C. PERLINGIERI, L. RUGGIERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015, p. 427 ss. Di recente, sul punto, si veda G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, Milano, 2021, p. 253.; M. FOGLIA, *Identità digitale, trattamento dei dati e tutela della persona*, in *Rass. dir. civ.*, n. 1/2021, p. 80 ss.

⁴⁴ Sul punto, interessanti sono i dibattiti intervenuti sul c.d. “diritto alla disconnessione”. Si veda, in tal senso, R. PERRONE, *Il «diritto alla disconnessione» quale strumento di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti*, in *Federalismi*, n. 24/2017, p. 2 ss.; E. SENA, *Lavoro agile e diritto alla disconnessione: l’incidenza delle nuove tecnologie sulle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, in Il diritto del mercato del lavoro*, n. 1/2018, p. 24 ss.; E. SIGNORINI, *Il diritto del lavoro nell’economia digitale*, Torino, 2018; C. CHIARELLA, *Lavoro agile: introdotto nell’ordinamento italiano il diritto alla disconnessione*, in *Il Quotidiano giuridico*, 26 maggio 2021, consultabile *online*, ove si legge che: “Il legislatore, nella legge di conversione del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, pubblicata in G.U. lo scorso 12 maggio 2021 (L. 6 maggio 2021, n. 61) e recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” ha riconosciuto, per la prima volta in via normativa, un vero e proprio diritto di coloro che lavorano da remoto a potersi disconnettere da tutti gli strumenti tecnologici che consentono di poter accedere al proprio account aziendale anche al di fuori dell’ufficio in determinati orari”; D. GRANATA, M. RUSSO, *Il diritto alla disconnessione nell’era dell’always on*, in *Ratio iuris*, 16 giugno 2021, consultabile *online*, ove si sottolinea che: “Volendo definire la natura giuridica del diritto in questione, proprio in riferimento ai due modelli esaminati (Francia e Italia), si può validamente affermare che la disconnessione più che mero divieto imposto ai datori di lavoro sembra essere un diritto soggettivo dei lavoratori. Tanto nel contesto francese quanto in quello italiano, invero, alle parti è rimessa la definizione delle concrete modalità di attuazione del diritto alla disconnessione che devono essere definite all’interno di accordi collettivi (Francia) o individuali (Italia), o, limitatamente al caso francese, in casi eccezionali rimessi alla determinazione unilaterale del datore di lavoro. In effetti, la rimessione alle parti della determinazione delle modalità attuative del diritto dimostra che la disconnessione non configura un mero divieto ma implica una condotta attiva e quindi una obbligazione di tipo positivo che si sostanzia nella ricerca delle migliori soluzioni per assicurare la disconnessione. In particolare, si tratterebbe di una obbligazione di tipo organizzativo e



Vi deve, dunque, essere l'uomo (il giurista) capace di regolare, per quanto possibile, il mondo "sregolato" della tecnicità, con il mondo "al quanto regolato e regolatorio" della giuridicità.

3. Per cercare di dare delle risposte giuridico-sistematiche al mondo così tanto sregolato delle nuove tecnologie, è d'uopo soffermarsi sulla differenza ontologica, in quanto "contesto differenziale originario", tra ordinamento elettronico⁴⁵ e ordinamento giuridico⁴⁶.

Il primo lo si può definire come l'insieme delle "regole regolanti" del mondo elettronico, fondato su variabili algoritmiche in grado di far funzionare i sistemi intelligenti, ma che non possono, per superare il vaglio di meritevolezza del raggiungimento della funzione della *best human protection*, non essere confacenti ai valori giuridici su cui, invece, si fonda l'ordinamento giuridico⁴⁷.

Quest'ultimo, infatti, è l'insieme delle regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti attivi del sistema statale (aventi lo *status* primario di persona, e poi di cittadino⁴⁸), fondato su "valori giuridici" (primi fra tutti i principi costituzionali e i

gestionale rientrante nel più largo *genus* degli obblighi esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che il datore è tenuto a rispettare"; R. PALLOTTA, *Smart working: diritto alla disconnessione e nuove tutele per i lavoratori genitori*, in *IPSOA*, 19 aprile 2021, consultabile *online*, il quale ricorda che l'ultimo intervento normativo in ordine di tempo risale allo scorso 21 gennaio 2021 quando il Parlamento europeo ha approvato la Risoluzione del 21 gennaio per raccomandare agli Stati membri il riconoscimento di questo diritto come fondamentale, con una proposta di direttiva.

⁴⁵ Ciò non va confuso con l'"algoritmo di ordinamento", il quale viene utilizzato per posizionare gli elementi di un insieme secondo una sequenza stabilita da una relazione d'ordine, in modo che ogni elemento sia minore (o maggiore) di quello che lo segue. In assenza di altre specifiche, la relazione d'ordine viene sempre considerata totale (cioè tale da rendere sempre possibile il confronto tra due elementi dell'insieme): le relazioni d'ordine parziale danno origine agli algoritmi di ordinamento topologico. A seconda del verso della relazione considerato, un ordinamento può essere ascendente o discendente.

⁴⁶ Sul punto, si consenta rinviare a R. TREZZA, *Diritto e intelligenza artificiale*, cit., p. 15.

⁴⁷ Non può non farsi riferimento a R. TREZZA, *L'algoritmo "protettivo": gli istituti di protezione della persona alla prova dell'Intelligenza Artificiale*, in questa rivista, n. 1/2021, pp. 217-255.

⁴⁸ Su tale questione, si rinvia a P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 667, ove l'A. sottolinea che: "Lo *status personae* ha funzione di garanzia espressa da un principio generale di tutela (art. 2 cost.) e da una serie di esplicite previsioni (...). Le situazioni soggettive



diritti fondanti che nella Carta costituzionale sono contenuti⁴⁹ e, per interposto parametro⁵⁰, anche nelle Carte⁵¹ e nei Trattati sovranazionali⁵²).

Non si può pensare ad un sistema intelligente che prende decisioni non conformi ai valori giuridici dell'ordinamento nel quale opera⁵³. In tal senso, infatti, l'*homo informaticus* (il soggetto professionalmente deputato alla programmazione dei *software* abilitativi dei sistemi intelligenti), dovrà farsi trasmettere correttamente i valori giuridici dall'*homo juridicus* da dover

che compongono lo *status personae* sono direttamente funzionalizzate al soddisfacimento dei bisogni esistenziali (...). Lo *status personae* (...) rappresenta la configurazione soggettiva di un valore. La personalità è il valore, lo *status personae* è situazione soggettiva unitaria”.

⁴⁹ Tra tutti, sul punto, si vede P. PERLINGIERI, P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, Napoli, 2004; P. STANZIONE, B. TROISI, *I principi generali del diritto civile*, Torino, 2011, p. 1 ss. A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in *Forum costituzionale*, n. 4/2015, p. 1 ss.; L. VENTURA, A. MORELLI (a cura di), *Principi costituzionali*, Milano, 2015; G. SILVESTRI, *L'individuazione dei diritti della persona*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, p. 1 ss.; V. BALDINI, *La classificazione dei diritti fondamentali. Profili storico-teorico-positivi*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2020, p. 1 ss.

⁵⁰ Cfr., sul punto, D. TEGA, *Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del diritto*, in *Forum costituzionale*, 2007, pp. 1-4; C. CASONATO, *La scienza come parametro interposto di costituzionalità*, in *Rivista AIC*, n. 2/2016, p. 1 ss.; G. E. POLIZZI, *Le norme della Carta sociale europea come parametro interposto di legittimità costituzionale alla luce delle sentenze Corte costituzionale nn. 120 e 194 del 2018*, in *Federalismi*, n. 4/2019, p. 2 ss.

⁵¹ In particolar modo si fa riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. Sul punto, ma solo per un rapido approfondimento, si rinvia a G. BIAGIONI, *Carta UE dei diritti fondamentali e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Napoli, 2018; A. VIGLIANISI FERRARO, *Il private enforcement in Italia della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a vent'anni dalla sua proclamazione*, in *Novos Estudios Juridicos*, n. 2/2020, p. 339; E. CANNIZZARO, *La Carta dei diritti fondamentali e la determinazione della intensità della sua tutela*, in *Eurojus*, 7 dicembre 2020, consultabile online; B. NASCIBENE, *Carta dei diritti fondamentali, applicabilità e rapporti fra giudici: la necessità di una tutela integrata*, in *European Papers*, n. 6/2021, p. 81 ss.; A. VIGLIANISI FERRARO, *Il diritto di proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la necessità di una maggiore tutela dello stesso a livello nazionale*, in *Revista de estudos constitucionais, hermeneutica e teoria do direito*, 2020, p. 335 ss.

⁵² Su tale aspetto, si veda P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 159 ss.; p. 265 ss. sul c.d. “sistema italo-comunitario delle fonti”; pp. 305-307 sulle “fonti sovranazionali”.

⁵³ Sembra in accordo anche E. STRADELLA, *La regolazione della Robotica e dell'Intelligenza artificiale: il dibattito, le proposte, le prospettive. Alcuni spunti di riflessione*, in *Rivista di diritto dei media*, n. 1/2019, specie p. 15.



necessariamente introitare nella macchina⁵⁴. Tale trasmissione permette il “passaggio iniettivo” da valore giuridico a variabile algoritmica meritevole di poter funzionare⁵⁵.

Il test di meritevolezza, dunque, deve essere svolto *ab origine* (*ethics by design*), durante e fino all’ultima possibilità di r-esistenza materiale della macchina (*ethics by default*)⁵⁶. Su tali criteri va costruito anche tutto l’assetto securitativo, ovvero relativo alla protezione della *privacy* (*by design* e *by default*)⁵⁷.

4. Quanto detto nel paragrafo precedente, permette di differenziare – qualora non fosse ancora chiaro – i valori giuridici dalle variabili algoritmiche.

I primi sono il frutto della precettività dell’ordinamento giuridico⁵⁸ e vengono tradotti dal giurista e calati dal mondo dell’astrattezza al mondo del dinamismo

⁵⁴ In tal senso, R. TREZZA, “Legal values” and “algorithmic values”: an ethically oriented interpretation of Artificial intelligence, in *Iura and legal systems*, n. 2/2021, pp. 3-14.

⁵⁵ Si rinvia a R. TREZZA, *Diritto e intelligenza artificiale*, cit., pp. 15-17.

⁵⁶ Si rinvia a R. TREZZA, *I diritti della persona tra “tecniche” e “intelligenze” artificiali*, cit. Sembra sostenere la stessa tesi, seppur in chiave dichiaratamente filosofica, L. FLORIDI, *Etica dell’intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Milano, 2022, specie p. 91 ss., ove si sottolinea che ci sia la necessità di universalizzare i principi etici fondanti per una I.A. proiettata al bene comune e al benessere della persona umana.

⁵⁷ Sul punto, R. TREZZA, *Artificial Intelligence Act*, cit., p. 72 ss., ove chi scrive sostiene che i sistemi intelligenti vadano vagliati nella loro meritevolezza in tutto il loro percorso costruttore. Anche se questi venissero, in qualche modo, programmati diversamente *in itinere*, dovranno sempre superare il giudizio di meritorietà (*rebus sic stantibus* intelligente). Sul concetto di *privacy by design* e *by default*, si rinvia a F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali: dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Giappichelli, Torino, 2016; G. D’ACQUISTO, M. NALDI, *Big Data e Privacy by design*, Torino, 2017; E. TOSI (a cura di), *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Milano, 2019; A. STAZI, *Big Data e diritto comparato*, in *Comp. dir. civ.*, n. 2/2019, p. 615 ss.; L. BOLOGNINI (a cura di), *Privacy e libero mercato digitale. Convergenza tra regolazioni e tutele individuali nell’economia data-driven*, Torino, 2021; P. STANZIONE (a cura di), *I “poteri privati” delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Torino, 2022.

⁵⁸ Su tale aspetto, non può non rinviarsi allo scritto di P. FEMIA (a cura di), *Drittwirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati*, Napoli, 2018, p. VII ss. Inoltre, si rinvia a E. NAVARRETTA, *Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica*, Torino, 2017; ID. (a cura di), *Effettività e Drittwirkung nelle discipline di settore. Diritti civili, diritti sociali, diritto al cibo e alla sicurezza alimentare*, Torino, 2017.



ordinamentale⁵⁹; le seconde, invece, sono le variabili presenti nei sistemi intelligenti nelle quali sono stati inseriti i valori di riferimento. Solo così una macchina intelligente può operare nel sistema, attraverso – ovviamente – un vaglio continuo di meritevolezza in quanto la macchina, oltre a contenere dei *bias* (pregiudizi interni, del tutto ontologici⁶⁰), potrebbe contenere anche degli errori di trasmissione da valori a variabili (*bias dei bias*, ovvero pregiudizi di natura umana indotta, che vanno subito corretti, rettificati)⁶¹.

Qualsiasi sistema intelligente dovrà sempre perseguire uno scopo “eticamente” accettabile⁶² e tutte le variabili algoritmiche, nelle quali vi sia stata già l’“iniezione valoriale”, dovranno avere sempre la capacità di essere interpretate in maniera “eticamente” orientata⁶³.

Tale dimensione, come si vedrà, ha una forte ripercussione sui profili della responsabilità civile della macchina, laddove, non solo il produttore della

⁵⁹ Sulla dinamicità dell’ordinamento giuridico, si veda P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 177 ss.

⁶⁰ Cfr., in merito, D. GIRIBALDI, *Intelligenza artificiale, tutti i pregiudizi (bias) che la rendono pericolosa*, in *Agenda digitale*, 26 febbraio 2019, consultabile *online*.

⁶¹ Su tal punto, si rinvia a R. TREZZA, *Diritto e intelligenza artificiale*, cit., pp. 22-24. Fa, inoltre, ben comprendere il concetto L. SAMBUCCI, *I bias dei modelli algoritmici sono colpa nostra*, in *www.ai4business.it*, 4 febbraio 2021, consultabile *online*, il quale, in completo accordo con lo scrivente, evidenzia che: “Per questo motivo si dovrebbe ripensare la costruzione dei *dataset*, iniziando a farla con la cura che necessitano, introducendo una vera e propria pulizia-*by-design* che consentirà a chi realizza modelli di *machine learning* di avere meno sorprese possibili, sia sul piano etico sia magari anche sul piano degli attacchi *adversarial*. Del resto, anche i decisori politici statunitensi hanno compreso che per aiutare il settore dell’intelligenza artificiale a fare un salto di qualità vi sia bisogno di creare e fornire *dataset* gratuiti e puliti, o comunque il più puliti possibile. Gli USA infatti, con la pioggia di miliardi che faranno piovere sul settore nei prossimi anni, hanno pensato fra le altre cose anche a finanziare la creazione di *dataset* di qualità, disponibili gratuitamente per tutti i ricercatori. La parte in salita sarà convincere chi costruisce modelli a usare solo *dataset* puliti e costruiti con determinati criteri, scartando quelli che già in passato hanno dimostrato di avere numerosi *bias*. Non sarà facile, ma sarà necessario per scongiurare che l’intelligenza artificiale diffonda e amplifichi ulteriormente i pregiudizi della nostra società”.

⁶² La stessa necessità è illustrata da U. RUFFOLO, G. RICCIO, A. F. URICCHIO, *Intelligenza Artificiale tra etica e diritti. Prime riflessioni a seguito del libro bianco dell’Unione europea*, Bari, 2020.

⁶³ Sul punto, si consenta rinviare a R. TREZZA, *“Legal values” and “algorithmic values”: an ethically oriented interpretation of Artificial intelligence*, cit., p. 3 ss.



macchina artificiale potrà essere chiamato a rispondere, ma anche il traduttore dei valori giuridici (giurista) e il programmatore/introietto (informatico)⁶⁴.

5. La macchina, alla stessa stregua di una persona umana, può provocare dei danni⁶⁵, fisici (si pensi al campo dei *robot* sanitari⁶⁶) o psichici (si pensi al caso del *cyber-bullismo*⁶⁷), patrimoniali o non patrimoniali⁶⁸.

Quale, dunque, lo statuto responsabilistico delle macchine intelligenti?

⁶⁴ Su tale aspetto innovativo della triplice categoria soggettiva e relativo profilo di responsabilità, si rinvia a R. TREZZA, *Diritto e intelligenza artificiale*, cit., p. 49 ss.

⁶⁵ In un'ottica comparatistica, si veda C. A. AGURTO GONZALES, *El dano a la persona en la experiencia juridica italiana*, Chile, 2020, p. 33 ss.

⁶⁶ Per una panoramica accorta del fenomeno, si rinvia a A. BIANCARDO, *Problematiche etico giuridiche relative all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario*, in *Jus online*, n. 3/2021, pp. 1-51; E. COLLETTI, *Intelligenza artificiale e attività sanitaria. Profili giuridici dell'utilizzo della robotica in medicina*, in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, XIX, 2021, p. 201 ss. Per una visione più approfondita e generale sulla digitalizzazione dei sistemi sanitari, si veda F. MASCHIO, *Innovazione digitale dei sistemi sanitari, eHealth e questioni di data governance, nell'agenda digitale sanitaria nazionale ed europea*, in *Comp. dir. civ.*, n. 2/2021, p. 559 ss.

⁶⁷ Su tale fenomeno, per un approfondimento, si veda, fra tutti, A. C. NAZZARO, *Cyberbullismo*, in questa rivista, n. 2/2020, p. 465 ss.; A. CONTALDO, D. MULA (a cura di), *Cybersecurity law. Disciplina italiana ed europea della sicurezza cibernetica anche alla luce delle norme tecniche*, Pisa, 2020. Si sottolinea che, in Italia, proprio nel 2021, è nata l'ACN, l'Autorità nazionale per la cybersicurezza, istituita con il D.L. 14 giugno 2021, n. 82, a tutela degli interessi nazionali nel cyberspazio. Garantisce l'implementazione della strategia nazionale di cybersicurezza adottata dal Presidente del Consiglio, promuove un quadro normativo coerente nel settore, ed esercita funzioni ispettive e sanzionatorie. Sviluppa collaborazioni a livello internazionale con agenzie omologhe. Assicura il coordinamento tra i soggetti pubblici e la realizzazione di azioni pubblico-private volte a garantire la sicurezza e la resilienza cibernetica per lo sviluppo digitale del Paese. Sulla natura giuridica di tale agenzia, riconducibile a quella delle Autorità Amministrative indipendenti, si può solo rinviare a R. CHIEPPA, G. P. CIRILLO, *Le autorità amministrative indipendenti*, Padova, 2010; C. GIORDANO, A. NAPOLITANO (a cura di), *Le autorità amministrative indipendenti. L'evoluzione oltre la contraddizione*, Roma, 2019.

⁶⁸ Sul punto, anche e soprattutto in una visione "assicurativa", si rinvia a A. LA TORRE, *I robot fra responsabilità e assicurazione*, in *Rivista Assicurazioni*, n. 3/2019.



Oltre alla Risoluzione del Parlamento europeo del 2017⁶⁹, vi sono state anche quelle dell'ottobre del 2020⁷⁰ e del gennaio 2021⁷¹, le quali, individuando le linee guida in tema di robotica e responsabilità civile dei sistemi intelligenti, hanno cercato di far assurgere a principio fondamentale del sistema quello dell'*accountability* (responsabilizzazione⁷²) allo stesso modo della disciplina

⁶⁹ Sul punto, si veda la nota della Redazione *Ratio Iuris*, *Brevi note sulla risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 concernente le norme di diritto civile sulla robotica*, consultabile *online*, p. 14, ove si legge che: "Nel dinamismo proprio delle sfide cui il diritto è chiamato a cimentarsi, infatti, l'eventuale prospettazione di un nuovo soggetto di diritto, di una "persona elettronica", chiama alle armi i pilastri portanti della scienza civilista - e non solo - del diritto. Occorre, pertanto, prendere coscienza di come gli impulsi europei (che, in effetti, rispecchiano in toto le problematiche concrete di una società in pieno divenire) possano trovare risposta nel nostro sistema giuridico, indipendentemente dallo strumento legislativo che si riterrà opportuno adottare".

⁷⁰ Sul punto, tra tanti, si rinvia a A. CASTAGNEDI, *La grande corsa verso un modello di Intelligenza Artificiale affidabile: il Parlamento Europeo propone un nuovo regime di responsabilità civile*, in *Eurojus*, n. 2/2021, p. 125 ss., ove, sugli assunti assicurativi, si evidenzia che: "Ad oggi già qualche copertura assicurativa è stata introdotta nel mercato, procedendo di pari passo con lo sviluppo della tecnologia, tuttavia la vere difficoltà si insidiano nell'ideare una soluzione che sia applicabile a tutti i sistemi di IA. Secondo il ragionamento illustrato dal Parlamento Europeo, la Commissione dovrebbe lavorare congiuntamente con il mercato assicurativo per stilare un elenco contenente prodotti assicurativi innovativi. Al contrario, qualora il risarcimento del danno sia maggiore rispetto ai massimali prefissati nel Regolamento, l'idea sarebbe quella di incoraggiare gli Stati Membri ad istituire un fondo, per un periodo limitato, da cui poter attingere. Così come la stessa idea potrebbe essere applicata nel caso in cui un sistema di IA, non ancora classificato come sistema di IA ad alto rischio e quindi non ancora assicurato, causi danni o pregiudizi".

⁷¹ Su tale aspetto, si rinvia, per un approfondimento, a S. NOTARO, *La Risoluzione del Parlamento europeo sull'uso dell'intelligenza artificiale*, in *E-lex*, 12 febbraio 2021, consultabile *online*.

⁷² Sul punto, si rinvia a B. BORRILLO, *La tutela della privacy e le nuove tecnologie: il principio di accountability e le sanzioni inflitte dalle Autorità di controllo dell'Unione europea dopo l'entrata in vigore del GDPR*, in *Diritti fondamentali*, n. 2/2020, p. 355, la quale sottolinea, in maniera ampiamente condivisibile, che: "sotto il profilo metodologico, si rinviene una marcatura molto forte dei diritti dell'interessato all'accesso, al blocco, alla rettifica, alla cancellazione dei dati e anche del diritto a riceverli in formato strutturato affinché si possano trasmettere ad altri liberamente. L'informazione, pertanto, è considerata non soltanto in maniera statica quanto e soprattutto come insieme di dati in movimento e, come tali, idonei a tramutarsi, per connessione, in nuove e più sofisticate informazioni. L'innovazione configura il passaggio da una concezione fondata in via esclusiva sul consenso informato a una concezione caratterizzata prevalentemente sul controllo, nella consapevolezza che il consenso non è sufficiente e che anzi è, per certi versi, fuorviante e non idoneo di fatto a garantire il rispetto della persona. Il processo evolutivo, realizzato in questa materia, va di pari passo con l'affermarsi delle tradizioni costituzionali europee, con la prevalenza del riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili della persona umana su altri istituti pur definiti fondamentali, ma non inviolabili: inviolabile in maniera assoluta è esclusivamente il valore della persona umana, il suo sviluppo, la sua dignità".



relativa alla protezione dei dati personali⁷³, facendo così comprendere che la responsabilità debba essere intesa come “oggettiva”, stando anche alla disciplina dettata dalla Direttiva comunitaria sui prodotti difettosi⁷⁴.

Le Risoluzioni citate, inoltre, hanno stabilito che sia necessario prevedere un fondo economico per le persone che siano direttamente danneggiate dai sistemi intelligenti non dotati dell’assicurazione obbligatoria contro i danni. Ancora, vi è la previsione della dotazione, per ciascuna macchina, di un “certificato di conformità etica” che conferma esattamente le ragioni espresse nei paragrafi precedenti: il sistema intelligente quale costruito ontologicamente in senso etico⁷⁵.

⁷³ A tal uopo, si rinvia a J. P. APARICIO VAQUERO, *La protección de datos personales en las redes sociales. Apuntes desde los ordenamientos europeo y español*, in questa rivista, n. 1/2020, p. 209 ss.

⁷⁴ Si rinvia a C. CASTRONOVO, *Problema e sistema del danno da prodotti*, Milano, 1979; R. PARDOLESI, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, p. 487 ss.; A. GORASSINI, *Contributo per un sistema della responsabilità del produttore*, Milano, 1990; G. ALPA, *Responsabilità civile e danno*, Bologna, 1991; G. PONZANELLI, *Responsabilità del produttore*, in *Rivista di diritto civile*, 1995, II, p. 215; G. ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Roma-Bari, 1995; F. CAFAGGI, *La nozione di difetto ed il ruolo dell’informazione. Per l’adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma*, in *Rivista critica di diritto privato*, 1995, II, p. 447; U. CARNEVALI, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1974; C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 1997; A. STOPPA, *Responsabilità del produttore*, voce del Digesto delle discipline privatistiche (sez. civ.), XVII, Torino, 1998, p. 119 ss.; P. G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Torino, 1998; U. CARNEVALI, *Responsabilità del produttore*, voce dell’Enciclopedia del diritto, Agg., II, Milano, 1998, p. 936 ss.; G. ALPA, M. BESSONE, *La responsabilità del produttore*, Milano 1999; A. DE BERARDINIS, *La responsabilità del produttore*, in G. Alpa (a cura di), *I precedenti. La formazione giurisprudenziale del diritto civile*, II, Torino, 2000, p. 1193 ss.; L. MEZZASOMA, *L’importatore all’interno della C.E. di prodotti difettosi fabbricati in altro Stato comunitario*, in *Rassegna della giurisprudenza umbra*, 2001, I, p. 207; G. PONZANELLI, *Responsabilità del produttore*, in *Rivista di diritto civile*, 2000, II, p. 913; S. DELLA BELLA, *Cedimento di scala estensibile e responsabilità del produttore-progettista: la nozione di danneggiato nella disciplina sulla responsabilità del produttore*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2003, I, p. 1153; G. PONZANELLI, *Responsabilità oggettiva del produttore e difetto di informazione*, in *Danno e responsabilità*, 2003, I, p. 1005; G. NICOLINI, *Danni da prodotti agroalimentari difettosi: responsabilità del produttore*, Milano, 2006; P. MARIOTTI, *Prodotti difettosi e obsolescenza programmata*, Santarcangelo di Romagna, 2013; E. GRAZIUSO, *La responsabilità per danno da prodotto difettoso*, Milano, 2015.

⁷⁵ Su tale previsione, più nello specifico, si faccia riferimento a R. TREZZA, *Artificial Intelligence Act*, cit., p. 88 sulla valutazione della c.d. “conformità”, ma ancora p. 75 sulle c.dd. “prove di affidabilità” del sistema intelligente.



Oltre alle dinamiche qualificatorie della responsabilità (si pensi alle ipotesi di applicazione dell'art. 2043, 2050 c.c.)⁷⁶, la proposta a cui qui si perviene è nella tripartizione soggettivo-categoriale che vede nel “traduttore” colui che traduce i valori giuridici, nel “produttore” colui che produce la macchina e nel “programmatore” colui che introduce le variabili algoritmiche. A tal proposito, anche la responsabilità civile sarà diversa a seconda dei soggetti inter-agenti nel

⁷⁶ Sul punto, si rinvia a L. COPPINI, *Robotica e intelligenza artificiale: questioni di responsabilità civile*, in *Politica del diritto*, n. 4/2018, pp. 713-739; S. TOMMASI, *L'Intelligenza Artificiale antropocentrica: limiti e opportunità*, in *Jus civile*, n. 4/2020, p. 886, ove, in maniera del tutto condivisibile, si afferma che: “Occorre, altresì, non perdersi in declamazioni o mere affermazioni o, come spesso avviene a livello europeo, in una fitta mole di documenti ripetitivi e pieni di “media della comunicazione simbolicamente generalizzati”, ossia media che forniscono alla comunicazione la possibilità di venire accettata. Questo per dire che non basta affermare che si deve «assicurare che l'IA sia sviluppata e applicata in un quadro adeguato che promuova l'innovazione e rispetti i valori dell'Unione e i diritti fondamentali, oltre ai principi etici come la responsabilità e la trasparenza». Chi può non essere d'accordo sulla necessità di un'IA sicura, affidabile o rispettosa della dignità? Il punto è andare oltre i generici proponimenti e pensare a come rendere concretamente possibile tutto questo, scongiurando i rischi che intanto si profilano per la vita delle persone, vittime di profilazioni e discriminazioni spesso invisibili e silenziose, e per la dignità degli esseri viventi, appartenenti e non al genere umano”; E. BURGIO, L. DE SIMONE, *Intelligenza Artificiale e responsabilità civile*, in *Media Laws*, 15 aprile 2021, consultabile *online*, per le quali: “Bisogna analizzare in primo luogo quali possano essere le fattispecie ricollegabili alla responsabilità civile per danno da intelligenza artificiale. La dottrina maggioritaria, interpretando norme codicistiche, identifica che questa responsabilità potrebbe produrre esiti soddisfacenti con riferimento alla responsabilità oggettiva (come anche già immaginato nella Risoluzione del Parlamento del 2017), intesa come responsabilità contrapposta a quella per colpa. In questo caso, è sufficiente dimostrare danno e connessione causale tra questo e il funzionamento che lo ha generato ed una complessa valutazione dei rischi e della capacità di controllo da parte “persona che, in determinate circostanze, è in grado di minimizzare i rischi e affrontare l'impatto negativo” (punto 55) dell'intelligenza artificiale”; M. COSTANZA, *L'intelligenza artificiale e gli stilemi della responsabilità civile*, in *Giur. it.*, n. 7/2019, p. 1686 ss.; G. CAPILLI, *Responsabilità e robot*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 3/2019, p. 621 ss.; G. PROIETTI, *Responsabilità nell'Intelligenza Artificiale e nella Robotica*, Milano, 2020; I. MARTONE, *Algoritmi e diritto: appunti in tema di responsabilità civile*, in questa rivista, n. 1/2020, pp. 128-153; M. RATTI, *Riflessioni in materia di responsabilità civile e danno cagionato da dispositivo intelligente alla luce dell'attuale scenario normativo*, in *Contr. impr.*, n. 2/2020, p. 1174; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Intelligenze Artificiali e responsabilità civile*, in *Id*, M. FEOLA, *Diritto delle obbligazioni*, Napoli, 2020, p. 507 ss.; A. FUSARO, *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 1348; F. NADDEO, *Intelligenza artificiale: profili di responsabilità*, in *Comp. dir. civ.*, n. 3/2020, p. 1141; A. LEPORE, *I.A. e responsabilità civile. Robot, autoveicoli e obblighi di protezione*, in questa rivista, n. 1/2021, p. 190 ss.; C. IORIO, *Intelligenza artificiale e responsabilità: spunti ricostruttivi*, in questa rivista, n. 2/2021, p. 51 ss.



proceso artificial. Si auspica, dunque, una costruzione della responsabilità algoritmica “caso per caso”⁷⁷.

Vi potrà essere, infatti, responsabilità del produttore semplicemente per un malfunzionamento della macchina e responsabilità del programmatore per “decisione finale errata”, non conforme ai valori giuridici effettivi, così come sopra descritti.

In merito al regime liberatorio, si può affermare che il produttore potrà provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il malfunzionamento o di non essere a conoscenza dello stesso (magari perché un pezzo della macchina era stato commissionato ad altri). Quest’ultimo caso potrebbe configurarsi come un’ipotesi di responsabilità oggettiva del produttore con possibilità – da parte sua – di esercizio dell’azione di regresso⁷⁸.

Il programmatore, allo stesso modo, potrà provare di aver utilizzato tutta la diligenza necessaria per introiettare i valori giuridici nella macchina, salvo che non sia stato il traduttore (*homo juridicus*) a far introitare variabili algoritmiche riassuntive di valori giuridici errati. Anche questo caso si qualificerebbe quale ipotesi di responsabilità oggettiva con la possibilità di esercizio dell’azione di regresso.

Infine, il traduttore (giurista) potrà provare di aver tradotto i valori giuridici con la massima diligenza dovuta (art. 1176, co. 2, c.c.). In tale ultimo caso, l’ipotesi potrebbe anche essere quella di “responsabilità contrattuale” se il

⁷⁷ Cfr., P. PERLINGIERI, *Fonti del diritto e “ordinamento del caso concreto”*, in *Riv. dir. priv.*, n. 4/2010, p. 7 ss.

⁷⁸ Pare che sia d’accordo, con tale costruzione, anche U. SALANITRO, *Intelligenza artificiale e responsabilità: la strategia della Commissione europea*, in *Rivista di diritto civile*, LXVI, n. 6/2020, specie p. 1276, ove l’A. afferma che: “lo spostamento di focale dal produttore all’operatore, ove approvato, consentirebbe di salvaguardare la struttura della direttiva della responsabilità del produttore, la quale ha dato prova di efficienza, evitando di incidere direttamente sui processi produttivi di sistemi di intelligenza artificiale, i quali potrebbe non sopportare un regime più rigoroso. La distinzione tra attività ad alto rischio e altre attività consentirebbe di adottare un regime flessibile per coloro che utilizzano i dispositivi di intelligenza artificiale, che risulterebbe per tanti versi meno incisivo dell’attuale regola interna della responsabilità per i danni causati da cose in custodia, secondo il modello franco-italiano”.



programmatore abbia stipulato un contratto di prestazione d'opera intellettuale con il traduttore medesimo⁷⁹.

6. Uno degli ambiti nei quali l'Intelligenza Artificiale sta mettendo piede in maniera preponderante è di certo quello processuale.

⁷⁹ R. TREZZA, *Diritto e intelligenza artificiale*, cit., p. 49 ss. Si è cercato di applicare tale teoria anche alla responsabilità derivante dalle auto a guida autonoma. Cfr. R. TREZZA, E. QUARTA, *Driverless car o driverless law: quale direzione prenderà il diritto per evitare "incidenti sistematici"?*, cit. Si consenta rinviare, anche per un quadro comparatistico, a R. TREZZA, *Responsabilidades legales atribuibles a máquinas y algoritmos: ¿categorías tradicionales o género novum de responsabilidad?*, in *Actualidad civil*, n. 76/2020, pp. 155-177.



Due sono i campi delicati di intersezione tra I.A. e processo: il primo è rappresentato dalla decisione robotica (la quale, peraltro, può essere anche utilizzata in campo negoziale)⁸⁰; il secondo, invece, dalla giustizia predittiva⁸¹.

⁸⁰ Sul punto, si veda G. GITTI, *Dall'autonomia regolamentare e autoritativa alla automazione della decisione robotica*, in questa rivista, n. 1/2020, pp. 113-127; N. IRTI, *Il tessitore di Goethe (per la decisione robotica)*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna, 2019, pp. 17-22. Inoltre, sempre nella stessa curatela, si veda il contributo di G. MAMMONE, *Considerazioni introduttive sulla decisione robotica*, pp. 23-30, con ricca bibliografia. Nella medesima curatela, in merito al rapporto intercorrente tra diritto e robotica, si veda, inoltre, A. CARCATERA, *Machinae autonome e decisione robotica*, pp. 33- 61, con bibliografia di carattere comparatistica e internazionale. Si veda, ancora, M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, cit., pp. 63-96. Nella stessa curatela, anche E. VINCENTI, *Il "problema" del giudice-robot*, pp. 111-124; M. MAUGERI, *I robot e la possibile "prognosi" delle decisioni giudiziali*, pp. 159-164; A. DI PORTO, *Avvocato-robot nel "nostro stare-decisis". Verso una consulenza legale "difensiva"*, pp. 239-250; M. R. COVELLI, *Dall'informatizzazione della giustizia alla "decisione robotica"? Il giudice del merito*, pp. 125-138. Sulla decisione robotica, si veda ancora M. B. MAGRO, *Decisione umana e decisione robotica. Un'ipotesi di responsabilità di procreazione robotica*, in *Leg. pen.*, 8 maggio 2020, la quale, in completo accordo con lo scrivente, a p. 21 dello scritto, sottolinea che: "È ben vero che la funzione della tecnologia è quella di realizzare l'obiettivo tecnico. È anche vero che, al di là di quella funzione, dello scopo che è proprio dei progettisti e degli utenti della tecnologia, occorre tenere presente le implicazioni etiche relative al quanto e al come quel sistema tecnologico potrà incidere sulla vita degli agenti umani e all'impatto sul loro sistema di responsabilità. Ritengo perciò che debba essere valorizzata quella tecnologia che costruisce e sviluppa sistemi di IA che contribuiscono all'esercizio della responsabilità umana e dei suoi *standards*. Ciò significa che la ricerca scientifica dovrebbe far propri i principi etici che consentano un utilizzo di agenti artificiali che non espropriano, ma al contrario sollecitano, l'attenzione umana e quindi la responsabilità umana. Ciò non significa intralciare o ostacolare la libertà di ricerca, ma solo che dovremmo astenerci dal creare entità artificiali autonome che sostituiscano totalmente la decisione umana, facendo così a meno delle potenzialità straordinarie della mente umana; significa attivare e predisporre meccanismi che non affievoliscano la capacità di controllo (e autocontrollo) umano a causa del supporto robotico, ma, al contrario, che la sollecitino, la supportino e la potenzino". Si veda, ancora, F. DONATI, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Rivista AIC*, n. 1/2020, specie p. 436, ove si legge: "Sotto questo profilo, la sostituzione del giudice con sistemi automatici di giustizia predittiva non è certamente possibile. Per quanto possa evolvere il progresso tecnologico, rimane fermo il principio secondo cui ogni cittadino ha diritto di rivolgersi ad un giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge, per ottenere tutela dei suoi diritti. Ciò non toglie, tuttavia, che i sistemi di IA possano fornire utili strumenti di cui il giudice potrebbe avvalersi nell'esercizio delle proprie funzioni tra cui, ad esempio, motori di ricerca sempre più avanzati, software di assistenza per la redazione degli atti, sistemi automatizzati volti a migliorare l'organizzazione interna del lavoro, software per facilitare le operazioni di spoglio e di filtro, sistemi per la trattazione di cause semplici, seriali, ripetitive, interamente documentali ecc. I sistemi di IA potrebbero poi essere utilmente impiegati nelle procedure alternative di soluzione delle controversie. Sarebbe un grave errore rinunciare a sfruttare le potenzialità offerte dalla tecnologia informatica e dai nuovi sistemi di IA che, se utilizzati in modo controllato e ponderato, potrebbero favorire un miglioramento complessivo della qualità e dell'efficienza della nostra giustizia"; G. GITTI, *Dall'autonomia regolamentare e autoritativa alla automazione della decisione robotica*, cit., p. 113 ss.

⁸¹ A tal uopo, si veda L. DE RENZIS, *Primi passi nel mondo della giustizia "high tech": la decisione in un corpo a corpo virtuale fra tecnologia e umanità*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*,



Si parta dal presupposto, molto caro a chi scrive, per cui un giudice-persona non potrà mai essere sostituito da un giudice-robot. Ciò per una ragione molto semplice: il giudice-persona ha una propria dignità umana, la quale, come corollario, comprende anche la dignità dell'intelletto, dalla quale discende la dignità del decidere⁸². Non si può pensare di scindere la dignità umana dalla dignità del decidere, in quanto la seconda è completezza e funzione della prima⁸³.

Nessuna previsione normativa – si veda, in tal senso, l'art. 101 Cost. – imprime il carattere artificiale alla giustizia⁸⁴. “Il giudice è sottoposto solo alla

cit., pp. 139-158. Inoltre, si veda F. RUNDO, A. L. DI STALLO, *Giustizia predittiva: algoritmi e deep-learning*, in *Sicurezza e Giustizia*, 2019, pp. 31-34; AA. VV., *La giustizia predittiva tra machine learning e certezza del diritto*, in *VGen*, consultabile online; A. DE LA OLIVA SANTOS, “*Giustizia predittiva*”, *interpretazione matematica delle norme, sentenze robotiche e la vecchia storia del “Justizklavier”*, in *Rivista Trimestrale Diritto e Procedura Civile*, n. 3/2019, pp. 883-895. Si veda, ancora, C. MORELLI, *Sentenze, predittività prudente. Il libero convincimento del giudice è valore primario*, in *Italia oggi*, 5 luglio 2019, p. 5, consultabile online; M. VERSIGLIONI, *Se l'algoritmo scrive la sentenza che almeno rispetti la logica*, in *Il Sole 24 ore*, 2019, consultabile online. Si consenta rinviare, per una visione “panoramica” sulla decisione meccanicizzata, alla Recensione redatta da R. TREZZA al volume di A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, in *Istituzioni Diritto Economia*, n. 2/2020, pp. 328-337.

⁸² Cfr., sul punto, S. GABORIAU, *Libertà e umanità del giudice: due valori fondamentali della giustizia. La giustizia digitale può garantire nel tempo la fedeltà a questi valori?*, in *Questione Giustizia*, n. 4/2018, consultabile online.

⁸³ Sembra contrario a tale impostazione, o forse lo fa solo in chiave provocatoria, A. PUNZI, *Judge in the Machine. E se fossero le macchine a restituirci l'umanità del giudicare?*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, cit., p. 319 ss.

⁸⁴ In accordo, si veda D. ONORI, *Intelligenza artificiale ed emulazione della decisione del giudice*, in www.centrostudilivativo.it, 16 febbraio 2022, consultabile online, ove si evidenzia che: “Per quanto possa evolvere il progresso tecnologico, rimane fermo il principio secondo cui ogni cittadino ha diritto di rivolgersi ad un giudice indipendente e imparziale, preconstituito per legge, per ottenere tutela dei suoi diritti. Ciò non toglie che i sistemi di IA possano fornire utili strumenti di cui il giudice si avvalga tra cui, per esempio, motori di ricerca sempre più avanzati, software di assistenza per la redazione degli atti, sistemi automatizzati volti a migliorare l'organizzazione interna del lavoro, software per facilitare le operazioni di spoglio e di filtro, sistemi per la trattazione di cause semplici, seriali, ripetitive, interamente documentali ecc. I sistemi di IA potrebbero poi essere utilmente impiegati nelle procedure alternative di soluzione delle controversie”. Proprio sulla possibilità di utilizzare i robot nella risoluzione alternativa delle controversie, specie in materie online (ove, comunque, permangono dei dubbi), si rinvia a E. MINERVINI, *Appunti sulle ODR*, in questa rivista, n. 1/2020, p. 154 ss.; M. GAMBINI, *ODR di tipo conciliativo quale “giusto rimedio” nel commercio elettronico*, in questa rivista, n. 1/2021, p. 83 ss. Si veda, in tema, ancora S. ARDUINI, *La “scatola nera” della decisione giudiziaria: tra giudizio umano e giudizio algoritmico*, in *Rivista di biodiritto*, n. 2/2021, specie p. 470, ove, forse con estrema enfasi, l'A. afferma che: “La nuova tappa che si profila nel rapporto tra uomo e macchina appare dunque segnata dalla complementarità e il processo, non più solo teatro della giustizia umana, assurge a banco di prova per questa nuova collaborazione. Si tratta allora di demarcare le rispettive sfere di



legge”. Ma quale giudice? La Costituzione di certo non avrebbe mai pensato ad un giudice-robot, il quale avrebbe soltanto una dignità intellettuale, rappresentata dall’insieme di dati percepiti ed introitati, ma non quella umana che lo distingue dalla persona umana stessa. L’uomo, va ricordato, non è solo *res cogitans*, ma anche *res extensa*⁸⁵. La macchina conosce il valore della “empatia umana”? Evidentemente, l’unica variabile “amorfa” della macchina è il non saper essere in relazione con la persona umana nella sua globalità. È dotata, dunque, di una c.d. “disaffezione” algoritmica⁸⁶.

È necessario che il giudice non venga sostituito dall’algoritmo, ma che l’algoritmo possa essere di aiuto al giudice. Inoltre, l’algoritmo può essere utilizzato dal giudice soltanto in alcune fasi procedurali o processuali⁸⁷, ma sarebbe impossibile utilizzarlo nella fase decisoria. Oppure, ancora, per “captare” preventivamente delle situazioni di conflitto di interesse, specie nelle Pubbliche Amministrazioni⁸⁸, per evitare (e, dunque, alleggerire il carico giudiziario) le fasi

competenza, compito questo non facile che ad oggi rappresenta una grande sfida per il diritto, chiamato a edificare un quadro normativo che coniughi l’enorme potenziale delle nuove tecnologie con la tutela e la valorizzazione dell’essere umano. Di qui l’importanza di affiancare alla cornice giuridica una solida base etica, come del resto dimostra lo sforzo di elaborazione a livello europeo e sovranazionale volto a fornire le linee guida per un utilizzo etico dell’intelligenza artificiale. Quelli intrapresi sono solo i primi passi verso una nuova configurazione dell’intelligenza artificiale, per trasformarla da «macchina che inquieta» a macchina che sostiene, corregge e – perché no – esalta l’umanità”. Prime applicazioni della “giustizia predittiva” o dell’ausilio della tecnica per snellire i processi, viene dalla nascita dell’Ufficio del Processo. In tal senso, si veda D. ONORI, *I.A. e giustizia: l’esperimento della Corte di Appello di Brescia*, in *www.opinione.it*, 4 marzo 2022, consultabile *online*.

⁸⁵ Sul punto, per un approfondimento del dualismo cartesiano, si rinvia a S. NICOLISI, *Il dualismo da Cartesio a Leibniz, recensito da G. B. Priano*, in *Rivista di filosofia neo-scolastica*, n. 4/1987, pp. 628-630.

⁸⁶ Le macchine, in definitiva, rispetto all’uomo globalmente inteso, sono pressoché “incoscienti”. Sul punto, si legga la recente opera di M. CHIRIATTI, *Incoscienza artificiale: Come fanno le macchine a prevedere per noi*, Roma, 2021.

⁸⁷ Per esempio nella fase delle investigazioni, delle c.d. “indagini preliminari”. Oppure, nella fase di accertamento della commissione di reati presupposto, come accade nella responsabilità amministrativa degli enti da reato. Sul punto, si consenta rinviare a R. TREZZA, *L’Intelligenza Artificiale come ausilio alla standardizzazione del modello 231: vantaggi “possibili” e rischi “celati”*, in *Giurisprudenza penale web*, n. 1bis/2021, pp. 1-12.

⁸⁸ Sulla necessità di una nuova rivalutazione della dicotomia pubblico-privato, si veda S. SICA, *Pubblico e privato al tempo della trasformazione digitale*, in questa rivista, n. 2/2021, specie p. 101, ove si sottolinea che: “In definitiva, Pubblico e Privato devono trovare una nuova sintesi ora



di accertamento e di repressione (ove, necessariamente, l'uomo-giudice sarà chiamato a svolgere le proprie funzioni).

Il giudice-robot saprebbe decidere sulla base dei principi fondamentali del sistema ordinamentale? L'introduzione "guidata" dall'uomo potrebbe far pensare di sì. Ma i rischi, come quelli legati alla discriminazione decisoria⁸⁹, sono sempre in agguato⁹⁰.

che sono immersi nella stagione magmatica della Rete, ed anzi occorre prevenire che la rinnovata saldatura tra le due sfere abbia luoghi in contesti e modi, a dir poco, allarmanti".

⁸⁹ Si veda, sul punto, S. VANTIN, *Intelligenza artificiale: il faro Ue su tutela delle vulnerabilità e principi antidiscriminazione*, in *Agenda digitale*, 24 novembre 2021, consultabile *online*, ove si legge che: "Per rendere autenticamente effettiva la tutela antidiscriminatoria applicata all'intelligenza artificiale, scegliendo al contempo di mettere effettivamente in cima alle priorità politiche quei valori europei che vengono reclamati come centrali nel paradigma giuridico del continente, sarebbe opportuno prevedere specifici strumenti risarcitori a danno di chi dimostri di aver subito una discriminazione algoritmica significativa a causa dell'appartenenza a cluster di persone generati dal sistema o a gruppi storicamente oppressi. Potrebbe essere questa l'occasione per ripensare l'accesso al giudizio antidiscriminatorio, per esempio prendendo spunto dall'istituto dell'azione di classe (o *class action*) disciplinato all'art. 140bis del nostro Codice di Consumo (d.lgs. 206/2005)".

⁹⁰ Si veda M. CATERINI, *Il giudice penale robot*, in *La legislazione penale*, 19 dicembre 2020, consultabile *online*, ove, specie a p. 21, si legge che: "Ciò, naturalmente, non dovrebbe comportare l'esclusione del giudice dal processo decisorio, ma un suo affiancamento, una sorta di techno-umanesimo, una contaminazione tra *humanitas* e *techne* propria di un diritto penale definitivo «sinestetico», utile sia per ridurre i tempi di risposta dell'autorità giudiziaria, sia per la maggiore prevedibilità nell'applicazione della legge e uniformità degli orientamenti giurisprudenziali. Infatti, per raggiungere tali obiettivi anche l'*European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems*, come idea di fondo non ha quella di sostituzione del giudice, ma di un ruolo ausiliario dell'IA. Tale ausilio, nel caso che ci occupa, consisterebbe nell'indicare al giudice l'argomentazione più favorevole all'imputato ricavata dalla molteplicità dei precedenti giurisprudenziali. Tale opzione, utilizzando il linguaggio informatico, dovrebbe essere una specie di default option. Qualora il giudice, per sgravarsi un po' di quella «fatica del pensare», ritenesse di aderire a tale suggerimento cibernetico, l'onere di motivazione sarebbe semplificato, potendo appunto far riferimento all'elaborazione algoritmica dei precedenti giurisprudenziali. Qualora, viceversa, il giudice volesse optare per una scelta ermeneutica più sfavorevole rispetto a quella suggerita dal robot, allora l'onere motivazionale dovrebbe essere aggravato e di quel genere prima definito confutativo. Una certezza giuridica non in senso materiale, ma procedurale nell'ottica di quella razionalità discorsiva capace di contrapporsi al dominio della tecnologia". Si dia uno sguardo anche a A. A. MARTINO, *Chi teme i giudici robot*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 2/2020, specie p. 23, ove si evidenzia, in una visione chiaramente funzional-etica, che: "L'etica digitale deve informare le strategie per lo sviluppo e l'uso delle tecnologie digitali fin dall'inizio, deve indicare quando cambiare il corso delle azioni è più semplice e meno costoso, mescolando risorse e impatto. Deve essere portata al tavolo della politica e delle procedure decisionali fin dal primo giorno. Per-ché non solo dobbiamo pensare due volte, ma, cosa ancora più importante, dobbiamo pensare prima"; U. RUFFOLO, *Giustizia predittiva e machina sapiens quale "ausiliario" del giudice umano*, in *Astrid*, 3 maggio 2021, consultabile *online*, p. 30, ove, in accordo con l'opinione di chi scrive, si sottolinea che: "È l'ibrido umano-macchina il solo ormai



7. Alcuni esempi, in ambito processuale, anche a livello comparatistico, possono far comprendere meglio e far pervenire ad una risposta complessiva al quesito con cui si è concluso il paragrafo precedente.

Si faccia riferimento al caso *Compas*⁹¹. Un algoritmo, nel Wisconsin, ha deciso che una persona “nera” fosse più propensa alla recidiva rispetto ad una persona “bianca”. Il motivo per cui lo ha deciso? Evidentemente perché la macchina algoritmica non sapeva *ex ante* (*ethics by design*) quale fosse il valore giuridico di riferimento sul quale intraprendere l’azione decisoria (principio di uguaglianza) e ha mostrato un pregiudizio interno che, come detto a più riprese, va necessariamente rettificato con una corretta trasmissione ed iniezione di valori giuridici⁹².

Si faccia ancora riferimento al caso noto dell’assegnazione delle cattedre scolastiche in Italia. Una sentenza, ormai conosciuta da tutti, del Consiglio di Stato italiano⁹³, nel rendere ammissibile nel nostro ordinamento l’istituto dell’atto

capace di governare molte professioni del futuro, e quelle legali in particolare. Il giudice di domani – ma potrebbe (dovrebbe) già esserlo quello di oggi – dovrebbe essere coadiuvato dalla macchina signoreggiandola, ma subendone anche il controllo. Ripetendo quanto dice A. Punzi, «bisogna pensare a una contaminazione tra l’uomo e la macchina nella quale le prestazioni cognitive dell’uomo vengono potenziate e al contempo sorvegliate dalla capacità della macchina».

⁹¹ Si veda S. CARRER, *Se l’amicus curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin*, in *Giurisprudenza penale web*, 24 aprile 2019, consultabile online; B. OCCHIUZZI, *Algoritmi predittivi: alcune premesse metodologiche*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 2/2019, p. 391 ss.

⁹² Sul punto, con illustrazione più ampia del fenomeno, si rinvia a R. TREZZA, *Diritto e intelligenza artificiale*, cit., p. 17.

⁹³ Anche sul punto, si rinvia a R. TREZZA, *Diritto e intelligenza artificiale*, cit., p. 81 ss. Inoltre, si rinvia a M. SABATINO, *Consiglio di Stato: l’algoritmo è un atto amministrativo informatico*, su *La Pagina Giuridica*, 7 agosto 2019; AA. VV., *Atti e procedimenti amministrativi informatici: promossa la P.A. Robot, se l’algoritmo è conoscibile*, in *Giuridiana.it (Rivista di diritto amministrativo)*, 29 aprile 2019, consultabile online; C. MORELLI, *Consiglio di Stato apre alla PA robot*, in *www.altalex.it*, 20 gennaio 2019, consultabile online; M. DE ANGELIS, *Algoritmi nei concorsi pubblici: il caso dei docenti che fa “scuola”*, in *Ius in itinere*, 5 ottobre 2019, consultabile online. Si veda, inoltre, G. PESCE, *Il giudice amministrativo e la decisione robotizzata. Quando l’algoritmo è opaco*, in *Judicium*, 15 giugno 2020, consultabile online, per il quale, se da un lato il Consiglio di Stato ribadisce la natura servente dell’algoritmo per la p.a. (secondo il canone “la macchina per l’uomo, non viceversa”), dall’altro lato, pone le premesse per un esplicito superamento anche dei limiti di utilizzo dell’algoritmo e della stessa Intelligenza Artificiale nei diversi ambiti dell’attività



“amministrativo informatico⁹⁴”, ha statuito nel senso che una decisione simile (assegnazione delle cattedre senza tener magari conto delle condizioni effettive e contingenti degli insegnanti) debba essere prevedibile e conoscibile, oltre che trasparente (art. 97 cost.)⁹⁵.

amministrativa. Si veda, inoltre, F. CALISAI, *Dati, informazioni e conoscenze: inquadramento giuridico e regolazione. Appunti su un potenziale paradigma appropriativo*, in questa rivista, n. 1/2020, pp. 13-45; A. DI MARTINO, *Intelligenza artificiale e decisione amministrativa automatizzata*, in questa rivista, n. 1/2020, pp. 83-112; V. CONTE, *Decisioni pubbliche algoritmiche e garanzie costituzionali nella giurisprudenza del Conseil constitutionnel francese*, in questa rivista, n. 1/2020, pp. 347-362. Si veda, ancora, C. NAPOLI, *Algoritmi, intelligenza artificiale e formazione della volontà pubblica: la decisione amministrativa e quella giudiziaria*, in *Rivista AIC*, n. 3/2020, pp. 1-37; D. DALFINO, *Decisione amministrativa robotica ed effetto performativo. Un beffardo algoritmo per una “buona scuola”*, in *Questione Giustizia*, 13 gennaio 2020, consultabile online, ove si legge che: “Da quanto innanzi sinteticamente osservato sembra potersi trarre la seguente – banale e allo stesso fondamentale – conclusione: se l’uomo non può fare a meno dell’algoritmo, questo non può fare a meno dell’uomo. Ciò vale sia, ovviamente, a monte, nella fase di individuazione dei criteri e dei dati da immettere per l’elaborazione del software; sia a valle, nella fase di controllo; sia nel mezzo, nella fase dell’istruttoria procedimentale. A ben vedere, si tratta di un’esigenza vitale per la tenuta del sistema, perché consente di individuare i soggetti (evidentemente diversi dal robot) cui imputare responsabilità. E soprattutto perché permette di evitare il prodursi del cd. effetto performativo, in virtù del quale la decisione coincide con l’algoritmo, che da mero presupposto tecnico assurge ad elemento fondante ed esclusivo”. Tali considerazioni fanno palesemente percepire quanto sia necessaria una valutazione di meritevolezza algoritmica anche nel campo della giustizia amministrativa. Di recente, si rinvia a L. AZZENA, *L’algoritmo nella formazione della decisione amministrativa: l’esperienza italiana*, in *Revista Brasileira De Estudos Políticos*, n. 123/2021, pp. 503-538; G. MARCHIANÒ, *La legalità algoritmica nella giurisprudenza amministrativa*, in *Il diritto dell’economia*, n. 3/2020, specie p. 257, ove si legge che: “Da qui l’osservazione che pur volendo promuovere la digitalizzazione dei servizi e delle procedure, le novità derivanti dall’uso dei sistemi meccanografici devono “piegarsi” al paradigma del procedimento amministrativo, il che porta ad escludere quegli algoritmi non legati ad atti amministrativi vincolati nonché altri sistemi meccanografici. Si può ipotizzare di trovarsi di fronte al fatidico “cavallo di Troia” per operare una più radicale apertura, non solo dei sistemi meccanografici, ma anche dell’intelligenza artificiale nell’ambito della nostra amministrazione”.

⁹⁴ Sul punto, si rinvia a F. PATRONI GRIFFI, *La decisione robotica e il giudice amministrativo*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, cit., p. 165 ss.

⁹⁵ Sul punto, si rinvia a P. OTRANTO, *Riflessioni in tema di decisione amministrativa, intelligenza artificiale e legalità*, in *Federalismi*, n. 7/2021, specie p. 2014, laddove l’A. evidenzia che: “L’intelligenza artificiale (con la sua “scatola nera”) è già entrata silenziosamente nella “casa di vetro” dell’Amministrazione, senza bussare, senza chiedere autorizzazioni. Nel percorso verso l’impiego dei sistemi di AI da parte dell’Amministrazione occorre superare prospettive di radicale ed inconciliabile contrapposizione tra uomo e macchina, avvalendosi, però, della garanzia della legalità amministrativa che costituisca il riferimento verso un progresso che sia non solo tecnologico, ma anche di tutela dei diritti e delle libertà individuali”; G. DELLE CAVE, *Intelligenza Artificiale e Pubbliche Amministrazioni: l’algoritmo matematico al cospetto dei principi generali dell’attività e del procedimento amministrativo*, in www.intelligenzartificiale.unisal.it, 22 agosto 2020, consultabile online, ove l’A. sottolinea che: “Si consideri, poi, che la “caratterizzazione multidisciplinare” dell’algoritmo (costruzione che certo non richiede solo



La pronuncia, dunque, ha anticipato il concetto di prevedibilità *ex ante* e conoscibilità *ex post* della decisione (non solo in tal settore⁹⁶), mettendo in luce che all’algoritmo possano sì essere affidate delle decisioni, ma queste debbano sempre superare il controllo di meritevolezza da parte di un giudice-uomo⁹⁷.

competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la “formula tecnica”, che di fatto rappresenta l’algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella “regola giuridica” ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice. Del resto, come ben evidenziato da C. Giustozzi, la legge (*rectius* la regola giuridica), così come una ricetta di cucina, non è un algoritmo: ossia una sequenza formale di istruzioni non ambigue e prive di arbitrio che, applicate a situazioni identiche, conducono inevitabilmente ai medesimi risultati”; V. S. AMBROSIO, *Intelligenza artificiale, algoritmi e principi costituzionali nella giurisprudenza del Consiglio di Stato*, in *Gazzetta forense*, 20 maggio 2019, consultabile *online*; F. F. PAGANO, *Pubblica Amministrazione e innovazione tecnologica*, in *Gruppo di Pisa*, n. 3/2021, specie p. 112, ove si legge che: “Si tratta di un silenzio che induce comunque ad immaginare che sia in atto una riflessione sul punto ma, forse è anche un indice dell’acquisita consapevolezza da parte del Governo della difficoltà di applicare l’IA all’esercizio dei poteri amministrativi, anche alla luce di una giurisprudenza amministrativa che, nonostante qualche segnale di apertura e il delicato equilibrio raggiunto, come si è visto, rimane alquanto “scettica” in ordine alla possibilità di conciliare intelligenza artificiale e garanzie nei confronti dell’esercizio del pubblico potere”; A. DI MARTINO, *Intelligenza artificiale e decisione amministrativa automatizzata*, in questa rivista, n. 1/2020, p. 83 ss.; D. U. GALLETTA, *L’azione amministrativa e il suo sindacato: brevi riflessioni, in un’epoca di algoritmi e crisi*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2021, consultabile *online*; G. PINOTTI, *Amministrazione digitale algoritmica e garanzie procedurali*, in *Labour & Law Issues*, n. 1/2021, p. 79 ss.

⁹⁶ Si pensi, ad esempio, al settore bancario. Sul punto, si rinvia a A. DAVOLA, *Algoritmi decisionali e trasparenza bancaria. Il paradigma dell’inerenza nella regolamentazione delle tecnologie emergenti*, Milano, 2020, con recensione di G. CAZZETTA, in questa rivista, n. 2/2020, p. 621 ss.

⁹⁷ Sul concetto di conoscibilità, si è pronunciata anche la Cassazione civile, con sentenza n. 14381 del 25 maggio 2021, in *Media Laws*, 16 giugno 2021, con nota di F. PAOLUCCI, *Consenso, intelligenza artificiale e privacy*. Per la Cassazione, infatti, “In tema di trattamento di dati personali, il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato; ne segue che nel caso di una piattaforma *web* (con annesso archivio informatico) preordinata all’elaborazione di profili reputazionali di singole persone fisiche o giuridiche, incentrata su un sistema di calcolo con alla base un algoritmo finalizzato a stabilire i punteggi di affidabilità, il requisito di consapevolezza non può considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo dell’algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati”. Su tale pronuncia, inoltre, si rinvia a M. BASSINI, O. POLLICINO, *La Cassazione sul “consenso algoritmico”. Ancora un tassello nella costruzione di uno statuto giuridico composito*, in *Giustizia insieme*, 21 giugno 2021, consultabile *online*, ove si legge che: “La presa di posizione del Supremo Collegio, così, oltre a confermare la bontà dell’impianto del GDPR, pur pensato in un’epoca antecedente l’esplosione dei moderni sistemi di intelligenza artificiale e di tecnologie altrettanto innovative come la *blockchain*, aggiunge un tassello ulteriore a quello “statuto dell’algoritmo” cui si accennava poc’anzi: un prodotto perlopiù giurisprudenziale che evidenzia l’esigenza di mantenere ferma una serie di presidi essenziali a garanzia della fundamentalità del diritto alla protezione dei dati e della centralità dell’individuo nella società algoritmica. Una missione importante, in un’epoca storica in cui, complici forse le difficoltà ingenerate dalla pandemia, non sono mancati scivoloni e cadute di stile anche da parte di importanti esponenti con un passato istituzionale sull’importanza della *privacy* e degli attori che



Un altro caso può essere quello dal quale è generata la pronuncia del Tribunale di Bologna, precisamente del 31 dicembre 2020, ove una piattaforma algoritmica ha scelto di privilegiare dei lavoratori – nel caso di specie dei *riders*

agiscono a sua tutela”; J. PURIFICATI, *La Corte di Cassazione sulla trasparenza degli algoritmi e la validità del consenso*, in *E-lex*, 7 giugno 2021, consultabile *online*; V. TIANI, *Una sentenza afferma che le persone devono conoscere come funzionano gli algoritmi che le giudicano. La Cassazione ha stabilito che formule di rating automatizzato devono essere spiegate agli interessati per ottenere un consenso pieno e informato*, in *www.wired.it*, 31 maggio 2021, consultabile *online*; G. SCORZA, *“L’algoritmo deve essere trasparente”, la Cassazione rilancia il GDPR*, in *Agenda digitale*, 26 maggio 2021, consultabile *online*; G. LO SAPIO, *Rating reputazionale, consenso valido e comprensione dell’algoritmo alle prese con l’era digitale*, in *Federalismi*, 28 luglio 2021, specie p. 13, ove si legge che: “(...) le Istituzioni europee si sono orientate per l’elaborazione di una normativa *ad hoc* nella quale si rimodella, con specifico riguardo ai sistemi “ad alto rischio”, il discusso diritto alla spiegazione, spostato ora, non sulla “logica di funzionamento” dell’algoritmo, ma sul risultato finale dell’elaborazione, affermandosi un più generale diritto alla “interpretabilità” della decisione automatizzata nella quale confluiscono i dati di partenza”; D. LAFRATTA, *La dignità della persona nell’era dell’intelligenza artificiale*, in *Equal – Il diritto antidiscriminatorio*, 25 febbraio 2022, consultabile *online*, ove si evidenzia che: “la sentenza in commento risulta carente di valutazione di ulteriori profili che invece erano stati ben delineato dal Garante *Privacy*. I Giudici di legittimità hanno infatti omesso di valutare le ricadute sul profilo etico della persona e su come tale trattamento di dati genera violazioni della dignità della persona. Meglio dire, è sufficiente che il consenso sia “validamente prestato” secondo canoni squisitamente ed esclusivamente tecnico giuridici? La risposta è, a parere di chi scrive, negativa. Dietro le “macchine” vi sono menti umane che a tali sistemi informatizzati trasmettono la loro impronta. Ciò comporta che ove vi è un pregiudizio, magari su base etnica o di genere ovvero di tipo religioso o quant’altro, questo finirà con l’essere trasmesso all’algoritmo che, consequenzialmente, attribuirà un basso punteggio ad una persona sulla base di una caratteristica personale. Ecco quindi che appare superficiale limitare la liceità del trattamento nei termini sopra visti ma occorre che il legislatore, europeo e nazionale, intervenga a colmare tale lacuna individuando criteri di validazione di siffatti sistemi informatici e che tali criteri possano indefettibilmente assicurare la tutela della persona ovvero la parità di trattamento di ogni individuo in ogni ambito nel quale esso esprime la propria individualità”. Sul diritto di informazione algoritmica, si legga G. SCORZA, *Governare il futuro. Il diritto a capire come funziona l’algoritmo prima di dire di sì*, su *Huffpost*, 27 maggio 2021, consultabile *online*, il quale, in maniera del tutto condivisibile, si esprime in tal senso: “Non c’è, non può esservi e non potrà esserci domani consenso al trattamento di dati personali attraverso un sistema di intelligenza artificiale se alla persona alla quale i dati si riferiscono e il consenso viene richiesto non sarà stato prima spiegato chiaramente come quel sistema li processerà per arrivare alle sue conclusioni. Un principio che, se applicato rigorosamente, forse, metterebbe fuori legge molti dei trattamenti di dati personali realizzati già oggi attraverso sistemi diversamente intelligenti”; A. VIGLIANISI FERRARO, *Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale ed i potenziali rischi per il diritto alla privacy*, in *Persona e Mercato*, n. 2/2021, p. 393 ss. Su una nuova visione del bilanciamento dei diritti, specie nel diritto civile, si veda M. CICORIA, *L’io, l’altro e il bilanciamento degli interessi nella artificial intelligence*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, n. 2/2020, p. 303 ss. Si rinvia, ancora, all’illuminante riflessione di P. PERLINGIERI, *Sul trattamento algoritmico dei dati*, in questa rivista, n. 1/2020, p. 181 ss. Per uno studio più approfondito, invece, della “reputazione”, si rinvia a A. RICCI, *La reputazione: dal concetto alle declinazioni*, Torino, 2018, con recensione di M. D’AMBROSIO, in questa rivista, n. 1/2020, p. 372 ss.



della compagnia Deliveroo – anziché altri, senza prendere in considerazione le esigenze e le problematiche degli stessi.

L'algoritmo, infatti, sulla base di alcuni giorni di assenza, aveva previsto una turnazione lavorativa più efficace, ma non ha mai preso in esame le motivazioni – anche gravi perché magari afferenti allo stato di salute del lavoratore – delle assenze. Tale piattaforma è stata, perciò, ritenuta “discriminatoria” dal giudice di merito⁹⁸. È questo un ulteriore caso di “disaffezione” della macchina a fronte di una “affezione” umana, elemento connaturale alla dignità del decidere⁹⁹.

⁹⁸ Sull'applicazione degli algoritmi nel mondo del lavoro e sulle prime riflessioni in tema, da un punto di vista squisitamente giuridico, si rinvia a I. PICCININI, M. ISCERI, *IA e datori di lavoro: verso una e-leadership?*, in *Lavoro Diritti Europa*, 1° maggio 2021, consultabile *online*; R. FABOZZI, S. BINI, *Algoritmi, piattaforme digitali e diritto del lavoro*, in *Analisi giuridica dell'economia*, n. 1/2019, pp. 357-372; ID., *L'algoritmo come nuovo datore di lavoro: impatti e prospettive*, 14 maggio 2018, in *Agenda digitale*, consultabile *online*; C. DELLA GIUSTINA, *Quando il datore di lavoro diviene un algoritmo: la trasformazione del potere del datore di lavoro in algocrazia. Quale spazio per l'applicazione dei principi costituzionali?*, in *Media Laws*, n. 2/2021, p. 237, ove si evidenzia che: “Le protezioni speciali dei lavoratori delle piattaforme oltre a comprendere le tutele già previste dalla normativa in materia di prestazioni occasionali accessorie dovrebbe altresì possedere una disciplina speciale concernente, ad esempio, la fissazione di un massimo margine di guadagno della piattaforma sulla prestazione resa dal lavoratore, un sistema di trasparenza per quanto attiene al sistema di valutazione della prestazione al quale aggiungere il diritto al contraddittorio del lavoratore che avesse ricevuto una valutazione negativa, il diritto alla disconnessione, nonché specifiche garanzie di procedimento da seguire nell'ipotesi di esclusione del lavoratore della piattaforma”.

⁹⁹ Sul punto, REDAZIONE DI DIRITTO DI INTERNET, *Tanto tuonò che piovve. Prima pronuncia sull'algoritmo (detto Frank) in tema di discriminazione collettiva dei lavoratori*, 5 gennaio 2021, consultabile *online*; G. FAVA, *L'ordinanza del Tribunale di Bologna in merito alla possibile discriminatorietà dell'algoritmo utilizzato da Deliveroo*, in *Lavoro Diritti Europa*, 14 gennaio 2021, consultabile *online*, per il quale: “Le perplessità sollevate dalla pronuncia del Tribunale di Bologna, qualora si analizzi attentamente l'iter logico-giuridico seguito dal giudice evitando di soffermarsi unicamente sulle conclusioni ivi rassegnate, sono molteplici: senza dubbio, gli ormai superati meccanismi censurati posti in essere dalla piattaforma così come la carenza di situazioni di oggettiva e reale discriminazione conseguenti all'adozione di tali meccanismi, tanto che il giudice bolognese si limita a condannare il potenziale effetto discriminatorio dell'algoritmo, finiscono per sollevare alcuni leciti interrogativi sull'effettiva portata storica di una pronuncia di tale genere. Peraltro, come visto, la vicenda dalla quale trae origine la pronuncia è antecedente all'entrata in vigore del nuovo CCNL Rider sottoscritto da Assodelivery e UGL, il quale reca disposizioni specifiche in materia in senso senza dubbio più garantista per i ciclofattorini”; M. FASCIAGLIONE, *Gig economy e diritti fondamentali sul lavoro in una recente sentenza del Tribunale di Bologna*, in *Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo*, 9 febbraio 2021, consultabile *online*, ove si evidenzia che: “È proprio l'indifferenza, la presunta neutralità con cui opera l'algoritmo, l'oggetto delle censure del Tribunale di Bologna. L'algoritmo infatti produce come effetto di riservare il medesimo trattamento a situazioni diverse (equiparando chi non partecipa per futili motivi alla sessione di lavoro con coloro che esercitano il proprio diritto di astensione collettiva), ed origina una discriminazione indiretta (in quanto, dando attuazione ad una disposizione



L'algoritmo non può essere "caporale"¹⁰⁰. Non si può pensare ad una sostituzione della persona umana datore-lavoratore¹⁰¹.

Ulteriore caso è quello relativo alla testimonianza elettronica. In Florida, per un caso di femminicidio, si è discusso se Alexa (voce artificiale di Amazon) potesse essere ammessa come testimone nel processo, in quanto, in qualità di "captatore domotico"¹⁰², avrebbe potuto apprendere e registrare quanto accaduto¹⁰³. Di una portata simile della testimonianza non si è ancora discusso nel nostro ordinamento. Si può solo dire che non ci sono norme del nostro sistema processuale che inducano a pensare che possa esserci un'ulteriore tipologia di testimone oltre a quello umano. Dal punto di vista, però, della veridicità – paragonabile un po' a quella umana, specie alla luce del principio del

apparentemente neutra, si pone una determinata categoria di persone in una posizione di potenziale svantaggio). Secondo i giudici, inoltre, una chiara volontà della società convenuta di discriminazione è desumibile anche dal fatto che le uniche ipotesi ammesse di giustificazione della mancata partecipazione alla sessione di lavoro sono rappresentate solo dai casi di sinistro (su turni consecutivi che impediscono la prosecuzione dell'attività lavorativa) oppure dai casi in cui vi sia stato un problema tecnico della piattaforma. Unicamente in queste ipotesi è previsto l'intervento correttivo sul programma che elabora le statistiche dei *riders*, e la conservazione del *ranking* reputazionale".

¹⁰⁰ Cfr. F. M. R. LIVELLI, *Algoritmi "caporali" e diritti dei lavoratori, urge una regolamentazione: i temi sul tavolo*, in *Agenda digitale*, 27 luglio 2021, consultabile *online*, ove si afferma che: "Pertanto, è ora di comprendere che non possiamo regolare la *gig economy* contemporanea come se fosse un fenomeno eccezionale, dal momento che la velocità del cambiamento renderebbe presto obsoleto questo sforzo. Si tratta di riscrivere i diritti dei lavoratori in modo tale da poter affrontare le sfide contingenti e future".

¹⁰¹ Cfr. A. ALOISI, V. DE STEFANO, *Il tuo capo è un algoritmo. Contro il lavoro disumano*, Roma-Bari, 2020.

¹⁰² Sulla domotica, si rinvia al recentissimo volume di L. VIZZONI, *Domotica e diritto. Problemi giuridici della smart home tra tutele e responsabilità*, Milano, 2021. Della stessa autrice, avendo tale tema risolto anche sul trattamento dei dati personali, *Domotica e trattamento dei dati personali*, in *Diritto di internet*, 4 dicembre 2019, consultabile *online*.

¹⁰³ Sul punto, si rinvia a S. ATERNO, *Alexa testimone in tribunale: i vantaggi per gli investigatori e le garanzie per la difesa*, in *Agenda digitale*, 20 marzo 2020, consultabile *online*, ove si legge, in chiave certamente critica, che: "Occorre prestare attenzione a non estendere troppo questa teoria e questo orientamento dei rilievi tecnici oltre i suoi limiti di stretta interpretazione normativa. La tecnologia dei prossimi anni, l'AI, l'IOT, il 5G può moltiplicare le tracce presenti sulla scena di un crimine e ogni tecnologia in futuro potrà essere "sentita come testimone" ma la cosa più importante è non farsi prendere troppo dalla smania di trovare la pistola fumante a tutti i costi anche "stressando" le norme sulle garanzie difensive solo perché in presenza dell'occhio vigile dell'autorità giudiziaria o di un suo decreto autorizzativo o di una delega".



*nemo tenetur se detegere*¹⁰⁴ – potrebbe essere migliore, anche sotto l'aspetto della cronometria testimoniale (genuinità), del testimone persona che, a distanza di anni – salvo l'eventualità di un incidente probatorio – potrebbe dimenticare elementi, fatti, circostanze utili per il processo¹⁰⁵.

Un esempio ulteriore di finalizzazione etica dell'algoritmo e di funzionalizzazione meritevole dello stesso è il suo utilizzo per ragioni di tutela della persona. Si veda, da ultimo, il caso Facebook. Tale *social network*¹⁰⁶ ha deciso di sviluppare un algoritmo capace di captare *fake news*¹⁰⁷ – magari lesive della sensibilità della persona o capaci di cagionare danni alla medesima¹⁰⁸ – o di captare, segnalare e, infine, cancellare video o scritti offensivi (incitamento

¹⁰⁴ In tema, si rinvia a M. MANTOVANI, *Profili attuali del nemo tenetur se detegere in senso sostanziale*, in *Discrimen*, 14 ottobre 2021, pp. 1-7, consultabile *online*; A. MANGIARACINA, *Nuove fisionomie del diritto al silenzio. Un'occasione per riflettere sui vuoti domestici ... e non solo*, in *Processo penale e giustizia*, n. 4/2021, consultabile *online*; V. MANES, *L'oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia*, in *Discrimen*, 15 maggio 2020, consultabile *online*.

¹⁰⁵ Considerazioni simili vengono sviluppate da G. DALIA, *Prospettive di utilizzo dell'I.A. nel contesto processuale penale tra esigenze di efficienza, valutazioni giudiziali e libero convincimento*, in R. M. AGOSTINO, G. DALIA, M. IMBRENDA, S. PIETROPAOLI (a cura di), *Frontiere digitali del diritto*, cit., p. 53 ss.

¹⁰⁶ Sul rapporto tra diritto e *social networks* e sulle implicazioni "fattuali" e "giuridiche" del fenomeno, per un approfondimento, si rinvia a S. VIGLIAR, *Consenso, consapevolezza, responsabilità nei social network sites. Profili Civilistici*, Padova, 2012; F. COLAPAOLI, A. COPPOLA, F. R. GRAZIANI, M. MIRONI, M. ZONARO, *Social network e diritto*, Torino, 2021, specie p. XIV, ove si legge che: "Arriviamo così alla necessità di un cambio di paradigma in grado di recuperare le zone di contatto esistenti tra le ragioni della regolamentazione e quelle della formazione, tra le norme giuridiche e le condotte etiche. Il tutto in una logica di corresponsabilità tra produttori di contenuti, gestori delle piattaforme e fruitori. Questi ultimi sempre più interattivi (oltre che iperattivi) nella costruzione dei processi di significazione della realtà, in chiave denotativa e connotativa".

¹⁰⁷ Si rinvia a L. CALIFANO, *La libertà di manifestazione del pensiero... in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. Fake news, hate speech e profili di responsabilità dei social network*, in *Federalismi*, n. 26/2021, pp. 1-25. Per una panoramica giurisprudenziale del fenomeno, si rinvia a E. FALLETTI, *Il social network: primi orientamenti giurisprudenziali*, in *Il corriere giuridico*, n. 7/2015, p. 992 ss.

¹⁰⁸ Tra tutti, si veda M. BASSINI, *Libertà di espressione e social network, tra nuovi "spazi pubblici" e "poteri privati". Spunti di comparazione*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 2/2021, pp. 43-56. Se la persona è un minore, bisogna avere ancora più cura di eliminare le fake news o ciò che possa turbare la sua sensibilità. In tal senso, si veda D. ANTONELLA, A. LA LUMIA, *Minori, internet e social networks*, Milano, 2021.



all'odio)¹⁰⁹. Un chiaro esempio di come l'algoritmo "serva" l'uomo per il suo miglior sviluppo¹¹⁰.

Altre volte, però, proprio tali "colossi informativi" e "detentori data-cratici"¹¹¹ rischiano di porre in essere condotte "censorie" prive di qualsiasi fondamento giuridico, mettendo, in tal senso, a tacere "unilateralmente e in maniera del tutto

¹⁰⁹ Sul punto, si rinvia a M. NURRA, "Fake news", *algoritmi, Facebook e noi*, in *Astrid*, 18 maggio 2017, consultabile *online*, il quale offre lo spunto per un principio di *accountability* informativo, laddove scrive: "Interpretare una realtà nuova usando categorie che appartengono al passato e strumenti legislativi inadeguati sarebbe un passo indietro irresponsabile. Non possiamo sfuggire alla complessità, non ci sono scorciatoie. Le notizie false continueranno a esistere, ma questa può essere un'occasione per migliorare. Migliorare la qualità dei nostri mezzi di informazione, migliorare la nostra cultura informativa (sin da piccoli), accettare le nostre responsabilità in quanto lettori non più passivi ma parte integrante dell'ecosistema mediatico" (p. 4); G. MARCHETTI, *Le fake news e il ruolo degli algoritmi*, in *Media Laws*, n. 3/2020, p. 35, ove si sottolinea che: "Vi sono diversi fattori, infatti, che portano a ritenere che gli strumenti di *fact checking*, anche qualora fossero perfezionati gli algoritmi a ciò preposti, non portino a grandi successi nel contrasto alle *fake news*. In realtà, il fenomeno delle *fake news* trova terreno fertile in un contesto sociale caratterizzato da una serie di elementi: una sempre più scarsa fiducia delle persone nei confronti delle istituzioni, della politica e dei mass media tradizionali; un elevato livello di analfabetismo funzionale (ossia l'incapacità di comprendere il significato di ciò che si legge) e di ritorno (fenomeno attraverso il quale un individuo alfabetizzato, senza l'esercitazione delle competenze alfanumeriche, regredisce perdendo la capacità di utilizzare il linguaggio scritto per formulare e comprendere messaggi); i pregiudizi di conferma nell'ambito di una quantità elevatissima di informazioni, spesso di scarsa qualità; la tendenza degli utenti a credere alle notizie false perché in linea con le loro opinioni e con i loro pregiudizi. In questo contesto, è ravvisabile un elemento soggettivo del fenomeno della diffusione delle *fake news* che dipende dalla propensione degli utenti a chiudersi in una bolla informativa e a diffondere le informazioni a prescindere dai contenuti e dalla veridicità dei fatti. Per altro verso, poi, bisogna tener conto che i sistemi informatici che permettono la creazione e la diffusione delle *fake news* sono molto complessi e i meccanismi del loro funzionamento rimangono in gran parte oscuri sia agli utenti sia a coloro che dovrebbero adottare soluzioni di contrasto". Da ultimo, sul punto, si veda S. NOTARO, *La lotta di Facebook alle fake news*, in *E-lex*, 15 giugno 2021, consultabile *online*.

¹¹⁰ È necessario, quindi, che l'algoritmo venga indirizzato alla tutela della persona e sia, in tale dimensione, regolato. Si veda, in questa ottica, F. FAINI, *Il diritto nella tecnica: tecnologie emergenti e nuove forme di regolazione*, in *Federalismi*, n. 16/2020, specie p. 117, ove l'A. afferma che: "Una strada per raggiungere questi obiettivi è costituita da una nuova relazione tra diritto e tecnica, che incorpori il primo nella seconda, valorizzando in tal modo la costruzione del diritto stesso come scienza che nasce per conferire certezza alle relazioni umane, attribuendo diritti e doveri, riuscendo a tutelare la persona e la società rispetto alla tecnologia. Il valore della certezza del diritto non può essere smarrito a causa dell'evoluzione impressa dalle tecnologie emergenti e per realizzarsi può fare leva sull'incorporazione del diritto nella tecnica, accompagnata dal diritto alla comprensibilità e alla contestabilità della tecnologia e dalla responsabilizzazione degli esseri umani".

¹¹¹ Sul concetto di "data-crazia", si rinvia a D. DE KERCKHOVE, *La decisione datacratica*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, cit., p. 97 ss.



illegittima (ed anche illecita)” alcuni diritti fondamentali della persona-utente-*follower*¹¹².

8. L'I.A. non deve mai “calpestare” la dignità umana¹¹³, deve sempre mettersi al “servizio” della persona¹¹⁴, affinché quest’ultima possa sviluppare se stessa e migliorarsi in una cornice armoniosa¹¹⁵.

¹¹² Si faccia riferimento alla censura dai social di Donald Trump. Sul punto, interessante è la riflessione che propone G. CASSANO, *Il caso Trump, la cacciata dai social media ed il diritto positivo. Brevi note in tema di ostracismo nell’era digitale*, in *Diritto di internet*, n. 2/2021, pp. 222-224, ove l’A. evidenzia che: “La questione Trump si pone in tutta la sua problematicità in termini non già di rispetto di norme contrattuali, e di qualificazione giuridica dell’atto di disattivazione di un profilo social e dei conseguenti strumenti di tutela (cautelare e di merito), bensì in termini molto più ampi che interessano le stesse fondamenta delle moderne democrazie (...). Nessuno può limitarsi ad essere mero spettatore degli eventi dovendosi ognuno interrogare sull’ammissibilità, o meno di interventi censori – posti in essere da una oligarchia di soggetti privati che opera con fine di lucro – sul dibattito politico e sul merito delle idee politiche (...). Si intenda, sono ben accolte (e doverose) tutte le moderne tecniche di blocco dei contenuti violenti e discriminatori veicolati sui social, ma le stesse non devono tradursi, nei fatti, in sentenze che dispongono censure, peraltro di fatto inappellabili (e mettono al riparo il gestore da ogni responsabilità). Devono invece essere strumento di segnalazione all’Autorità pubblica per un pronto suo intervento”. Sul punto, si veda anche A. ALPINI, *Digital divide, censura digitale e antropocentrismo dei dati*, in *Comp. dir. civ.*, n. 3/2021, p. 879 ss. Sul rapporto, invece, tra utilizzo dei *social media* e garanzia di imparzialità ed indipendenza della magistratura, si veda S. SICA, *Social media e magistratura*, in questa rivista, n. 2/2020, p. 536 ss.

¹¹³ Si leggano le riflessioni di S. RODOTÀ, *Privacy, libertà, dignità*, Discorso conclusivo della Conferenza internazionale sulla protezione dei dati, Roma, 13 settembre 2004, disponibile sul sito dell’Autorità del Garante della *privacy*, ove si legge che: “Questa impostazione non è estranea alla materia della protezione dei dati. Nel notissimo *Census Act Case* tedesco si sottolineava proprio che al centro del sistema costituzionale sta il valore della dignità della persona, che deve poter agire autonomamente come componente di una società libera. Si potrebbe osservare che questa conclusione è stata resa possibile dal fatto che il *Grundgesetz* tedesco fa un esplicito riferimento alla dignità già nel suo primo articolo. Ma questo argomento appare ormai superato: ad esempio, l’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (ora seconda parte del Trattato costituzionale) afferma che la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.

¹¹⁴ In tale dimensione, già ampiamente condivisa da chi scrive, si veda A. PICCHIARELLI, *Per un’intelligenza artificiale a misura d’uomo: una possibile regolamentazione valoriale?*, in *IAIA Papers*, n. 47/2020, p. 1 ss.;

¹¹⁵ Sul punto, si rinvia al testo scritto dell’udienza di Papa Francesco del 27 agosto 2021, consultabile sul sito di Avvenire, ove si legge che: “L’impegno dei cittadini, nei diversi ambiti di partecipazione sociale, civile e politica, è imprescindibile (...). Per guarire il mondo, duramente provato dalla pandemia, e per costruire un futuro più inclusivo e sostenibile in cui la tecnologia serva i bisogni umani e non ci isoli l’uno dall’altro, c’è bisogno non solo di cittadini responsabili ma anche di *leaders* preparati e animati dal principio del bene comune”. In tal senso, afferma ancora il Papa, “i politici proteggano la dignità umana dalle minacce delle tecnologie”. Su questi



I sistemi intelligenti, per tale ineludibile ragione, vanno costruiti tenendo ben presente il fine da raggiungere (teleologia artificiale): “la protezione quanto più adeguata possibile della persona umana”.

Questa è la ragione per la quale in tema di I.A. e processo si possa parlare di “algoritmo predittivo” mentre nel campo dell’I.A. e della persona umana si debba parlare di “algoritmo protettivo”¹¹⁶.

Corre l’obbligo di sottolineare che il sistema algoritmico, con tale finalità, potrebbe essere anche utilizzato dal giudice per la scelta migliore, grazie alle variabili valoriali introiettate, degli istituti di protezione della persona umana (amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione¹¹⁷).

Inoltre, è necessario comprendere che, tra non molto lontano, un amministratore di sostegno potrebbe essere anche un *health-care robot*, il quale, oltre a prendersi già cura della persona umana, potrebbe anche prendersi cura del suo sviluppo in una situazione di vulnerabilità tale da non permettere a quest’ultima di provvedere ai propri interessi e bisogni primari¹¹⁸.

temi si erano già espressi alcuni studiosi. Si rinvia, pertanto, a B. BISOL, A. CARNEVALE, F. LUCIVERO, *Diritti umani, valori e nuove tecnologie. Il caso dell’etica della robotica in Europa*, in *Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy*, n. 1/2014, p. 235 ss.

¹¹⁶ Sul punto, si consenta rinvia a R. TREZZA, *L’algoritmo “protettivo”: gli istituti di protezione della persona alla prova dell’Intelligenza Artificiale*, cit., p. 217 ss.

¹¹⁷ Per una visione ormai superata dell’interdizione a favore di una figura diversa (collaboratore alla vita del disabile o dell’incapace), si rinvia a V. BARBA, *Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità e diritto civile italiano*, in *Rassegna di diritto civile*, n. 2/2021, specie p. 445, ove l’A. sostiene che: “L’affermazione di un modello di protezione della persona con disabilità fondato sui diritti umani, significa un riconoscimento a tutto tondo di queste libertà e il riconoscimento che la persona possa sempre assumere queste decisioni, indipendentemente dal suo stato e grado di disabilità. La misura di sostegno non è preconfezionata dal legislatore, ma deve essere cucita e tagliata sulla singola persona, evitando, come è accaduto sino ad adesso, comode ipostatizzazioni o strutturazioni aprioristiche. È compito indispensabile degli interpreti e responsabilità di coloro che dovranno fare applicazione del diritto rendere concreti i principi della Convenzione e costruire ciascuna misura di sostegno della persona in funzione della persona con disabilità e in grado di garantire, nel massimo limite possibile per ciascuno, il pieno sviluppo della personalità umana e il pieno godimento di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali in eguaglianza di condizioni con tutti gli altri”.

¹¹⁸ Sul punto, ad esempio, si veda G. ARCURI, R. DI BIDINO, *La robotica nell’assistenza agli anziani: scenari e questioni aperte*, in *Agenda digitale*, 8 marzo 2021, consultabile *online*, ove si evidenzia che: “La robotica per l’assistenza agli anziani è un settore in sviluppo sia dal punto di vista



La persona umana, infatti, va protetta con la misura più adeguata, adatta, flessibile¹¹⁹. E un *robot*, solo se eticamente orientato, potrebbe essere d'ausilio al giudice per la decisione sul possibile istituto da adottare¹²⁰.

È giusto parlare, anche in tale ottica, di robo-etica¹²¹. Non solo l'algoritmo va improntato, sin dalla sua costruzione, all'etica (valori giuridici fondanti dell'ordinamento), ma anche le macchine robotiche, le quali – a differenza di un singolo algoritmo – sono sicuramente più complesse.

Non si distolga l'attenzione nemmeno dai *robot* sanitari¹²², grazie ai quali i medici operano in condizioni più efficienti e i pazienti raggiungono dei risultati migliori.

Qui, il problema più rilevante è dato dalla eventuale responsabilità qualora il *robot* non funzioni correttamente o se tale macchina cagioni un danno al paziente¹²³.

tecnologico, sia di quello delle evidenze di efficacia ed esperienze di utilizzo. Da più parti è riconosciuto che la maturità tecnologica bassa e l'ecosistema di business è immaturo persino in realtà, come quella finlandese, attente da tempo al tema. Ponendosi l'obiettivo di integrare con i robot la cura ed assistenza degli anziani bisogna considerare non solo gli aspetti tecnici, ma anche quelli umani ed organizzativi. Il coinvolgimento dei diversi stakeholder è un aspetto cruciale, come la definizione di un contesto regolatorio chiaro, che copra sia la fase di certificazione, sia quella di definizione della sostenibilità economica (*alias* rimborso) dei *robot* per gli anziani”.

¹¹⁹ Si rinvia a C. PERLINGIERI, *Amministrazione di sostegno e neuroscienze*, in *Rivista di diritto civile*, n. 2/2015, pp. 330-343.

¹²⁰ In tal senso, si consenta rinviare nuovamente a R. TREZZA, *L'algoritmo "protettivo": gli istituti di protezione della persona alla prova dell'Intelligenza Artificiale*, cit., p. 226 ss.

¹²¹ Su tale concetto, si rinvia primariamente a A. M. C. MONOPOLI, *Roboetica: spunto di riflessione*, Roma, 2011.

¹²² Sul punto, si rinvia a M. MORUZZI, *Robot sanitari alla sfida autonomia: la svolta "quinta dimensione"*, in *Agenda digitale*, 21 ottobre 2020, consultabile *online*; S. GUGLIERSI, *Robot infermieri? L'innovazione nel nuovo contesto sanitario*, in *www.intelligenzartificiale.unisal.it*, 4 giugno 2020, consultabile *online*.

¹²³ Si rinvia, sul punto, a C. PERLINGIERI, *Responsabilità civile e robotica medica*, in questa rivista, n. 1/2020, pp. 161-190; E. MARCHISIO, *Evoluzione della responsabilità civile medica e medicina "difensiva"*, in *Rivista di diritto civile*, LXVI, n. 1/2020, pp. 189-220; R. TREZZA, *Preliminary profiles in the civil liability of health robots*, in *Iura and legal systems*, n. 3/2021, pp. 1-4.



L'ipotesi più accreditata è, sulla scorta della Legge Gelli-Bianco in tema di responsabilità medica¹²⁴, quella della configurabilità della responsabilità contrattuale in capo alla struttura qualora il *robot* non funzioni, con evidente esercizio di quest'ultima dell'azione di regresso nei confronti della casa produttrice¹²⁵.

Il caso, invece, dell'aver cagionato la morte di un paziente, va distinto dal primo. In tale ipotesi, se il *robot* ha funzionato correttamente e il medico ha avuto "campo agente", ovvero ha saputo monitorare dall'inizio alla fine dell'operazione il *robot* medico, si potrebbe configurare un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale del medico (dal punto di vista civilistico per i danni esistenziali – non patrimoniali – eventualmente subiti dai cari del paziente deceduto¹²⁶) e una sicura ipotesi di omicidio colposo, così come modificato dalla Legge su richiamata¹²⁷.

¹²⁴ Per un approfondimento sulla responsabilità medica, *ex multis*, si rinvia a I. PARTENZA, *La nuova responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria. Commento aggiornato alla Riforma Gelli*, Pisa, 2017; F. MARTINI, U. GENOVESE, C. ALTOMARE (a cura di), *Trattato operativo di responsabilità medica*, Santarcangelo di Romagna, 2018; C. M. MASIERI, *Linee guida e responsabilità civile del medico. Dall'esperienza americana alla legge Gelli-Bianco*, Milano, 2019; N. TODESCHINI (a cura di), *La responsabilità medica. Guida operativa alla riforma Gelli Bianco. Inquadramento, profili civili e penali, assicurazione, procedimento stragiudiziale e giudiziale, casistica*, Padova, 2019; F. TAKANEN, *Responsabilità civile e penale medica*, Padova, 2022; M. HAZAN, D. ZORZIT, F. GELLI, *Responsabilità, rischio e danno in sanità*, Milano, 2022.

¹²⁵ Si veda, a tal uopo, V. ROTONDO, *Responsabilità medica e autodeterminazione della persona*, Napoli, 2020, p. 159 ss., ove l'A. si sofferma proprio sull'interazione tra la responsabilità civile e il robot e le intelligenze artificiali in sanità. L'A., a tal riguardo, sembra aderire alla tesi per cui sarebbe applicabile l'art. 2050 c.c., in quanto nulla vieta che un'attività artificiale simile possa rientrare tra le c.d. "attività pericolose" (p. 173). Sembra, inoltre, in maniera del tutto condivisibile, palesare la configurabilità di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria qualora un robot medico dovesse malfunzionare o provocare dei danni (pp. 179-180).

¹²⁶ Sul punto, sono sempre attuali le riflessioni svolte da F. GAZZONI, *Obbligazioni e contratti*, Napoli, 2013, p. 964 sul c.d. "contratto con effetti protettivi a favore di terzo". Nello specifico caso della configurabilità di tale ipotesi di contratto e i suoi effetti nel campo della responsabilità medica, si faccia riferimento a S. GARREFFA, *Il contratto con effetti protettivi verso terzi e la responsabilità medica*, in *Giustiziacivile.com*, 25 gennaio 2017, consultabile *online*. Per un'applicazione giurisprudenziale in tema, si rinvia a Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2020, sent. n. 14615, in *La nuova procedura civile*, n. 4/2020, pp. 1-8.

¹²⁷ Sul punto, si consenta rinviare a R. TREZZA, *La responsabilità civile del medico: dall'oscurantismo al doppio positivismo. Focus sulla responsabilità civile del medico prenatale*, Salerno, 2019, p. 29 ss.; R. TREZZA, *La responsabilità civile del medico: approccio e dintorni*, in



Ci si potrebbe chiedere se una macchina, un *robot*, un sistema intelligente sia in grado di rispondere penalmente. Stando alla lettura dell'art 27, co. 1, Cost. sicuramente la risposta è negativa. La personalità della responsabilità penale presuppone la commissione di un fatto proprio (attribuibile ad una specifica persona umana) e non la possibilità di rispondere per un fatto altrui. Ciò implica che il medico-uomo, avendo pieno "campo agente" sulla macchina robotica, sia l'unico a poterne rispondere penalmente¹²⁸.

R. TREZZA (a cura di), *Diritto alla vita, diritto alla salute e responsabilità medica. Riflessioni prospettiche sull'autodeterminazione della persona umana*, Salerno, 2020, p. 55 ss.

¹²⁸ Alla domanda se "Robot delinquere potest", qualcuno ha già cercato di dare una risposta. Si veda, in tal senso, F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, in *Diritto penale e Uomo*, n. 9/2019, specie p. 33, ove si evidenzia: "Abbiamo, infatti, indagato le possibili applicazioni di IA nelle attività di *law enforcement*, con particolare attenzione allo specifico ambito della polizia predittiva. Siamo poi passati a verificare se i c.d. *automated decision systems* siano già usati, o possano essere in futuro efficientemente e legittimamente usati anche per prendere decisioni all'interno di procedimenti penali. La nostra attenzione si è, quindi, spostata sui c.d. algoritmi predittivi, impiegati per valutare la pericolosità criminale di soggetti in vario modo implicati negli ingranaggi della giustizia penale. Infine, ci siamo interrogati sulle possibili ipotesi di coinvolgimento – come strumento, come autore, o come vittima – di un sistema di IA nella commissione di un reato. Tutti questi quattro scenari – per dipingere i quali, a dire il vero, abbiamo dovuto spesso procedere alla formulazione di mere ipotesi e incerte previsioni rivolte al futuro – sembrano accomunati dall'attuale assenza di una regolamentazione normativa, e in particolare di una regolamentazione che prevenga o reprima offese penalmente rilevanti. Le ipotesi e le previsioni, tuttavia, potrebbero presto divenire realtà, e allora quell'assenza normativa comporterebbe conseguenze drammatiche"; R. BORSARI, *Intelligenza Artificiale e responsabilità penale: prime considerazioni*, in *Media Laws*, n. 3/2019, consultabile online, ove si legge: "Di fronte al vuoto di tutela penale connesso ai nuovi sistemi di Intelligenza Artificiale, a parte i possibili rimedi civilistici o amministrativi (si potrebbero ipotizzare misure corrispondenti a quelle sanitarie previste per gli animali pericolosi), le strade sono due: o si vieta radicalmente la realizzazione di tali sistemi, in base al principio di precauzione, con la conseguente rinuncia ai benefici sociali apportati dagli stessi; oppure si individua un'area di rischio consentito, attraverso complessi bilanciamenti tra l'utilità collettiva e i rischi imponderabili dei vari sistemi. Ad esempio, potrebbe essere consentito l'ingresso sul mercato di auto senza conducente, nonostante il rischio di cagionare lesioni, se non la morte, ad altri utenti della strada, perché tali auto sono comunque migliore soluzione per i problemi del traffico; e vietare senz'altro la realizzazione di droni armati. Non manca nemmeno, tuttavia, chi, in funzione provocatoria, ipotizza pratiche afflittive lato *sensu* penali nei confronti dei sistemi di intelligenza artificiale, che, in quanto res, potrebbe essere sacrificata per apportare un beneficio psicologico della vittima, assecondando la sua irrazionale sete di vendetta"; C. IAGNEMMA, *I 'robot medici': profili problematici in tema di alleanza terapeutica e di responsabilità penale*, in *Corti supreme e salute*, n. 2/2020, specie p. 457, ove l'A. sostiene che: "La 'duttilità' della mente consente, infatti, di affrontare l'imprevedibile variabilità biologica dell'organismo umano, escogitando soluzioni originali tramite processi deliberativi, il più delle volte, guidati dall'intuizione. Facoltà, questa, che non potrà essere, di certo, appresa dalle macchine, essendo programmate secondo rigidi modelli matematici. Ma lo stesso può dirsi con riguardo, altresì, alle 'capacità relazionali' degli operatori in carne e ossa: trattandosi di qualità indispensabili – al pari di quelle tecnico-scientifiche, di cui



9. Un tema assai dibattuto, specie in questi ultimi periodi, è quello relativo, oltre al potenziamento umano¹²⁹, che desta moltissime perplessità¹³⁰, quello della necro-algoritmica, fenomeno per il quale si fa “risuscitare” virtualmente una persona deceduta per il bene di un caro ancora in vita¹³¹.

dispongono anche i robot – per il trattamento del paziente, specie nella fase terminale di una patologia. Il che vale, in particolare, per l’attitudine al dialogo con il malato, della quale, anche sul piano normativo, s’è riconosciuta la centralità nella relazione di cura. Nella consapevolezza che il paziente avverta la necessità di comunicare, soprattutto nei contesti più critici, l’esperienza dalla sua malattia al medico, così che quest’ultimo possa ‘supportarlo’ «nell’individuazione dei valori insiti nelle possibili e differenti opzioni diagnostiche e terapeutiche». Qualunque robot, anche il più evoluto, a ben vedere, non riuscirebbe a soddisfare tale bisogno di umanità”. Di recente, si rinvia a AA. VV., *Giurisdizione penale, intelligenza artificiale ed etica del giudizio*, Milano, 2021.

¹²⁹ Sul punto, si rinvia a S. AMATO, *Biodiritto 4.0. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie*, Torino, 2020, p. 120. Inoltre, si rinvia allo scritto interessante di P. PERLINGIERI, *Note sul “potenziamento cognitivo”*, in questa rivista, n. 1/2021, p. 209 ss.

¹³⁰ Sull’uomo c.d. “umentato”, si veda S. CUCCHETTI, Homo creativus. *Nuove sfide per la bioetica*, in *Il Regno – Attualità*, n. 16/2019, p. 477, ove si evidenzia che: “Le questioni delle tecniche d’intelligenza artificiale, d’integrazione uomo-macchina, di gestione dei dati e di potenziamento umano richiedono una verifica attenta e un discernimento serio sulle strutture di *governance* che le guidano e le regolano. Il pericolo più grande che si possa realizzare è una gestione che non conosca il potenziale di queste tecniche e il loro funzionamento, mentre la questione etica si traduce in un discernimento sulle strutture socio-economiche e sulla idea d’innovazione e progresso che le nutre”; A. DI CORINTO, *Siamo pronti a vivere nell’età dell’essere umano “umentato”? Il potenziamento del corpo umano è ormai una realtà tecnologica. Ora la sfida è mettere al sicuro i dati e prevenire gli attacchi informatici*, in *www.wired.it*, 24 marzo 2021, consultabile *online*, ove si legge che: “Le riflessioni relative al potenziamento biologico ripercorrono almeno 30 anni di dibattito, dalle *cyberstrategie* prostetiche di Stelarc al ruolo delle tecnologie dell’intelligenza di Pierre Lévy e al successo del Partito Transumanista di Istvan Zoltan che, immaginando un futuro di esseri potenziati dalla tecnologia, predica il potenziamento umano per sconfiggere morte e malattie. Un futuro che è già presente. Così tanto presente da porci serie domande su come evolverà il nostro già stretto rapporto con la tecnologia. A cominciare dal fatto che ogni dispositivo artificiale può essere hackerato. Includo le protesi che sono connesse in rete e la cui sicurezza è fondamentale. Come ha detto Modesta, che sente “di aver bisogno di una sorta di maggiore sicurezza, per il rapporto intimo che tutti abbiamo con la tecnologia”, e che “ci obbliga”, secondo David Jacoby di Kaspersky, a farlo prima di immettere nuove tecnologie sul mercato: “Se non ci pensiamo oggi dovremo pensarci domani”, visto che nel futuro prossimo queste tecnologie saranno economiche e disponibili a tutti”; M. SARTORI, *Potenziamento umano e vulnerabilità: la lezione di Coeckelbergh*, in *www.colloquidibioetica.com*, 21 marzo 2021, consultabile *online*, il quale propone una “regolamentazione giuridica del fenomeno”. In chiave completamente critica rispetto al fenomeno, si rinvia a E. PERUCCHIETTI, *Cyberuomo. Dall’intelligenza artificiale all’ibrido uomo-macchina. L’alba del transumanesimo e il tramonto dell’umanità*, Geraci Siculo, 2020.

¹³¹ Si veda, nel rapporto corpo e nuove tecnologie, C. MACCAFERRI, *Il corpo nell’era digitale: dal simulacro alla performance capture*, tesi di dottorato discussa presso l’Università del Sacro cuore di Milano nell’anno accademico 2011-2012, consultabile *online*.



In merito alla questione del potenziamento umano¹³², ove l'I.A. viene utilizzata per la preparazione dei soldati (specie in America) affinché questi possano affrontare al meglio la guerra e qualsiasi altro tipo di battaglia per sconfiggere definitivamente e con tutti i mezzi possibili (si veda, per esempio, i droni-bomba¹³³ o le tecnologie innescenti guerre cibernetiche¹³⁴) il nemico, viene da chiedersi se il limite della dignità umana¹³⁵ venga, in tal caso, rispettato¹³⁶.

¹³² Cfr. S. AMATO, *Neuroscienze e utilizzazione militare delle tecniche di potenziamento umano*, in *Ethics & Politics*, n. 2/2014, pp. 182-198.

¹³³ Su tale aspetto, è intervenuta la Risoluzione del Parlamento europea del 21 gennaio 2021, proprio sui temi del diritto internazionale militare e le implicazioni sull'utilizzo delle nuove tecnologie in guerra. Sul punto, A. AZZARITI, *Attacchi con i droni: profili di diritto internazionale*, in *Cyber Laws*, 19 novembre 2018, consultabile *online*. Inoltre, si veda il Rapporto di ricerca dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo – IRIAD, Roma, aprile 2017, consultabile *online*, dal titolo “*Droni militari: proliferazione o controllo?*”.

¹³⁴ Cfr., sul punto, L. MARTINO, *La quinta dimensione della conflittualità. La rilevanza strategica del cyberspace e i rischi di guerra cibernetica*, in *Center for Cyber Security and International Relations Studies*, consultabile *online*, pp. 1-60.

¹³⁵ Cfr., sul punto, G. AZZONI, *Dignità umana e diritto privato*, in *Ragion pratica*, n. 1/2012, p. 75 ss.; C. PICCOCCHI, *La dignità come rappresentazione giuridica della condizione umana*, Padova, 2013, specie p. 246, ove si evidenzia che: “Se la dignità come nucleo fondante gli ordinamenti costituzionali è un dato acquisito del secondo dopoguerra, la dignità nel suo rapporto con la libertà degli individui rappresenta invece una delle sfide contemporanee, fornendo però una chiave di lettura importante per comprendere il panorama giuridico attuale, rappresentando sia acquisizione sia programma, ma sicuramente ponendosi come risorsa cruciale”; G. M. FLICK, *Elogio della dignità (se non ora, quando?)*, in *Rivista AIC*, n. 4/2014, specie p. 31, ove si mette in luce che: “Infatti, tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione – osserva la Corte – sono in rapporto di integrazione reciproca fra di loro. Nessuno di essi può avere la prevalenza assoluta sugli altri; nessuno di essi può espandersi illimitatamente e divenire “tiranno” nei confronti dell'insieme delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente protette, che è espressione della dignità della persona”; N. GUASCONI, *La dignità umana come fondamento e limite del sistema delle libertà*, in *Riv. trim. sc. amm.*, n. 2/2015, pp. 83-100; F. VIOLA, *Dignità umana, diritti e legge naturale*, in *Prudentia Iuris*, n. 83/2017, p. 31 ss.; L. LEO, *Dignità e costituzione: storia di un diritto controverso*, in *Cammino Diritto*, n. 8/2020, pp. 1-25; F. MASTROMARTINO, *Due concetti di dignità per due concetti di autonomia?*, in *Diritto e Questioni pubbliche*, n. 1/2021, p. 239 ss.

¹³⁶ Questione centrale dibattuta anche da S. AMATO, *Biodiritto 4.0.*, cit., p. 167 ss.



Si conduca, poi, un'indagine sulla responsabilità – anche sul profilo internazionale¹³⁷ – derivante dai danni (anche da morte ingiusta¹³⁸) provocati dai droni militari¹³⁹ guidati da un essere umano al fine di “localizzare” velocemente il nemico e “annientarlo”.

¹³⁷ Cfr., in tema, L. PARONA, *Prospettive europee e internazionali di regolazione dell'intelligenza artificiale tra principi etici, soft law e self-regulation*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, n. 1/2020, consultabile *online*; A. CONFALONIERI, *L'AI deve apprendere i valori dell'UE e il rispetto dei diritti umani*, in www.unionedirittiumani.it, 31 marzo 2021, consultabile *online*; R. SAMPERI, *Brevi riflessioni in merito al possibile impatto dell'Intelligenza Artificiale sui diritti umani*, in *Cammino Diritto*, n. 7/2021, consultabile *online*.

¹³⁸ Sul punto, la Redazione della Rivista *Opinio Iuris* ha pubblicato un Report, il 1° settembre 2021, dal titolo “*I droni che uccidono*”, consultabile *online*, ove si legge che: “Non è da dimenticare, comunque, che molti giuristi sostengono che l'attuale quadro normativo del diritto internazionale sia già sufficiente a regolamentare efficacemente l'uso dei droni armati senza ulteriore codificazione. Ciò può essere vero, ma di fronte alla centralità che i droni stanno assumendo nei conflitti armati contemporanei la necessità di norme giuridiche chiare ed efficaci che disciplinino la condotta dei droni armati dovrebbe essere una priorità per la comunità internazionale”.

¹³⁹ Cfr., sul punto, soprattutto alla luce del clima di guerra che si respira nel continente europeo all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, F. RUSCHI, *Il volo del drone. Verso una guerra post-umana? Una riflessione di filosofia del diritto internazionale*, in *Jura Gentium*, n. 1/2016, p. 12 ss.; P. RIVELLO, *Gli aspetti giuridici connessi all'uso dei droni*, in *Il diritto penale della globalizzazione*, 31 maggio 2018, consultabile *online*, il quale osserva che: “Bisogna, semplicemente, in aderenza alle indicazioni offerte dal *Working Group* art. 29, essere particolarmente attenti agli effetti potenzialmente invasivi ricollegabili al loro uso, in quanto sottratti alla percezione dei singoli eventualmente sottoposti ad operazioni di sorveglianza “dall'alto”. Non a caso il Gruppo dei Garanti costituenti il *Working Group* ha raccomandato ai costruttori di droni l'adozione di misure di *privacy by default* e l'adozione di misure volte a rendere quanto più possibili visibili ed identificabili i droni utilizzati a fini commerciali. Valgono, per il resto, i criteri generali in tema di captazioni di immagini, volte a vietare le riprese all'interno di luoghi di privata dimora ed al contempo a consentire le riprese in luoghi pubblici, giacché in tal caso le persone inquadrare nelle riprese possono essere considerate parte integrante del paesaggio ripreso, in quanto “necessariamente” consapevoli della loro esposizione”; C. MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, pp. 1-48; N. COLACINO, *Impiego di droni armati nella lotta al terrorismo e accesso alla giustizia da parte delle vittime*, in *Rivista di diritto dei media*, n. 2/2018, p. 1 ss.; L. DAMIANO, F. SONGINI, *Se l'intelligenza artificiale uccide, senza controllo umano: ecco i punti chiave del dibattito*, in *Agenda digitale*, 10 giugno 2021, consultabile *online*. Sull'utilizzo dei droni “ordinari” e la loro implicazione sul diritto alla *privacy*, si rinvia a E. DAMIANI, *L'utilizzo dei droni e le inerenti ricadute sul diritto della privacy e della responsabilità civile*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, n. 5/2021, specie p. 53, ove l'A. conclude in tali termini: “nel contesto normativo attuale, risulta sempre più diffusa la creazione e la diffusione di “regole tecniche” che delineano in maniera chiara le caratteristiche strutturali e gli *standards* di sicurezza dei mezzi aerei a pilotaggio remoto. La giuridicizzazione di questi parametri tecnici – da realizzare previo richiamo degli stessi attraverso le fonti di normazione primaria – può risultare di grande utilità al fine di garantire l'efficace funzionamento del mercato ed una sana competizione tra gli operatori del settore nell'Unione europea”; ID., *Privacy e utilizzo dei droni in ambito civile*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, n. 1/2021, p. 158 ss.



In merito alla seconda questione, invece, bisogna dire che tecniche, come quelle messe a punto da Neuralink¹⁴⁰, o anche le *chatbot* risuscitative¹⁴¹ di morti creino dei problemi, oltre che sul piano strettamente etico, anche sul piano giuridico.

Anche qui, è bene ribadire che qualsiasi “nuova creazione artificiale” debba sempre passare attraverso il vaglio di meritevolezza etica e giuridica.

Neuralink, per esempio, potrebbe, tra i vantaggi percepibili, essere in grado, attraverso il collegamento diretto “strumento informatico-cervello umano”, di ridonare le capacità fisiche e riabilitative ad un atleta paraplegico¹⁴².

I *robot* tridimensionali che ricreano la fisionomia virtuale del defunto potrebbero, invece, avere il vantaggio di curare l’assenza fisica di una persona cara che ha provocato delle condizioni degenerative a livello psichico nella persona che resta in vita. Il limite all’utilizzo di quest’ultima invenzione deve essere scandito dal tempo di rielaborazione del lutto, attraverso una vera e propria “terapia accettazionale” che porta al percorso psicologico di accettazione dell’evento-morte e al riacquisto della serenità psicologica della persona umana ancora in vita¹⁴³.

¹⁴⁰ Neuralink Corporation è una azienda statunitense di neuro-tecnologie, fondata da un gruppo di imprenditori, tra cui Elon Musk, che si occupa di sviluppare interfacce neurali impiantabili. La sede dell’azienda è a San Francisco; è stata avviata nel 2016 e fu riportata pubblicamente per la prima volta a marzo 2017. Il marchio “Neuralink” è stato acquistato dai precedenti proprietari a gennaio 2017.

¹⁴¹ Voci internazionali fanno sapere che addirittura alcuni ricercatori americani sarebbero alla ricerca di cellule staminali capaci di far ripartire il cervello, dopo la morte, da zero e progredire dallo stadio di sviluppo zero a quello ultimo del ciclo naturale. Questo, ad esempio, sarebbe un chiaro esempio di “disumanizzazione” dell’uomo.

¹⁴² È recente, infatti, la notizia che degli elettrodi impiantati nel midollo spinale possano far ritornare la dinamica fisica alle persone. Si veda, in tal senso, *Tre pazienti paralizzati tornano a camminare grazie a elettrodi impiantati nel midollo spinale*, su *Focus*, consultabile online.

¹⁴³ Sul binomio I.A.-psicologia, si veda R. CUBELLI, *Psicologia e intelligenza artificiale tra ampliamento della conoscenza e innovazione tecnologica*, in *Giornale italiano di psicologia*, n. 1/2018, p. 105 ss.; M. LAZZERI, *Intelligenza artificiale e psicologia, un binomio possibile: il punto sulle ricerche*, in *Agenda digitale*, 20 ottobre 2021, consultabile online; E. GALLETI, *Intelligenza artificiale e benessere psicologico: l’idea di IDEGO presentata all’European Conference on Digital Psychology*, in *State of Mind – Il giornale delle scienze psicologiche*, 12 marzo 2021, consultabile online; C. GALANTE, *L’AI incontra la Psicologia: l’Intelligenza Artificiale Emotiva*, in



Solo in tale dimensione, anche le *chatbot*, ovvero i ripetitori verbali di conversazioni con la voce dei defunti, potranno essere utilizzate.

Vi dovrà sempre essere un vaglio meritevole e una finalità altrettanto meritevole che vada nel senso della *best human protection*¹⁴⁴. Anche in tal caso, dunque, la necro-robotica dovrà essere sempre più necro-etica¹⁴⁵.

10. Un ulteriore aspetto dell'I.A. è quello relativo alle nuove dimensioni della scienza neurologica e cognitiva¹⁴⁶. Molti sono gli strumenti intelligenti che

www.psicologinews.it, 11 gennaio 2022, consultabile *online*. Il robot risuscitativo, dunque, potrebbe avere gli stessi effetti di uno psicologo, ma quest'ultimo – come figura umana – non potrà essere soppiantato totalmente, ma va considerato come strumento ausiliario finalizzato al raggiungimento di un benessere psicologico della persona umana che ha subito un trauma. Cfr., in chiave provocatoria, R. AVICO, *Un robot come psicologo? Intelligenza artificiale e chatbot, facciamo il punto*, in *www.psiche.it*, 4 luglio 2019, consultabile *online*, ove si legge, così come già detto dallo scrivente, che: “Esistono diversi studi che hanno valutato l'efficacia di un percorso di psicoterapia fatto tramite *Bot*. Allo stato attuale, la sensazione (perché di questo si tratta) che non si abbia a che fare con un individuo, e mancando quindi in pieno l'aspetto relazionale e affettivo, rende lo strumento utile, ma non del tutto efficace o risolutivo se si ragiona in termini di trattamento o cura di un determinato disturbo. Lo psicoterapeuta virtuale, per lo stato attuale delle cose, non riesce a sostituire un terapeuta umano formato, ponendosi più realisticamente come supporto integrativo in grado di assolvere a funzioni minori (come il triage iniziale di un paziente, il fornire reperibilità costante, avere un costo nullo, l'indirizzamento su una pagina internet a un giusto recapito), nell'ambito dell'erogazione di servizi di supporto alla salute mentale”.

¹⁴⁴ In tal senso, come già detto, si rinvia nuovamente a R. TREZZA, *I diritti della persona tra “tecniche” e “intelligenze” artificiali*, cit., p. 27.

¹⁴⁵ In tali termini, S. AMATO, *Biodiritto 4.0.*, cit., pp. 172-179, ove si mette in collegamento la necro-etica con la bioetica.

¹⁴⁶ Su tale aspetto, si rinvia a L. PALAZZANI, R. ZANNOTTI, *Il diritto nelle neuroscienze. Non «siamo» i nostri cervelli*, Torino, 2013; N. LETTIERI, S. FARO, E. FABIANI, *Diritto, neuroscienze, scienze della cognizione*, Napoli, 2015; A. SANTOSUOSSO, *Le neuroscienze e il diritto*, Milano, 2009; C. GRANDI, *Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?*, Torino, 2016; V. ZAMBRANO, *Le neuroscienze, la capacità e la radiografia della macchina del pensiero*, in *Comp. dir. civ.*, 2018, pp. 1-27; O. DI GIOVINE, *Ripensare il diritto penale attraverso le (neuro-)scienze?*, Torino, 2019; R. TREZZA, *Los tratamientos neurocientíficos en detenidos: perfil civilista del consentimiento a las técnicas*, in E. QUARTA, *Dalla lectio magistralis del Ministro della Giustizia Marta Cartabia agli indici di rifrazione della metamorfosi della pena. Dal paradigma punitivo delle Erinni al paradigma riconciliativo delle Eumenidi. Lo sguardo nuovo sul sistema penitenziario nei dialoghi dei giuristi tra Italia, Perù e Cuba*, Roma, 2021. Per una differenza tra “scienza giuridica” e “scienza cognitiva”, si consenta rinviare a R. TREZZA, *Diritto e intelligenza artificiale*, cit., p. 100 ss.; P. PERLINGIERI, *Note in tema di “potenziamento cognitivo”*, cit., p. 216, ove l'A., in maniera del tutto condivisibile, si esprime in questi termini: “Il giurista ha il compito di contribuire a realizzarla (la dignità della persona), proponendo soluzioni adeguate”.



consentono di migliorare la salute neurologica della persona umana¹⁴⁷ (e per ciò stesso sono meritevoli di essere costruiti, sempre improntati a variabili “salutari” e di essere utilizzati) e di prevedere comportamenti, specie criminosi¹⁴⁸. O, ancora, molta è l’attenzione verso l’utilizzo delle tecniche neuro-scientifiche nel campo del *marketing*¹⁴⁹ che porta con sé non pochi risvolti sulla tutela dell’utente-

¹⁴⁷ In tema, L. TAFARO, *Neuroscienze e diritto civile: nuove prospettive*, in *Rivista di biodiritto*, n. 3/2017, specie p. 257, la quale pone in evidenza: “Il riflesso delle neuroscienze nello specchio del diritto civile si coglie anzitutto con riferimento alla scoperta dei cc.dd. neuroni-specchio, quei particolari neuroni che, com’è noto, sono in grado di indurre istintivamente, nella interazione con gli altri, partecipazione empatica e comportamenti imitativi. Per essa occorre domandarsi se l’uso delle conoscenze neuroscientifiche relative al loro funzionamento possa profilare nuove aggressioni e, di conseguenza, nuovi bisogni di tutela della persona umana”.

¹⁴⁸ Sul punto, si rinvia a D. ONORI, A. R. VITALE, *Neuroscienze e diritto: quale sorte per la libertà?*, in *Centro studio Livatino*, 15 marzo 2021, consultabile *online*; M. DI FLORIO, *Colpevolezza, conseguenze sanzionatorie e neuroscienze in rapporto al diritto penale*, Pisa, 2021.

¹⁴⁹ Sul c.d. “neuromarketing”, si rinvia a L. TAFARO, *Neuromarketing e tutela del consenso*, Napoli, 2018, specie p. 64 ss., con recensione di R. PICARO, in questa rivista, n. 1/2020, p. 378, il quale evidenzia che: “l’utilizzo delle tecniche di *neuromarketing* nella contrattazione interferisce con la libera formazione della volontà del consumatore, condizionandone la libertà economica e contrattuale” così andandosi ad innestare “nei processi decisionali, inducendo i contraenti a compiere scelte di consumo suggerite dall’uso strumentale della conoscenza delle loro preferenze ed abitudini di vita, ossia dati concernenti il nucleo della sua identità e della personalità stessa del consumatore”. Ancor prima, si veda F. VINCENZI, *Neuromarketing e web: un connubio legale?*, in *Cyberspazio e diritto*, n. 3/2017, p. 615 ss.; R. CATALANO, *Neuromarketing e tutela civile dei dati personali biometrici*, in *Comp. dir. civ.*, 2019, pp. 1-18.



consumatore¹⁵⁰. Per non parlare del rapporto che intercorre tra le neuroscienze e la capacità umana¹⁵¹.

Dal punto di vista del processo penale, invece, le neuroscienze potrebbero essere in grado di far capire il motivo per il quale una persona abbia commesso un fatto-reato o, in un'ottica preventiva, quando potrà e se potrà nuovamente compiere lo stesso fatto (recidiva)¹⁵².

A tal proposito, è scontato riferirsi alle tradizionali teorie lombrosiane per mezzo delle quali, attraverso l'analisi cerebrale dei criminali, si poteva individuare

¹⁵⁰ Su tale aspetto, tra i primi, si rinvia a M. IMBRENDA, *Persona e scelte di consumo tra conoscenze neuroscientifiche e nuove frontiere tecnologiche*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 14/2021, p. 833, ove l'A. evidenzia che: "L'infrastruttura digitale si disvela essere il tramite di un percorso emancipatorio del "consumatore" che, oltre ad agire sul mercato in veste di arbitro (si pensi alle potenzialità offerte dalla *blockchain* per monitorare il processo produttivo e quindi orientare le proprie scelte di consumo sulla base delle informazioni e dei riscontri acquisiti), approda al ruolo ibrido di "prosumer", tramutandosi in un vero e proprio attore economico. Dinanzi a questo complesso scenario, fatto di luci ed ombre, diviene ancora più stringente l'invito, rivolto a suo tempo all'interprete – compito primario del quale è l'identificazione e la tutela delle posizioni di libertà civili ed economiche della persona –, a non rifugiarsi nell'astrazione per impegnarsi nella definizione di nuove tecniche di attuazione e concretizzazione dei principi". Da ultimo, interessante è la riflessione che propone A. MENDOLA, *Atto di consumo e libertà di scelta nel social media marketing*, in *Rivista di diritto privato*, 2022, specie p. 29, la quale propone di utilizzare la categoria della nullità di protezione qualora un consumatore-utente venga "frodato" (*rectius* dolo negoziale) in rete e, dunque, violata sarebbe la sfera della sua libertà di scelta. L'A. mette anche in luce le teorie avverse, quelle enucleabili l'applicabilità della disciplina della annullabilità al caso prospettato. In realtà, sul punto, non può che rilevarsi la lungimiranza nelle argomentazioni di G. PERLINGIERI, *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel sistema italo-europeo*, Napoli, 2013, p. 93 ss., ove l'A. avverte che: "il contratto sia viziato funzionalmente, ossia nullo per una condotta illecita che, in un rapporto causa-effetto, è risultata capace di colorare il regolamento di interessi"; R. PICARO, *Relazioni consumeristiche, intelligenza artificiale e nuove identità*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4/2020, p. 1485 ss. Ancora, proprio di recente, si rinvia a L. CARRUBBO, A. MENDOLA, *Le scelte "inconsapevoli" nelle nuove dinamiche d'acquisto. Il neuromarketing e la tutela del consumatore-follower*, Padova, 2022.

¹⁵¹ Sul punto, si rinvia, tra tutti, a E. LECCESE, *Capacità e neuroscienze cognitive: un dialogo con il Prof. Stanzione*, in *Comp. dir. civ.*, n. 3/2020, p. 87 ss.

¹⁵² Si veda A. FORZA, *Neuroscienze e diritto*, in *Rivista penale*, n. 3/2009, p. 253; P. PIETRINI, *La macchina della verità alla luce delle recenti acquisizioni delle neuroscienze*, in *Cassazione penale*, 2008, p. 141 ss.



la conformazione fisiologica di “inclinazione” alla commissione dei crimini. Un simile studio è descritto come “determinismo biologico¹⁵³”.

Non va affatto sottaciuto, però, che oltre ad un determinismo fisiologico, svariate altre possano essere le variabili o le circostanze che spingono a commettere dei reati, ovvero il fattore sociale (c.d. determinismo sociologico), il fattore economico (c.d. determinismo economicistico), il fattore psicologico (c.d. determinismo psicologico o “psicologismo”), il fattore tecnologico¹⁵⁴. In tale ultima prospettiva, proprio perché vi è il rischio di perpetrazione di reati anche nella realtà liquida della rete¹⁵⁵ (*deep web*¹⁵⁶, *cybercrime*¹⁵⁷ e così via), si potrebbe parlare di un nuovo tipo di determinismo, ovvero quello “tecnologico”.

L’elemento che qui maggiormente interessa è il seguente: il portato finale degli esperimenti, ovvero tutti i dati neuronali raccolti, che tutela possiede?

I “dati neuronali” rientrano sicuramente nella categoria dei dati sensibili e vanno trattati secondo la disciplina del nuovo GDPR in tema di protezione dei dati personali¹⁵⁸. Per ciò stesso si dovrebbe iniziare anche a disquisire di “*privacy*

¹⁵³ Sul punto, tra tanti, si veda P. MARTUCCI, *All’inizio era il male: determinismo biologico e destino nella criminologia di Cesare Lombroso*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n. 1/2013, p. 52 ss.

¹⁵⁴ Sui vari tipi di “determinismo”, si rinvia, da ultimo, per un approfondimento attualizzante, a G. BRACCILI, *Teorie bio-antropologiche nel XIX secolo: la scuola positiva di Cesare Lombroso*, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, in *Scienze criminologiche*, 21 marzo 2021, consultabile online.

¹⁵⁵ Mutuando l’espressione dal grande Z. BAUMAN, *Modernità liquida*, Roma-Bari, 1999.

¹⁵⁶ Sul *deep web*, tra tanti, si rinvia a R. MEGGIATO, *Il lato oscuro della Rete: Alla scoperta del Deep Web e del Bitcoin*, Adria, 2014; M. FACCIOLI, *Minori nella rete. Pedofilia, pedopornografia, deep web, social network, sexting, gambling, grooming e cyberbullismo nell’era digitale*, Roma, 2015; L. VARRIALE, *La prigioniera dell’umanità. Dal deep web al 4.0, le nuove carceri digitali*, Bologna, 2017; G. MALATO, *Deep web*, Forlì, 2019; E. FLORINDI, *Deep web. Vizi privati e pubbliche virtù della navigazione in rete*, Torino, 2020.

¹⁵⁷ Sul tema, si rinvia a A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Cybercrime*, Milano, 2019; E. BASSOLI (a cura di), *I crimini informatici, il dark web e web room*, Pisa, 2021. Da un punto di vista rimediabile, si rinvia a J. KULESZA, F. DELERUE, *Cybersecurity in teh Year of the Plague: Due Diligence as a Remedy to Malicious Activities*, in questa rivista, n. 2/2020, p. 404 ss.; A. ROTONDO, *Prevenzione e contrasto della minaccia informatica in Europa: note a margine del Regolamento (UE) 2019/881*, in questa rivista, n. 1/2020, p. 195 ss.

¹⁵⁸ Tale è la sollecitazione proveniente da P. PERLINGIERI, *Note in tema di “potenziamento cognitivo”*, cit., specie p. 214.



neuronal¹⁵⁹”. Inoltre, è possibile donare, anche *post mortem*, tali dati alla scienza per finalità di ricerca (appuntamento) scientifica¹⁶⁰?

¹⁵⁹ Questa espressione viene utilizzata da S. AMATO, *Biodiritto* 4.0., cit., p. 122. In tal senso, però, si legga anche l'intervento del Presidente dell'Autorità Garante della privacy, prof. Pasquale Stanzone, del gennaio 2021, il quale ha sottolineato che, oltre all'*habeas corpus* e all'*habeas data*, vi sia anche l'*habeas mentem* a cui apprestare tutela. In sintonia anche M. IMBRENDA, *Nuove tecnologie e dinamiche regolatorie dell'autonomia privata*, in R. M. AGOSTINO, G. DALIA, M. IMBRENDA, S. PIETROPAOLI (a cura di), *Frontiere digitali del diritto*, cit., p. 112 ss.

¹⁶⁰ Sembra che una risposta a tale interrogativo possa essere affermativa, specie prendendo in considerazione la nuova Legge n. 10/2020 “*Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica*”, la quale, all'art. 3, prevede l'obbligo informativo, il consenso informato, la possibilità di nomina di un “fiduciario” e la revocabilità del consenso *in extremis* – essendo un diritto fondamentale della persona umana –. Cfr., sul punto, R. TREZZA, *La revocabilità per facta concludentia del consenso all'anonimato e il diritto a conoscere le proprie origini “in espansione”*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1/2021, pp. 1-12; ID., *La fecondazione omologa post matrimonio: l'embrione crioconservato è “concepito”?*, in *Familia*, 15 febbraio 2022, consultabile online, ove si evidenzia che il consenso all'impianto può essere revocato sino a quando l'embrione artificiale non venga impiantato nell'utero materno. In accordo con lo scrivente, anche G. GIAIMO, *Frozen embryos, frozen law. Brevi notazioni, in chiave comparatistica, su di una recente decisione in tema di procreazione medicalmente assistita*, in *Dir. fam. pers.*, n. 3/2021, p. 1331 ss.). Sulla Legge suddetta, che è passata in sordina per molti perché pubblicata in un tempo problematico quale quello epidemico, si veda M. TOMASI, *L. 10/2020: disposizione del proprio corpo a fini di ricerca scientifica*, in *Rivista di biodiritto*, 4 marzo 2020, consultabile online; L. ATZENI, *Brevi note a margine della legge 10 febbraio 2020, n. 10 in tema di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica*, in *Rivista AIC*, n. 5/2020, specie p. 67, ove l'A. afferma che: “D'altra parte, al fine di rendere effettivo il diritto al rispetto delle proprie volontà espresse in vita, e, al contempo, al fine di garantire il diritto alla riservatezza, è fondamentale che, in conformità con l'articolo 9 del Decreto del Ministero della Salute del 18 dicembre 2019, quest'ultimo Ministero svolga una costante attività di monitoraggio volta a verificare l'idoneità della regolamentazione della banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT, nonché il suo puntuale aggiornamento. Infatti, solamente nel caso in cui il diritto all'autodeterminazione fisica e il diritto all'autodeterminazione informativa del disponente vengano contestualmente garantiti, si potrà rendere effettiva la tutela della libertà e della dignità della persona umana”; M. GHIONE, *Luci e ombre della l. n. 10/2020 in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem*, in *Familia*, n. 4/2020; R. MASONI, *In G.U. disposizioni del proprio corpo post mortem*, in *Il familiarista*, 11 marzo 2020, consultabile online; G. GIAIMO, *Il lascito del proprio corpo a fini didattici e di ricerca. Il nobile (ma vano) intento della legge 10/2020*, in *Rivista di biodiritto*, n. 2/2021, specie p. 190, ove, in chiave critico-legislativa, si afferma che: “Ancora una volta, allora, la legge n. 10/2020 dimostra le sue evidenti insufficienze alle quali occorre rimediare in via di interpretazione, sempre in attesa del regolamento attuativo che, finalmente, ne consentirà l'effettiva applicazione. Ciò che resta, tuttavia, è un sentore di irrisolutezza, dovuto a un legislatore rimasto a metà del guado tra quei provvedimenti che hanno ispirato il suo agire (la normativa in materia di trapianti e quella relativa alle disposizioni anticipate di trattamento) e incapace di prevedere quei semplici accorgimenti che avrebbero potuto condurre a una disciplina capace di ambire a farsi modello per gli altri ordinamenti ma che, invece, ha il gusto insipido delle occasioni non colte”.



11. L'I.A. ha investito, con le sue innovazioni e le sue tecniche, tutti i settori del diritto. Per i fini che qui interessano, è d'uopo soffermarsi, seppur in maniera schematica, sul rapporto tra I.A. e diritto civile¹⁶¹, prendendo in esame, tra tantissime questioni, quelle che si reputano essere più interessanti, ovvero il caso degli *smart contracts*¹⁶², della determinazione algoritmica dell'oggetto del

¹⁶¹ Sul punto, si consenta rinviare a R. TREZZA, *Artificial intelligence, civil law and ethics in Italy: a possible interaction*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, n. 9/2021, p. 12. Inoltre, non si può, sul punto, non rinviare a E. CATERINI, *L'intelligenza artificiale «sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile*, Napoli, 2020, specie p. 32, ove si legge che: "Il processo di soggettivazione dell'intelligenza artificiale, generato dalla capacità regolativa che è propria dell'autonomia dei privati, tanto nel perseguimento di interessi generali che particolari, unitamente alla connessione di essa con la dignità dell'uomo, avviano senza esitazioni gli autori algoritmici e gli attanti macchinici verso un processo di responsabilizzazione. Non è soltanto una responsabilità civile ma anche sociale che induce ad impedire che l'AI divenga causa di aggravamento delle differenze piuttosto che veicolo di eguaglianza. L'interprete di ogni angolo della galassia giuridica deve assumere una posizione coerente con la legge fondamentale della Repubblica e ogni ritrovato della scienza non deve sottrarsi al primato del diritto come strumento per la costruzione di una società giusta. La lenezza dell'interprete, brandita come inno alla libertà, spesso malcela la scelta ideologica di chi vuole far prevalere la giustizia della forza (economica o tecnica) piuttosto che la forza della giustizia. Le Costituzioni contengono delle "ideologie reali", ideologie, perché portatrici della speranza di un progetto ideale, reali, perché munite della precettività della norma giuridica. Gli interpreti e applicatori devono avere la consapevolezza della responsabilità di non disattendere la speranza di un'ideologia imperativa. Anche l'umanità automata deve assolvere alla funzione sociale di consentire e agevolare l'"accessibilità a tutti" di quelle applicazioni dell'intelligenza artificiale che garantiscono il "minimo vitale". Altrimenti, se è possibile che il leone e il vitello giacciono insieme, è pur vero che il vitello dormirà poco".

¹⁶² Si faccia riferimento a D. DI SABATO, *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, in *Contratto e impresa*, n. 2/2017, p. 378; S. COMELLINI, M. VASAPOLLO, *Blockchain, criptovalute, I.C.O. smart contracts*, Santarcangelo di Romagna, 2019; A. CONTALDO, F. CAMPORA, *Blockchain, criptovalute, smart contract, industria 4.0*, Pisa, 2019; G. GALLONE, *La pubblica amministrazione alla prova dell'automazione contrattuale. Note in tema di smart contracts*, in *Federalismi*, n. 20/2020, pp. 142-170; A. STAZI, *Automazione contrattuale e "contratti intelligenti". Gli smart contracts nel diritto comparato*, Torino, 2019; A. STAZI, *Automazione contrattuale e "contratti intelligenti". Gli smart contracts nel diritto comparato*, Torino, 2019; T. PELLEGRINI, *Prestazioni auto-esecutive. Smart contract e dintorni*, in *Comp. dir. civ.*, n. 3/2019, p. 843 ss.; A. DAVOLA, *"Blockchain" e "Smart Contract as a Service" (SCaaS): prospettive di mercato a criticità normative delle prestazioni BaaS e SCaaS alla luce di un'incerta qualificazione giuridica*, Relazione al Convegno "La grande innovazione e le sue regole: Intelligenza artificiale, Data analysis, Tecnologia blockchain", Parma, 25 ottobre 2019, in *Il Diritto industriale*, n. 2/2020, pp. 147-156; I. FERLITO, "Smart contract". *Automazione contrattuale ed etica dell'algoritmo*, in *Comp. dir. civ.*, n. 2/2020, p. 661 ss.; F. BRUSCHI, *Le applicazioni delle nuove tecnologie: criptovalute, "blockchain" e "smart contract"*, Relazione al Convegno "La grande innovazione e le sue regole: Intelligenza artificiale, Data analysis, Tecnologia blockchain", Parma, 25 ottobre 2019, in *Il Diritto industriale*, n. 2/2020, pp. 162-164; C. PERNICE, *Distributed ledger technology, blockchain e smart contracts: prime regolazioni*, in questa rivista, n. 2/2020, p. 490 ss.; M. GIACCAGLIA, *Il contratto del futuro? Brevi riflessioni sullo smart contract e sulla perdurante vitalità delle categorie giuridiche attuali e della norme vigenti del Codice civile italiano*, in questa rivista, n. 1/2021, p. 113 ss. Ancora più di recente, si veda F. GAMBINO, *Blockchain, smart contract e diritto sradicato*, in questa rivista,



contratto¹⁶³ e dell'eredità digitale¹⁶⁴, oltre a quello già tanto discusso della "soggettività giuridica dei *software*¹⁶⁵", su cui, per ragioni di sistema, non ci si sofferma.

n. 2/2021, p. 29 ss.; J. FORTUNA, *Smart contract e formazione del contratto: un'analisi comparatistica della nascita del vincolo giuridico*, in *Comp. dir. civ.*, n. 2/2021, p. 595 ss.

¹⁶³ Sul punto, si veda M. D'AMBROSIO, *Arbitraggio e determinazione algoritmica dell'oggetto*, Napoli, 2020.

¹⁶⁴ Si faccia riferimento alla pronuncia del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2021, in *Diritto di Internet*, 10 febbraio 2021, consultabile *online*. Sul punto, alcune riflessioni, sono state proposte da I. MARTONE, *Sulla trasmissione a causa di morte del "patrimonio digitale"*, in questa rivista, n. 2/2020, p. 420 ss.; R. BERTI, S. ZANETTI, *L'eredità digitale tra norma e tecnologia: come le big tech stanno risolvendo un problema giuridico con strumenti informatici*, in *Media Laws*, 29 luglio 2021, consultabile *online*, ove si legge, condivisibilmente, che: "La situazione attuale vede quindi un acceso conflitto fra la dimensione giuridica, ancorata ai concetti di contenuto economico, diritti morali degli eredi e riservatezza dei defunti, e dimensione tecnologica, che traduce la dimensione contrattuale in un rapporto ritagliato sul singolo utente, violato dalla condivisione delle credenziali salvo questa sia "incanalata" nelle procedure eventualmente messe a disposizione dal fornitore del servizio/dispositivo per trasmettere a terzi il servizio/dispositivo stesso. All'aumentare dell'importanza materiale e morale dei valori inseriti in queste piattaforme/servizi sorgono dei conflitti, gestiti in sede giudiziale solamente perché la tecnologia non ha, ad oggi, per interessi propri o disinteresse verso questo tema delicato, saputo fornire soluzioni adeguate al problema. Dal canto suo nemmeno il diritto è in grado di fornire soluzioni appaganti in quanto è di tutta evidenza che al giudice è richiesta una difficile valutazione di bilanciamento da effettuare caso per caso fra il diritto dei parenti ad accedere ai dati ed al patrimonio ereditario del defunto e il diritto alla riservatezza del defunto stesso, che verosimilmente avrebbe voluto escludere da questa condivisione almeno una parte dei contenuti dallo stesso privatamente condivisi in vita"; A. D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, Pisa, 2020. Di recente, sulla stessa lunghezza d'onda, anche il Tribunale di Roma, con ordinanza del 10 febbraio 2022, con la quale si è ordinato alla società Apple di prestare assistenza alla ricorrente per il recupero dei dati dell'*account*, anche mediante consegna delle credenziali di accesso, sulla base dell'art. 2 *terdecies* del d.lgs. 101/2018.

¹⁶⁵ Si rimanda, per un approfondimento, a G. SARTOR, *Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto*, in *Contratti e impresa*, 2022, II, p. 456 ss.; C. PERLINGIERI, *L'incidenza dell'utilizzazione della tecnologia robotica nei rapporti civilistici*, in *Rassegna di diritto civile*, 2015, p. 1235 ss.; G. TEUBNER, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, a cura di P. Femia, Napoli, 2019; E. MOROTTI, *Una soggettività a geometrie variabili per lo statuto giuridico dei robot*, in F. BILOTTA, F. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Napoli, 2020; U. RUFFOLO, *Il problema della "personalità elettronica"*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies*, n. 2/2020, p. 87, ove si pone in luce: "Dobbiamo, proattivamente, allora, porci già il problema del che fare, e come "trattare" la creazione - poco importa, ai nostri fini, quanto illecita - di entità "intelligenti", e magari emotive e senzienti, di tipo diverso dal nostro. Da che momento - se si vuole, da quale grado di intelligenza - esse diventano insopprimibili e tutelabili, o comunque "disciplinabili"? È severamente vietata sia la clonazione sia la creazione di chimere (v. legge n. 40/2004, art. 13). Ma, qualora tali pratiche ricevessero - poco importa quanto illecita - attuazione, gli "esseri" così venuti al mondo sarebbero entità comunque "viventi" (qualsiasi cosa questo voglia dire). Come andrebbero trattati e classificati? Quale *status* e tutela (e libertà, e diritti) potrebbero/dovrebbero



La determinazione algoritmica degli interessi delle parti¹⁶⁶, attraverso un coacervo di interessi telematici fatti percepire al *software*, fa sì che si possa parlare di “autonomia contrattuale elettronica¹⁶⁷”, ove, a maggior ragione, gli interessi delle parti, così come già accade ai sensi dell’art. 1322 c.c.¹⁶⁸, dovranno oltrepassare la scure del vaglio di meritevolezza¹⁶⁹. Un simile contratto, però, potrebbe generare “ontologicamente” o “successivamente” uno squilibrio del sinallagma che si ripercuote sul rapporto contrattuale¹⁷⁰ e, di conseguenza, sul fascio di situazioni giuridiche (sia esistenziali sia patrimoniali) appartenenti alla persona-contraente¹⁷¹. Va evitata, quindi, un’“asimmetria” algoritmica¹⁷² ed

essere loro attribuiti? I “diritti umani”, se considerati come universo esaustivo, sono ormai troppo antropocentrici?”.

¹⁶⁶ In merito, si rinvia a M. DE FELICE, *Decisione robotica negoziale. Nuovi “punti di presa” sul futuro*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, cit., p. 179 ss. Nello stesso volume, ancora, F. DE STEFANO, *Spunti di riflessione sulla decisione robotica negoziale*, p. 215 ss.; G. GITTI, *La decisione robotica negoziale*, p. 251 ss.

¹⁶⁷ Sul punto, si rinvia alla lettura di S. ACETO DI CAPRIGLIA, *Contrattazione algoritmica. Problemi di profilazione e prospettive operazionali. L’esperienza “pilota” statunitense*, in *Federalismi*, n. 18/2019, specie p. 60, ove l’A. conclude in tal modo: “È possibile ed è consigliabile, però, offrire agli interpreti criteri ermeneutici dedotti dai principi generali e dalle esperienze straniere più avanzate che (a prescindere dal mutamento dei tempi e della tecnica), sono destinati a costituire il faro che illumina la buia foresta delle molteplici forme di negoziazione digitale. All’uopo, quest’ultima risulta certamente uno strumento utile, ma è necessario che venga presa in considerazione dal legislatore eurounitario oltre che da quello domestico, e che sia circondata da apposite tutele e accorgimenti. Tali cautele normative dovranno essere attentamente predisposte affinché il dominio negli algoritmi non si trasformi, in ultima analisi, nell’abuso da parte di soggetti tecnologicamente più avanzati e quindi dotati di competenze tali da tiranneggiare il *quavis de populo*, oggi più che mai esposto al rischio di sfruttamenti e raggiri sul piano consumeristico”.

¹⁶⁸ Sul punto, in merito alle dinamiche dell’autonomia negoziale, si rinvia a F. CRISCUOLO, *Autonomia negoziale e autonomia contrattuale*, Napoli, 2008, p. 1 ss.; S. GIOVA, G. PERLINGIERI, L. TULLIO (a cura di), *Autonomia negoziale e successioni mortis causa*, Napoli, 2020; AA. VV., *L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale*, Napoli, 2016.

¹⁶⁹ Si consenta rinviare a R. TREZZA, *Il contratto nell’era del digitale e dell’intelligenza artificiale*, in *Il diritto dell’economia*, n. 2/2021, pp. 287-319.

¹⁷⁰ Si rinvia, anche in chiave comparatistica, a P. D’ELIA, *Digital relationships and private autonomy in the EU legal framework*, in *Comp. dir. civ.*, n. 2/2021, p. 629 ss. Inoltre, è meglio parlare di “rapporti negoziali”, laddove anche il negozio, qualora dovesse essere “trattato algoritmicamente”, dovrebbe avere le medesime cautele. Sul punto, E. PALMERINI, *Negoziato e automazione: appunti per una mappa concettuale*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, cit., p. 291 ss.

¹⁷¹ Sul punto, si rinvia a P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 715 ss.

¹⁷² Su tale concetto, si rinvia a S. ORLANDO, *Gli smart contracts come prodotti software*, in S. ORLANDO, G. CAPALDO (a cura di), *Annuario 2021. Osservatorio Giuridico sulla Innovazione*



esperiti tutti i rimedi affinché questa possa cessare¹⁷³, così che il contratto possa davvero essere, alla luce delle umane vicissitudini, “intelligente¹⁷⁴”.

Digitale, Roma, 2021, specie p. 252, ove l’A. differenzia l’asimmetria informativa da quella informatica: “L’asimmetria informatica, nel senso sopra delineato, è ben distinguibile dall’asimmetria informativa, perché mentre quest’ultima esprime la mancanza di conoscenza di informazioni rilevanti, secondo le circostanze, da parte di un contraente, a fronte della conoscenza delle medesime informazioni da parte di un altro contraente, l’asimmetria informatica, nel senso sopra inteso e riferito allo *smart contract*, esprime la mancanza di conoscenza da parte di un contraente del linguaggio nel quale un altro contraente pretenderebbe che fosse dichiarato il contenuto di un contratto, ossia il linguaggio in cui è espresso un programma per elaboratore. Per tale motivo, laddove anche il programma per elaboratore di uno *smart contract* venga reso accessibile in open source (ciò che anche negli ecosistemi *blockchain* dipende sempre da una precisa scelta del predisponente), non per questo solo potrà ritenersi che esso è stato reso conoscibile alla generalità dei potenziali contraenti secondo l’ordinaria diligenza, essendo viceversa ostativa a questa conclusione la carenza di intelligibilità (qui non coincidente con la conoscibilità) del medesimo programma, a cagione dell’ignoranza del linguaggio nel quale esso è espresso”.

¹⁷³ Sul punto, tra tutti, si rinvia a A. FEDERICO, *Equilibrio e contrattazione algoritmica*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2/2021, p. 483 ss. Un simile squilibrio, di per sé, si è verificato anche con l’evento pandemico. Sul punto, si rinvia a C. COSENTINO, *Eteronomia giudiziale e contratto diseguale*, in *Comp. dir. civ.*, pp. 1-20, consultabile *online*; A. S. M. ROSETI, *Il COVID-19 riaccende l’eterno conflitto tra il principio pacta sunt servanda e il principio rebus sic stantibus*, in *Il diritto del risparmio*, pp. 1-20, consultabile *online*; N. CIPRIANI, *L’impatto del lockdown da COVID-19 sui contratti*, in *Rivista di diritto bancario*, n. 4/2020, p. 652 ss.; C. PILIA, *Le tutele dei diritti durante la pandemia Covid 19: soluzioni emergenziali o riforme strutturali?*, in *Persona e Mercato*, n. 5/2020, p. 77 ss.; T. SICA, *Sopravvenienze contrattuali da Covid-19 e rapporti concessori. Scelta del rimedio e profili regolatori*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, n. 2/2021, p. 507 ss.; F. PIRAINO, *Contratto ed emergenza sanitaria in Italia*, in *Revista de Direito da Cidade*, n. 3/2021, p. 1531 ss.; M. FRANZONI, *El Covid 19 y la ejecución del contrato*, in *Revista cubana de derecho*, n. 2/2021, p. 247 ss.; C. MARCHETTI, *Pacta sunt servanda ai tempi del Covid-19*, in R. E. CERECIA (a cura di), *Percorsi di diritto comparato*, Milano, 2021, p. 57 ss.; O. CLARIZIA, *Coronavirus ed esonero da responsabilità per inadempimento di obbligazione ex art. 1218 c.c.: impossibilità sopravvenuta oppure inesigibilità della prestazione?*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 12/2020, pp. 352-365; E. DAMIANI, *Le tutele civilistiche per i contratti iniqui stipulati a causa della diffusione del coronavirus*, in *Judicium*, 9 maggio 2020, consultabile *online*; V. DI CATALDO, *Pandemia, imprese e contratti di durata*, in *Osservatorio del diritto commerciale*, n. 3/2020, consultabile *online*; A. LESTINI, *La c.d. “clausola di irresolubilità”: tra sopravvenienze e rimedi contrattuali preventivi*, in *Ratio iuris*, 30 marzo 2021, consultabile *online*; A. FEDERICO, *Misure di contenimento della pandemia e rapporti contrattuali*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 12bis/2020, pp. 236-249; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 12bis/2020, pp. 422-433; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi ai tempi del Covid-19*, in *Jus civile*, n. 2/2020, p. 465 ss.; V. ROPPO, R. NATOLI, *Contratto e Covid-19*, in *Giustizia insieme*, 28 aprile 2020, consultabile *online*; S. ACETO DI CAPRIGLIA, *Effetti del lockdown sui contratti di diritto privato. Un dialogo tra esperienze giuridiche*, in *Federalismi*, n. 3/2022, p. 1 ss.

¹⁷⁴ In tal senso, si veda V. BELLOMIA, *Il contratto intelligente: questioni di diritto civile*, in *Judicium*, 10 dicembre 2020, consultabile *online*, ove l’A. evidenzia che: “Emerge da questa breve panoramica che lo studio sulla compatibilità tra la *blockchain*, in particolare pubblica e *permissionless*, e la vigente *data protection law* è ampiamente e tuttora in corso, alla ricerca delle indispensabili soluzioni tecniche. Se queste ultime saranno trovate e si riveleranno efficaci e



Inoltre, anche l'intenzione "comune" delle parti andrà valutata secondo una dimensione "elettronica"¹⁷⁵. L'interpretazione della legge in generale, e ancora del contratto, dovrà essere necessariamente conformata alle nuove regole algoritmiche¹⁷⁶. Insomma, il diritto privato *tout court* inteso subisce una evoluzione continua, ma le regole civilistiche sembrano ben resistere¹⁷⁷, specie nel fatto che il contratto debba realizzare (e, in questa dimensione, va letto e interpretato) sempre e comunque i diritti della persona¹⁷⁸.

La determinazione algoritmica, invece, dell'oggetto del contratto è consentita per le stesse ragioni poc'anzi esposte. Tutto ciò che è mero procedimento potrebbe essere sostituito dalla macchina. Una valutazione

conformi alla legislazione vigente – la quale non è peraltro affatto escluso possa aggiornarsi nel prossimo futuro con espresso riferimento proprio a tali fenomeni ed alle irrisolte problematiche – il sistema potrà legittimamente e proficuamente trovare applicazione nell'ordinamento, anche da questo punto di vista"; A. M. BENEDETTI, *Contratto, algoritmi e diritto civile transnazionale: cinque questioni e due scenari*, in *Riv. dir. civ.*, n. 1/2021, p. 1 ss.; G. CASTELLANI, *Smart contracts e profili di diritto civile*, in *Comp. dir. civ.*, pp. 1-14 consultabile *online*; A. GALIANO, A. LEOGRANDE, S. F. MASSARI, A. MASSARO, *I processi automatici di decisione: profili critici sui modelli di analisi e impatti nella relazione con i diritti individuali*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 2/2019, p. 41 ss.; M. CRISAFULLI, *L'era degli Smart Contracts: potenzialità e limiti di uno strumento rivoluzionario*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, n. 3/2021, p. 1 ss.

¹⁷⁵ Ciò spiega il motivo per il quale anche l'interpretazione della norma in generale, e più specificamente l'interpretazione del contratto, siano costrette a subire una modifica. In tal senso, per un adeguamento interpretativo, si legga, E. DAMIANI, *Trasformazione digitale ed evoluzione dell'interpretazione giuridica*, in questa rivista, n. 2/2021, p. 13 ss.

¹⁷⁶ Sul punto, si rinvia a P. PERLINGIERI, *Struttura algoritmica e interpretazione*, in questa rivista, n. 2/2020, p. 484 ss.

¹⁷⁷ In tal senso, si veda C. PERLINGIERI, *Diritto privato delle nuove tecnologie*, in questa rivista, n. 2/2021, p. 71, la quale pone in evidenza che: "(...) alla luce di queste considerazioni necessario è il tentativo di riflessione sull'attuale ruolo del civilista seriamente minacciato dal dominio tecnologico (...), ma la tempo stesso fortemente convinto di volere salvaguardare il diritto nel suo essere umano al fine di impedire la formazione di un diritto nuovo e diversamente declinato dall'applicazione delle procedure algoritmiche frutto del solo pensiero calcolante".

¹⁷⁸ Si veda, proprio in tal senso, L. VALLE, *Il contratto e la realizzazione dei diritti della persona*, Torino, 2020, specie p. 7, ove l'A. ben mette in evidenza che: "Questa separazione tra diversi ambiti dell'ordinamento giuridico, del diritto contrattuale rispetto a quello dei diritti della persona, che si è associata alla distinzione tra la regolazione della sfera delle situazioni e dei rapporti giuridici patrimoniali rispetto quella delle situazioni e dei rapporti non patrimoniali, appare oggi non più attuale alla luce del concorso di più fattori". In completo accordo si trova la visione, sempre attuale, di P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 715, ove si criticano i c.dd. "diritti della personalità". Questa è la logica per la quale si legge l'art. 2059 c.c. in ottica costituzionalmente orientata, come una clausola aperta, esattamente come l'art. 2 Cost.



standardizzata, ad esempio, potrebbe essere facilmente rimpiazzata da un *software*¹⁷⁹.

Tema interessante, che sta emergendo sempre con più forza, è quello relativo all'eredità digitale. Tutto ciò che una persona lascia disseminato in rete, sui *social networks*, sulle piattaforme *online*¹⁸⁰ e così via, dopo la sua morte, che tutela avrà?

¹⁷⁹ Si pensi all'adozione di un decreto ingiuntivo in ambito processuale civile, ove al giudice spetta solo la valutazione della sussistenza dei presupposti di legge *ex art.* 633 ss. c.p.c. Si pensi, ancora, sempre in ambito processuale, alla valutazione dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (artt. 348*bis* e 360*bis* c.p.c.). In tal caso, con delle banche date di tracciamento, potrebbe essere semplice uno snellimento accelerato del processo, anche per perseguire ragioni di economicità e durata ragionevole del processo. In tal senso, infatti, ovvero nel rapporto tra processo e I.A., bisogna che sia raggiunto sempre il rispetto di tutti i valori contenuti nell'art. 111 Cost., tanto che si potrebbe parlare di un "giusto processo elettronico". Su tale aspetto, anche in un'ottica di abbattimento del contenzioso, si rinvia a A. CARLEO, *Sugli algoritmi nel contratto? per ridurre il contenzioso?*, in ID. (a cura di), *Decisione robotica*, cit., p. 203 ss.

¹⁸⁰ A proposito delle piattaforme, altro tassello necessario è l'individuazione di un "responsabile" qualora i contenuti "presentati", "immessi" o "ospitati" sulle stesse cagionino dei danni patrimoniali o non patrimoniali alla persona umana. Nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, la responsabilità dell'hosting provider, prevista dall'art. 16, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, nonché se abbia continuato a pubblicarli, pur quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure *aliunde*; b) l'illiceità dell'altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde questi sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere. Sulla c.d. "responsabilità civile dell'hosting provider" (pur in mancanza di un obbligo generale di sorveglianza, gli *internet service provider* rispondono civilmente del contenuto dei servizi se, richiesti dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non agiscono prontamente per impedire l'accesso al contenuto di tali servizi), si rinvia a C. D'URSO, *I profili informatici nella valutazione della responsabilità dell'Hosting Provider*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 1/2021, p. 79 ss.; A. LA ROSA, *I profili di responsabilità di Amazon in quanto hosting attivo*, in *Diritto di internet*, 7 aprile 2021, consultabile *online*; R. COSIO, *La responsabilità del prestatore di servizi di hosting*, in *Jus civile*, n. 4/2020, p. 887 ss.; G. D'ALFONSO, *Verso una maggiore responsabilizzazione dell'hosting provider tra interpretazione evolutiva della disciplina vigente, innovazioni legislative e prospettive de jure condendo*, in *Federalismi*, n. 2/2020, p. 108 ss.; S. SICA, *Giurisprudenza nazionale ed europea e frammentazione legislativa della responsabilità civile del provider*, in *Comp. dir. civ.*, n. 2/2019, p. 353 ss.; M. D'AMBROSIO, *Tutela dei diritti della personalità nella rete: ruolo del provider nella fruizione dei servizi online e (a) territorialità dell'ingiunzione di rimozione dei contenuti illeciti*, in questa rivista, n. 2/2020, p. 582 ss.; M. FOTI, *Contraffazione online: il ruolo degli Internet Service Providers nell'uso illecito del marchio altrui*, in questa rivista, n. 2/2020, p. 604 ss.; M. BELLI, *Sui presupposti e sui limiti della tutela esperibile nei confronti dell'internet service provider (hosting e caching) la Cassazione tenta*



Si pensi, per esempio, anche al testamento olografo elettronico che, in realtà, come detto in apertura del lavoro, potrebbe rientrare nella branca dell'informatica giuridica, in quanto mero mezzo giuridico-telematico di snellimento procedurale. In tale ultimo caso, si riuscirebbe a garantire il rispetto della data, della presenza (fisica o anche "da remoto" dei testimoni) e della sottoscrizione (in presenza o "da remoto")? Collegando le norme del codice civile in tema di testamento olografo, con quelle relative al codice dell'amministrazione digitale e – se si vuole – con quelle relative al contenimento dell'epidemia da

di fare chiarezza, in questa rivista, n. 1/2020, p. 299 ss. Si veda, ancora, E. TOSI, *Responsabilità civile degli hosting provider e inibitoria giudiziale dei contenuti digitali illeciti equivalenti tra assenza dell'obbligo di sorveglianza ex ante e ammissibilità ex post*, in *Il diritto degli affari*, n. 1/2020, p.p. 23-24, ove l'A. evidenzia che: "Non si tratta, infatti, di imporre giudizialmente un obbligo generale *ex ante* – vietato, come si è rilevato *supra*, dall'art. 17 del D.lgs. 70/2003 – quanto, invece, di un obbligo particolare – circostanziato – di prevenzione o rimozione di nuove violazioni, ormai prevedibili, relativamente allo stesso contenuto digitale illecito già in precedenza comunicato formalmente all'ISP o a contenuti digitali equivalenti che presentino minime differenze rispetto al contenuto oggetto di inibitoria, tali da non richiedere autonoma valutazione da parte del prestatore di servizi della società dell'informazione. Richiedere tale condotta attiva al prestatore di servizi successivamente all'individuazione di contenuti digitali illeciti da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale – *rectius ex post* – al fine di prevenire la reiterazione della condotta illecita in relazione allo stesso contenuto digitale illecito – o a contenuti digitali equivalenti – pare senza dubbio compatibile, anche a mente del generale principio di bilanciamento dei diritti contrapposti, con la tutela costituzionale della libertà di impresa e più in generale del diritto comunitario"; M. TESCARO, *Una proposta ricostruttiva contrastante con il diritto vivente in tema di responsabilità civile dell'internet provider nel diritto italiano tra Direttiva 2000/31/CE, Regolamento UE 2016/679 e Direttiva UE 2019/790*, in *Jus civile*, n. 1/2020, p. 106, ove, in chiave critica, fa osservare: "Se tutto ciò è esatto, possiamo concludere che il quadro normativo esaminato – che poteva senz'altro essere più chiaramente delineato dal legislatore europeo e da quello nazionale – è, in fin dei conti, ancora orientato a contemperare le varie posizioni tendenzialmente favorendo quella del provider, ciò che può giustificarsi in considerazione dei rilevanti interessi collettivi e individuali che con detta posizione d'ordinario coincidono, essendo del resto il «mercato [...] ancora oggi [...] il perno intorno al quale ruota gran parte del sistema normativo e delle politiche comunitarie». Ma abbiamo anche veduto come larga parte della giurisprudenza tenda e prevedibilmente continuerà a tendere in futuro a modificare il citato contemperamento in favore piuttosto dei titolari di quei diritti, per esempio ma non solo quello alla privacy, che possono entrare in conflitto con la posizione del provider". Da ultimo, dal punto di vista giurisprudenziale, si rinvia a Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 2021, n. 39763, in *E-lex*, 12 gennaio 2022, consultabile *online*, con nota di D. MALANDRINO, *La Cassazione torna a pronunciarsi sulla responsabilità delle piattaforme per contenuti di terzi*, la quale ha statuito che: "n tema di diritto d'autore, la violazione del diritto d'esclusiva che spetta al suo titolare costituisce danno *in re ipsa*, senza che incomba al danneggiato altra prova del lucro cessante che quella della sua estensione, a meno che l'autore della violazione fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili, e tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria con il criterio del prezzo del consenso di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 158, comma 2, terzo periodo, che costituisce la soglia minima di ristoro".



Covid-19, che sempre più stimolano ad una “digitalizzazione” precoce e repentina per far fluire i traffici commerciali ed economici, è auspicabile che una soluzione di sistema possa essere sicuramente approntata¹⁸¹.

Da ultimo, oltre al noto caso del “simulacro digitale”, che rientra nell’alveo della necro-robotica sulla quale ci si è già soffermati, si faccia riferimento alla recentissima pronuncia del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2021, con la quale si è dato ordine ad “Apple” di consegnare a due genitori foto e video del figlio morto¹⁸².

In tale dimensione, ovvero quella dei “beni digitali” (foto, video, scritti e così via), quali regole dovrebbero applicarsi dal punto di vista successorio?¹⁸³

Non c’è bisogno di aggiungere nuove norme a quelle già esistenti che, ancora una volta, sono in grado di sostenere il peso dell’innovazione (si pensi ad

¹⁸¹ Si legge su *AdnKronos*, 26 ottobre 2021, consultabile *online*, che: “Arriva il primo testamento digitale e che viaggia sulla *blockchain*. A lanciare l’innovazione è la *startup* innovativa Lastello fondata nel 2016 con l’obiettivo di aiutare con la tecnologia le persone che devono affrontare un lutto e le sue implicazioni anche attraverso la tecnologia *blockchain* per garantire le ultime volontà. Da oggi la *startup* romana guidata da Gianluca Tursi annuncia la nascita direttamente dal proprio sito del primo testamento digitale che può essere registrato grazie alla tecnologia *blockchain*, una procedura guidata con *wizard* intelligente che aiuterà l’utente nel corso della compilazione attraverso semplici domande e che consente così di predisporre le proprie volontà in modo facile e sicuro; (...) il documento sarà validato dalla procedura informatica creata secondo le norme di compilazione e l’utente dovrà solo trascrivere di proprio pugno e firmare il testo per ottenere il proprio testamento olografo. Per garantire la data di compilazione dell’atto e le volontà in esso contenuto, e quindi renderlo a prova di contraffazione, con Lastello, sarà possibile caricare il testamento sulla *blockchain* di *Ethereum*. Ogni anno si compilano 80.000 di testamenti, circa il 13% della popolazione vuole assicurarsi che le proprie volontà siano rispettate, per un giro d’affari di 30 milioni di euro”. Ma la *blockchain* è affidabile per “consacrare” il testamento olografo? Secondo qualcuno, la risposta deve essere affermativa, in quanto le caratteristiche che rendono la *blockchain* così affidabile sono: decentralizzazione: le informazioni sono registrate tra più nodi del sistema; tracciabilità: ogni elemento del registro è rintracciabile; assenza di intermediari: non vi sono enti centrali, ogni operazione viene effettuata e registrata attraverso i nodi; trasparenza: il contenuto del registro è visibile e consultabile da chiunque; immutabilità: una volta che i dati vengo registrati, non possono essere più modificati senza il consenso della rete. Cfr., sul punto, A. DE LUCIA, *Testamento digitale: finalmente è possibile*, in *www.altalex.it*, 16 dicembre 2021, consultabile *online*.

¹⁸² A tal proposito, su di una c.d. “funzionalizzazione” del diritto alla riservatezza, si rinvia alla riflessione di T. M. UBERTAZZI, *Functional evolution of the right to privacy*, in *Comp. dir. civ.*, n. 3/2021, p. 857 ss.

¹⁸³ In dottrina, si trovano spunti interessanti in A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online: note in tema di eredità digitale*, Napoli, 2020.



combinato disposto dell'art. 810 c.c. con gli articoli del codice civile relativi alla successione *mortis causa*).

Ulteriore profilo è relativo alla tutela della *privacy*¹⁸⁴ che la circolazione di tali beni digitali nel mondo globale (basta un *like*, un *click* per la condivisione affinché continuino a circolare) impone¹⁸⁵. Il diritto alla *privacy* si estingue con la morte del titolare¹⁸⁶? Se si estinguesse, dovrebbero estinguersi anche i beni digitali presenti nella rete e ancora circolanti nel momento nel quale non se ne possa più disporre¹⁸⁷.

Si potrebbe disporre per testamento, anche mediante l'istituzione di un legato (disposizione testamentaria a titolo particolare), che alcuni dati/beni digitali continuino ad essere amministrati? Oppure, si può provvedere alla nomina di un esecutore testamentario che abbia il compito di eseguire le ultime volontà, anche relative ai beni digitali, del *de cuis*¹⁸⁸? Inoltre, la persona può, *ante mortem*,

¹⁸⁴ È d'uopo anche riferirsi al fatto che la *privacy* debba essere ancora più contornata da "maggiore tutela" qualora i beni digitali appartengano a minori. In tale ottica, si rinvia a O. LANZARA, *Il caso Tik Tok: privacy e minori di età*, in *Comp. dir. civ.*, n. 3/2021, p. 977 ss.; A. FERRERO, *Ambiente digitale e tutela dei minori online: la strategia europea*, in *Famiglia*, 8 febbraio 2021, consultabile online, per la quale: "La Commissione europea rispondendo all'interrogazione parlamentare E-005402/2020 ha recentemente ribadito che «il benessere dei bambini online è una delle priorità della Commissione da quando Internet è divenuta ampiamente disponibile anche a loro ed è perseguito tramite finanziamenti il coordinamento con gli Stati membri e un quadro legislativo adatto all'era digitale». Nell'ambito della strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi, la Commissione cofinanzia in tutta Europa i centri per un'Internet più sicura (*Safer Internet Centres*, SIC), che organizzano campagne di sensibilizzazione, forniscono formazione alle famiglie e alle scuole, gestiscono servizi di assistenza telefonica rispondendo a domande su come reagire a contatti pericolosi quali l'adescamento di minori online e mettono a disposizione linee telefoniche dirette per segnalare in modo anonimo materiale pedopornografico in rete".

¹⁸⁵ Sul punto, di recente, si veda L. BOLOGNINI (a cura di), *Privacy e libero mercato digitale*, cit., p. 1 ss.

¹⁸⁶ Ovviamente, salva diversa volontà del titolare, il diritto alla *privacy* non si estingue con la morte. In tal senso, S. ACETO DI CAPRIGLIA, *Vocazione mortis causa negli assets digitali. Una prospettiva comparatistica*, in questa rivista, n. 1/2021, p. 40, ove l'A. sottolinea che: "l'evento morte non può e non deve essere qualificato come estintivo di questi diritti". In tale ottica, anche I. SASSO, *La tutela dei dati personali "digitali" dopo la morte dell'interessato*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2019, p. 181 ss.

¹⁸⁷ Dei riferimenti in tal senso sono stati già posti in rilievo da R. TREZZA, *Diritto e intelligenza artificiale*, cit., p. 29 ss.

¹⁸⁸ L'intuizione viene fuori dopo aver letto le pagine di V. BARBA, *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, Napoli, 2018, p. 7 ss.



decidere di accordarsi con il gestore delle piattaforme digitali (magari sottoscrivendo delle DATD: “disposizioni anticipate di trattamento digitale”, un po’ sulla stessa scorta delle DAT: disposizioni anticipate di trattamento in tema di autodeterminazione della persona umana¹⁸⁹), alle quali ha prestato il proprio consenso alla circolazione dei suoi dati, per la distruzione degli stessi (diritto di cancellazione dei dati, diritto alla deindicizzazione previsto dal nuovo Regolamento *privacy*, diritto all’oblio¹⁹⁰) per il tempo in cui avrà cessato di vivere (ora per allora)¹⁹¹? E un tale accordo potrebbe essere revocato (*rectius* risolto) prima della morte¹⁹²?

¹⁸⁹ Su tale tema, solo per un rapido approfondimento, si rinvia a S. CACACE, A. CONTI, P. DELBON (a cura di), *La volontà e la scienza. Relazione di cura e disposizioni anticipate di trattamento*, Torino, 2019; M. DEL VECCHIO, *I diritti umani nelle disposizioni anticipate di trattamento*, Roma, 2018; M. GABRIELLA DI PENTIMA, *Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Commento alla l. n. 219/2017*, Milano, 2018; E. CALÒ, *Consenso informato e disposizioni anticipate*, Napoli, 2019; U. ADAMO, *Costituzione e fine vita. Disposizioni anticipate di trattamento ed eutanasia*, Padova, 2018. Da ultimo, si rinvia allo scritto di F. PARENTE, *Le disposizioni anticipate di trattamento: struttura, contenuto, forma e pubblicità*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4/2020, p. 1399 ss.

¹⁹⁰ In tal senso, si veda A. G. PARISI, *Privacy e diritto all’oblio*, in *Comp. dir. civ.*, 2016, pp. 1-11; G. VETTORI (a cura di), *Diritto all’oblio e società dell’informazione*, Padova, 2020; S. MARTINELLI, *Diritto all’oblio e motori di ricerca*, Milano, 2017; R. PARDOLESI, *L’ombra del tempo e (il diritto al)l’oblio*, n. 1/2017, consultabile online; E. ERRIGO, *Il diritto all’oblio e gli strumenti di tutela tra tradizione e nuovi contesti digitali*, in *Diritti fondamentali*, n. 1/2021, specie p. 669, ove l’A. afferma che: “Pertanto, è ragionevole affermare che la digitalizzazione ha alimentato le occasioni di aggressione agli interessi e ai diritti c.d. nuovi, rendendo ancora più difficoltosa la possibilità di apprestarne una tutela immediata. Per altro verso, il rilievo che assume l’autodeterminazione informativa come strumento di protezione delle situazioni esistenziali nel contesto digitale deve condurre a propendere per l’elaborazione di nuovi strumenti di protezione, sempre di tipo precauzionale ma concepiti muovendo proprio dalle caratteristiche della rete e affidati al soggetto interessato. Strumenti, quindi, preventivi ma, al contempo, successivi alla pubblicazione, così come ad esempio il potere ascrivibile all’utente di scegliere la durata di archiviazione delle proprie informazioni online prima della pubblicazione o quello di rimuovere, non soltanto alcuni *link* di collegamento, quanto e piuttosto alcune pagine non più aggiornate: soluzioni, dunque, che consentirebbero pur sempre di tutelare l’identità personale, l’esatta percezione della propria vita, la personalità del soggetto, in vista dell’attuazione effettiva delle situazioni esistenziali”; M. A. LIVI, *Quale diritto all’oblio?*, Napoli, 2020, specie p. 113 ss.; F. LAZZARELLI, *Tutela dei dati personali nell’età globale: il diritto all’oblio*, in *Le Corti salernitane*, n. 1/2021, p. 3 ss.

¹⁹¹ Sul punto, sembra andare in questa direzione C. IRTI, *Consenso “negoziato” e circolazione dei dati personali*, Torino, 2021, p. 74 ss.

¹⁹² Riflessioni “interrogative” che vengono sollecitate dalla lettura attenta delle pagine di G. PERLINGIERI, *Il ruolo del giurista nella modernizzazione del diritto successorio tra autonomia ed eteronomia*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, n. 1/2018, p. 1 ss. Tra l’altro, una ricostruzione simile, è offerta da A. DI PORTO, *Avvocato-robot nel “nostro stare decisis”. Verso una consulenza legale “difensiva”*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, cit., p. 239 ss.; G.



Evidentemente, la sfida per il civilista¹⁹³ di un “oggi futuristico” è la tutela della circolazione dei dati personali *post mortem*¹⁹⁴.

La normativa attuale, in tema di beni giuridici¹⁹⁵, di successione a causa di morte e di protezione dei dati personali, già potrebbe consentire (così come consente), anche attraverso un lavoro giudiziale nel senso di un’interpretazione sistematico-teleologica¹⁹⁶, risposte dinamiche e soddisfacenti agli interrogativi sopra posti, specie indirizzate ad una tutela piena della personalità umana¹⁹⁷. È, dunque, il tempo di attribuire ancora più valore alla centralità della persona umana che “naviga” in una cultura ormai fin troppo globalizzata¹⁹⁸.

12. Tutto quanto scritto sino ad ora permette di ricostruire un principio generale su cui fondare il rapporto uomo-macchina: l’eticizzazione *ab origine, in fieri e usque ad finem* della macchina¹⁹⁹.

LAURINI, G. PERLINGIERI, *Professioni legali e nuove tecnologie. Come sarà il notaio del futuro?*, in questa rivista, n. 1/2021, p. 170 ss.

¹⁹³ Cfr., in tal senso, A. ALPINI, *La trasformazione digitale nella formazione del giurista*, in questa rivista, n. 2/2021, p. 11, la quale fa notare che: “ciò che unisce tutte le scienze è la storia dell’uomo e il civilista, assumendo il delicato ruolo di introdurre il giovane studioso alle scienze giuridiche, deve tener conto di questa chiave di lettura”.

¹⁹⁴ Si veda T. E. FROSINI, *Le sfide attuali del diritto ai dati personali*, in S. FARO, T. E. FROSINI, G. PERUGINELLI (a cura di), *Dati e algoritmi. Diritto e diritti nella società digitale*, Bologna, 2020, p. 35 ss.

¹⁹⁵ Su tale aspetto, sembra convenire anche F. CALISAI, *Dati, informazioni e conoscenze: inquadramento giuridico e regolazione. Appunti su un potenziale paradigma appropriativo*, in questa rivista, n. 1/2020, p. 13 ss.

¹⁹⁶ È necessario adoperare una interpretazione teleologico-assiologica specie in relazione ai nuovi risvolti del diritto civile. In tal senso, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 580 ss.

¹⁹⁷ Non si può non rinviare a P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell’ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 12 ss.

¹⁹⁸ Interessanti gli spunti provenienti da A. GORASSINI, *Il valore della cultura giuridica nell’era digitale*, in questa rivista, n. 2/2021, p. 38 ss.

¹⁹⁹ Questa è la ragione per la quale chi scrive ha avuto modo di disegnare questo fenomeno con il termine “meritevolezza ciclica”. Cfr. R. TREZZA, *Artificial Intelligence Act*, cit., p. 60 ss.



Oltre ad un processo di umanizzazione della macchina²⁰⁰, per il quale ci si sta battendo, bisogna anche pensare ad un processo che non consenta mai la disumanizzazione dell'uomo attraverso la macchina²⁰¹.

Il sorvegliante, il controllore, il previsore, l'agente finale della macchina deve e dovrà essere sempre l'uomo, il quale vaglierà (nel mondo giuridico primariamente si tratta dell'*homo juridicus*) la meritevolezza (ontologica, deontologica e fenomenologica) di qualsiasi sistema intelligente, il quale per poter "coesistere" deve fondarsi su alcuni principi che di seguito si sintetizzano.

Il primo è rappresentato dall'intuizione, per il quale la macchina deve saper adattarsi all'uomo (si pensi al caso delle *driverless cars*²⁰²).

Il secondo è dato dalla intelligibilità, per mezzo del quale l'uomo deve intuire ciò che fa la macchina²⁰³. In tal senso, oltre agli "algoritmi definitivi", quelli che non hanno necessità di essere iniettati di valori giuridici perché deputati a compiti che non hanno a che fare con la persona umana, ma solo con la materialità monotona (si pensi alle macchine industriali²⁰⁴), vi sono gli "algoritmi ottimizzatori"

²⁰⁰ Cfr. P. BENANTI, il quale, intervistato da *Sir – Agenzia di informazione*, evidenzia che bisogna "umanizzare la tecnica e non macchinizzare l'uomo". Serve, dunque, un "algor-etica", consultabile *online*, 25 febbraio 2020.

²⁰¹ Si rinvia a R. TREZZA, *Diritto e intelligenza artificiale*, cit., p. 27; R. TREZZA, *I diritti della persona tra "tecniche" e "intelligenze" artificiali*, cit.

²⁰² Sul tema, tra tutti, si veda E. AL MUREDEN, *Sicurezza "ragionevole" degli autoveicoli e responsabilità del produttore nell'ordinamento giuridico italiano e negli Stati Uniti*, in *Contr. impr.*, 2012, p. 1508 ss.; A. ALBANESE, La responsabilità civile per i danni da circolazione di veicoli ad elevata automazione, in *Europa e diritto privato*, n. 4/2019, p. 995 e ss.; M. TAMPERI, *L'intelligenza artificiale: una nuova sfida anche per le automobili*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 745 ss.; G. CALABRESI, E. AL MUREDEN, *Driverless cars. Intelligenza artificiale e futuro della mobilità*, Bologna, 2021; V. V. CUOCCI, *Guida autonoma, intelligenza artificiale e sistemi assicurativi no-fault. Alcuni riflessioni comparative*, in *Comp. dir. civ.*, n. 1/2021, p. 255 ss.

²⁰³ Interessante, in tal senso, è la riflessione che porta avanti A. ALPINI, *Identità, creatività e condizione umana nell'era digitale*, in questa rivista, n. 1/2020, pp. 4-12.

²⁰⁴ Sul punto, si veda A. FRISOLI, *Robotica collaborativa, perché è la chiave per l'industria 5.0*, in *Agenda digitale*, 21 aprile 2021, consultabile *online*, ove si parla di "robotica collaborativa" e di "industria 5.0.". Inoltre, in accordo con l'A., si auspica che la robotica possa essere utilizzata nella c.d. "manutenzione predittiva". L'A., infatti, evidenzia che: "Non da ultimo, e non meno trascurabile, è la categoria dei robot per ispezione e per la manutenzione, che grazie alle tecnologie di visione artificiale potenziate dall'Intelligenza Artificiale sono in grado di potenziare il paradigma della manutenzione predittiva, ovvero un tipo di manutenzione che prevede ed anticipa



che, *ex adverso*, hanno la necessità di essere improntati eticamente e di essere valutati come meritevoli prima del loro utilizzo in quanto aventi a che fare *strictu sensu* con la persona umana.

Il terzo è relativo al concetto di adattabilità, secondo il quale la macchina deve adattarsi all'ambiente in cui l'uomo vive e alla personalità umana, in modo tale che anche l'I.A., nel suo complesso, possa perseguire l'obiettivo primario di tutela della vita umana e di miglioramento, qualora vagliata meritevole nella sua creazione ontologica, nel suo adattamento itinerante e nella sua finalità specifica, delle condizioni della persona umana, permettendo uno sviluppo quanto più armonico possibile della stessa²⁰⁵.

In ultimo, invece, vi è il principio dell'adeguatezza obiettiva, per il quale bisogna stabilire le priorità (obiettivi) operative dell'algoritmo che non sono in esso, ma nella persona che è *sedes dignitatis* per eccellenza²⁰⁶.

il guasto, attraverso la misura con sistemi di sensori di parametri fisici di sistema e di modelli matematici che consentono di identificare il tempo residuo prima del guasto". Anche qui, la figura umana non potrà scomparire in quanto avrà l'onere di inserire nel robot le "variabili captomanutentive".

²⁰⁵ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 713 ss.

²⁰⁶ Sul rapporto tra scienza e dignità, si rinvia a F. RIGANO, *Scienza e dignità della persona*, in *Il Politico*, n. 3/2009, pp. 100-107. Si veda, ancora, U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Bari-Roma, 2009, p. 7 ss.; E. MAESTRI, *Genealogie della dignità umana*, in *Diritto e Questioni pubbliche*, n. 9/2009, p. 509 ss.; G. BARDONE, *La dignità della persona umana e le leggi sul volontariato*, Napoli, 2012; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 184 ss.; G. TARANTINO, *Autonomia e dignità della persona umana*, Milano, 2018. Da ultimo, invece, si rinvia a C. SCOGNAMIGLIO, *Dignità dell'uomo e tutela della personalità*, in *Giustizia civile*, n. 1/2014, consultabile *online*, ove si legge che: "Muovendo, infatti, dalla premessa, sulla quale ci si è soffermati in precedenza, della centralità del valore della persona, e del principio di dignità della medesima nel vigente ordinamento, lo strumento della condanna risarcitoria per danno morale soggettivo, commisurata alla serietà e gravità della lesione, può presidiare efficacemente la dignità della persona. La negazione del valore della persona, e della sua dignità, che il fatto produttivo di danno morale abbia potuto determinare, trova, dunque, risposta, da parte dell'ordinamento, nella condanna risarcitoria adottata a carico del responsabile (...). Intesa nei termini che si sono da ultimo tratteggiati, la condanna risarcitoria per danno morale soggettivo si presta davvero a presidiare la ricchezza simbolica e semantica della dignità della persona: e qui la suggestione della linguistica ci rammenta che il termine degno evoca ciò che è fine, bello, propizio, elevato e, dunque merita rispetto, ma richiama anche, con un'etimologia che è stata definita forse più poetica che scientifica, ma proprio per questo forse più suggestiva, un fuoco alla radice della dignità. Un fuoco che è all'origine di tutte le cose, e, dunque, anche dell'essere-persona, ma che anche segno della loro trasformazione continua: ed è proprio quale presidio giuridico della continua trasformazione, che vuol dire anche incompressibile individualità, della dignità umana che



In un ambiente misto è la persona e il suo valore unico ciò che stabilisce e gerarchizza le priorità: è il *robot* che coopera con l'uomo, in una visione servente e funzionale, e non l'uomo che diventa succube della macchina²⁰⁷.

È importante affermare, in chiusura del presente lavoro, che l'uomo dovrà sempre essere attento controllore²⁰⁸ della macchina e mai suo schiavo²⁰⁹.

Non focalizzarsi, in definitiva, solo sull'intelligenza artificiale, perché, altrimenti, si rischia di perdere di vista l'intelligenza umana che è capace di pensare "criticamente", "dignitosamente", "umanamente" appunto²¹⁰. L'algoritmo deve, dunque, essere "pensante", ma solo grazie all'intervento inscindibile ed

la condanna risarcitoria per danno morale soggettivo può dispiegare una funzione di fondamentale importanza". In chiave comparatistica, si può leggere F. FERNANDEZ SEGADO, *La dignità della persona come valore supremo dell'ordinamento giuridico spagnolo e come fonte di tutti i diritti*, in *Forum costituzionale*, 2014, pp. 1-22, consultabile *online*. Infine, non si può non rinviare a P. PERLINGIERI, *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, in *Annali SISDIC*, n. 5/2020, p. 1 ss.

²⁰⁷ Spunti di riflessione arrivano leggendo le pagine di A. ALPINI, *Sull'approccio umano-centrico all'intelligenza artificiale. Riflessioni a margine del "Progetto europeo di orientamenti etici per una IA affidabile"*, in www.comparazionedirittocivile.it, per la quale, specie a p. 9, in maniera del tutto condivisibile, "(...) proprio la caratterizzazione del post-moderno come di un locus senza centro avvalorava la necessità di rinviare all'ordine costituzionale³³. Il rischio da tenere in conto è che dietro il rassicurante approccio etico e, dunque, attraverso la c.d. etica applicata, proliferi un processo di ibridazione tra norme tecniche e norme giuridiche, una sorta di diritto eticizzato che assume quale paradigma conoscitivo il modello macchinico anziché il valore della persona. Tale supremo valore rischierebbe di essere compromesso dalla incontrollabile contaminazione artificiale, rischio al quale non si può mostrare indifferenza salvo voler rimanere ciecamente ancorati al mondo della finzione".

²⁰⁸ Vi è, dunque, la necessità che l'uomo controlli gli algoritmi o che l'uomo progetti "umanamente" algoritmi in grado di controllare gli algoritmi originari e funzionali. In tal senso, si rinvia a C. MOTTURA, *Decisione robotica negoziale e mercati finanziari. Contrattazione algoritmica, nuovi abusi di mercato, algoritmi di controllo (degli algoritmi)*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, cit., p. 265 ss.

²⁰⁹ Cfr. R. BODEI, *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale*, Bologna, 2019, p. 19 ss.

²¹⁰ Cfr. S. GAZZIANO, *Dall'intelligenza artificiale all'intelligenza umana*, Santarcangelo di Romagna, 2018.



indefettibile dell'uomo²¹¹, il quale potrebbe assurgere a figura "antro-noma²¹²", non dovrebbe obbedire alla macchina, ma farsi obbedire²¹³.

E per fare questo, nel mondo della *Smart Law*²¹⁴ e del *post-umano*²¹⁵, bisogna solo insegnare ai futuri civilisti²¹⁶ che le vecchie categorie, interpretate

²¹¹ Sul punto, si rinvia a C. BARONE (a cura di), *L'algoritmo pensante. Dalla libertà dell'uomo all'autonomia delle intelligenze artificiali*, Trapani, 2020. Sulla stessa lunghezza d'onda, anche I. A. NICOTRA, V. VARONE, *L'algoritmo, intelligente ma non troppo*, in *Rivista AIC*, n. 4/2019, pp. 1-21.

²¹² Cfr. V. MARCHETTI, *Condizione digitale e dignità umana*, in *Città nuova*, 16 novembre 2021, consultabile *online*, ove si legge: "(...) l'emergere di una nuova figura professionale. L'antro-nomo, cioè una persona che pone l'umano come norma all'interno di un processo di innovazione e in una condizione digitale". Questa è una proposta di don Luca Peyron, docente all'Università Cattolica e responsabile dell'Apostolato digitale della Diocesi di Torino.

²¹³ Sul punto, di recente, si è espresso N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti*, Milano, 2021, pp. 159, 162, 166.

²¹⁴ Sulla necessità di preferire la "formuletta" *Smart Law* a quella della *Big Law*, si veda V. ROPPO, *Il racconto della legge. Diritto (e rovesci) di una storia che riguarda tutti*, Milano, 2019, specie p. 526.

²¹⁵ In tal senso, si veda P. STANZIONE, *Biodiritto, Postumano e Diritti Fondamentali*, in *Comp. dir. civ.*, 2010, specie p. 15, ove l'A. afferma che: "Potrebbe dirsi, in tal senso, che l'epoca del postumano non potrà che essere un'epoca di diritto poliforme, molto meno legato a nozioni statiche e molto più veloce nel proprio divenire, necessariamente guidato in questo processo da giuristi che conservino sempre, come stella polare del proprio agire, la centralità della persona umana senza declinazioni ed artificiali sottocategorie. In questo senso, il confronto con il tema del postumano impone, probabilmente, l'avvento di un nuovo tipo di giurista, capace di liberarsi dai pregiudizi e dai vecchi schemi, una sorta di superuomo nell'originario e puro significato nietzscheano, dove l'esatta traduzione dal tedesco Über-Mensch (letteralmente, Oltreuomo) non implica alcuna notazione di superiorità o sopraffazione, bensì un procedere secondo valori e sentimenti che vanno al di là delle convenzioni e dei pregiudizi che comunemente affliggono l'uomo".

²¹⁶ Molte sono le provocazioni e gli stimoli che provengono da P. PERLINGIERI, *Sull'insegnamento del "diritto privato" nelle "Facoltà giuridiche"*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2/2019, p. 363 ss.; ID., *Una lezione agli studenti della "Federco II". Il "diritto privato" nell'unità del sistema ordinamentale*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2/2019, p. 402 ss.; A. VILLELLA, *Principi generali e ruolo dell'interprete tra dinamicità ed unità del sistema*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2/2019, p. 519 ss.; A. A. CARRABBA, *Insegnamento tra tradizione e modernità: ritorno al futuro?*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2/2019, p. 632 ss.; M. PENNASILICO, *L'insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche attuali (Manifesto per un diritto privato ecosostenibile)*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2/2019, p. 641 ss. In sintonia con Pennasilico, di recente, anche M. GIORGIANNI, *Il contratto "sostenibile". Riflessioni attorno a una categoria controversa*, in *Comp. dir. civ.*, n. 2/2021, p. 755 ss.



sistematicamente²¹⁷, e improntate ad una dimensione teleologico-assiologica²¹⁸, nonché ragionevole²¹⁹, siano ancora oggi in grado di reggere le nuove sfide del diritto civile²²⁰.

Bibliografía

- A. A. CARRABBA, *Insegnamento tra tradizione e modernità: ritorno al futuro?*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2/2019.
- A. A. MARTINO, *Chi teme i giudici robot*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 2/2020.
- A. A. MOLLO, *Successione "mortis causa" nel patrimonio digitale e diritto alla protezione dei dati personali*, in *Familia*, 2020.
- A. ALBANESE, *La responsabilità civile per i danni da circolazione di veicoli ad elevata automazione, in Europa e diritto privato*, n. 4/2019.
- A. ALOISI, V. DE STEFANO, *Il tuo capo è un algoritmo. Contro il lavoro disumano*, Roma-Bari, 2020.
- A. ALPINI, *Digital divide, censura digitale e antropocentrismo dei dati*, in *Comp. dir. civ.*, n. 3/2021.
- A. ALPINI, *Identità, creatività e condizione umana nell'era digitale*, in questa rivista, n. 1/2020, pp. 4-12.
- A. ALPINI, *La trasformazione digitale nella formazione del giurista*, in questa rivista, n. 2/2021.
- A. ALPINI, *Sull'approccio umano-centrico all'intelligenza artificiale. Riflessioni a margine del "Progetto europeo di orientamenti etici per una IA affidabile"*, in www.comparazionediritto.civile.it
- A. AZZARITI, *Attacchi con i droni: profili di diritto internazionale*, in *Cyber Laws*, 19 novembre 2018, consultabile *online*.
- A. BIANCARDO, *Problematiche etico giuridiche relative all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario*, in *Jus online*, n. 3/2021, pp. 1-51.
- A. C. NAZZARO, *Cyberbullismo*, in questa rivista, n. 2/2020.

²¹⁷ Cfr. P. MADDALENA, *Interpretazione sistematica e assiologica*, in *Giust. civ.*, 2009, p. 65 ss. Si rinvengono considerazioni sul punto anche in P. PERLINGIERI, *Francesco Gentile e la legalità costituzionale: dalla diffidenza alla piena sintonia*, in *L'Ircocervo*, n. 3/2015, p. 41 ss.

²¹⁸ *In primis*, P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4/1985, p. 1 ss.; ID., *Interpretazione sistematica e assiologica, situazione soggettive e rapporto giuridico*, Napoli, 2006; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 580 ss. Si veda, inoltre, la nuova edizione del manuale di P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vo. 2 "Fonti e interpretazione", Napoli, 2020, specie p. 333 ss.

²¹⁹ Sul punto, si faccia riferimento a G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, p. 1 ss.

²²⁰ Si rinvia sempre a V. ROPPO, *Il racconto della legge*, cit., specie p. 527. Si faccia anche riferimento al fatto che proprio quest'anno ricorrono gli 80 anni dall'entrata in vigore del codice civile italiano (16 marzo 1942), al quale, ancora una volta, come àncora di salvezza categoriale, insieme al "baluardo e alla bussola ordinamentale" rappresentati dalla Costituzione, bisogna rivolgersi per addivenire a soluzioni nuove per problemi nuovi.



- A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Cybercrime*, Milano, 2019.
- A. CASTAGNEDI, *La grande corsa verso un modello di Intelligenza Artificiale affidabile: il Parlamento Europeo propone un nuovo regime di responsabilità civile*, in *Eurojus*, n. 2/2021
- A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell'età globale*, Roma-Bari, 2008.
- A. CELOTTO, *La Corte costituzionale. Quando il diritto giudica la politica*, Bologna, 2018.
- A. CONFALONIERI, *L'AI deve apprendere i valori dell'UE e il rispetto dei diritti umani*, in www.unionedirittiumani.it, 31 marzo 2021, consultabile online.
- A. CONTALDO, D. MULA (a cura di), *Cybersecurity law. Disciplina italiana ed europea della sicurezza cibernetica anche alla luce delle norme tecniche*, Pisa, 2020
- A. CONTALDO, F. CAMPORA, *Blockchain, criptoalute, smart contract, industria 4.0*, Pisa, 2019.
- A. D'ALOIA, *Intelligenza artificiale e diritto: Come regolare un mondo nuovo*, Milano, 2021.
- A. D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, Pisa, 2020.
- A. DAVOLA, "Blockchain" e "Smart Contract as a Service" (SCaaS): prospettive di mercato a criticità normative delle prestazioni BaaS e SCaaS alla luce di un'incerta qualificazione giuridica, Relazione al Convegno "La grande innovazione e le sue regole: Intelligenza artificiale, Data analysis, Tecnologia blockchain", Parma, 25 ottobre 2019, in *Il Diritto industriale*, n. 2/2020, pp. 147-156.
- A. DAVOLA, *Algoritmi decisionali e trasparenza bancaria. Il paradigma dell'inerenza nella regolamentazione delle tecnologie emergenti*, Milano, 2020, con recensione di G. CAZZETTA, in questa rivista, n. 2/2020.
- A. DE BERARDINIS, *La responsabilità del produttore*, in G. Alpa (a cura di), *I precedenti. La formazione giurisprudenziale del diritto civile*, II, Torino, 2000.
- A. DE LA OLIVA SANTOS, "Giustizia predittiva", interpretazione matematica delle norme, sentenze robotiche e la vecchia storia del "Justizklavier", in *Rivista Trimestrale Diritto e Procedura Civile*, n. 3/2019, pp. 883-895.
- A. DE LUCIA, *Testamento digitale: finalmente è possibile*, in www.altalex.it, 16 dicembre 2021, consultabile online.
- A. DI CORINTO, *Siamo pronti a vivere nell'età dell'essere umano "aumentato"? Il potenziamento del corpo umano è ormai una realtà tecnologica. Ora la sfida è mettere al sicuro i dati e prevenire gli attacchi informatici*, in www.wired.it, 24 marzo 2021, consultabile online.
- A. DI MARTINO, *Intelligenza artificiale e decisione amministrativa automatizzata*, in questa rivista, n. 1/2020, pp. 83-112.
- A. DI MARTINO, *Intelligenza artificiale e decisione amministrativa automatizzata*, in questa rivista, n. 1/2020.
- A. DI PORTO, *Avvocato-robot nel "nostro stare-decisis". Verso una consulenza legale "difensiva"*, pp. 239-250.
- A. DIDONE (a cura di), *Le riforme del processo civile: dalla digitalizzazione del processo alla negoziazione assistita*, Milano, 2014.
- A. DIDONE, F. DE SANTIS (a cura di), *Il processo civile solidale. Dopo la pandemia*, Milano, 2020.
- L. G. VELANI, *Gestione dell'emergenza Covid-19 e processo penale: un prodotto discutibile destinato a imporsi stabilmente?*, in *Leg. pen.*, 7 maggio 2020, pp. 1-42, consultabile online.
- A. DONINI, *Profilazione reputazionale e tutela del lavoratore: la parola al Garante della Privacy*, in *Labour Law & Law Issues*, n. 1/2017.
- A. FAZIO, *Globalizzazione, diritto, persona, Lectio magistralis* tenuta in occasione del conferimento ad honorem del titolo di *Doctor of Laws*, Roma, 21 luglio, 2002, consultabile online.



- A. FEDERICO, *Equilibrio e contrattazione algoritmica*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2/2021.
- A. FEDERICO, *Misure di contenimento della pandemia e rapporti contrattuali*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 12bis/2020, pp. 236-249.
- A. FERRERO, *Ambiente digitale e tutela dei minori online: la strategia europea*, in *Familia*, 8 febbraio 2021, consultabile *online*.
- A. FORZA, *Neuroscienze e diritto*, in *Rivista penale*, n. 3/2009.
- A. FRISOLI, *Robotica collaborativa, perché è la chiave per l'industria 5.0*, in *Agenda digitale*, 21 aprile 2021, consultabile *online*.
- A. FUSARO, *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020.
- A. G. PARISI, *Privacy e diritto all'oblio*, in *Comp. dir. civ.*, 2016, pp. 1-11.
- A. GALIANO, A. LEOGRANDE, S. F. MASSARI, A. MASSARO, *I processi automatici di decisione: profili critici sui modelli di analisi e impatti nella relazione con i diritti individuali*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 2/2019.
- A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, Bologna, 2021.
- A. GORASSINI, *Contributo per un sistema della responsabilità del produttore*, Milano, 1990.
- A. GORASSINI, *Il valore della cultura giuridica nell'era digitale*, in questa rivista, n. 2/2021.
- A. LA ROSA, *I profili di responsabilità di Amazon in quanto hosting attivo*, in *Diritto di internet*, 7 aprile 2021, consultabile *online*.
- A. LA TORRE, *I robot fra responsabilità e assicurazione*, in *Rivista Assicurazioni*, n. 3/2019.
- A. LEPORE, *I.A. e responsabilità civile. Robot, autoveicoli e obblighi di protezione*, in questa rivista, n. 1/2021.
- A. LESTINI, *La c.d. "clausola di irresolubilità": tra sopravvenienze e rimedi contrattuali preventivi*, in *Ratio iuris*, 30 marzo 2021, consultabile *online*.
- A. LONGO, G. SCORZA, *Intelligenza artificiale. L'impatto sulle nostre vite, diritti e libertà*, Milano, 2020.
- A. M. BENEDETTI, *Contratto, algoritmi e diritto civile transnazionale: cinque questioni e due scenari*, in *Riv. dir. civ.*, n. 1/2021.
- A. M. C. MONOPOLI, *Roboetica: spunto di riflessione*, Roma, 2011.
- A. M. GAMBINO, A. STAZI, D. MULA, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, Torino, 2019.
- A. M. LECIS, *La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte finalmente pronta ad accogliere amicus curiae e esperti dalla porta principale*, in *Rivista di diritti comparati*, 23 gennaio 2020, consultabile *online*.
- A. MANGIARACINA, *Nuove fisionomie del diritto al silenzio. Un'occasione per riflettere sui vuoti domestici ... e non solo*, in *Processo penale e giustizia*, n. 4/2021, consultabile *online*.
- A. MENDOLA, *Atto di consumo e libertà di scelta nel social media marketing*, in *Rivista di diritto privato*, 2022.
- A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in *Forum costituzionale*, n. 4/2015.
- A. MORRONE (a cura di), *La corte costituzionale. Antologia di classici della letteratura italiana*, Torino, 2021.



- A. OCCHIPINTI, *Interpreti e fonti del diritto nella globalizzazione giuridica*, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 1/2019.
- A. PICCHIARELLI, *Per un'intelligenza artificiale a misura d'uomo: una possibile regolamentazione valoriale?*, in *IAIA Papers*, n. 47/2020.
- A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Intelligenze Artificiali e responsabilità civile*, in ID, M. FEOLA, *Diritto delle obbligazioni*, Napoli, 2020.
- A. RICCI, *La reputazione: dal concetto alle declinazioni*, Torino, 2018, con recensione di M. D'AMBROSIO, in questa rivista, n. 1/2020.
- A. ROTONDO, *Prevenzione e contrasto della minaccia informatica in Europa: note a margine del Regolamento (UE) 2019/881*, in questa rivista, n. 1/2020.
- A. RUFINO, *Norma e conflitto. Cultura giuridica e regole sociali, dallo Stato moderno alla società globale*, Milano, 2009.
- A. S. M. ROSETI, *Il COVID-19 riaccende l'eterno conflitto tra il principio pacta sunt servanda e il principio rebus sic stantibus*, in *Il diritto del risparmio*, pp. 1-20, consultabile online.
- A. SANTOSUOSSO, *Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto*, Milano, 2020.
- A. SANTOSUOSSO, *Le neuroscienze e il diritto*, Milano, 2009.
- A. STAZI, *Automazione contrattuale e "contratti intelligenti". Gli smart contracts nel diritto comparato*, Torino, 2019.
- A. STAZI, *Big Data e diritto comparato*, in *Comp. dir. civ.*, n. 2/2019.
- A. STOPPA, *Responsabilità del produttore*, voce del Digesto delle discipline privatistiche (sez. civ.), XVII, Torino, 1998.
- A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online: note in tema di eredità digitale*, Napoli, 2020.
- A. VIGLIANISI FERRARO, *Il diritto di proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la necessità di una maggiore tutela dello stesso a livello nazionale*, in *Revista de estudos constitucionais, hermeneutica e teoria do direito*, 2020.
- A. VIGLIANISI FERRARO, *Il private enforcement in Italia della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a vent'anni dalla sua proclamazione*, in *Novos Estudios Jurídicos*, n. 2/2020.
- E. CANNIZZARO, *La Carta dei diritti fondamentali e la determinazione della intensità della sua tutela*, in *Eurojus*, 7 dicembre 2020, consultabile online.
- A. VIGLIANISI FERRARO, *Le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale ed i potenziali rischi per il diritto alla privacy*, in *Persona e Mercato*, n. 2/2021.
- A. VILLELLA, *Principi generali e ruolo dell'interprete tra dinamicità ed unità del sistema*, in *Rass. dir. civ.*, n. 27/2019.
- A. VUOLO, *Il contraddittorio nei giudizi costituzionali alla luce delle recenti modifiche alle Norme integrative*, in *Federalismi*, n. 16/2020.
- AA. VV., *Atti e procedimenti amministrativi informatici: promossa la P.A. Robot, se l'algoritmo è conoscibile*, in *Giurdanella.it (Rivista di diritto amministrativo)*, 29 aprile 2019, consultabile online.
- AA. VV., *Giurisdizione penale, intelligenza artificiale ed etica del giudizio*, Milano, 2021.
- AA. VV., *Informatica giuridica e informatica forense al servizio della società della conoscenza. Scritti in onore di Cesare Maioli*, Roma, 2018.
- AA. VV., *L'autonomia negoziale nella giustizia arbitrale*, Napoli, 2016.



- AA. VV., *La giustizia predittiva tra machine learning e certezza del diritto*, in *VGen*, consultabile online.
- B. BARBISAN, G. AMATO, *Corte costituzionale e Corti europee. Fra diversità nazionali e visione comune*, Bologna, 2015.
- B. BILOTTA, *Conflitti e istanze di giustizia nelle società contemporanee*, Milano, 2014.
- B. BISOL, A. CARNEVALE, F. LUCIVERO, *Diritti umani, valori e nuove tecnologie. Il caso dell'etica della robotica in Europa*, in *Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy*, n. 1/2014.
- B. BORRILLO, *La tutela della privacy e le nuove tecnologie: il principio di accountability e le sanzioni inflitte dalle Autorità di controllo dell'Unione europea dopo l'entrata in vigore del GDPR*, in *Diritti fondamentali*, n. 2/2020.
- B. NASCIBENE, *Carta dei diritti fondamentali, applicabilità e rapporti fra giudici: la necessità di una tutela integrata*, in *European Papers*, n. 6/2021.
- B. OCCHIUZZI, *Algoritmi predittivi: alcune premesse metodologiche*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 2/2019.
- C. A. AGURTO GONZALES, *El dano a la persona en la experiencia jurídica italiana*, Chile, 2020.
- C. BARONE (a cura di), *L'algoritmo pensante. Dalla libertà dell'uomo all'autonomia delle intelligenze artificiali*, Trapani, 2020.
- C. CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra realtà e virtuale*, in *Dir. inf.*, 2018.
- C. CASONATO, *La scienza come parametro interposto di costituzionalità*, in *Rivista AIC*, n. 2/2016.
- C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 1997.
- C. CASTRONOVO, *Problema e sistema del danno da prodotti*, Milano, 1979.
- C. CHIARELLA, *Lavoro agile: introdotto nell'ordinamento italiano il diritto alla disconnessione*, in *Il Quotidiano giuridico*, 26 maggio 2021, consultabile online.
- C. COSENTINO, *Eteronomia giudiziale e contratto diseguale*, in *Comp. dir. civ.*, pp. 1-20, consultabile online.
- C. D'URSO, *I profili informatici nella valutazione della responsabilità dell'Hosting Provider*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 1/2021.
- C. DELLA GIUSTINA, *Amicus curiae: dalle origini alle modifiche delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale"*, in *Rivista AIC*, n. 3/2020.
- C. DELLA GIUSTINA, *Quando il datore di lavoro diviene un algoritmo: la trasformazione del potere del datore di lavoro in algocrazia. Quale spazio per l'applicazione dei principi costituzionali?*, in *Media Laws*, n. 2/2021.
- C. FISCALE, F. DEL MONTE, A. FELICIANI E G. ARENACCIO, *La firma elettronica e il documento informatico: come semplificare la sottoscrizione e conclusione dei contratti durante il lockdown*, in *Dir. banc.*, 26 marzo 2020, consultabile online.
- C. GALANTE, *L'AI incontra la Psicologia: l'Intelligenza Artificiale Emotiva*, in *www.psicologinews.it*, 11 gennaio 2022, consultabile online.
- C. GRANDI, *Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?*, Torino, 2016.
- C. IAGNEMMA, *I 'robot medici': profili problematici in tema di alleanza terapeutica e di responsabilità penale*, in *Corti supreme e salute*, n. 2/2020.
- C. IORIO, *Intelligenza artificiale e responsabilità: spunti ricostruttivi*, in questa rivista, n. 2/2021.
- C. IRTI, *Consenso "negoziato" e circolazione dei dati personali*, Torino, 2021.



- C. M. MASIERI, *Linee guida e responsabilità civile del medico. Dall'esperienza americana alla legge Gelli-Bianco*, Milano, 2019.
- C. MACCAFERRI, *Il corpo nell'era digitale: dal simulacro alla performance capture*, tesi di dottorato discussa presso l'Università del Sacro cuore di Milano nell'anno accademico 2011-2012, consultabile [online](#).
- C. MARCHETTI, *Pacta sunt servanda ai tempi del Covid-19*, in R. E. CERECCHIA (a cura di), *Percorsi di diritto comparato*, Milano, 2021.
- C. MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, pp. 1-48.
- C. MORELLI, *Consiglio di Stato apre alla PA robot*, in www.altalex.it, 20 gennaio 2019, consultabile [online](#).
- C. MORELLI, *Sentenze, predittività prudente. Il libero convincimento del giudice è valore primario, in Italia oggi*, 5 luglio 2019.
- C. NAPOLI, *Algoritmi, intelligenza artificiale e formazione della volontà pubblica: la decisione amministrativa e quella giudiziaria*, in *Rivista AIC*, n. 3/2020, pp. 1-37.
- C. PERLINGIERI, *Amministrazione di sostegno e neuroscienze*, in *Rivista di diritto civile*, n. 2/2015, pp. 330-343.
- C. PERLINGIERI, *Diritto privato delle nuove tecnologie*, in questa rivista, n. 2/2021.
- C. PERLINGIERI, *L'incidenza dell'utilizzazione della tecnologia robotica nei rapporti civilistici*, in *Rassegna di diritto civile*, 2015.
- C. PERNICE, *Distributed ledger technology, blockchain e smart contracts: prime regolazioni*, in questa rivista, n. 2/2020.
- C. PICIOCCHI, *La dignità come rappresentazione giuridica della condizione umana*, Padova, 2013.
- C. PILIA, *Le tutele dei diritti durante la pandemia Covid 19: soluzioni emergenziali o riforme strutturali?*, in *Persona e Mercato*, n. 5/2020.
- C. SARRA, F. REGGIO, *Diritto, metodologia giuridica e composizione del conflitto*, Padova, 2020.
- C. SCOGNAMIGLIO, *Dignità dell'uomo e tutela della personalità*, in *Giustizia civile*, n. 1/2014, consultabile [online](#).
- D. ANTONELLA, A. LA LUMIA, *Minori, internet e social networks*, Milano, 2021.
- D. DALFINO, *Decisione amministrativa robotica ed effetto performativo. Un beffardo algoritmo per una "buona scuola"*, in *Questione Giustizia*, 13 gennaio 2020, consultabile [online](#).
- D. DI SABATO, *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, in *Contratto e impresa*, n. 2/2017.
- D. GIRIBALDI, *Intelligenza artificiale, tutti i pregiudizi (bias) che la rendono pericolosa*, in *Agenda digitale*, 26 febbraio 2019, consultabile [online](#).
- D. GRANATA, M. RUSSO, *Il diritto alla disconnessione nell'era dell'always on*, in *Ratio iuris*, 16 giugno 2021, consultabile [online](#).
- D. LAFRATTA, *La dignità della persona nell'era dell'intelligenza artificiale*, in *Equal – Il diritto antidiscriminatorio*, 25 febbraio 2022, consultabile [online](#).
- D. ONORI, A. R. VITALE, *Neuroscienze e diritto: quale sorte per la libertà?*, in *Centro studio Livatino*, 15 marzo 2021, consultabile [online](#).
- D. ONORI, *I.A. e giustizia: l'esperimento della Corte di Appello di Brescia*, in www.opinione.it, 4 marzo 2022, consultabile [online](#).



- D. ONORI, *Intelligenza artificiale ed emulazione della decisione del giudice*, in www.centrostudilivativo.it, 16 febbraio 2022, consultabile online.
- D. PIANA, *Costo, ritualità, valore. Le qualità della giustizia nell'era digitale*, in *Giustizia insieme*, 16 settembre 2021, consultabile online.
- D. PIANA, *Percorsi e strumenti per una giustizia digitale al servizio del cittadino*, Roma, 2021.
- D. SALZANO, I. SCOGNAMIGLIO (a cura di), *Voci nel silenzio. La comunicazione al tempo del Coronavirus*, Milano, 2020.
- D. TEGA, *Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte "sub-costituzionale" del diritto*, in *Forum costituzionale*, 2007, pp. 1-4.
- D. U. GALLETTA, *L'azione amministrativa e il suo sindacato: brevi riflessioni, in un'epoca di algoritmi e crisi*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2021, consultabile online.
- D. VALENTINO (a cura di), *Manuale di diritto dell'informatica*, Napoli, 2016.
- E. AL MUREDEN, *Sicurezza "ragionevole" degli autoveicoli e responsabilità del produttore nell'ordinamento giuridico italiano e negli Stati Uniti*, in *Contr. impr.*, 2012.
- E. BASSOLI (a cura di), *I crimini informatici, il dark web e web room*, Pisa, 2021.
- E. BASSOLI, *Algoritmica giuridica. Intelligenza artificiale e diritto*, Modena, 2022.
- E. BURGIO, L. DE SIMONE, *Intelligenza Artificiale e responsabilità civile*, in *Media Laws*, 15 aprile 2021, consultabile online.
- E. CALÒ, *Consenso informato e disposizioni anticipate*, Napoli, 2019.
- E. CATERINI, *L'intelligenza artificiale «sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile*, Napoli, 2020.
- E. COLLETTI, *Intelligenza artificiale e attività sanitaria. Profili giuridici dell'utilizzo della robotica in medicina*, in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, XIX, 2021.
- E. DAMIANI, *L'utilizzo dei droni e le inerenti ricadute sul diritto della privacy e della responsabilità civile*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, n. 5/2021.
- E. DAMIANI, *Le tutele civilistiche per i contratti iniqui stipulati a causa della diffusione del coronavirus*, in *Judicium*, 9 maggio 2020, consultabile online.
- E. DAMIANI, *Trasformazione digitale ed evoluzione dell'interpretazione giuridica*, in questa rivista, n. 2/2021.
- E. ERRIGO, *Il diritto all'oblio e gli strumenti di tutela tra tradizione e nuovi contesti digitali*, in *Diritti fondamentali*, n. 1/2021.
- E. FALLETTI, *I social network: primi orientamenti giurisprudenziali*, in *Il corriere giuridico*, n. 7/2015.
- E. FLORINDI, *Deep web. Vizi privati e pubbliche virtù della navigazione in rete*, Torino, 2020.
- E. GALLETTI, *Intelligenza artificiale e benessere psicologico: l'idea di IDEGO presentata all'European Conference on Digital Psychology*, in *State of Mind – Il giornale delle scienze psicologiche*, 12 marzo 2021, consultabile online.
- E. GRAZIUSO, *La responsabilità per danno da prodotto difettoso*, Milano, 2015.
- E. LAMARQUE, *Corte costituzionale e giudici nell'Italia repubblicana. Nuova stagione, altri episodi*, Napoli, 2021.
- E. LECCESE, *Capacità e neuroscienze cognitive: un dialogo con il Prof. Stanzione*, in *Comp. dir. civ.*, n. 3/2020.
- E. M. FORNER, *Procedura civile digitale. Prontuario teorico-pratico del processo telematico*, Milano, 2015;



- E. MAESTRI, *Genealogie della dignità umana*, in *Diritto e Questioni pubbliche*, n. 9/2009.
- E. MANGONE, *La comunicazione del rischio: la pandemia da COVID-19*, in *Mediascapes Journal*, n. 15/2020.
- E. MARCHISIO, *Evoluzione della responsabilità civile medica e medicina "difensiva"*, in *Rivista di diritto civile*, LXVI, n. 1/2020, pp. 189-220.
- E. MINERVINI, *Appunti sulle ODR*, in questa rivista, n. 1/2020.
- E. MINERVINI, *La «meritevolezza» del contratto. Una lettura dell'art. 1322 comma 2 c.c.*, Torino, 2019.
- E. MOROTTI, *Una soggettività a geometrie variabili per lo statuto giuridico dei robot*, in F. BILOTTA, F. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Napoli, 2020.
- E. NAVARRETTA, *Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica*, Torino, 2017.
- E. OLIVITO, *Invito a Corte, con cautela. Il processo costituzionale si apre alla società civile?*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, n. 10/2019.
- E. PERUCCHIETTI, *Cyberuomo. Dall'intelligenza artificiale all'ibrido uomo-macchina. L'alba del transumanesimo e il tramonto dell'umanità*, Geraci Siculo, 2020.
- E. ROSSI, *L'intervento di terzi nel giudizio in via principale dopo la modifica delle norme integrative*, in *Rivista AIC*, n. 3/2020.
- E. SENA, *Lavoro agile e diritto alla disconnessione: l'incidenza delle nuove tecnologie sulle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, n. 1/2018.
- E. SIGNORINI, *Il diritto del lavoro nell'economia digitale*, Torino, 2018.
- E. STRADELLA, *La regolazione della Robotica e dell'Intelligenza artificiale: il dibattito, le proposte, le prospettive. Alcuni spunti di riflessione*, in *Rivista di diritto dei media*, n. 1/2019.
- E. TOSI (a cura di), *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Milano, 2019.
- E. TOSI, *High tech law. The digital legal frame in Italy. An overview of contracts, digital content protection and ISP liabilities emerging issues*, Milano, 2015.
- E. TOSI, *Responsabilità civile degli hosting provider e inibitoria giudiziale dei contenuti digitali illeciti equivalenti tra assenza dell'obbligo di sorveglianza ex ante e ammissibilità ex post*, in *Il diritto degli affari*, n. 1/2020.
- E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi ai tempi del Covid-19*, in *Jus civile*, n. 2/2020.
- F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, in *Diritto penale e Uomo*, n. 9/2019.
- F. BRUSCHI, *Le applicazioni delle nuove tecnologie: criptovalute, "blockchain" e "smart contract"*, Relazione al Convegno "La grande innovazione e le sue regole: Intelligenza artificiale, Data analysis, Tecnologia blockchain, Parma, 25 ottobre 2019, in *Il Diritto industriale*, n. 2/2020, pp. 162-164.
- F. CABITZA, L. FLORIDI, *Intelligenza artificiale: L'uso delle nuove macchine*, Roma, 2021.
- F. CAFAGGI, *La nozione di difetto ed il ruolo dell'informazione. Per l'adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma*, in *Rivista critica di diritto privato*, 1995, II.
- F. CALISAI, *Dati, informazioni e conoscenze: inquadramento giuridico e regolazione. Appunti su un potenziale paradigma appropriativo*, in questa rivista, n. 1/2020, pp. 13-45.



- F. CALISAI, *Dati, informazioni e conoscenze: inquadramento giuridico e regolazione. Appunti su un potenziale paradigma appropriativo*, in questa rivista, n. 1/2020.
- F. CICLOSI, *I documenti informatici dopo le nuove Linee guida AgID*, Santarcangelo di Romagna, 2021.
- F. CRISCUOLO, *Autonomia negoziale e autonomia contrattuale*, Napoli, 2008.
- F. DELISI, *Forma digitale, contratto e commercio elettronico*, Padova, 2020.
- F. DONATI, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Rivista AIC*, n. 1/2020.
- F. F. PAGANO, *Pubblica Amministrazione e innovazione tecnologica*, in *Gruppo di Pisa*, n. 3/2021.
- F. FAINI, *Il diritto nella tecnica: tecnologie emergenti e nuove forme di regolazione*, in *Federalismi*, n. 16/2020.
- F. FAINI, S. PIETROPAOLI, *Scienza giuridica e tecnologie informatiche*, Torino, 2017.
- F. FERNANDEZ SEGADO, *La dignità della persona come valore supremo dell'ordinamento giuridico spagnolo e come fonte di tutti i diritti*, in *Forum costituzionale*, 2014, pp. 1-22, consultabile online.
- F. FIANDANESE, *Il Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione*, in G. PERUGINELLI. M. RAGONA (a cura di), *L'informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze*, Napoli, 2014, pp. 151-168.
- F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 2016.
- F. GAMBINO, *Blockchain, smart contract e diritto sradicato*, in questa rivista, n. 2/2021.
- F. LAZZARELLI, *Tutela dei dati personali nell'età globale: il diritto all'oblio*, in *Le Corti salernitane*, n. 1/2021.
- F. M. R. LIVELLI, *Algoritmi "caporali" e diritti dei lavoratori, urge una regolamentazione: i temi sul tavolo*, in *Agenda digitale*, 27 luglio 2021, consultabile online.
- F. MARTINI, U. GENOVESE, C. ALTOMARE (a cura di), *Trattato operativo di responsabilità medica*, Santarcangelo di Romagna, 2018.
- F. MASCHIO, *Innovazione digitale dei sistemi sanitari, eHealth e questioni di data governance, nell'agenda digitale sanitaria nazionale ed europea*, in *Comp. dir. civ.*, n. 2/2021.
- F. MASTROMARTINO, *Due concetti di dignità per due concetti di autonomia?*, in *Diritto e Questioni pubbliche*, n. 1/2021.
- F. NADDEO, *Intelligenza artificiale: profili di responsabilità*, in *Comp. dir. civ.*, n. 3/2020.
- F. PARENTE, *Le disposizioni anticipate di trattamento: struttura, contenuto, forma e pubblicità*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4/2020.
- F. PIRAINO, *Contratto ed emergenza sanitaria in Italia*, in *Revista de Direito da Cidade*, n. 3/2021.
- F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali: dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Giappichelli, Torino, 2016.
- F. PONTANI, *Criptovalute. Tecnicità, diritto ed economia*, Roma, 2019
- F. RIGANO, *Scienza e dignità della persona*, in *Il Politico*, n. 3/2009, pp. 100-107.
- F. ROLLERI, *I sistemi di gestione documentale della Corte Costituzionale*, in *Il processo telematico*, 8 marzo 2016, consultabile online.
- F. RULLANI, E. RULLANI, *Dentro la rivoluzione digitale. Per una nuova cultura dell'impresa e del management*, Torino, 2018.
- F. RUNDO, A. L. DI STALLO, *Giustizia predittiva: algoritmi e deep-learning*, in *Sicurezza e Giustizia*, 2019, pp. 31-34;



- F. RUSCHI, *Il volo del drone. Verso una guerra post-umana? Una riflessione di filosofia del diritto internazionale*, in *Jura Gentium*, n. 1/2016.
- F. TAKANEN, *Responsabilità civile e penale medica*, Padova, 2022; M. HAZAN, D. ZORZIT, F. GELLI, *Responsabilità, rischio e danno in sanità*, Milano, 2022.
- F. TROJANI, *Il nuovo codice dell'amministrazione digitale*, Santarcangelo di Romagna, 2016.
- F. VINCENZI, *Neuromarketing e web: un connubio legale?*, in *Cyberspazio e diritto*, n. 3/2017, p. 615 ss.; R. CATALANO, *Neuromarketing e tutela civile dei dati personali biometrici*, in *Comp. dir. civ.*, 2019, pp. 1-18.
- F. VIOLA, *Dignità umana, diritti e legge naturale*, in *Prudentia Iuris*, n. 83/2017, p. 31 ss.; L. LEO, *Dignità e costituzione: storia di un diritto controverso*, in *Cammino Diritto*, n. 8/2020, pp. 1-25.
- G. A. CHIESI, M. SANTISE, *Diritto e Covid-19*, Torino, 2021; R. MARINI (a cura di), *Pandemia e diritto delle persone*, Padova, 2021.
- G. ALPA (a cura di), *Diritto e intelligenza artificiale. Profili generali, soggetti, contratti, responsabilità civile, diritto bancario e finanziario, processo civile*, Pisa, 2020.
- G. ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Roma-Bari, 1995.
- G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, Milano, 2021.
- G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contr. impr.*, 2017.
- G. ALPA, *La c.d. giuridificazione delle logiche dell'economia di mercato*, in *Riv. trim.*, 1999.
- G. ALPA, M. BESSONE, *La responsabilità del produttore*, Milano 1999.
- G. ALPA, *Responsabilità civile e danno*, Bologna, 1991.
- G. ALPA, V. CARBONE, *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, Bologna, 2011.
- G. ARCURI, R. DI BIDINO, *La robotica nell'assistenza agli anziani: scenari e questioni aperte*, in *Agenda digitale*, 8 marzo 2021, consultabile online.
- G. AZZARITI, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Bari-Roma, 2010.
- G. AZZONI, *Dignità umana e diritto privato*, in *Ragion pratica*, n. 1/2012.
- G. BARDONE, *La dignità della persona umana e le leggi sul volontariato*, Napoli, 2012.
- G. BARONE, *Machine Learning e Intelligenza Artificiale – Metodologie per lo sviluppo di sistemi automatici*, Palermo, 2021.
- G. BERGONZINI, *Una Corte costituzionale aperta? Comunicazione partecipazione contraddittorio*, Napoli, 2021.
- G. BERTOLA, *La digitalizzazione del processo nel Pnrr*, in *www.lamagistratura.it*, 23 luglio 2021, consultabile online.
- G. BIAGIONI, *Carta UE dei diritti fondamentali e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Napoli, 2018.
- G. BRACCILI, *Teorie bio-antropologiche nel XIX secolo: la scuola positiva di Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo*, in *Scienze criminologiche*, 21 marzo 2021, consultabile online.
- G. BUCCARELLA, F. FIMMANÒ, I. PISANO, I. SIMONA, *Giustizia digitale. Processi telematici e udienza da remoto*, Milano, 2021.
- G. CALABRESI, E. AL MUREDEN, *Driverless cars. Intelligenza artificiale e futuro della mobilità*, Bologna, 2021.
- G. CAPILLI, *Responsabilità e robot*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 3/2019.



- G. CARAPEZZA FIGLIA, *Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 12bis/2020, pp. 422-433.
- G. CASSANO, C. GIURDANELLA, *Il codice della pubblica amministrazione digitale. Commentario al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005*, Milano, 2005.
- G. CASSANO, *Il caso Trump, la cacciata dai social media ed il diritto positivo. Brevi note in tema di ostracismo nell'era digitale*, in *Diritto di internet*, n. 2/2021.
- G. CASTELLANI, *Smart contracts e profili di diritto civile*, in *Comp. dir. civ.*, pp. 1-14 consultabile online.
- G. CONTALDI (a cura di), *Sovranità e diritti al tempo della globalizzazione*, Roma, 2021.
- G. D'ACQUISTO, M. NALDI, *Big Data e Privacy by design*, Torino, 2017.
- G. D'AIETTI, *Il documento elettronico: profili giuridici, civili e penali*, in www.privacy.it, Relazione presentata al Convegno Nazionale su "Informatica e riservatezza" del CNUCE – Pisa 26/27 settembre 1998, consultabile online.
- G. D'ALFONSO, *Verso una maggiore responsabilizzazione dell'hosting provider tra interpretazione evolutiva della disciplina vigente, innovazioni legislative e prospettive de jure condendo*, in *Federalismi*, n. 2/2020.
- G. D'IPPOLITO, *Profilazione e pubblicità targettizzata online. Real-Time Bidding e behavioural advertising*, Napoli, 2022.
- G. DELLE CAVE, *Intelligenza Artificiale e Pubbliche Amministrazioni: l'algoritmo matematico al cospetto dei principi generali dell'attività e del procedimento amministrativo*, in www.intelligenzaartificiale.unisal.it, 22 agosto 2020, consultabile online.
- G. E. POLIZZI, *Le norme della Carta sociale europea come parametro interposto di legittimità costituzionale alla luce delle sentenze Corte costituzionale nn. 120 e 194 del 2018*, in *Federalismi*, n. 4/2019.
- G. GALLONE, *La pubblica amministrazione alla prova dell'automazione contrattuale. Note in tema di smart contracts*, in *Federalismi*, n. 20/2020, pp. 142-170.
- G. GIAIMO, *Frozen embryos, frozen law. Brevi notazioni, in chiave comparatistica, su di una recente decisione in tema di procreazione medicalmente assistita*, in *Dir. fam. pers.*, n. 3/2021.
- G. GIAIMO, *Il lascito del proprio corpo a fini didattici e di ricerca. Il nobile (ma vano) intento della legge 10/2020*, in *Rivista di biodiritto*, n. 2/2021.
- G. GIORGETTI, *Rivoluzione Digitale Italiana: dal colonialismo all'indipendenza tecnologica*, Roma, 2019.
- G. GITTI, *Dall'autonomia regolamentare e autoritativa alla automazione della decisione robotica*, in questa rivista, n. 1/2020, pp. 113-127.
- G. LAURINI, G. PERLINGIERI, *Professioni legali e nuove tecnologie. Come sarà il notaio del futuro?*, in questa rivista, n. 1/2021.
- G. LAX, *ItalgireWeb: la banca dati per gli avvocati*, in www.studiocataldi.it, 30 dicembre 2021, consultabile online.
- G. LO SAPIO, *Rating reputazionale, consenso valido e comprensione dell'algoritmo alle prese con l'era digitale*, in *Federalismi*, 28 luglio 2021.
- G. M. FLICK, *Elogio della dignità (se non ora, quando?)*, in *Rivista AIC*, n. 4/2014.
- G. MALATO, *Deep web*, Forlì, 2019.
- G. MAMMONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018*, 25 gennaio 2019, Roma, 2019.



- G. MAMMONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019*, 31 gennaio 2020, Roma.
- G. MARCHETTI, *Le fake news e il ruolo degli algoritmi*, in *Media Laws*, n. 3/2020
- G. MARCHIANÒ, *La legalità algoritmica nella giurisprudenza amministrativa*, in *Il diritto dell'economia*, n. 3/2020.
- G. NICOLINI, *Danni da prodotti agroalimentari difettosi: responsabilità del produttore*, Milano, 2006.
- G. PALLOTTA, *La globalizzazione del diritto*, in *Cammino Diritto*, n. 9/2019, pp. 1-17.
- G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2020.
- G. PERLINGIERI, *Il ruolo del giurista nella modernizzazione del diritto successorio tra autonomia ed eteronomia*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, n. 1/2018.
- G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015.
- G. PESCE, *Il giudice amministrativo e la decisione robotizzata. Quando l'algoritmo è opaco*, in *Judicium*, 15 giugno 2020, consultabile online.
- G. PINOTTI, *Amministrazione digitale algoritmica e garanzie procedimentali*, in *Labour & Law Issues*, n. 1/2021.
- G. PONZANELLI, *Responsabilità del produttore*, in *Rivista di diritto civile*, 1995, II.
- G. PONZANELLI, *Responsabilità del produttore*, in *Rivista di diritto civile*, 2000, II.
- G. PONZANELLI, *Responsabilità oggettiva del produttore e difetto di informazione*, in *Danno e responsabilità*, 2003, I.
- G. PROIETTI, *Intelligenza artificiale: una prima analisi della proposta di regolamento europeo*, in www.dirittobancario.it, 27 maggio 2021, consultabile online.
- G. PROIETTI, *Responsabilità nell'Intelligenza Artificiale e nella Robotica*, Milano, 2020.
- G. RIZZUTI, *La comunicazione ai tempi del coronavirus*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, 31 marzo 2020, consultabile online.
- G. SAPUTELLI, *Stato, Unione Europea e lex mercatoria*, Torino, 2015.
- G. SARTOR, *Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto*, in *Contratti e impresa*, 2022.
- G. SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, Torino, 2016
- G. SCHNEIDER, N. ABRIANI, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech*, Bologna, 2021.
- G. SCORZA, *"L'algoritmo deve essere trasparente", la Cassazione rilancia il GDPR*, in *Agenda digitale*, 26 maggio 2021, consultabile online.
- G. SCORZA, *Governare il futuro. Il diritto a capire come funziona l'algoritmo prima di dire di sì*, su *Huffpost*, 27 maggio 2021, consultabile online.
- G. SILVESTRI, *L'individuazione dei diritti della persona*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018.
- G. TADDEI ELMI, A. CONTALDO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Algoritmi giuridici. Ius condendum o "fantadiritto"?*, Pisa, 2020.
- G. TADDEI ELMI, *Il Quid, il Quomodo e il Quid iuris dell'IA. Una riflessione a partire dal volume "Diritto e tecnologie informatiche"*, in *Riv. it. inf. dir.*, n. 2/2021, p. 131 ss.
- G. TARANTINO, *Autonomia e dignità della persona umana*, Milano, 2018.
- G. TEUBNER, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, a cura di P. Femia, Napoli, 2019.
- G. VETTORI (a cura di), *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, Padova, 2020.



- G. VULPIANI, Non fungible tokens, smart contracts e blockchain *nell'arte e nella moda: crypto art e digital fashion*, in *Cammino Diritto*, n. 11/2021, pp. 1-18.
- G. ZICCARDI, *Il Computer e il giurista*, Milano, 2014.
- G. ZICCARDI, P. PERRI, *Dizionario Legal tech. Informatica giuridica, protezione dei dati, investigazioni digitali, criminalità informatica, cybersecurity e digital transformation law*, Milano, 2020.
- I. A. NICOTRA, V. VARONE, *L'algoritmo, intelligente ma non troppo*, in *Rivista AIC*, n. 4/2019, pp. 1-21.
- I. ALLEGRANTI, R. TREZZA, *I non-fungible token (NFT) come trampolino di lancio per le città devastate a causa dei disastri ambientali. Un'analisi del fenomeno nella legalità reticolare*, in *Il diritto dell'economia*, n. 1/2022.
- I. FERLITO, "Smart contract". *Automazione contrattuale ed etica dell'algoritmo*, in *Comp. dir. civ.*, n. 2/2020.
- I. FERRANTI, *Fascicolo del processo civile telematico, come dematerializzarlo: le regole tecniche*, in *Agenda digitale*, 4 aprile 2020, consultabile *online*.
- I. FERRANTI, *Processo costituzionale telematico, ecco come funziona*, in *Agenda digitale*, 23 febbraio 2022, consultabile *online*.
- I. MARTONE, *Algoritmi e diritto: appunti in tema di responsabilità civile*, in questa rivista, n. 1/2020, pp. 128-153.
- I. MARTONE, *Il giudizio di meritevolezza. Questioni aperte e profili applicativi*, Napoli, 2017.
- I. MARTONE, *Sulla trasmissibilità a causa di morte dei "dati personali": l'intricato rapporto tra digitalizzazione e riservatezza*, in *Dir. succ. fam.*, 2021.
- I. MARTONE, *Sulla trasmissione a causa di morte del "patrimonio digitale"*, in questa rivista, n. 2/2020.
- I. PARTENZA, *La nuova responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria. Commento aggiornato alla Riforma Gelli*, Pisa, 2017.
- I. PICCININI, M. ISCERI, *IA e datori di lavoro: verso una e-leadership?*, in *Lavoro Diritti Europa*, 1° maggio 2021, consultabile *online*.
- I. SASSO, *La tutela dei dati personali "digitali" dopo la morte dell'interessato*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2019.
- J. FORTUNA, *Smart contract e formazione del contratto: un'analisi comparatistica della nascita del vincolo giuridico*, in *Comp. dir. civ.*, n. 2/2021.
- J. KULESZA, F. DELERUE, *Cybersecurity in teh Year of the Plague: Due Diligence as a Remedy to Malicious Activities*, in questa rivista, n. 2/2020.
- J. P. APARICIO VAQUERO, *La protección de datos personales en las redes sociales. Apuntes desde los ordenamientos europeo y español*, in questa rivista, n. 1/2020.
- J. PURIFICATI, *La Corte di Cassazione sulla trasparenza degli algoritmi e la validità del consenso*, in *E-lex*, 7 giugno 2021, consultabile *online*.
- J. SIERRA-SÁNCHEZ, N. ABUÍN VENCES, J. MILÁN FITERA, *Trattamento informativo della pandemia del Coronavirus nei media digitali italiani*, in *Journal of Science Communication*, n. 20/2021.
- L. ATZENI, *Brevi note a margine della legge 10 febbraio 2020, n. 10 in tema di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica*, in *Rivista AIC*, n. 5/2020.
- L. AZZENA, *L'algoritmo nella formazione della decisione amministrativa: l'esperienza italiana*, in *Revista Brasileira De Estudos Políticos*, n. 123/2021, pp. 503-538.



- L. BOLOGNINI (a cura di), *Privacy e libero mercato digitale. Convergenza tra regolazioni e tutele individuali nell'economia data-driven*, Torino, 2021.
- L. CALIFANO, *La libertà di manifestazione del pensiero... in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. Fake news, hate speech e profili di responsabilità dei social network*, in *Federalismi*, n. 26/2021, pp. 1-25.
- L. CARRUBBO, A. MENDOLA, *Le scelte "inconsapevoli" nelle nuove dinamiche d'acquisto. Il neuromarketing e la tutela del consumatore-follower*, Padova, 2022.
- L. COPPINI, *Robotica e intelligenza artificiale: questioni di responsabilità civile*, in *Politica del diritto*, n. 4/2018, pp. 713-739.
- L. DAMIANO, F. SONGINI, *Se l'intelligenza artificiale uccide, senza controllo umano: ecco i punti chiave del dibattito*, in *Agenda digitale*, 10 giugno 2021, consultabile online.
- L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Milano, 2022.
- L. IZZO, *Ced Cassazione: cos'è e come funziona*, in *www.studiocataldi.it*, 19 giugno 2018, consultabile online.
- L. M. TONELLI, *Le nuove Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: fra recepimento della costante giurisprudenza in materia di interventi di terzo in giudizio, alcune importanti innovazioni e... non pochi rischi applicativi*, in *Judicium*, n. 3/2021, consultabile online.
- L. MARTINO, *La quinta dimensione della conflittualità. La rilevanza strategica del cyberspace e i rischi di guerra cibernetica*, in *Center for Cyber Security and International Relations Studies*, consultabile online, pp. 1-60.
- L. MEZZASOMA, *L'importatore all'interno della C.E. di prodotti difettosi fabbricati in altro Stato comunitario*, in *Rassegna della giurisprudenza umbra*, 2001, I.
- L. PALAZZANI, R. ZANNOTTI, *Il diritto nelle neuroscienze. Non «siamo» i nostri cervelli*, Torino, 2013.
- L. PARONA, *Prospettive europee e internazionali di regolazione dell'intelligenza artificiale tra principi etici, soft law e self-regulation*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, n. 1/2020, consultabile online.
- L. RE, *Approcci europei alla globalizzazione*, in *Jura Gentium*, consultabile online.
- L. SALVATO, *L'amicus curiae nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale: il Procuratore Generale della Corte di cassazione*, in *Quaderni costituzionali*, 2020.
- L. SAMBUCCI, *I bias dei modelli algoritmici sono colpa nostra*, in *www.ai4business.it*, 4 febbraio 2021, consultabile online.
- L. TAFARO, *Neuromarketing e tutela del consenso*, Napoli, 2018.
- L. TAFARO, *Neuroscienze e diritto civile: nuove prospettive*, in *Rivista di biodiritto*, n. 3/2017.
- L. VALLE, *Il contratto e la realizzazione dei diritti della persona*, Torino, 2020.
- L. VARRIALE, *La prigione dell'umanità. Dal deep web al 4.0, le nuove carceri digitali*, Bologna, 2017.
- L. VENTURA, A. MORELLI (a cura di), *Principi costituzionali*, Milano, 2015.
- L. VIZZONI, *Domotica e diritto. Problemi giuridici della smart home tra tutele e responsabilità*, Milano, 2021.
- M. A. LIVI, *Quale diritto all'oblio?*, Napoli, 2020.
- M. B. MAGRO, *Decisione umana e decisione robotica. Un'ipotesi di responsabilità di procreazione robotica*, in *Leg. pen.*, 8 maggio 2020.
- M. BASSINI, *Libertà di espressione e social network, tra nuovi "spazi pubblici" e "poteri privati". Spunti di comparazione*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 2/2021, pp. 43-56.



- M. BASSINI, O. POLLICINO, *La Cassazione sul “consenso algoritmico”. Ancora un tassello nella costruzione di uno statuto giuridico composito*, in *Giustizia insieme*, 21 giugno 2021, consultabile *online*.
- M. BELLI, *Sui presupposti e sui limiti della tutela esperibile nei confronti dell’internet service provider (hosting e caching) la Cassazione tenta di fare chiarezza*, in questa rivista, n. 1/2020.
- M. CATERINI, *Il giudice penale robot*, in *La legislazione penale*, 19 dicembre 2020, consultabile *online*.
- M. CHIRIATTI, *Incoscienza artificiale: Come fanno le macchine a prevedere per noi*, Roma, 2021.
- M. CICORIA, *L’io, l’altro e il bilanciamento degli interessi nella artificial intelligence*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, n. 2/2020.
- M. COSTANZA, *L’intelligenza artificiale e gli stilemi della responsabilità civile*, in *Giur. it.*, n. 7/2019.
- M. CRISAFULLI, *L’era degli Smart Contracts: potenzialità e limiti di uno strumento rivoluzionario*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, n. 3/2021.
- M. CUPERSITO, *Intelligenza artificiale e diritto: profili normativi, etici e politici*, in *Opinio Iuris*, 1° giugno 2020, consultabile *online*.
- M. D’AMBROSIO, *Arbitraggio e determinazione algoritmica dell’oggetto*, Napoli, 2020.
- M. D’AMBROSIO, *Tutela dei diritti della personalità nella rete: ruolo del provider nella fruizione dei servizi online e (a)territorialità dell’ingiunzione di rimozione dei contenuti illeciti*, in questa rivista, n. 2/2020.
- M. D’AMICO, *Gli amici curiae*, in *Questione Giustizia*, n. 4/2020, consultabile *online*.
- M. DE ANGELIS, *Algoritmi nei concorsi pubblici: il caso dei docenti che fa “scuola”*, in *Ius in itinere*, 5 ottobre 2019, consultabile *online*.
- M. DEL VECCHIO, *I diritti umani nelle disposizioni anticipate di trattamento*, Roma, 2018.
- M. DI FLORIO, *Colpevolezza, conseguenze sanzionatorie e neuroscienze in rapporto al diritto penale*, Pisa, 2021.
- M. FACCIOLI, *Minori nella rete. Pedofilia, pedopornografia, deep web, social network, sexting, gambling, grooming e cyberbullismo nell’era digitale*, Roma, 2015.
- M. FASCIGLIONE, *Gig economy e diritti fondamentali sul lavoro in una recente sentenza del Tribunale di Bologna*, in *Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo*, 9 febbraio 2021, consultabile *online*.
- M. FOGLIA, *Identità digitale, trattamento dei dati e tutela della persona*, in *Rass. dir. civ.*, n. 1/2021.
- R. PERRONE, *Il «diritto alla disconnessione» quale strumento di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti*, in *Federalismi*, n. 24/2017.
- M. FOTI, *Contraffazione online: il ruolo degli Internet Service Providers nell’uso illecito del marchio altrui*, in questa rivista, n. 2/2020.
- M. FRANZONI, *El Covid 19 y la ejecucion del contrato*, in *Revista cubana de derecho*, n. 2/2021.
- M. FRIGESSI DI RATTALMA (a cura di), *La pandemia da Covid-19. Profili di diritto nazionale, dell’Unione Europea ed internazionale*, Torino, 2020.
- M. GABRIELLA DI PENTIMA, *Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Commento alla l. n. 219/2017*, Milano, 2018.
- M. GAMBINI, *ODR di tipo conciliativo quale “giusto rimedio” nel commercio elettronico*, in questa rivista, n. 1/2021.
- M. GHIONE, *Luci e ombre della l. n. 10/2020 in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem*, in *Familia*, n. 4/2020.



- M. GIACCAGLIA, *Il contratto del futuro? Brevi riflessioni sullo smart contract e sulla perdurante vitalità delle categorie giuridiche attuali e della norme vigenti del Codice civile italiano*, in questa rivista, n. 1/2021.
- M. GIORGIANNI, *Il contratto "sostenibile". Riflessioni attorno a una categoria controversa*, in *Comp. dir. civ.*, n. 2/2021.
- M. IMBRENDA, *Persona e scelte di consumo tra conoscenze neuroscientifiche e nuove frontiere tecnologiche*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 14/2021.
- M. LAZZERI, *Intelligenza artificiale e psicologia, un binomio possibile: il punto sulle ricerche*, in *Agenda digitale*, 20 ottobre 2021, consultabile online.
- M. MANTOVANI, *Profili attuali del nemo tenetur se detegere in senso sostanziale*, in *Discrimen*, 14 ottobre 2021, pp. 1-7, consultabile online.
- M. MILANESE, *L'atto pubblico informatico*, in *Comp. dir. civ.*, consultabile online.
- M. MORUZZI, *Robot sanitari alla sfida autonomia: la svolta "quinta dimensione"*, in *Agenda digitale*, 21 ottobre 2020, consultabile online; S. GUGLIERSI, *Robot infermieri? L'innovazione nel nuovo contesto sanitario*, in www.intelligenzaartificiale.unisal.it, 4 giugno 2020, consultabile online.
- M. NURRA, "Fake news", *algoritmi, Facebook e noi*, in *Astrid*, 18 maggio 2017, consultabile online.
- M. PENNASILICO, *L'insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche attuali (Manifesto per un diritto privato ecosostenibile)*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2/2019.
- M. PIERANI, M. SCIALDONE, *Vivere con l'Intelligenza Artificiale. Società, consumatori e mercato*, Torino, 2021.
- M. R. COVELLI, *Dall'informatizzazione della giustizia alla "decisione robotica"? Il giudice del merito*, pp. 125-138.
- M. R. FERRARESE, *Diritto e mercato. Il caso degli Stati Uniti*, Torino, 1992.
- M. R. FERRARESE, *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi del mondo globale*, Roma-Bari, 2006
- M. R. FERRARESE, *Gestire i conflitti. Diritto, cultura, rituale*, Bari-Roma, 2009.
- M. R. FERRARESE, *Nomofilachia ed evoluzione giuridica. Corti supreme, legalità e riassetamenti post-globalizzazione*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2021, consultabile online.
- M. RATTI, *Riflessioni in materia di responsabilità civile e danno cagionato da dispositivo intelligente alla luce dell'attuale scenario normativo*, in *Contr. impr.*, n. 2/2020.
- M. ROMAGNOLI, *Il modello di partecipazione a "triplo binario" della Corte costituzionale italiana: la riforma delle norme integrative riguardo a interventi dei terzi, amici curiae ed esperti, nel segno del dialogo con la società civile e della rilegittimazione continua*, in *Revista de la Facultad de derecho de México*, n. 277/2020.
- M. RUBINO DE RITIS, *L'espansione economica nel Metaverso: i No Fungible Token (NFT)*, in Giustiziacivile.com, 16 novembre 2021, consultabile online
- M. SABATINO, *Consiglio di Stato: l'algoritmo è un atto amministrativo informatico*, su *La Pagina Giuridica*, 7 agosto 2019.
- M. SARTORI, *Potenziamento umano e vulnerabilità: la lezione di Coeckelbergh*, in www.colloquidibioetica.com, 21 marzo 2021, consultabile online.
- M. SENOR, *SentenzeWeb: ricerca libera tra le sentenze della Corte*, in *Media Laws*, 21 ottobre 2014, consultabile online.
- M. TAMPERI, *L'intelligenza artificiale: una nuova sfida anche per le automobili*, in *Contr. impr.*, 2020.



- M. TESCARO, *Una propuesta ricostruttiva contrastante con il diritto vivente in tema di responsabilità civile dell'internet provider nel diritto italiano tra Direttiva 2000/31/CE, Regolamento UE 2016/679 e Direttiva UE 2019/790*, in *Jus civile*, n. 1/2020.
- M. TOMASI, *L. 10/2020: disposizione del proprio corpo a fini di ricerca scientifica*, in *Rivista di biodiritto*, 4 marzo 2020, consultabile *online*.
- M. VERSIGLIONI, *Se l'algoritmo scrive la sentenza che almeno rispetti la logica*, in *Il Sole 24 ore*, 2019, consultabile *online*.
- N. CIPRIANI, *L'impatto del lockdown da COVID-19 sui contratti*, in *Rivista di diritto bancario*, n. 4/2020.
- N. COLACINO, *Impiego di droni armati nella lotta al terrorismo e accesso alla giustizia da parte delle vittime*, in *Rivista di diritto dei media*, n. 2/2018.
- N. DE FEDERICIS, *Modernità e globalizzazione nella teoria critica di Anthony Giddens*, in *Ragion pratica*, n. 1/2003, pp. 253-272.
- N. GRAZIANO, *Il disconoscimento del documento informatico sottoscritto con firma digitale*, in *Inf. dir.*, 17 gennaio 2001, consultabile *online*.
- N. GUASCONI, *La dignità umana come fondamento e limite del sistema delle libertà*, in *Riv. trim. sc. amm.*, n. 2/2015, pp. 83-100.
- N. IRTI, *Il tessitore di Goethe (per la decisione robotica)*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna, 2019, pp. 17-22.
- N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti*, Milano, 2021.
- N. LETTIERI, S. FARO, E. FABIANI, *Diritto, neuroscienze, scienze della cognizione*, Napoli, 2015.
- N. OCCHIOCUPO, *Una intesa lungimirante: la centralità della persona*, in *Nuova Antologia*, n. 619/2018.
- N. TODESCHINI (a cura di), *La responsabilità medica. Guida operativa alla riforma Gelli Bianco. Inquadramento, profili civili e penali, assicurazione, procedimento stragiudiziale e giudiziale, casistica*, Padova, 2019.
- O. CLARIZIA, *Coronavirus ed esonero da responsabilità per inadempimento di obbligazione ex art. 1218 c.c.: impossibilità sopravvenuta oppure inesigibilità della prestazione?*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 12/2020, pp. 352-365.
- O. DI GIOVINE, *Ripensare il diritto penale attraverso le (neuro-)scienze?*, Torino, 2019.
- O. LANZARA, *Il caso Tik Tok: privacy e minori di età*, in *Comp. dir. civ.*, n. 3/2021.
- P. BENANTI, il quale, intervistato da *Sir – Agenzia di informazione*, evidenzia che bisogna "umanizzare la tecnica e non macchinizzare l'uomo". Serve, dunque, un'"algor-etica", consultabile *online*, 25 febbraio 2020.
- P. CELLINI, C. RATTI, L. DE BIASE, *La rivoluzione digitale. Economia di internet dallo Sputnik al machine learning*, Roma, 2018.
- P. CURZIO, *Il palazzo della Cassazione*, Bari, 2021.
- P. D'ELIA, *Digital relationships and private autonomy in the EU legal framework*, in *Comp. dir. civ.*, n. 2/2021.
- P. DELLA VEDOVA, *La deriva telematica nel processo civile*, in *Judicium*, consultabile *online*.
- P. FEMIA (a cura di), *Drittwirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati*, Napoli, 2018.
- P. G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco*, Torino, 1998; U. CARNEVALI, *Responsabilità del produttore*, voce dell'Enciclopedia del diritto, Agg., II, Milano, 1998.



- P. GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *For. it.*, n. 5/2002, pp. 151-164.
- P. MADDALENA, *Interpretazione sistematica e assiologica*, in *Giust. civ.*, 2009.
- P. MARIOTTI, *Prodotti difettosi e obsolescenza programmata*, Santarcangelo di Romagna, 2013.
- P. MARTUCCI, *All'inizio era il male: determinismo biologico e destino nella criminologia di Cesare Lombroso*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n. 1/2013.
- P. OTRANTO, *Riflessioni in tema di decisione amministrativa, intelligenza artificiale e legalità*, in *Federalismi*, n. 7/2021.
- P. PASSAGLIA (a cura di), *L'intervento di terzi nei giudizi di costituzionalità concreti*, Roma, 2016.
- P. PERLINGIERI, *Fonti del diritto e "ordinamento del caso concreto"*, in *Riv. dir. priv.*, n. 4/2010.
- P. PERLINGIERI, *Francesco Gentile e la legalità costituzionale: dalla diffidenza alla piena sintonia*, in *L'Ircocervo*, n. 3/2015.
- P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vo. 2 "Fonti e interpretazione", Napoli, 2020.
- P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006.
- P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4/1985; ID., *Interpretazione sistematica e assiologica, situazione soggettive e rapporto giuridico*, Napoli, 2006.
- P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972.
- P. PERLINGIERI, P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, Napoli, 2004.
- P. PERLINGIERI, *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, in *Annali SISDIC*, n. 5/2020.
- P. PERLINGIERI, *Struttura algoritmica e interpretazione*, in questa rivista, n. 2/2020.
- P. PERLINGIERI, *Sul trattamento algoritmico dei dati*, in questa rivista, n. 1/2020.
- P. PERLINGIERI, *Sull'insegnamento del "diritto privato" nelle "Facoltà giuridiche"*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2/2019; ID., *Una lezione agli studenti della "Federco II". Il "diritto privato" nell'unità del sistema ordinamentale*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2/2019.
- P. PIETRINI, *La macchina della verità alla luce delle recenti acquisizioni delle neuroscienze*, in *Cassazione penale*, 2008.
- P. RIVELLO, *Gli aspetti giuridici connessi all'uso dei droni*, in *Il diritto penale della globalizzazione*, 31 maggio 2018, consultabile *online*.
- P. SEVERINO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Politica, economia, diritto, tecnologia*, Roma, 2022.
- R. M. AGOSTINO, G. DALIA, M. IMBRENDA, S. PIETROPAOLI (a cura di), *Frontiere digitali del diritto. Esperienze giuridiche a confronto su libertà e solidarietà*, Torino, 2022.
- P. STANZIONE (a cura di), *I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Torino, 2022.
- P. STANZIONE, B. TROISI, *I principi generali del diritto civile*, Torino, 2011.
- P. STANZIONE, *Biodiritto, Postumano e Diritti Fondamentali*, in *Comp. dir. civ.*, 2010.
- Papa Francesco del 27 agosto 2021, consultabile sul sito di Avvenire.
- R. AVICO, *Un robot come psicologo? Intelligenza artificiale e chatbot, facciamo il punto*, in *www.psiche.it*, 4 luglio 2019, consultabile *online*.
- R. BERTI, S. ZANETTI, *L'eredità digitale tra norma e tecnologia: come le big tech stanno risolvendo un problema giuridico con strumenti informatici*, in *Media Laws*, 29 luglio 2021, consultabile *online*.



- R. BIN, N. LUCCHI, *Informatica per le scienze giuridiche*, Padova, 2009.
- R. BODEI, *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale*, Bologna, 2019.
- R. BORSARI, *Intelligenza Artificiale e responsabilità penale: prime considerazioni*, in *Media Laws*, n. 3/2019, consultabile [online](#).
- R. CHIEPPA, G. P. CIRILLO, *Le autorità amministrative indipendenti*, Padova, 2010; C. GIORDANO, A. NAPOLITANO (a cura di), *Le autorità amministrative indipendenti. L'evoluzione oltre la contraddizione*, Roma, 2019.
- R. CONTI, *La Corte costituzionale aperta alla società civile Intervista a Valerio Onida e Vladimiro Zagrebelsky*, in *Giustizia insieme*, 4 aprile 2020, consultabile [online](#).
- R. COSIO, *La responsabilità del prestatore di servizi di hosting*, in *Jus civile*, n. 4/2020.
- R. CUBELLI, *Psicologia e intelligenza artificiale tra ampliamento della conoscenza e innovazione tecnologica*, in *Giornale italiano di psicologia*, n. 1/2018.
- R. FABOZZI, S. BINI, *Algoritmi, piattaforme digitali e diritto del lavoro*, in *Analisi giuridica dell'economia*, n. 1/2019, pp. 357-372.
- R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI, M. PROTO, *Il diritto nell'era digitale. Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Milano, 2022.
- R. MARMO, *Algoritmi per l'intelligenza artificiale: Progettazione dell'algoritmo – Dati e Machine Learning – Neural Network – Deep Learning*, Milano, 2020.
- R. MASONI, *In G.U. disposizioni del proprio corpo post mortem*, in *Il familiarista*, 11 marzo 2020, consultabile [online](#).
- R. MEGGIATO, *Il lato oscuro della Rete: Alla scoperta del Deep Web e del Bitcoin*, Adria, 2014.
- R. PALLOTTA, *Smart working: diritto alla disconnessione e nuove tutele per i lavoratori genitori*, in *IPSOA*, 19 aprile 2021, consultabile [online](#).
- R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo e (il diritto al)l'oblio*, n. 1/2017, consultabile [online](#).
- R. PARDOLESI, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989.
- R. PICARO, *Relazioni consumeristiche, intelligenza artificiale e nuove identità*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4/2020.
- R. RAZZANTE (a cura di), *Bitcoin e criptovalute. Profili fiscali, giuridici e finanziari*, Santarcangelo di Romagna, 2018.
- R. SAMPERI, *Brevi riflessioni in merito al possibile impatto dell'Intelligenza Artificiale sui diritti umani*, in *Cammino Diritto*, n. 7/2021, consultabile [online](#).
- R. TREZZA (a cura di), *Diritto alla vita, diritto alla salute e responsabilità medica. Riflessioni prospettive sull'autodeterminazione della persona umana*, Salerno, 2020.
- R. TREZZA al volume di A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, in *Istituzioni Diritto Economia*, n. 2/2020, pp. 328-337.
- R. TREZZA, *"Legal values" and "algorithmic values": an ethically oriented interpretation of Artificial intelligence*, in *Iura and legal systems*, n. 2/2021, pp. 3-14.
- R. TREZZA, *Artificial Intelligence Act. Giudizio "ciclico" di meritevolezza e accountability intelligenti*, Roma, 2021.
- R. TREZZA, *Artificial intelligence, civil law and ethics in Italy: a possible interaction*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, n. 9/2021.
- R. TREZZA, *Diritto e intelligenza artificiale. Etica, Privacy, Responsabilità, Decisione*, Pisa, 2020.



- R. TREZZA, E. QUARTA, *Coche sin conductor o ley sin conductor: ¿qué dirección tomará la ley para evitar los accidentes sistemáticos?*, in *Revista de derecho del transporte*, n. 28/2021.
- R. TREZZA, E. QUARTA, *Driverless car o driverless law: quale direzione prenderà il diritto per evitare “incidenti sistemati”?*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, n. 2/2021.
- R. TREZZA, *I diritti della persona tra “tecniche” e “intelligenze” artificiali. Casi, questioni, prospettive*, Cile, 2021.
- R. TREZZA, *Il contratto nell’era del digitale e dell’intelligenza artificiale*, in *Il diritto dell’economia*, n. 2/2021, pp. 287-319.
- R. TREZZA, *L’algoritmo “protettivo”: gli istituti di protezione della persona alla prova dell’Intelligenza Artificiale*, in questa rivista, n. 1/2021, pp. 217-255.
- R. TREZZA, *L’Intelligenza Artificiale come ausilio alla standardizzazione del modello 231: vantaggi “possibili” e rischi “celati”*, in *Giurisprudenza penale web*, n. 1 bis/2021, pp. 1-12.
- R. TREZZA, *La responsabilità civile del medico: dall’oscurantismo al doppio positivismo. Focus sulla responsabilità civile del medico prenatale*, Salerno, 2019.
- R. TREZZA, *La revocabilità per facta concludentia del consenso all’anonimato e il diritto a conoscere le proprie origini “in espansione”*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1/2021, pp. 1-12; ID., *La fecondazione omologa post matrimonio: l’embrione crioconservato è “concepito”?*, in *Familia*, 15 febbraio 2022, consultabile online.
- R. TREZZA, *Los tratamientos neurocientíficos en detenidos: perfil civilista del consentimiento a las técnicas*, in E. QUARTA, *Dalla lectio magistralis del Ministro della Giustizia Marta Cartabia agli indici di rifrazione della metamorfosi della pena. Dal paradigma punitivo delle Erinni al paradigma riconciliativo delle Eumenidi. Lo sguardo nuovo sul sistema penitenziario nei dialoghi dei giuristi tra Italia, Perù e Cuba*, Roma, 2021.
- R. TREZZA, *Multiproprietà azionaria e tutela del consumatore: risvolti processuali e funzioni della causa negoziale*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, n. 7/2020.
- R. TREZZA, *Preliminary profiles in the civil liability of health robots*, in *Iura and legal systems*, n. 3/2021, pp. 1-4.
- R. TREZZA, *Responsabilidades legales atribuibles a máquinas y algoritmos: ¿categorías tradicionales o género novum de responsabilidad?*, in *Actualidad civil*, n. 76/2020, pp. 155-177.
- S. ACETO DI CAPRIGLIA, *Contrattazione algoritmica. Problemi di profilazione e prospettive operazionali. L’esperienza “pilota” statunitense*, in *Federalismi*, n. 18/2019.
- S. ACETO DI CAPRIGLIA, *Effetti del lockdown sui contratti di diritto privato. Un dialogo tra esperienze giuridiche*, in *Federalismi*, n. 3/2022.
- S. ACETO DI CAPRIGLIA, *Vocazione mortis causa negli assets digitali. Una prospettiva comparatistica*, in questa rivista, n. 1/2021.
- S. AMATO, *Biodiritto 4.0. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie*, Torino, 2020, p. 120. Inoltre, si rinvia allo scritto interessante di P. PERLINGIERI, *Note sul “potenziamento cognitivo”*, in questa rivista, n. 1/2021.
- S. AMATO, *Neuroscienze e utilizzazione militare delle tecniche di potenziamento umano*, in *Ethics & Politics*, n. 2/2014, pp. 182-198.
- S. ARDUINI, *La “scatola nera” della decisione giudiziaria: tra giudizio umano e giudizio algoritmico*, in *Rivista di biodiritto*, n. 2/2021.
- S. ATERNO, *Alexa testimone in tribunale: i vantaggi per gli investigatori e le garanzie per la difesa*, in *Agenda digitale*, 20 marzo 2020, consultabile online.



- S. CACACE, A. CONTI, P. DELBON (a cura di), *La volontà e la scienza. Relazione di cura e disposizioni anticipate di trattamento*, Torino, 2019.
- S. CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin. Un'analisi giuridica*, Milano, 2015.
- S. CARRER, *Se l'amicus curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin*, in *Giurisprudenza penale web*, 24 aprile 2019, consultabile [online](#).
- S. CASSESE, *Dentro la Corte: Diario di un giudice costituzionale*, Bologna, 2015.
- S. COMELLINI, M. VASAPOLLO, *Blockchain, criptovalute, I.C.O. smart contracts*, Santarcangelo di Romagna, 2019.
- S. CUCCHETTI, Homo creativus. *Nuove sfide per la bioetica*, in *Il Regno – Attualità*, n. 16/2019.
- S. DELLA BELLA, *Cedimento di scala estensibile e responsabilità del produttore-progettista: la nozione di danneggiato nella disciplina sulla responsabilità del produttore*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2003, I.
- S. DEPLANO, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, in C. PERLINGIERI, L. RUGGIERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015.
- S. GABORIAU, *Libertà e umanità del giudice: due valori fondamentali della giustizia. La giustizia digitale può garantire nel tempo la fedeltà a questi valori?*, in *Questione Giustizia*, n. 4/2018, consultabile [online](#).
- S. GARREFFA, *Il contratto con effetti protettivi verso terzi e la responsabilità medica*, in *Giustiziacivile.com*, 25 gennaio 2017, consultabile [online](#).
- S. GAZZIANO, *Dall'intelligenza artificiale all'intelligenza umana*, Santarcangelo di Romagna, 2018.
- S. GIOVA, G. PERLINGIERI, L. TULLIO (a cura di), *Autonomia negoziale e successioni mortis causa*, Napoli, 2020.
- S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, Milano, 2017.
- S. NICOLISI, *Il dualismo da Cartesio a Leibniz, recensito da G. B. Priano*, in *Rivista di filosofia neoscolastica*, n. 4/1987, pp. 628-630.
- S. NOTARO, *La lotta di Facebook alle fake news*, in *E-lex*, 15 giugno 2021, consultabile [online](#).
- S. NOTARO, *La Risoluzione del Parlamento europeo sull'uso dell'intelligenza artificiale*, in *E-lex*, 12 febbraio 2021, consultabile [online](#).
- S. ORLANDO, *Gli smart contracts come prodotti software*, in S. ORLANDO, G. CAPALDO (a cura di), *Annuario 2021. Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale*, Roma, 2021.
- S. QUINTARELLI, *Intelligenza artificiale: Cos'è davvero, come funziona, che effetti avrà*, Milano, 2020.
- S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012.
- S. RODOTÀ, *Privacy, libertà, dignità*, Discorso conclusivo della Conferenza internazionale sulla protezione dei dati, Roma, 13 settembre 2004, disponibile sul sito dell'Autorità del Garante della *privacy*.
- S. ROSSETTI, M. SANTOPIETRO, D. MURADORE, *Il processo esecutivo telematico*, Milano, 2016.
- S. RUSSO, R. SCAVIZZI, *Manuale di diritto comunitario dell'informatica*, Milano, 2010.
- S. SICA, *Giurisprudenza nazionale ed europea e frammentazione legislativa della responsabilità civile del provider*, in *Comp. dir. civ.*, n. 2/2019.
- S. SICA, *Pubblico e privato al tempo della trasformazione digitale*, in questa rivista, n. 2/2021.
- S. SICA, *Social media e magistratura*, in questa rivista, n. 2/2020.



- S. VANTIN, *Intelligenza artificiale: il faro Ue su tutela delle vulnerabilità e principi antidiscriminazione*, in *Agenda digitale*, 24 novembre 2021, consultabile *online*.
- S. VIGLIAR, *Consenso, consapevolezza, responsabilità nei social network sites. Profili Civilistici*, Padova, 2012; F. COLAPAOLO, A. COPPOLA, F. R. GRAZIANI, M. MIRONE, M. ZONARO, *Social network e diritto*, Torino, 2021.
- T. CASADEI, S. PIETROPAOLI, *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Padova, 2021.
- T. E. FROSINI, *Le sfide attuali del diritto ai dati personali*, in S. FARO, T. E. FROSINI, G. PERUGINELLI (a cura di), *Dati e algoritmi. Diritto e diritti nella società digitale*, Bologna, 2020.
- T. M. UBERTAZZI, *Functional evolution of the right to privacy*, in *Comp. dir. civ.*, n. 3/2021.
- T. PELLEGRINI, *Prestazioni auto-esecutive. Smart contract e dintorni*, in *Comp. dir. civ.*, n. 3/2019.
- T. SICA, *Sopravvenienze contrattuali da Covid-19 e rapporti concessori. Scelta del rimedio e profili regolatori*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, n. 2/2021.
- Tribunale di Milano del 9 febbraio 2021, in *Diritto di Internet*, 10 febbraio 2021, consultabile *online*.
- U. ADAMO, *Costituzione e fine vita. Disposizioni anticipate di trattamento ed eutanasia*, Padova, 2018.
- U. CARNEVALI, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1974.
- U. DE MARTINO, N. PICARDI, P. RESCIGNO, G. P. TRIFONE, *La corte di cassazione dalle origini ai giorni nostri*, Roma, 2016.
- U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020.
- U. RUFFOLO (a cura di), *XXVI lezioni di Diritto dell'Intelligenza Artificiale*, Torino, 2021.
- U. RUFFOLO, G. RICCIO, A. F. URICCHIO, *Intelligenza Artificiale tra etica e diritti. Prime riflessioni a seguito del libro bianco dell'Unione europea*, Bari, 2020.
- U. RUFFOLO, *Giustizia predittiva e machina sapiens quale "ausiliario" del giudice umano*, in *Astrid*, 3 maggio 2021, consultabile *online*.
- U. RUFFOLO, *Il problema della "personalità elettronica"*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies*, n. 2/2020.
- U. SALANITRO, *Intelligenza artificiale e responsabilità: la strategia della Commissione europea*, in *Rivista di diritto civile*, LXVI, n. 6/2020.
- U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Bari-Roma, 2009.
- V. BALDINI, *La classificazione dei diritti fondamentali. Profili storico-teorico-positivi*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2020.
- V. BARBA, *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, Napoli, 2018.
- V. BARBA, *Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità e diritto civile italiano*, in *Rassegna di diritto civile*, n. 2/2021
- V. BELLOMIA, *Il contratto intelligente: questioni di diritto civile*, in *Judicium*, 10 dicembre 2020.
- V. CONTE, *Decisioni pubbliche algoritmiche e garanzie costituzionali nella giurisprudenza del Conseil constitutionnel francese*, in questa rivista, n. 1/2020, pp. 347-362.
- V. DI CATALDO, *Pandemia, imprese e contratti di durata*, in *Osservatorio del diritto commerciale*, n. 3/2020, consultabile *online*.
- V. DI CERBO, *Banche dati di giurisprudenza, nomofilachia e trasparenza dell'attività giurisdizionale. L'esperienza del Ced della Corte di cassazione*, in *Questione Giustizia*, consultabile *online*.



- V. MANES, *L'oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia*, in *Discrimen*, 15 maggio 2020, consultabile *online*.
- V. MARCHETTI, *Condizione digitale e dignità umana*, in *Città nuova*, 16 novembre 2021, consultabile *online*.
- V. RIZZO (a cura di), *Documento informatico, firma digitale e commercio elettronico*, Napoli, 2000.
- V. ROPPO, *Il racconto della legge. Diritto (e rovesci) di una storia che riguarda tutti*, Milano, 2019.
- V. ROPPO, R. NATOLI, *Contratto e Covid-19*, in *Giustizia insieme*, 28 aprile 2020, consultabile *online*.
- V. ROTONDO, *Responsabilità medica e autodeterminazione della persona*, Napoli, 2020.
- V. S. AMBROSIO, *Intelligenza artificiale, algoritmi e principi costituzionali nella giurisprudenza del Consiglio di Stato*, in *Gazzetta forense*, 20 maggio 2019, consultabile *online*.
- V. TIANI, *Una sentenza afferma che le persone devono conoscere come funzionano gli algoritmi che le giudicano. La Cassazione ha stabilito che formule di rating automatizzato devono essere spiegate agli interessati per ottenere un consenso pieno e informato*, in *www.wired.it*, 31 maggio 2021, consultabile *online*.
- V. V. CUOCCI, *Guida autonoma, intelligenza artificiale e sistemi assicurativi no-fault. Alcuni riflessioni comparative*, in *Comp. dir. civ.*, n. 1/2021.
- V. ZAMBRANO, *Le neuroscienze, la capacità e la radiografia della macchina del pensiero*, in *Comp. dir. civ.*, 2018, pp. 1-27.
- Z. BAUMAN, *Modernità liquida*, Roma-Bari, 1999.



**LA SENTENCIA Y LA TECNOLOGÍA.
NUEVOS PARADIGMAS EN EL PROCESO DE LA ORALIDAD EN EL SIGLO XXI**

**JUDGMENT AND TECHNOLOGY.
NEW PARADIGMS IN THE ORAL JUDICIAL PROCESS OF THE 21ST CENTURY**

Mónica Gloria Ibarra*

(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

Gladys Elder Gauna Donaliso*

(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

Resumen:

El análisis jurídico que se presenta respecto de la sentencia como acto procesal atravesado por el nuevo paradigma tecnológico es interpelado por las reformas procesales en cuanto a la oralidad, los principios procesales y la tutela judicial efectiva. Se analiza la estadística respecto del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba respecto a juicios orales del fuero civil y comercial, el lapso entre la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa y la tasa de conciliación.

Palabras clave:

* Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Integrante del equipo de investigación CONSOLIDAR dirigido por la Prof. Dra. Rosa Avila Paz de Robledo: "Los actos procesales y las nuevas tecnologías: hacia el expediente electrónico en el fuero civil y comercial en la Nación y en la Provincia de Córdoba", SECYT UNC. E-mail: monica.ibarra@unc.edu.ar

* Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Integrante del equipo de investigación CONSOLIDAR dirigido por la Prof. Dra. Rosa Avila Paz de Robledo: "Los actos procesales y las nuevas tecnologías: hacia el expediente electrónico en el fuero civil y comercial en la Nación y en la Provincia de Córdoba" SECYT UNC e integrante de "La mediación electrónica en la Nación y en la Provincia de Córdoba" SECYT UNC. E-mail: gladys.gauna@unc.edu.ar Aceptado para su publicación: 01/03/2023.



Sentencia; Poder Judicial de la Provincial de Córdoba; Derecho Procesal Civil y Comercial; Derecho Procesal y Tecnología

Abstract:

The legal analysis about judgment as a procedural act transversally irrupted by new technologies is questioned on procedural reforms of orality, procedural principles, and effective judicial protection. Statistics about the civil and commercial oral procedures are analyzed taking in consideration the time between preliminary hearing and the main hearing, and the conciliation percentual.

Keywords:

Judgment; Judiciary of the Province of Córdoba; Civil and Commercial Procedural Law; Technology and Procedural Law

Sumario: I. Introducción. II. Sentencia. 2.1 Firma Digital. 2.2 Expediente Electrónico. III. Oralidad en los Procesos de Conocimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba. 3.1. Fundamentación de la Sentencia. 3.2. Puesta en funcionamiento la Ley 10.555. 3.3. Los Principios del Proceso Oral. IV. Tutela Judicial Efectiva. V. Estadísticas Justicia Córdoba sobre el Juicio Oral en el Proceso Civil y Comercial. 5.1. Lapso entre la audiencia preliminar y el fin de la causa. 5.2. Tasa de conciliación. VI. Conclusión

I. INTRODUCCIÓN

El internet ha venido a revolucionar el mundo en todos los ámbitos tanto en la faz privada como en la pública, es así como el Estado desde hace tiempo comenzó a introducir cambio sustanciales para poder ir avanzando con las nuevas tecnologías. Así comenzó con el uso de las computadoras, el procesador de texto, la impresora y luego el fax, pero con el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación, el mundo se ha vuelto digital y el Poder Judicial no pudo estar fuera de estos progresos, para ello fue realizando cambios paulatinos, no solo en el ámbito administrativo del Poder Judicial, sino también en el campo Procesal, provocando así un cambio de paradigma en la tramitación de los juicios, en la valoración de las pruebas e incluso en la Sentencia.



Esta revolución tecnológica, "...se origina en dos grandes fenómenos: 1) la mutación exponencial de las nociones de espacio y tiempo a partir del uso masivo de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; y 2) la transformación en la forma de procesar los datos y la información en muchas actividades que antes sólo podían ser realizadas por nuestros cerebros.

A partir de la explosión de información y de datos que aumenta exponencialmente se intensifica la complejidad inherente a la sociedad de la información y del conocimiento. Y en estos escenarios disruptivos y vertiginosos, además de hacer frente a los desafíos que nos dejó el siglo XX, se agregan los que provienen de la era digital y del desarrollo de la inteligencia artificial. En entornos en donde la mayor parte de las actividades del ser humano transcurren en el mundo digital, adquiere un protagonismo central la tarea de proteger la dignidad e identidad digital de las personas."¹.

II. SENTENCIA

La sentencia configura un documento destinado a hacer constar la expresión del juicio del magistrado sobre las cuestiones sometidas a su decisión, por lo tanto, es un instrumento público porque es dado por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y con arreglo a las formalidades prescritas por la ley. De allí que esté sujeta a formalidades extrínsecas e intrínsecas. La primera está vinculada a la sentencia como acto procesal del juez y se materializa en su redacción comprendiendo la indicación de la fecha, que debe ser completa (art. 36 CPCC) y corresponder a día hábil (art. 42 CPCC), el idioma que debe ser nacional (art. 302 CCyCN), y la firma (art. 288 CCyCN). En cuanto a las formalidades intrínsecas atañe a la función misma que ella cumple como decisión final conforme al postulado de fallar según a lo alegado y probado por las partes

¹ CORVALÁN JUAN G, *Hacia una Administración Pública 4.0: digital y basada en inteligencia artificial*, L.L 2018-D 154.



(art. 329 CPCC) y que exige un específico contenido en estricta observancia de los principios de congruencia (art. 330 CPCC) en cuanto la decisión debe ajustarse a la materia fáctica oportunamente introducida y debidamente sustanciada en el juicio y en plenitud, en cuanto debe resolver todas las pretensiones oportuna y legalmente deducidas (art. 327 CPCC) dictando una decisión debidamente fundada (art. 3 CCyCN).²

2.1. Firma Digital

Un elemento constitutivo de trascendental importancia en los documentos es la firma. Esta es esencial en el caso de los instrumentos públicos, es uno de los requisitos de validez “la firma del oficial público de las partes, y en su caso de sus representantes” (art. 290 inc. b del C.C.y C.N).

El art. 288 del C. C. y C.N, expresa que la firma ológrafa consiste en “en nombre del firmante o de un signo”, “prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde”.

La ley 25.506 en su art. 3 expresa: “cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencia para su ausencia”. El art. 288 del C.C. y C.N establece que, si se trata de “instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del documento”.

La firma digital es definida por el art. 2 de la Ley 25.506, como el “resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere

² RAMACCIOTTI HUGO, *Compendio de Derecho Procesal Civil y Comercial de Córdoba*, Depalma, 1981, tomo 1, p 783.



información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose esta bajo su absoluto control”.

“...Pese a su designación como “firma”, la firma digital es una noción muy diferente a la firma ológrafa. Esta última implica una acción física de una persona humana con la que inserta una grafía, lo cual implica asumir como propia una declaración escrita. La firma digital, en cambio, implica un procedimiento mucho más complejo que involucra proceso de encriptación o cifrado. No es una firma ológrafa escaneada, o el simple tipeo del nombre. A “simple vista”, una firma digital se representa por una extensa o indescifrable cadena de caracteres, que en realidad, representa un número que resulta de aplicar un procedimiento matemático al documento.”³

La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, que permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Maina, nos dice que la criptografía estudia la forma de hacer que las comunicaciones sean ininteligibles, salvo para aquellos receptores que tengan la clave o llave para decifrar el mensaje. Por estas razones la Administración General del Poder Judicial dictó la Resolución N° 101, de fecha 03/10/2016; que reglamenta el correcto uso de las tarjetas criptográficas asignadas para la firma digital, y “...RESUELVE: **1)** Los usuarios de Firma Digital deberán: **a)** Mantener el control exclusivo de sus datos de creación de firma digital, no compartirlos, e impedir su divulgación. **b)** Utilizar UN (1) dispositivo de creación de firma digital técnicamente confiable. **c)** Solicitar la revocación de su certificado al Certificador ante cualquier circunstancia que pueda haber comprometido la privacidad de sus datos de creación de firma. **d)** Informar sin demora al Certificador el cambio de alguno de los datos contenidos en el certificado digital que hubiera sido objeto de verificación. **e)** En caso de compromiso de su clave privada, el titular del certificado correspondiente se

³ MAINA, NICOLÁS, *Prueba Electrónica Digital*, Advocatus, año 2021.P. 46



encuentra obligado a comunicar inmediatamente dicha circunstancia al Certificador. **2)** La Tarjeta Criptográfica es de uso personal e intransferible; por tratarse de un objeto electrónico, la tarjeta deberá ser preservada de golpes, maltratos, contactos con líquidos o sustancias abrasivas. **3)** En caso de robo o extravío de la Tarjeta Criptográfica, se procederá a la revocación del Certificado Digital existente en la misma. Para la entrega de una nueva Tarjeta Criptográfica, se requerirá la presentación de la denuncia policial correspondiente. El agente deberá realizar nuevamente el procedimiento de solicitud de Certificado de Firma Digital. El costo que genere su reposición estará a cargo del agente, fijándose el mismo en el equivalente en moneda nacional a dólares ochenta y cinco (U\$85) el que estará sujeto a las variantes del mercado, y se descontará por planilla. **4)** En caso de mal funcionamiento de la Tarjeta Criptográfica por problemas técnicos, ajenos al usuario de la misma, éste deberá concurrir a la Oficina de Personal del Área de Recursos Humanos, y su reparación o reposición estará a cargo del Poder Judicial. **5)** En caso de renuncia, baja, traslado, o cualquier otra causa que motive que el agente no utilice más su Certificado de Firma Digital, la Tarjeta Criptográfica deberá ser devuelta a la Oficina de Personal a los fines de la revocación de su Certificado. Caso contrario, deberá abonar el importe de esta.⁴

La Sentencia también ha tenido cambios en su implementación tecnológica a través de la utilización de la firma digital. Esta revolución tecnológica comenzó con el dictado de la Ley 25.506 sancionada el 14/11/2001 y promulgada el 11/12/2001, que reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y de su eficacia jurídica, equiparándola a la “manuscrita-ológrafo”. En consonancia con esta ley, en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, en una primera etapa de su ejecución, la Corte Suprema de la Nación, dictó los Acuerdos N° 426 del 30/8/2001 y el N° 615 del 31/10/2005; con el propósito de suscribir el “Convenio

⁴ Resolución N° 101, de fecha 03/10/2016 del Administrador General del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.



de Comunicación Electrónica Interjurisdiccional” y la designación de la “autorización de registro” para la validación de datos para la implementación de la firma digital.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en el Acuerdo Reglamentario N° 882, Serie “A”, del 17/05/2007, en su considerando dice : “...Que mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1028/03 se decidió que la Oficina Nacional de Tecnologías Información (O.N.T.I.), dependiente de la órbita de la Subsecretaría de Gestión Pública de la Jefatura de Gabinetes de Ministros de la Nación, en su calidad de Autoridad Certificante (en adelante A.C. ONTI), sería el organismo encargado de otorgar las licencias a los certificadores, supervisar su actividad, régimen de competencia y protección de los usuarios. A su vez, como parte de su Política de Certificación, dicha entidad, regula la relación con las dependencias del sector público, nacional, provinciales y municipales que soliciten la emisión de certificados para la utilización de la firma digital. En este sentido, uno de los objetivos de la A.C. O.N.T.I. es precisamente el de regular el empleo de la firma digital en la instrumentación de los actos internos de algunos de los poderes del Estado que no produzcan efectos individuales en forma directa. Sin embargo, en el marco de concurrencia de las facultades reglamentaria sobre el tema, y ante la autonomía de este Poder Judicial, para fijar el alcance concreto de la materia objeto de la presente, no existe óbice legal alguno que impida sobrepasar aquella limitación en la medida que un instrumento suficiente a tales fines así lo establezca y como tal, disponga la regulación efectiva de la utilización de la firma digital para las resoluciones judiciales que han sido antes indicadas. I) Que el objetivo que se persigue al solicitar la certificación de la A.C. ONTI, es el de dotar al documento firmado digitalmente, de los efectos propios que correspondan a los denominados documentos públicos. Basta con tener presente, que el sistema jurídico reconoce amplitud al principio de instrumentos que pueden considerarse públicos, en tanto los mismos estén confeccionados conforme el ordenamiento jurídico. El art. 3 de la ley 25.506 al equiparar la firma manuscrita y la firma digital, constituye uno de



los avances más importante de esta normativa, acorde los efectos prácticos que de ellos se siguen. De esta manera, el documento electrónico, en el caso concreto la resolución judicial firmada digitalmente tendrá iguales características que aquel firmado en soporte papel; dándole la ley el carácter de original tanto al documento firmado en papel como el digitalmente firmado. II) Que la necesidad de mejorar en forma permanente y sostenida las distintas actividades que son cumplidas dentro del ámbito de la Administración de Justicia impone la adopción de medidas que faciliten o impliquen un adelanto en el desenvolvimiento y gestión de la tarea diaria y, a la vez, una optimización de los distintos recursos empleados. En este sentido, es propósito de este Tribunal Superior de Justicia producir un incremento más sostenido en el uso del Sistema de Administración de Causas (S.A.C.) puesto en marcha desde el 01.IV.04, particularmente focalizado en el fuero civil y comercial para lo cual, se ha ponderado la conveniencia de dotar a los Sres. Jueces de los Juzgados de Ejecución Fiscal de la ciudad de Córdoba con el sistema de firma digital respecto de las resoluciones que dicten, en dichos Tribunales sean ellas sentencias o autos. La elección de los nombrados juzgados obedece a que los mismos ya cuentan con el procedimiento de digitalización del expediente judicial a través del S.A.C. Civil con un importante grado de desarrollo. De esta manera, la protocolización electrónica como consecuencia inmediata de la rúbrica digitalizada de las distintas resoluciones judiciales que se dicten permitirá a los usuarios habilitados, una mayor rapidez y dinamismo dado el importante número de resoluciones dictadas anualmente por estos Juzgados, lo que revertirá, en última instancia y en forma positiva, sobre la totalidad de los justiciables; como también en una notoria economía de los recursos corrientes del Poder Judicial. El mejoramiento de las distintas rutinas diarias que se cumplen en los mencionados Tribunales mediante la nombrada firma digital se impone, en función de lograr un incuestionable mejoramiento en el sistema del servicio de administración de justicia tendiente a ser cada vez más célere y previsible,



implementando novedosos mecanismos que simplifiquen la tarea de los operadores jurídicos.”⁵

El Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, en la aplicación y puesta en función de las nuevas tecnologías, y ante la posibilidad de lograr mayor agilidad en los Expedientes de Ejecución Fiscal, dispone por Resolución N°1 del 15/04/2013, dictada por el Presidente de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia, que en su considerando dice: “...Que, el proceso de modernización tecnológica encarado, del cual la firma digital constituye un importante eslabón, es consecuencia de la decisión de lograr una mayor eficiencia en la gestión judicial, buscando -como se adelantara- despapelizar los juzgados para llegar en el futuro al llamado expediente digital. Que, en tal entendimiento resulta innegable la conveniencia de ampliar -en el ámbito de los Juzgados de Ejecución Fiscal de esta Ciudad- el uso de la firma digital, con el fin de propender a agilizar y racionalizar considerablemente los procesos que en dichos organismos jurisdiccionales se desarrollan, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para su control, al hacerlos disponibles para toda la ciudadanía. Es que el aprovechamiento de esta herramienta tecnológica permite aportar beneficios concretos en la gestión judicial sin menguar la seguridad jurídica, acorde con la función judicial.... RESUELVE: Art. 1°. EXTENDER el alcance de la implementación del sistema de firma digital a todas las resoluciones judiciales que deban realizarse por parte de los magistrados y funcionarios de los Juzgados de Ejecución Fiscal de esta Ciudad a partir del día primero de mayo del corriente año.”⁶

Para seguir avanzando en los procesos de despapelización y para llegar al expediente digital el T.S.J de la Provincia de Córdoba, por Acuerdo

⁵ Acuerdo Reglamentario N° 882, Serie “A” de fecha 17/05/2007, dictado por el T.S.J. de la provincia de Córdoba.

⁶ Resolución N° 1 de fecha 15/04/2013, dictada por el Presidente de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.



Reglamentario N° 1537 Serie “A” del 26/11/2018, adhirió mediante la Ley 9401, sancionada el 04/07/2007 y publicada el 19/07/2007, a la Ley de Firma Digital N° 25.506. y sus modificatorias (ley 27.446 de fecha 18/06/2018). Asimismo se autorizó por Ley N° 10.177, el uso del expediente electrónico, documento electrónico, comunicaciones electrónicas, firma digital, firma electrónica y domicilio electrónico constituido, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, con idéntica validez jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales; facultándose al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba para reglamentar su uso e implementación gradual.(art.13).-La experiencia recabada en relación a la utilización de la firma digital ha dado sobradas pruebas de su eficacia y seguridad, tanto en la protocolización de las resoluciones judiciales, libramiento de las órdenes de pago electrónicas, oficios judiciales, etc.; por lo que corresponde en esta etapa continuar valiéndonos de sus beneficios y disponer su utilización obligatoria para la firma de Sentencias y Autos dictados en los Juzgados de 1º Instancia de la Provincia de Córdoba, cualquiera sea su competencia material; el que comenzará a regir a partir del día 01 de febrero del año 2019. IV) La eficaz y correcta utilización de esta herramienta requiere que el operador en primer lugar proceda en el SAC a protocolizar la resolución -Sentencias o Auto- y luego a firmar esas resoluciones a través de la firma digital, ya que una vez firmada no se podrá eliminar, ni modificar la operación. De esta manera, a partir de dicha data, queda prohibida la impresión de Sentencias o Autos para la formación de protocolos en soporte papel; únicamente puede imprimirse copia del decisorio extraída del S.A.C. para incorporar al expediente cuando este prosiga su trámite en ese formato - papel-

“..RESUELVE: Artículo 1º: Establecer de manera obligatoria a partir del día 01 de febrero del año 2019, para los Juzgados de 1º Instancia de toda la Provincia de Córdoba, cualquiera sea su competencia material, el uso de los Protocolos Electrónicos de Sentencias o Autos, según corresponda. Artículo 2º: Queda vedado la impresión de Sentencias o Autos, para la formación de los respectivos



protocolos, sin embargo en los casos en que el expediente prosiga su trámite en soporte papel podrá incorporarse copia simple del decisorio extraído del SAC. Artículo 3º: Implementar a partir de la fecha indicada el uso obligatorio de la firma digital de las Sentencias y Autos dictados por todos los Juzgados de 1º Instancia de nuestra Provincia de Córdoba, cualquiera sea su competencia material conforme al procedimiento indicado en el Considerando IV”.⁷

Que a partir de la puesta en funcionamiento de este nuevo sistema, surgieron situaciones excepcionales en que los Funcionarios y Magistrados debían dictar una Resoluciones, Sentencia o Autos en días y horas inhábiles como por ejemplo en el caso de las amparos, internaciones, habeas Corpus, Violencias Familiar, etc.. es así que el Tribunal Superior de Justicia dictó el Acuerdo Reglamentario N°1545, Serie “A” de fecha 08/02/2019, donde establece : “.... RESUELVE: I) Disponer que en aquellos casos que se presenten en días y horas inhábiles, en donde el funcionario y/o magistrado entienda que se deba dictar una Sentencia o Auto resolviendo la cuestión, en ese mismo momento podrán disponer la medida ya sea oralmente o por decreto, debiendo con posterioridad incorporar la resolución dentro de las dos (2) primeras horas del día hábil siguiente, al sistema informático (SAC Multifuero), con los fundamentos correspondientes, conteniendo la firma digital y una vez protocolizada, se notificará a las partes interesadas la misma. II) Establecer que en aquellos casos en que, por las características especiales del procedimiento, demande la imperiosa necesidad de contar inmediatamente con los fundamentos de resolución protocolizada y firmada digitalmente, el titular del tribunal, deberá concurrir durante el turno a su despacho, para poder dictar la medida correspondiente”⁸.

⁷ Acuerdo Reglamentario N° 1537 Serie “A” de fecha 26/11/2018, dictado por el T.S.J de la Provincia de Córdoba

⁸ Acuerdo Reglamentario N° 1545, Serie “A” de fecha 08/02/2019, dictado por el T.S.J de la Provincia de Córdoba



2. 2. Expediente Electrónico

“...Los cambios tecnológicos- entendida la tecnología como conjunto de técnicas (procedimientos) que se ejecutan para realizar una tarea- que se adoptan e implementaron en las unidades jurisdiccionales y en las oficinas no jurisdiccionales, como la informatización, el uso de la firma digital, comunicaciones electrónicas y toda aquella documentación digital de igual valor probatorio que su idéntica en soporte papel”.⁹

Diversas pueden ser las necesidades que impulsan a las Instituciones del sistema de Justicia a modernizarse, en cuanto al uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicación: mejorar el acceso a la justicia; mejorar el acercamiento a la sociedad a través del acceso a la información legal, tanto respecto del funcionamiento de la Institución, como las decisiones judiciales; optimizar el trámite de las causas y la productividad de los tribunales.¹⁰

Es así como el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, junto con la Federación del Colegio de Abogados y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba, firmaron convenios de colaboración para mejorar la tramitación de causas, con el uso de nuevas tecnologías. Por las atribuciones otorgadas en el artículo 14 de la Ley 10.177, el Tribunal Superior de Justicia dictó el Acuerdo N° 1582, Serie “A” de fecha 21/08/2019, que reglamenta el uso del expediente electrónico y la firma electrónica y/o digital, así como disponer su implementación gradual, de acuerdo a lo informado por el Área de Tecnologías de la Información y Telecomunicación del Poder Judicial de Córdoba, donde como objetivos tienden a optimizar el sistema de gestión de la tramitación remota de las causas judiciales por parte de los Abogados y otros auxiliares de la Justicia,

⁹ SBDAR, CLAUDIA B. “Tecnología en la Administración de Justicia”.LL-2018-D-148

¹⁰ SBDAR, CLAUDIA B. *ibidem*.



incrementando las funcionalidades internas y externas del sistema de administración de causas (SAC).

En su parte el Acuerdo mencionado con anterioridad (1582) dispone: “...RESUELVE: Artículo 1: Aprobar el plan tendiente a la tramitación íntegramente electrónica de los expedientes judiciales y disponer que su ejecución, se efectúe de manera gradual, para toda la provincia por un plazo inicial no mayor a doce (12) meses y en forma paralela para Capital y las demás sedes del interior provincial. Artículo 2: Establecer a partir de la publicación del presente Acuerdo, como fecha de inicio de ejecución del Plan de Despliegue del Expediente Judicial Electrónico, de conformidad a las pautas técnicas establecidas en el Reglamento General integrante del presente. Artículo 3: Limitar lo dispuesto para el inicio y posterior tramitación completamente electrónica, sólo a las causas judiciales nuevas que se inicien a partir de las fechas de cambio de modalidad, las que se irán determinando para cada sede y dependencia según el avance del plan de despliegue. Artículo 4: Extender el alcance de la implementación de firma digital, a todas las resoluciones judiciales que deban ser suscriptas por parte de los magistrados y funcionarios de toda la provincia, ya sea en actuaciones dentro de expedientes electrónicos o para resoluciones protocolizadas, aunque se trate de expedientes papel. Artículo 5: Ampliar el alcance del Acuerdo Reglamentario 1103, de notificaciones electrónicas a los casos enumerados en el Considerando IX y disponer que cada vez que las normas exijan acompañar copias para traslado, éstas podrán ser suplidas por la referencia a los documentos digitales incorporados en el expediente electrónico. Artículo 6: Disponer que el alcance del Acuerdo Reglamentario 1537, de Protocolos Electrónicos, a todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Provincia, cualquiera sea su competencia material. Artículo 7: Disponer que en aquellos lugares donde existan más de una dependencia con idéntica competencia y las causas aún sean asignadas por turnos, en la medida que avance la ejecución del Plan de Despliegue, la asignación de dependencia competente se realizará por sorteo. Artículo 8:



Aprobar el Reglamento General para el Expediente Judicial Electrónico y sus correspondientes Políticas de Seguridad, que como anexo integra el presente Acuerdo, el que continuará siendo revisado durante el plazo que dure la ejecución del Plan de Despliegue dispuesta. Artículo 9: Facultase a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia con el asesoramiento del Consejo de Coordinación SAC y del Área TIC, para dictar las normas generales y obligatorias que requiera la correcta aplicación o desarrollo del presente régimen, incluidas las que aprueben los cronogramas de avance del plan de despliegue, y las necesarias para regular las situaciones no previstas expresamente.¹¹

Por la ley N° 10.618 de fecha 13/03/2019, y publicada el 27/03/2019, que trata sobre la “Simplificación y modernización de la Administración del Estado Provincial, establece nuevos lineamientos para el funcionamiento de la Administración, con la finalidad de propender a la economía, celeridad, eficacia mediante la aplicación de las tecnologías de información y comunicación, tratando de cumplir con los objetivos de la despapelización, eliminando de manera definitiva al papel como soporte de los expedientes y demás actuaciones, debiendo toda la actividad desenvolverse íntegramente a través de medios digitales o electrónicos.

Por Acuerdo Reglamentario N° 1692, Serie “A” del 29/03/2021, y el Anexo, el Tribunal Superior de Justicia, siguiendo los lineamientos impuestos por la Ley 10.618, y teniendo en cuenta la conveniencia de implementar los avances tecnológicos repasados-en pos de la celeridad, transparencia y eficiencia- en el marco actual de emergencia sanitaria, dictada por la legislatura Provincial por ley 10.690 de fecha 18/03/2020, debido a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, provocada por la irrupción del COVID-19 (coronavirus) resulta imprescindible y estratégico disponer que desde el 16/06/2021, los Acuerdos, Acuerdos Reglamentarios y demás actos administrativos del Área de

¹¹ Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie “A” de fecha 21/08/2019, dictado por el T.S.J. de la Provincia de Córdoba



la Administración, se suscriban con firma digital y se protocolicen electrónicamente en el Sistema de Administración de Causas (SAC). Con la excepción de aquellos emitidos por y con la intervención del Área de Administración que se identifica- en el caso de los Acuerdos- como Serie “C”.¹²

III. ORALIDAD EN LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO CIVILES Y COMERCIALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La visión publicística del proceso civil y el fin público del derecho procesal dado por el interés que tiene el Estado en la realización del derecho, tiene anclaje hoy en ese sistema constitucional-convencional¹³, conforme al cual, en este ámbito el resultado esperado o finalidad, no es la simple resolución de los conflictos, sino el cumplimiento eficaz del rol del Estado en su función jurisdiccional, a partir de sentencias justas. El legislador debe cuidar el diseño de procesos aptos para resolver distinto tipo de cuestiones en lapsos razonables de tiempo y el juez como director del proceso, es el responsable de su cumplimiento¹⁴.

Por ley Provincial N° 10.555 publicada el 24/08/2018, que entró en vigencia a partir del 01/02/2019, se legisló el proceso oral, para determinados juicios estableciendo, la oralidad y los procedimientos a seguir: “...Artículo 1º.- Objeto: será de aplicación el procedimiento previsto en la presente Ley para los juicios de daños y perjuicios que por su cuantía tramiten por el juicio abreviado conforme las disposiciones de la Ley N° 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, o el trámite análogo que disponga el cuerpo legal que en

¹² Acuerdo Reglamentario N° 1692, Serie “A” de fecha 29/03/2021, dictado por el T.S.J. de la Provincia de Córdoba.

¹³ Cfr. AVILA PAZ DE ROBLEDO, ROSA A. (Directora) *Manual de Teoría General del Proceso*, Ed. Advocatus, Córdoba, 2005, T. I, cap. II.

¹⁴ Cfr. PAULETTI, ANA CLARA. “Oralidad y Tutela Judicial Efectiva” https://derecho.aulavirtual.unc.edu.ar/pluginfile.php/164921/mod_resource/content/1/TUTELA%20JUDICIAL%20EFECTIVA%20y%20oralidad%20homenaje%20Angelina%20%20Pauletti.pdf. 07/09/2022.



el futuro lo reemplace o sustituya. Asimismo, se podrá aplicar para aquellos juicios en los que las partes, de común acuerdo o a propuesta del juez, soliciten su adhesión. Artículo 3º.- Audiencia preliminar. Contestada la demanda, las excepciones y la reconvención en su caso, el tribunal citará a las partes a una audiencia preliminar en un plazo máximo de veinte (20) días, en la que las escuchará y las invitará a conciliar, debiendo procurar un avenimiento parcial o total del litigio, pudiendo proponer a las partes fórmulas conciliatorias, sin que ello importe prejuzgamiento.... Artículo 4º.- Audiencia complementaria. El tribunal citará a las partes, testigos y peritos cuando correspondiere, a concurrir a la audiencia complementaria a llevarse a cabo en la fecha fijada conforme el artículo 3º de esta Ley, bajo apercibimiento de realizarse con la parte que se encuentre presente. Será carga de las partes notificar a los testigos y peritos de los que pretendan valerse, debiendo verificar que las notificaciones no fracasen por cambio de domicilio, en cuyo caso -oportunamente- deberán denunciar el nuevo y notificar hasta cinco (5) días antes de la audiencia; caso contrario se lo tendrá por desistido de dicha prueba si el citado no compareciere. El debate será oral, público y continuo. Cuando la publicidad resulte inconveniente o afecte el orden público, por resolución motivada, podrá disponerse que se realice a puertas cerradas. Dicha resolución será irrecurrible.... Artículo 5º.- Alegatos. En la audiencia complementaria, luego de la recepción de la prueba, las partes podrán realizar alegatos en forma oral, por su orden. No será admisible la incorporación de memorias ni apuntes sobre los alegatos producidos. Artículo 6º.- Sentencia. Formulados los alegatos el tribunal declarará cerrado el debate y llamará inmediatamente autos para sentencia, la que será pronunciada en el plazo de treinta (30) días. Artículo 7º.- Registro de audiencia complementaria. El registro de la audiencia complementaria será audiovisual. Se deberá dejar constancia de su resguardo en soporte digital, pudiendo las partes requerir una copia a su cargo. Sólo excepcionalmente el registro audiovisual podrá ser reemplazado por acta escrita. Artículo 8º.- Dirección de las audiencias. Impulso procesal. Las audiencias previstas por la presente Ley serán presididas y



dirigidas por el tribunal bajo sanción de nulidad. Su presencia es inexcusable e indelegable. El impulso procesal será de oficio desde el inicio del trámite.”¹⁵

3.1. Fundamentación de la Sentencia

La sentencia en los juicios realizados con el procedimiento oral, deben estar debidamente fundada, que si bien no está expresado en el Art.6 de la ley 10.555, esto surge de la Constitución Nacional (Art.18, “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso.....- En el ámbito Provincial en la Constitución de la Provincia de Córdoba, en el Art. 155, los magistrados y funcionarios judiciales ... Deben resolver las causas dentro de los plazo fatales que las leyes procesales establezcan, con fundamentación lógica legal”.

Fundar la sentencia consiste, en la obligación de consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ella contiene, con base a la prueba rendida y de acuerdo al sistema de evaluación admitido por la ley procesal, porque este es el modo de posibilitar el contralor de las partes y del tribunal de casación...”¹⁶.

Asimismo, el Art. 3 del C.C y C.N. dice: Deber de Resolver: “el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción, mediante una decisión razonablemente fundada. Este artículo contempla la obligación de decidir, pero agrega que sea razonablemente fundada, incorporando, de modo coherente con los anteriores (artículos), el deber de seguir un proceso argumentativo susceptible de control judicial.¹⁷ Devis Echandía nos dice que: “...consideramos

¹⁵ Ley de la Provincia de Córdoba N° 10.555. Ley de Procedimientos para los Juicios de Daños y Perjuicios que tramiten por el Juicio Abreviado según lo dispuesto en el Código Procesal y Civil y Comercial Provincial. <http://www.saij.gob.ar> . 07/09/2022.

¹⁶ BARRERA BUTELER, GUILLERMO, *Constitución de la Provincia de Córdoba, concordancia, doctrina, jurisprudencia, legislación*. Advocatus.2007, Córdoba, p. 284

¹⁷ LORENZETTI, RICARDO LUIS, *Código Civil y Comercial de la Nación Comentado*. Rubinzal – Culzoni, Año 2014.Tomo I. P. 39.



la sentencia como un juicio lógico del juez para la declaración de la voluntad del Estado, contenida en la norma legal que aplica, en el caso concreto”.¹⁸

La Corte Suprema de la Nación en el caso: “González Domingo Fernando s/arts. 296 y 289 inc. 3 C.P.” ha dicho: “...el art. 18 de la Constitución Nacional exige que las Resoluciones Judiciales sean fundamentadas, no basadas en meras afirmaciones de índole dogmática, y hallarse desprovistas de un excesivo rigor formal, que resulte incompatible con el servicio de justicia, e impide alcanzar la finalidad última del proceso, que consiste en la averiguación de los hechos que se reconocen de interés para la apreciación de la responsabilidad de los imputados”¹⁹

Lo novedoso de este cambio de “Paradigma” a la oralidad en el Proceso Judicial Civil en algunos juicios es que en la Audiencia Complementaria está previsto su videograbación incorporando de esta manera la tecnología al Proceso, y el Juez como director del Proceso Oral y continuo, pasa de un rol pasivo, a un Juez activo que tiene que impulsar el procedimiento esto requiere mayor simplificación y flexibilidad en las formas. Como, por ejemplo : cuando en la sentencia se cita a lo que dijo un testigo ahora no se consigna la fs. del expediente, sino que se refiere al minuto de la grabación de la Audiencia complementaria.

Por Acuerdo Reglamentario N° 1735, Serie “A” de fecha 02/12/2021, dictado por el Tribunal Superior de Justicia, por sugerencia de los jueces encargados de implementar la oralidad, se modificó el Protocolo de actuación,

¹⁸ DEVIS ECHANDÍA , HERNANDO. *Nociones Generales de Derecho Procesal Civil*. Temis, Bogotá 2009.P.617.

¹⁹ C.S.J.N., Recurso queja N°1- González Domingo Fernando s/arts.296 y 289 inc.3 C.P., 09/04/2019 Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- <http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-recurso-hecho-deducido-fiscal-general-ante-camara-federal-casacion-penal-causa-gonzalez-domingo-fernando-arts-296-289-inc-3-cp-fa19000068-2019-04-09/123456789-860-0009-1ots-eupmocsollaf?#> Agosto 2022



resolviendo que teniendo en cuenta que la estructura del proceso oral se prescinde de formas sacramentales, y en consonancia con los nuevos paradigmas generales, los Magistrados deberán redactar las Resoluciones en términos claros y comprensibles para el justiciable, prescindiendo de formulaciones y citas dogmáticas.

3.2. Puesta en funcionamiento la Ley 10.555

El 01/02/2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el marco del Programa Justicia 2020, y mediante la firma de un Convenio de Colaboración, pusieron en marcha un proyecto conjunto para generalizar la *oralidad en el proceso civil en la provincia de Córdoba, con tres objetivos: (I) aumentar la calidad de las decisiones jurisdiccionales (II) reducir los plazos totales del proceso de conocimiento y (III) aumentar la satisfacción de los usuarios del sistema de justicia civil*. La implementación total del proceso oral, enmarcado en la Ley 10.555 de la Provincia de Córdoba, se concretó de modo gradual, en tres fases: con la entrada en vigencia de la ley, el 01/02/2019, aplicándose en 18 Juzgados Civiles y Comerciales: 15 de la Ciudad de Córdoba y 3 de la Ciudad de Río Cuarto. Luego, mediante Acuerdo Reglamentario N°1590 Serie A, el TSJ dispuso que otros 25 Juzgados implementen la oralidad efectiva, desde el 01 de octubre 2019. Y más recientemente, el 15/09/2021, por Acuerdo Reglamentario N°1720 Serie A, se aprobó la implementación del proceso oral civil en los restantes juzgados de primera instancia de la Provincia de Córdoba. A la fecha, la totalidad de los 83 Juzgados Civiles y Comerciales de la provincia, gestionan los procesos de conocimiento previstos en la Ley 10.555 con una audiencia preliminar (orientada a depurar la prueba, organizar la actividad probatoria y conciliar) y una audiencia complementaria (o de vista de causa) concentrada y videograbada. Por su parte, el 19 de febrero de 2019 por Acuerdo Reglamentario



N°1550 Serie A, se aprobó el Protocolo de Gestión del Proceso Civil Oral, herramienta que operativiza el proceso por audiencias, brindando las herramientas requeridas para que los Juzgados logren implementar de manera eficaz una nueva modalidad de gestión. Dicho Protocolo fue revisado y actualizado con fecha 02 de Diciembre del 2021 mediante Acuerdo Reglamentario N° 1735 Serie A, estableciéndose nuevas metas de trabajo, en general más exigentes.²⁰

3.3. Los Principios del Proceso Oral

Por Acuerdo N° 1735, Serie “A”, de fecha 02/12/2021, el tribunal Superior de Justicia, actualiza el protocolo de gestión del Proceso Civil Oral y amplía la actuación de los jueces en: “...Será de aplicación también a los procesos de consumo en los que el consumidor sea actor sin límite de monto (conforme art. 52 y 53. de la Ley 24.240), en tanto que el proceso previsto en la ley 10.555 es el proceso más breve disponible. Ello, sin perjuicio de la atribución que le cabe al/la juez/jueza, a pedido de parte y mediante resolución fundada de modificar el trámite a otro tipo de proceso de conocimiento acorde a la normativa vigente.”... “Su implementación implica un cambio de paradigma general que propone revisar la concepción tradicional del proceso procurando una justa composición de los intereses en juego de modo más eficiente e inmediato. El cambio definido por la nueva normativa determina que los operadores jurídicos deban abordar la temática según lo dispuesto en la ley específica y este protocolo, manteniendo el Código Procesal Civil y Comercial una aplicación supletoria o residual. A los fines de afrontar el desafío de una justicia más célere e inmediata, resulta necesario contar con un Protocolo de Gestión en el que se describan prácticas y reglas generales de carácter vinculante en lo que hace a la gestión para todos

²⁰ Generalización de la Oralidad en Procesos de Conocimiento Civiles y Comerciales de la Provincia de Córdoba- Resultados a 3 años y 4 meses –desagregado- Período febrero 2019-2022. Secretaría Civil y Comercial del T.S.J. y la Su- Area de Investigación, Desarrollo e innovación tecnológica. Justicia Córdoba-Poder Judicial de la Provincia de Córdoba-julio 2022.



los operadores, dejando a salvo la independencia judicial en lo que hace a las decisiones jurisdiccionales. La ley y el Protocolo de Gestión no contienen, ni pueden contener soluciones específicas a todos los probables planteos o vicisitudes que se pueden presentar. En virtud de ello, será el Magistrado interviniente quien deberá solucionarlos tomando en consideración los objetivos y principios que informan el proceso oral. OBJETIVOS El Protocolo de Gestión del proceso civil por audiencias constituye un compendio de reglas vinculantes para todos los operadores jurídicos, cuya finalidad es la concreción de los objetivos fijados en la Ley Provincial Nro. 10.555, esto es, reducción de la duración del proceso en todas sus instancias, intermediación del/la juez/a, favorecimiento de la conciliación de los conflictos, y mejora en la calidad de las resoluciones que se dicten; todo ello teniendo también en miras prestar el servicio de Justicia de manera más eficiente y con ello fortalecer la confianza del ciudadano en el sistema judicial. PRINCIPIOS INVOLUCRADOS El texto de la Ley Provincial Nro. 10.555 es un compendio de reglas generales que empodera al/a la Juez/a en la dirección del proceso, para lo cual, se requiere, la capacitación y desarrollo de habilidades suficientes para la consecución de los objetivos referidos. La base normativa encuentra en diversos principios el fundamento último, y éstos, se erigen como normas interpretativas generales y últimas que permiten –con su adecuada vigencia- la obtención de los objetivos del sistema. Por ello, resulta oportuno efectuar una mención de los ***principios que informan el proceso civil oral, esto es: Intermediación, Celeridad, Concentración, Moralidad, buena fe y colaboración procesal, Simplificación y flexibilidad de las formas, Publicidad y transparencia, Tutela judicial efectiva, Debido proceso, Oficiosidad, Eficacia, Economía procesal y Concreción del proceso en plazo razonable.*** ROL DEL/LA JUEZ/A: En su carácter de director/a del proceso, aplicando la oralidad efectiva, el/la juez/a: -Fijará las audiencias en los menores plazos posibles, acordes a las características del conflicto-Establecerá el modo de participación personal, siendo la regla la presencialidad. Sin perjuicio de ello, el/la Juez/a podrá disponer



fundadamente la intervención de forma remota, conforme a la reglamentación del TSJ- Exhortará a que las partes se involucren activamente en elaborar fórmulas conciliatorias o transaccionales. Podrá informar las distintas posibilidades con las que cuentan, conforme la casuística que involucra la causa- Dirigirá personalmente las audiencias-Evitará suspensiones o dilaciones de las audiencias, debiendo celebrarlas con la parte que asista-Impedirá la dilación del proceso-Rechazará in límine las excepciones e incidencias manifiestamente improcedentes-Resolverá los incidentes de modo previo a las audiencias, y los que se planteen en ellas en el mismo acto-Utilizará siempre un lenguaje sencillo comprensible a todos-Podrá solicitar, aclaraciones, ordenar lecturas y el uso de apoyos gráficos-Deberá moderar las discusiones, formular advertencias, imponer sanciones e impartir directivas generales para el buen desarrollo de las audiencias-Tomará todos los recaudos necesarios para que la tramitación del beneficio de litigar sin gastos no dilate o suspenda el dictado de la resolución en el principal-Velará por la carga meticulosa y fidedigna de todos los datos en el Sistema de Administración de Causas Multifuero y que se apliquen las Encuestas de Satisfacción a participantes en audiencias.1. ETAPAS:TRABA DE LA LITIS E INFORMACION A LAS ARTES DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE GESTIÓN: Al momento de proveer a la demanda y/o contestación, el/la Juez/a podrá requerir de oficio los elementos que revistan trascendencia para el tratamiento de la pretensión, simplifiquen el análisis de la cuestión litigiosa y faciliten la conciliación en la audiencia preliminar, tales como expediente penal, administrativo, historia clínica, etc. (mediante oficio o correo electrónico, solicitando su desarchivo en caso necesario), los que quedarán a disposición y consulta de las partes una vez incorporados. La demora en la incorporación de tal material no es causal de suspensión de la audiencia preliminar. Cuando no se hubiera tenido que ofrecer la prueba junto con la demanda, el/la juez/a concederá un plazo de diez (10) días a los fines de que la ofrezcan. El Tribunal deberá controlar e incorporar al Sistema de Administración de Causas Multifuero los datos necesarios y suficientes para el cursado de las notificaciones (vg.



domicilios de partes, peritos, etc.), y se requerirá a las partes y a sus abogados que denuncien números telefónicos y correos electrónicos para enviarles comunicaciones informales. En todos los casos el/la Juez/a utilizará los modelos estandarizados de proveídos y actas, con las particularidades del caso concreto.

AUDIENCIA PRELIMINAR: contestada la demanda o vencido el plazo para ello, el/la Juez/a convoca a la audiencia preliminar, la que debe ser notificada de oficio, haciendo expresa mención de que las partes y demás participantes deberán hacerlo personalmente de manera presencial como regla. Sin perjuicio de ello, podrán intervenir de forma remota según disponga fundadamente el/la Juez/a, conforme a la reglamentación del TSJ. Si la parte es una persona jurídica, se le indicará que deberá concurrir a través de apoderado con facultades suficientes para conciliar, conocimiento del juicio y con instrucciones precisas de su mandante, bajo apercibimiento de que su conducta pueda ser interpretada como favorable a la posición de la contraria. La convocatoria podrá ser comunicada, además, informalmente por correo electrónico o telefónicamente a los litigantes que hayan informado sus datos de contacto. La audiencia, en un marco confiable para los intervinientes, es la primera oportunidad en la que el/la Juez/a procurará lograr avenimiento total o parcial. Si no fuera total, deberá definir las cuestiones que aun permanezcan controvertidas y sanear el procedimiento resolviendo en su caso las excepciones que estuvieren pendientes. En respeto al principio de inmediación y de ser oído, cualquier parte del proceso podrá solicitar la palabra. En la audiencia, la tarea del juzgador comprenderá también proveer las pruebas que sean pertinentes, conducentes y útiles, para luego proponer un plan de trabajo y gestión respecto de las admitidas, de manera que las partes asuman un compromiso con la producción oportuna de la prueba, y que la que no deba ser rendida en forma oral se agregue con antelación suficiente a la audiencia complementaria. Específicamente deberá:-Invitar a las partes a rectificar errores materiales en que hubieren incurrido en sus escritos iniciales; Fijar el objeto litigioso y los hechos controvertidos; De acuerdo con la naturaleza de las cuestiones a probar y la



legislación de fondo, podrá distribuir la carga de la prueba. Admitir la prueba pertinente, conducente y útil, pudiendo requerir de las partes la explicación de los hechos que se pretendan acreditar con las pruebas ofrecidas. Si la prueba se hubiere diligenciado totalmente o se resolviere prescindir de la aún no diligenciada o el asunto fuere de puro derecho, podrá pasar a oír las alegaciones de las partes y a dictar sentencia; En caso de plantearse la exhibición de documental, el/la Juez/a otorgará un plazo para que, mediante la presentación electrónica, acompañen la documental requerida, bajo apercibimiento del art. 253 del CPCC. Para el supuesto en el que las partes hayan ofrecido prueba pericial, evaluar su necesidad y la posibilidad de sustituirla por otro medio probatorio; en caso de ordenarla, solicitar a las partes que designen de común acuerdo al perito o sortearlo en ese acto de la lista respectiva según la especialidad, procurando su notificación electrónica de manera inmediata. Determinar el adelanto de gastos, identificando a quién le corresponde el pago, indicando la fecha en la que deberá presentar su dictamen (como máximo, 30 días corridos antes de la audiencia complementaria). Resolver en ese acto cualquier cuestión vinculada a su designación; Para el supuesto en el que las partes hayan ofrecido prueba testimonial, los planteos vinculados a la admisibilidad del testigo deberán realizarse y sustanciarse en la audiencia preliminar, procurando el/la Juez/a resolverlos en dicha audiencia. En caso de requerirse producción de prueba, el/la Juez/a deberá ordenarla dentro del mismo plan de trabajo. Si la causal de inadmisibilidad del testigo es conocida con posterioridad a la celebración de la audiencia preliminar, el interesado podrá plantearla hasta la audiencia complementaria Fijar la fecha de la audiencia complementaria, de la que quedarán notificadas las partes en el acto, la que deberá realizarse en un plazo máximo de cuatro (4) meses, procurando que sea inferior. Disponer que toda la prueba que no deba rendirse en forma oral deberá encontrarse producida en forma previa. La audiencia complementaria se fijará indefectiblemente, aunque no haya testigos, en su caso lo será a los fines conciliatorios, recepción de explicaciones de peritos de así considerarlo



necesario, y alegatos. De todo lo actuado se dejará constancia mediante acta. En ningún caso la audiencia preliminar pasará a cuarto intermedio; si las partes manifestaran voluntad de conciliar y solicitaran un plazo para llevar adelante tratativas conciliatorias, se les hará saber que el Tribunal estará disponible para receptar y homologar los acuerdos a los que lleguen antes de la audiencia complementaria. Eventualmente, y al solo fin de evitar el devengamiento de gastos, el Tribunal podrá posponer la notificación del perito por no más de siete (7) días hábiles; acto que realizará indefectiblemente, por secretaría, el día así previsto en caso de no presentarse antes un acuerdo para su homologación.

1. ETAPA PREPARATORIA DE AUDIENCIA COMPLEMENTARIA – GESTIÓN DE LA PRUEBA: Preparación: En la etapa previa a la recepción de la audiencia complementaria, el Tribunal deberá hacer un seguimiento de la prueba, para asegurar que la audiencia complementaria se desarrolle completamente y con eficiencia sin necesidad de suspensión alguna.

1. Prueba pericial: El Perito será tratado con particular deferencia en tanto es un auxiliar de la justicia, con un rol central en la gestión probatoria. El Tribunal procurará gestionar de oficio una vía de comunicación con los peritos, ya sea telefónica o por correo electrónico o mensajería móvil, debiendo ser atendidos con la mayor celeridad posible, de forma tal de lograr una pronta incorporación de la pericia en formato digital y escrito. De no cumplirse con los plazos de aceptación, diligencias periciales o presentación de pericia, el Tribunal podrá dejar sin efecto su designación, debiendo comunicarlo al órgano correspondiente.

1.-Cuando el Perito acepte el cargo, un funcionario del Tribunal le hará saber-

1.Las reglas del proceso oral y lo que se espera del experto;

2-La necesidad del cumplimiento estricto de plazos;

3.Que se ponen a su disposición todos los elementos necesarios que se encuentren en el Tribunal para la realización de la pericia;

4.Que se le podrá requerir que concurra a la audiencia complementaria a fin de brindar explicaciones o ampliaciones de manera presencial, como regla, o de manera remota cuando así lo disponga fundadamente el/la Juez/a, conforme a la reglamentación del TSJ.

5.Que en caso de necesitar elementos complementarios



(v.gr. estudios médicos, documentos, etc.) deberá requerirlos al Tribunal en el mismo acto de aceptación del cargo.2.El experto debe fijar día, hora y lugar de inicio de tareas periciales. Esta información se comunicará a las partes.3.El Tribunal deberá realizar un seguimiento de la prueba pericial, recordando por vía informal (teléfono, correo electrónico, mensajería móvil u otros) la presentación del dictamen en tiempo y forma, estableciéndose como puntos de control las etapas de aceptación del cargo, presentación del dictamen y observaciones, teniendo en cuenta el impulso procesal compartido, y la fijación del plazo de producción de prueba y caducidad automática.4.El perito deberá presentar su dictamen, como máximo, en la fecha dispuesta en la audiencia preliminar, como también asistir a la audiencia complementaria en caso de ser convocado. El informe deberá ser claro, conciso y contener los puntos de pericia propuestos por las partes y establecidos por el Tribunal. Incorporada la pericia se correrá vista a las partes para que se expidan a su respecto.1.Prueba informativa: En la audiencia preliminar, el/la Juez/a dispondrá sobre quién pesa la carga de su diligenciamiento, si no fueran de aquellas que puedan ser ordenadas por vía electrónica. Cuando los oficios sean librados por el tribunal, quedarán a disposición del interesado, quien deberá diligenciarlos bajo pena de caducidad. Se requerirá a cada parte que acredite el diligenciamiento de los oficios y las eventuales reiteraciones a la brevedad, pudiendo fijarse un plazo para ello, y se procurará que los oficios diligenciados se incorporen a la causa con al menos diez (10) días de antelación a la audiencia a complementaria.1.Prueba Testimonial: A las partes les incumbe la carga de notificar a los testigos y asegurar su participación en forma presencial o remota, según haya dispuesto el Tribunal, en la audiencia complementaria; como así también acreditar diez (10) días antes de la recepción de la audiencia haber cursado las notificaciones correspondientes.1.AUDIENCIA COMPLEMENTARIA: Si en la etapa probatoria se hubiere diligenciado totalmente la prueba, o se resolviere prescindir de la aún no diligenciada, o restare alguna prueba por producir, igualmente se celebrará la audiencia complementaria en la fecha prevista 1.La audiencia Debe



desarrollarse el día, hora y en el lugar o por los medios electrónicos ya establecidos. Será pública, oral, continua y con presencia del/la Juez/a debiendo procurarse como regla la participación personal de manera presencial de los intervinientes. Sin perjuicio de ello podrán participar de forma remota según disponga fundadamente el/la Juez/a, conforme a la reglamentación del TSJ. Previo al inicio del registro audiovisual o en cualquier momento que considere conveniente, el/la Juez/a deberá procurar nuevamente la conciliación de las partes. Si ésta fuere exitosa, se ordenará registración audiovisual, exponiendo los términos y alcances del acuerdo al que arribaran las partes, y se registrara en la/s operaciones que corresponda/n en el SACM. Si no resulta avenimiento total, el/la juez/a ordenará el inicio de la registración, la que dará comienzo con el nombramiento de todos los intervinientes, y se procederá de acuerdo a la agenda prefijada respecto de la recepción de la prueba. El Juez preside y dirige la audiencia, pudiendo instar aclaraciones, ordenar lecturas, el uso de apoyos gráficos (se recomienda la pizarra), moderar discusiones, formular advertencias, imponer sanciones e impartir directivas generales para el buen desarrollo del acto. Se exigirá que todos los intervinientes en las audiencias conserven el decoro y respeto necesarios para garantizar su normal desarrollo. Deberán evitar la alegación de hechos irrelevantes o producción de prueba inconducente que generen dilaciones innecesarias y alarguen innecesariamente el acto procesal. En cuanto a celebración de las audiencias con la presencia de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y/u otros sujetos vulnerables, el/la Juez/a dispondrá las adaptaciones pertinentes, requiriendo los apoyos técnicos que fueran necesarios a tal fin. Siempre se deberá brindar información suficiente, en lenguaje claro, sencillo y comprensible a la singularidad de cada persona, sobre el acto que se va a realizar, el contenido de este, las razones de su participación en él y los derechos que asisten a cada uno, como así también las implicancias y consecuencias para la vida de la persona en relación con el acto del que se trata. Se hará saber a quienes soliciten copia de las audiencias video grabadas que se entregará la misma bajo su



exclusiva responsabilidad en el supuesto de difusión total o parcial del audio o las imágenes, la que se encuentra comprendida en las prohibiciones legales que rigen la materia para la preservación de la intimidad e identidad de las partes y/o terceros. 2. De la documental e informativa: El/la Juez/a hará un repaso somero y meramente enunciativo sobre las pruebas que se encuentran producidas antes de la audiencia. 3. Del interrogatorio al perito: El/la Juez/a debe dirigir el pedido de explicaciones al perito, debiendo moderar los planteos de las partes y declarar su pertinencia o conducencia. 4. Prueba testimonial: El/la Juez/a tomará juramento a los testigos y les informará de las consecuencias de las declaraciones falsas, y las generales de la ley, previo a ser interrogados. El testigo será interrogado libremente por quien lo ofreciera y luego por la contraparte. El/la Juez/a, haciendo uso de sus facultades, podrá interrogarlo a continuación. Las impugnaciones vinculadas a los dichos de los testigos se formularán en el momento de alegar. 5. Confesional o absolución de posiciones: Podrá el juez interrogar a cualquiera de las partes sobre hechos que estime de influencia en la cuestión controvertida, sin perjuicio del interrogatorio libre que podrán hacerse las partes entre sí. 6. Prueba pendiente de producir: Excepcionalmente, tratándose de prueba esencial o necesaria para la solución del caso o que las partes demuestren un real impedimento para su producción, el/la Juez/a determinará el modo y el tiempo para producirla, con fijación, en caso de ser necesaria, de una nueva audiencia en el menor plazo posible, idealmente no mayor a diez (10) días, en caso de ser necesaria. 7. Alegato: Recibida la prueba, las partes podrán alegar en forma oral por su orden y por el término que el/la Juez/a determine, el que –salvo casos excepcionales– no podrá superar los diez minutos por cada parte. Se permitirá la lectura de material de apoyo. En primer lugar, lo hará el actor, luego la demandada, y luego la citada, o demás codemandados. En el caso de que la demandada y la citada estén representadas por el mismo letrado, se preguntará al letrado si es posible que alegue por ambos sujetos en el mismo tiempo. En caso de que ello no sea posible, tendrá dos lapsos de hasta diez minutos para hacerlo. El/la Juez/a podrá evaluar si es



necesario, réplica y contrarréplica, y la autorizará o denegará. En su caso, estas no podrán exceder de cinco minutos. Evacuados los traslados para alegar, se dará por clausurado el debate, dictándose decreto de autos para resolver, en definitiva, quedando todas partes notificadas en dicho acto. En la oportunidad se requerirá a los letrados que denuncien y/o acrediten la condición fiscal frente al IVA.1. SENTENCIA: Teniendo en cuenta que en la estructura del proceso oral se prescinde de formas sacramentales, y en consonancia con los nuevos paradigmas generales, los magistrados deberán redactar las resoluciones en términos claros y comprensibles para el justiciable, prescindiendo de formulaciones y citas dogmáticas.²¹

Como novedoso en la aplicación del nuevo Paradigma del siglo XXI, de la incorporación de la Oralidad en los Procesos Civiles tenemos el **Principio de Publicidad y Transparencia** "...importa que los distintos actos procesales a desarrollarse puedan ser presenciados o conocidos tanto por todos los participantes como por terceros ajenos a la cuestión. Este principio se extrae claramente de la ley cuando en el segundo párrafo del art. 4 de la ley 10.555 dispone que "El debate será oral, público y continuo". El mismo artículo dispone cuando la publicidad resulte inconveniente o afecte al orden público, por Resolución motivada, podrá disponerse que se realice a puertas cerradas. Dicha Resolución será irrecurrible.²²

Principio de Oficiosidad: "...conforme el diseño de la ley y el Protocolo, el principio se encuentra en el polo opuesto al del ordenamiento ritual que opera de aplicación residual, es decir, del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, que contiene un sistema eminentemente dispositivo. ...compartimos la idea de que un esquema Procesal Civil moderno debe clarificar el rol del Juez

²¹ Acuerdo Reglamentario N° 1735, Serie "A" de fecha 02/12/2021, dictado por el T.S.J. de la Provincia de Córdoba

²² MARTÍNEZ CONTI, MIGUEL, RODRÍGUEZ JUNYENT SANTIAGO, "Principios del Proceso Oral en Córdoba". Academia Nacional de Derecho y Cs. Sociales de Córdoba. <https://www.acaderc.org.ar/2020/09/03/principios-del-proceso-oral-en-cordoba-> (consulta 25/08/2022).



y de las Partes en el Proceso. Para ello, se recomienda que el tribunal ejerza una efectiva dirección del proceso, a la vez que se respeta el principio dispositivo. Se propone que la adjudicación de poderes- deberes de conducción procesal al tribunal-con mayor o menor intensidad de acuerdo a la cultura jurídica del país y a su contexto social y cultural- tenga como límite infranqueable los hechos aportados por las partes y lo solicitado por ella (congruencia).²³

IV. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Si atravesamos una nueva revolución industrial, ello necesariamente nos obliga a repensar la forma en que se organizan los poderes del Estado, y en especial trataremos de analizar como la tecnología entendida como conjunto de técnicas (procedimientos) que se ejecutan para realizar una tarea, esta insertándose en el Poder Judicial, asegurando la tutela judicial efectiva, permitiendo el acceso a la justicia.

Estas innovaciones tecnológicas, permiten la efectividad de los derechos en general y en particular, se ocupa principalmente de la inclusión de los sectores más vulnerables, reduciendo de esta manera, la desigualdad existente en la sociedad.

La tutela judicial efectiva, se constituye en un derecho fundamental en sí mismo, por ser el que permite hacer valer judicialmente todos los derechos y operativizar los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para la CADH (Convención Americana de Derechos Humanos), la noción de efectividad surge del Art. 25, requiere que las herramientas judiciales disponibles, incluyan medidas procesales como las medidas precautorias, provisionales o cautelares y, en general, recursos judiciales sencillos y rápidos

²³ MARTÍNEZ CONTI, MIGUEL, RODRÍGUEZ JUNYENT SANTIAGO, *ibidem*



para la tutela de los derechos, con miras a impedir que las violaciones se prolonguen en el tiempo.

La tutela judicial efectiva depara una serie de obligaciones positivas para el Estado y sus poderes, en la función, administrativa, legislativa y Judicial. Pero es el Poder Judicial el garante y responsable último de la tutela debida, que debe asegurarla ejerciendo incluso suplencia judicial ante la ausencia de instrumentos procesales específicos por conducto del principio de adecuación de las formas procesales.²⁴

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordó que es el Estado a través de sus autoridades judiciales, quien debe conducir el proceso, y que conforme a la legislación procesal Civil, el Juez tiene el deber de dirigir el procedimiento, manteniendo la igualdad de las partes en el proceso, vigilando que la tramitación de la causa procure la mayor economía procesal, evitando la paralización. Bajo ese enfoque constato la Corte en el caso “Mémoli” que habían existido varios períodos de inactividad en el proceso civil enteramente atribuibles a las autoridades judiciales y falta de debida diligencia, la cual contribuyó a la dilación en el procedimiento.²⁵

La tutela judicial efectiva está ligada a la garantía del plazo razonable, que exige tempestividad en la respuesta jurisdiccional como ausencia de dilaciones indebidas en los procedimientos. Bien se ha dicho que una Justicia administrada con retardo ve comprometida su eficacia y su credibilidad y, en consecuencia, su propia justificación constitucional²⁶.

²⁴ BERIZONCE, ROBERTO O. *El principio de Legalidad bajo el prisma constitucional*, LL,2011-e 1144.

²⁵ CORTE IDH, “MÉMOLI VS. ARGENTINA” (Liberad de Expresión- Derecho de Propiedad-Plazo razonable en duración del Proceso” Sentencia 265 de fecha 22/08/2013 (duración prolongada del proceso unida a la inhibición general de bienes por más de 17 años considero que se afectó desproporcionadamente al derecho a la propiedad privada de las presuntas víctimas y a que las medidas cautelares se conviertan en medidas punitivas , violación art.8.1 y11 CADH)

²⁶ KEMELMAJER, AIDA : “Plazo razonable del Proceso Civil” *en nuevas herramientas procesales III*, Jorge Peyrano (dir.) Amalia Fernández Balbis (coord.), Rubinzal- Culzoni Editores, Santa Fe, p. 501.



La tutela judicial efectiva implica la existencia de un procedimiento simple, accesible, económico y disponible para obtener una respuesta jurídica susceptible, en lo posible, de ser cumplida.

Se trata de un principio procesal con respaldo Constitucional y Convencional, y comprende el acceso irrestricto de los justiciables a jueces independientes e imparciales; el aseguramiento de un debido contradictorio; la igualdad procesal efectiva y no meramente formal; la duración razonable del proceso; la protección ante situaciones de urgencia que requieran tutelas especiales; y la debida y pronta ejecución de las Resoluciones Judiciales ²⁷.

V. ESTADÍSTICAS JUSTICIA CÓRDOBA SOBRE EL JUICIO ORAL EN EL PROCESO CIVIL Y COMERCIAL

5.1. Lapso entre la audiencia preliminar y el fin de la causa

- Días corridos desde la celebración de la audiencia preliminar hasta la fecha de resolución de la causa.
- #: Cantidad de juicios finalizados en el periodo.
- Lapsos: menos de 90 días, menos de 180 días, menos de 270 días, más de 271 días. En **azul** los datos del Juzgado, en **rojo** los de la localidad.

Cómo leer los resultados:

- El porcentaje de causas con menos de 90/180/270 días corridos entre la celebración de la audiencia preliminar del **juzgado** a mi cargo, hasta la fecha de resolución de la causa,

²⁷ MARTÍNEZ CONTI, MIGUEL Y RODRÍGUEZ JUNYENT, SANTIAGO. "Principios del proceso oral en córdoba" *ob.cit.*



fue de (≤ 90 / ≤ 180 / ≤ 270 / ≥ 271), mientras que ese porcentaje en la media de la **localidad** fue de (≤ 90 / ≤ 180 / ≤ 270 / ≥ 271).

- El porcentaje de causas con más de 271 días corridos entre la celebración de la audiencia preliminar del **juzgado** a mi cargo, hasta la fecha de resolución de la causa, fue de (≥ 271), mientras que ese porcentaje en la media de la **localidad** fue de (≥ 271).



		Lapso entre audiencia preliminar y fin de causa- 01/02/2019 al 31/05/2022									
		JUZGADO					LOCALIDAD				
Localidad	N°	#	<=90	<=180	<=270	>=271	<=90	<=180	<=270	>=271	
CORDOBA	32	59	64%	25%	5%	5%					
CORDOBA	34	50	48%	16%	14%	22%					
CORDOBA	35	49	63%	27%	4%	6%					
CORDOBA	36	50	38%	40%	6%	16%					
CORDOBA	37	1	100%	0%	0%	0%					
CORDOBA	38	7	86%	14%	0%	0%					
CORDOBA	40	0	-	-	-	-					
CORDOBA	41	42	36%	40%	7%	17%					
CORDOBA	42	2	100%	0%	0%	0%					
CORDOBA	43	2	100%	0%	0%	0%					
CORDOBA	44	0	-	-	-	-					
CORDOBA	45	13	62%	38%	0%	0%					
CORDOBA	46	5	60%	40%	0%	0%					
CORDOBA	48	70	39%	31%	11%	19%					
CORDOBA	49	80	50%	28%	15%	8%					
CORDOBA	50	2	100%	0%	0%	0%					
CORDOBA	51	58	57%	9%	5%	29%					
CARLOS PAZ	1	45	47%	36%	7%	11%	47%	25%	16%	13%	
CARLOS PAZ	2	56	46%	16%	23%	14%					
ALTA GRACIA	1	25	40%	40%	16%	4%	60%	22%	16%	2%	
ALTA GRACIA	2	20	85%	0%	15%	0%					
JESUS MARIA	1	5	80%	20%	0%	0%	80%	10%	0%	10%	
JESUS MARIA	2	5	80%	0%	0%	20%					
RIO SEGUNDO	1	4	75%	25%	0%	0%	80%	20%	0%	0%	
RIO SEGUNDO	2	11	82%	18%	0%	0%					
RIO CUARTO	2	41	20%	39%	29%	12%					
RIO CUARTO	3	26	35%	38%	12%	15%					
RIO CUARTO	4	28	50%	29%	14%	7%					



RIO CUARTO	6	54	39%	37%	17%	7%	34%	35%	17%	14%
RIO CUARTO	7	69	32%	32%	13%	23%				
HUINCA RENANCO	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
LA CARLOTA	1	1	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
BELL VILLE	1	2	50%	50%	0%	0%	29%	71%	0%	0%
BELL VILLE	2	5	20%	80%	0%	0%				
BELL VILLE	3	0	-	-	-	-				
CORRAL DE BUSTOS	1	2	50%	50%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
MARCOS JUAREZ	1	2	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
MARCOS JUAREZ	2	2	100%	0%	0%	0%				
VILLA MARIA	1	27	48%	37%	7%	7%	51%	31%	7%	11%
VILLA MARIA	2	0	-	-	-	-				
VILLA MARIA	3	17	53%	29%	0%	18%				
VILLA MARIA	4	28	54%	25%	11%	11%				

Tabla N°1: Lapso entre audiencia preliminar y fin de causa- 01/02/2019 al 31/05/2022,

Fuente: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba



		Lapso entre audiencia preliminar y fin de causa- 01/02/2019 al 31/05/2022									
		JUZGADO					LOCALIDAD				
Localidad	N°	#	<=90	<=180	<=270	>=271	<=90	<=180	<=270	>=271	
CORDOBA	1	5	40%	60%	0%	0%					
CORDOBA	2	4	75%	25%	0%	0%					
CORDOBA	4	0	-	-	-	-					
CORDOBA	5	72	47%	18%	14%	21%					
CORDOBA	6	104	37%	31%	17%	15%					
CORDOBA	8	8	75%	25%	0%	0%					
CORDOBA	9	45	62%	22%	2%	13%					
CORDOBA	10	31	42%	16%	23%	19%					
CORDOBA	11	0	-	-	-	-					
CORDOBA	12	47	36%	30%	23%	11%					
CORDOBA	15	145	65%	20%	10%	5%					
CORDOBA	16	29	34%	34%	21%	10%	49%	27%	12%	12%	
CORDOBA	17	57	51%	30%	11%	9%					
CORDOBA	18	30	50%	23%	10%	17%					
CORDOBA	19	5	100%	0%	0%	0%					
CORDOBA	20	54	41%	41%	9%	9%					
CORDOBA	22	0	-	-	-	-					
CORDOBA	23	1	0%	100%	0%	0%					
CORDOBA	24	1	100%	0%	0%	0%					
CORDOBA	27	64	44%	27%	14%	16%					
CORDOBA	28	32	34%	28%	25%	13%					
CORDOBA	30	43	47%	33%	14%	7%					
CORDOBA	31	35	43%	34%	11%	11%					

Tabla N°2: Lapso entre audiencia preliminar y fin de causa- 01/02/2019 al 31/05/2022.

Fuente : Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.



		Lapso entre audiencia preliminar y fin de causa- 01/02/2019 al 31/05/2022									
		JUZGADO					LOCALIDAD				
		O					D				
Localidad	N°	#	<=90	<=180	<=270	>=271	<=90	<=180	<=270	>=271	
OLIVA	1	15	67%	13%	7%	13%	67%	13%	7%	13%	
SAN FRANCISCO	1	8	88%	13%	0%	0%	56%	28%	11%	5%	
SAN FRANCISCO	2	60	43%	32%	18%	7%					
SAN FRANCISCO	3	84	62%	26%	7%	5%					
ARROYITO	1	9	67%	11%	0%	22%	67%	11%	0%	22%	
MORTEROS	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
LAS VARILLAS	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
VILLA DOLORES	1	1	0%	100%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	
VILLA DOLORES	2	1	100%	0%	0%	0%					
CURA BROCHERO	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
COSQUIN	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
COSQUIN	2	0	-	-	-	-					
CRUZ DEL EJE	1	1	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	
LABOULAYE	1	23	57%	17%	9%	17%	57%	17%	9%	17%	
DEAN FUNES	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
RIO TERCERO	1	36	44%	28%	8%	19%	51%	20%	10%	19%	
RIO TERCERO	2	28	71%	11%	11%	7%					
RIO TERCERO	3	26	38%	19%	12%	31%					
TOTAL PROVINCIA		2069									
Meses: 35,5 ; 28 ; 7,5											

Tabla N°3: Lapso entre audiencia preliminar y fin de causa- 01/02/2019 al 31/05/2022.

Fuente : Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.



5.2. Tasa de conciliación

- Cantidad de causas finalizadas por conciliación o transacción (**#Conciliadas**). En proporción a la cantidad de causas finalizadas (**#Fin**).
- **Tasa de conciliación de causas (Resultado Conc.) comparadas con la meta fijada (meta) y la tasa de conciliación de la localidad (Resultado localidad).** - En azul los datos del Juzgado, en rojo los de la localidad.

Cómo leer los resultados:

-La cantidad de causas finalizadas (**#Fin**) y la cantidad de causas finalizadas por conciliación o transacción (**#Conciliadas**) da como resultado que la tasa de conciliación (incluye transacción) de causas finalizadas del juzgado a mi cargo fue de (**Resultado Conc.**). La meta propuesta fue de (**Meta**) y la tasa de conciliación promedio de la localidad fue de (**Resultado localidad**).



		Tasa conciliación - 01/02/2019 al 31/05/2022				
Localidad	N°	# Fin	# Conciliadas / Transadas	Resultado Conc.	Meta	Resultado Localidad
CORDOBA	1	5	1	20,0%	70%	60,3%
CORDOBA	2	5	4	80,0%	70%	60,3%
CORDOBA	4	0	0	0,0%	70%	60,3%
CORDOBA	5	84	56	66,7%	70%	60,3%
CORDOBA	6	121	54	44,6%	70%	60,3%
CORDOBA	8	11	8	72,7%	70%	60,3%
CORDOBA	9	54	41	75,9%	70%	60,3%
CORDOBA	10	35	22	62,9%	70%	60,3%
CORDOBA	11	0	0	0,0%	70%	60,3%
CORDOBA	12	63	35	55,6%	70%	60,3%
CORDOBA	15	171	94	55,0%	70%	60,3%
CORDOBA	16	44	27	61,4%	70%	60,3%
CORDOBA	17	74	44	59,5%	70%	60,3%
CORDOBA	18	34	19	55,9%	70%	60,3%
CORDOBA	19	7	7	100,0%	70%	60,3%
CORDOBA	20	61	37	60,7%	70%	60,3%
CORDOBA	22	1	1	100,0%	70%	60,3%
CORDOBA	23	2	2	100,0%	70%	60,3%
CORDOBA	24	3	3	100,0%	70%	60,3%
CORDOBA	27	78	50	64,1%	70%	60,3%
CORDOBA	28	35	16	45,7%	70%	60,3%
CORDOBA	30	49	41	83,7%	70%	60,3%
CORDOBA	31	50	32	64,0%	70%	60,3%
CORDOBA	32	72	47	65,3%	70%	60,3%
CORDOBA	34	75	57	76,0%	70%	60,3%
CORDOBA	35	62	36	58,1%	70%	60,3%
CORDOBA	36	84	41	48,8%	70%	60,3%
CORDOBA	37	2	1	50,0%	70%	60,3%
CORDOBA	38	8	8	100,0%	70%	60,3%

Tabla N°4: Tasa conciliación - 01/02/2019 al 31/05/2022.

Fuente: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.



		Tasa conciliación - 01/02/2019 al 31/05/2022				
Localidad	N°	# Fin	# Conciliadas / Transadas	Resultado Conc.	Meta	Resultado Localidad
CORDOBA	40	1	1	100,0%	70%	60,3%
CORDOBA	41	49	25	51,0%	70%	60,3%
CORDOBA	42	3	3	100,0%	70%	60,3%
CORDOBA	43	2	2	100,0%	70%	60,3%
CORDOBA	44	2	2	100,0%	70%	60,3%
CORDOBA	45	15	12	80,0%	70%	60,3%
CORDOBA	46	6	5	83,3%	70%	60,3%
CORDOBA	48	76	35	46,1%	70%	60,3%
CORDOBA	49	90	43	47,8%	70%	60,3%
CORDOBA	50	2	2	100,0%	70%	60,3%
CORDOBA	51	76	58	76,3%	70%	60,3%
CARLOS PAZ	1	51	30	58,8%	70%	60,3%
CARLOS PAZ	2	65	40	61,5%	70%	60,3%
ALTA GRACIA	1	28	17	60,7%	70%	74,1%
ALTA GRACIA	2	26	23	88,5%	70%	74,1%
JESUS MARIA	1	5	4	80,0%	70%	76,9%
JESUS MARIA	2	8	6	75,0%	70%	76,9%
RIO SEGUNDO	1	4	3	75,0%	70%	73,3%
RIO SEGUNDO	2	11	8	72,7%	70%	73,3%
RIO CUARTO	2	49	21	42,9%	70%	47,5%
RIO CUARTO	3	28	10	35,7%	70%	47,5%
RIO CUARTO	4	38	24	63,2%	70%	47,5%
RIO CUARTO	6	70	35	50,0%	70%	47,5%
RIO CUARTO	7	80	36	45,0%	70%	47,5%
HUINCA RENANCO	1	0	0	0,0%	70%	0,0%
LA CARLOTA	1	1	1	100,0%	70%	100,0%
BELL VILLE	1	3	2	66,7%	70%	61,5%
BELL VILLE	2	7	3	42,9%	70%	61,5%



BELL VILLE	3	3	3	100,0%	70%	61,5%
CORRAL DE BUSTOS	1	3	3	100,0%	70%	100,0%
MARCOS JUAREZ	1	2	1	50,0%	70%	50,0%
MARCOS JUAREZ	2	2	1	50,0%	70%	50,0%
VILLA MARIA	1	35	27	77,1%	70%	75,0%
VILLA MARIA	2	0	0	0,0%	70%	75,0%
VILLA MARIA	3	31	24	77,4%	70%	75,0%
VILLA MARIA	4	38	27	71,1%	70%	75,0%
OLIVA	1	18	14	77,8%	70%	77,8%
SAN FRANCISCO	1	10	6	60,0%	70%	65,8%
SAN FRANCISCO	2	81	54	66,7%	70%	65,8%
SAN FRANCISCO	3	99	65	65,7%	70%	65,8%
ARROYITO	1	13	11	84,6%	70%	84,6%
MORTEROS	1	0	0	0,0%	70%	0,0%
LAS VARILLAS	1	2	0	0,0%	70%	0,0%



Tasa conciliación - 01/02/2019 al 31/05/2022						
Localidad	N°	# Fin	# Conciliadas / Transadas	Resultado o Conc.	Meta	Resultado Localidad
VILLA DOLORES	1	2	2	100,0%	70%	100,0%
VILLA DOLORES	2	1	1	100,0%	70%	100,0%
CURA BROCHERO	1	0	0	0,0%	70%	0,0%
COSQUIN	1	0	0	0,0%	70%	100,0%
COSQUIN	2	2	2	100,0%	70%	100,0%
CRUZ DEL EJE	1	2	1	50,0%	70%	50,0%
LABOULAYE	1	30	21	70,0%	70%	70,0%
DEAN FUNES	1	0	0	0,0%	70%	0,0%
RIO TERCERO	1	41	28	68,3%	70%	77,2%
RIO TERCERO	2	42	35	83,3%	70%	77,2%
RIO TERCERO	3	31	25	80,6%	70%	77,2%
Total Provincial		2574	1586	61,6%		
Meses: 35,5 ; 28 ; 7,5						

Tabla N°5: Tasa conciliación - 01/02/2019 al 31/05/2022.

Fuente: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

VI. CONCLUSIÓN

Dentro de un contexto de Pandemia, se pudo evidenciar la aplicación de la Tecnología en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, que puso de manifiesto la coordinación de los distintos operadores del derecho. Y la aplicación efectiva en tiempo y forma de los objetivos propuestos y las metas cumplidas por los Jueces en la operatividad de los Procesos de Oralidad. Aunque puso en evidencia que muchos operadores de la justicia debieron capacitarse en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, que trajeron aparejado ventajas y también riesgos como el ciber-ataque por un ransomware sufrido el 13 de



agosto del año 2022, que afectó la disponibilidad de los servicios informáticos, y donde el Tribunal Superior de Justicia dictó el Acuerdo Reglamentario N° 1778, de fecha 15/08/2022, para garantizar la prestación del servicio de justicia, y suspendieron provisoriamente la tramitación electrónica de los expedientes judiciales, como así también la suspensión de los plazos procesales en las causas ya iniciadas y que se tramitaban electrónicamente. Se dispuso que las presentaciones se efectuaran provisoriamente en papel por ante los tribunales, con la firma ológrafa, aclaración de firma o sello de funcionarios, tomaron medidas de seguridad y de garantía para el acceso a la justicia de las personas más vulnerables como por ej. Casos de violencia familiar y/o de género. Y como no se podía trabajar en teletrabajo, se resolvió que el personal debía reintegrarse en forma presencial.

Tal como lo expresa Vaninetti, "...la instauración de una cultura de la ciberseguridad motivará un cambio de mentalidad donde la seguridad se impondrá desde el convencimiento de que debe ser lo "primero", en un contexto cada vez más hiperconectado e interrelacionado erigiéndose como una directiva conductal, cuasi natural, dentro del Poder Judicial en todos sus estamentos pues debe ser una Responsabilidad de todos. Una elevadísima proporción de incidentes en cuanto a la seguridad ocurre en la introducción del tipo de virus ransomwre, mediante correos electrónicos de los usuarios, un manejo correcto de las Técnicas de Información y Comunicación, mitigaran los riesgos que pueden ir desde la destrucción de archivos a bases de datos hasta la sustracción de información sensible o secuestro de equipos. La ciberseguridad implica una inversión económica en una buena infraestructura

También se dio intervención a la fiscalía de Cibercrimen a los fines de investigar el ilícito ocurrido.

Bibliografía

Doctrina

ARAZI, ROLAND; *La Prueba en el Proceso Civil*, 3ª ed. actualizada, Rubinzal-Culzoni, 2008.



AVILA PAZ DE ROBLEDO, ROSA A. (DIRECTORA) *MANUAL DE TEORÍA GENERAL DEL PROCESO*, ED. ADVOCATUS, CÓRDOBA, 2005.

BARRERA BUTELER, GUILLERMO, *Constitución de la Provincia de Córdoba*, Concordancias, Doctrina, Jurisprudencia, legislación. Advocatus, Córdoba, 2007.

BERIZONCE, ROBERTO O. "El principio de Legalidad bajo el prisma constitucional", *La Ley*, 2011-e 1144

CORTE IDH, "MÉMOLI VS. ARGENTINA" (Liberad de Expresión- Derecho de Propiedad-Plazo razonable en duración del Proceso" Sentencia 265 de fecha 22/08/2013.

CORVALÁN, JUAN G., "Hacia una Administración Pública 4.0: digital y basada en inteligencia artificial", *La Ley* 2018-D-154.

DEVIS HECHANDÍA, HERNANDO, *Nociones Generales de Derecho Procesal Civil*, , Temis S.A. Bogotá, Colombia 2009.

KEMELMAJER, AIDA, "Plazo razonable del Proceso Civil" en Jorge Peyrano (director) Amalia Fernández Balbis (coordinadora) *Nuevas herramientas procesales III*, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe.

LORENZETTI, RICARDO LUIS, *Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado*, Tomo I- Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014

MAINA, NICOLÁS, *Prueba Electrónica Digital*, Ed. Advocatus, Córdoba, 2021.

MARTINEZ CONTI, MIGUEL Y RODRIGUEZ JUNYENT, SANTIAGO, "Principios del Proceso Oral en Córdoba" en Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
<https://www.acaderc.org.ar/2020/09/03/principios-del-proceso-oral-en-cordoba-agosto-2022>.

PAULETTI, ANA CLARA, "Oralidad y Tutela Judicial Efectiva" en
https://derecho.aulavirtual.unc.edu.ar/pluginfile.php/164921/mod_resource/content/1/TUTELA%20JUDICIAL%20EFECTIVA%20y%20oralidad%20homenaje%20Angelina%20%20Pauletti.pdf.
 07/09/2022.-

RAMACCIOTTI, HUGO, *Compendio de Derecho Procesal Civil y Comercial de Córdoba*, Depalma, Buenos Aires, 1981, Tomo I.

SBDAR, CLAUDIA B., "La tecnología en la Administración de Justicia". *La Ley* 2018.D-148.

VANINETTI, HUGO A, "La ciberseguridad en el Poder Judicial. Una Necesidad Imperiosa", *La Ley* .22/09/2022-1.

Legislación y Acordadas

CONGRESO DE LA NACIÓN, Ley Nacional N° 25.506 Firma Digital y Anexo.

Ley Nacional N° 27.446, modificatoria de la Ley 25506.

PODER EJECUTIVO DE LA NACIÓN, Decreto Reglamentario N° 182/2019 y anexo. Firma Digital y Anexo.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Acordada sobre el documento electrónico y Firma digital en el Poder Judicial.

PROVINCIA DE CÓRDOBA, H. LEGISLATURA, Ley N°9401 (adhesión a la Ley Nacional de Firma Digital).

PROVINCIA DE CÓRDOBA, H. LEGISLATURA, Ley N°10555 Ley de Procedimientos para los Juicios de Daños y Perjuicios que tramiten por el Juicio Abreviado según lo dispuesto en el Código Procesal y Civil y Comercial Provincial. <http://www.saij.gob.ar> . 07/09/2022.

PROVINCIA DE CÓRDOBA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Acuerdo Reglamentario N° 882, Serie “A” de fecha 17/05/2007.

PROVINCIA DE CÓRDOBA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Resolución N° 1 de fecha 15/4/2013, por el Presidente de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

PROVINCIA DE CÓRDOBA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Resolución N° 101, de fecha 03/10/2016 del Administrador General del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

PROVINCIA DE CÓRDOBA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Acuerdo Reglamentario N° 1537 Serie “A” de fecha 26/11/2018.

PROVINCIA DE CÓRDOBA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Acuerdo Reglamentario N° 1545, Serie “A” de fecha 08/02/2019.

PROVINCIA DE CÓRDOBA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie “A” de fecha 21/08/2019.

PROVINCIA DE CÓRDOBA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Acuerdo Reglamentario N° 1692, Serie “A” de fecha 29/03/2021.

PROVINCIA DE CÓRDOBA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Acuerdo Reglamentario N° 1735, Serie “A” de fecha 02/12/2021.

PROVINCIA DE CÓRDOBA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Acuerdo Reglamentario N° 1778, Serie “A” de fecha 15/08/2022.

Estadísticas

Generalización de la Oralidad en Procesos de Conocimiento Civiles y Comerciales de la Provincia de Córdoba- Resultados a 3 años y 4 meses –desagregado- Período febrero 2019-2022. Secretaría Civil y Comercial del T.S.J. y la Su- Área de Investigación, Desarrollo e innovación tecnológica. Justicia Córdoba-Poder Judicial de la Provincia de Córdoba-julio 2022.



LA PRUEBA DE WHATSAPP. CUESTIONES PROCESALES Y CONSTITUCIONALES

WHATSAPP AS EVIDENCE. PROCEDURAL AND CONSTITUTIONAL QUESTIONS

Prof. Dr. Miguel Robledo*

(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

Prof. Dr. Federico Robledo**

(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

Resumen

En el presente artículo se analiza cuestiones procesales y constitucionales de la Prueba de WhatsApp. Como primera premisa se analiza WhatsApp como un medio probatorio innominado a la luz del principio de libertad probatoria. Como segunda premisa se analiza a WhatsApp como un instrumento particular no firmado. Como tercer premisa se analiza a WhatsApp como correspondencia y sus proyecciones constitucionales y convencionales. Por último, se analiza la actividad probatoria y se presenta las conclusiones.

Palabras clave

WhatsApp; Prueba; Libertad probatoria; Derecho Procesal; Derecho Constitucional

Abstract

In this article its analyzed WhatsApp as evidence and questions from the Procedural Law and Constitutional scope. As first premise, it's analyzed WhatsApp as an unnominated way to proof

* Abogado (Univ. Nacional de Córdoba). Premio Universidad (Univ. Nacional de Córdoba). Doctor en Derecho (Univ. Nacional de Rosario). Magíster en Derecho Procesal (Univ. Nacional de Rosario). Magíster en Dirección de Negocios (Univ. Nacional de Córdoba). Especialista en Derecho Procesal Constitucional (Univ. Blas Pascal). Profesor de Derecho Procesal Civil y Comercial y Derecho Procesal Constitucional en la Facultad de Derecho (Univ. Nacional de Córdoba). Email: miguel.robledo@unc.edu.ar

** Abogado (Univ. Nacional de Córdoba). Doctor en Derecho (Univ. Nacional de Córdoba). Magíster en Derecho Privado (Univ. Nacional de Rosario). Magíster en Dirección de Negocios (Univ. Nacional de Córdoba). Magister en Bioética (Univ. Nacional de Córdoba). Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal en la Facultad de Derecho (Univ. Nacional de Córdoba). Email: federico.robledo@unc.edu.ar

Aceptado para su publicación: 01/03/2023.



and the principle of freedom of proof. As second premise, it to consider WhatsApp as an unsigned particular instrument. Third premise is to consider WhatsApp as correspondence and its constitutional and conventional consequences. Last it is analyzed the evidence activity and presents conclusions.

Keywords

WhatsApp; Evidence; Freedom of Proof; Procedural Law; Constitutional Law

SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- Primera premisa: WhatsApp como un medio probatorio innominado a la luz del principio de libertad probatoria. 3.- Segunda premisa: WhatsApp como un instrumento particular no firmado. 4.- Tercera premisa: WhatsApp como correspondencia y sus proyecciones constitucionales y convencionales. 5.- Actividad probatoria. 5.1.- Ofrecimiento. 5.2.- Admisibilidad. 5.3.- Actitudes que puede asumir la parte contra la cual se procura atribuir la prueba de WhatsApp. 5.3.1.- Primera alternativa: silencio. 5.3.2.- Segunda alternativa: reconocimiento. 5.3.3.- Tercera alternativa: negativa. 5.4.- La carga de la prueba de la autoría y la integridad de los mensajes de WhatsApp. 5.5.- Valoración. 6.- Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha crecido significativamente la comunicación por vías electrónicas y redes sociales.

Dentro de este contexto, el presente artículo procura abordar diversas cuestiones procesales y constitucionales que plantea WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más conocidas a nivel mundial, utilizada actualmente por más de dos mil millones de personas en más de 180 países¹.

Delineado así el perímetro del trabajo, comenzaremos explicitando -a modo de consideraciones previas- tres premisas iniciales sobre WhatsApp en clave procesal y constitucional, para luego indagar en los ejes de la actividad probatoria relativos: **a)** al ofrecimiento; **b)** la admisibilidad; **c)** las actitudes que puede asumir la parte contra la cual se pretende atribuir en un proceso judicial; **d)** la carga de la prueba de la autoría y la integridad y; **e)** por último, su valoración probatoria.

II. PRIMERA PREMISA: WHATSAPP COMO UN MEDIO PROBATORIO

¹ La información se encuentra disponible en la página oficial de WhatsApp: <https://www.whatsapp.com/about> (consulta:01/09/2022).



INNOMINADO A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA

Liminarmente, cabe señalar que el régimen procesal consagra el principio de libertad probatoria en lo concerniente a los medios de prueba.

Por un lado, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en adelante CPCCN) en su art. 378, titulado “Medios de prueba”, establece que “...*Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el juez*”.

Por otro lado, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba (en adelante CPCC Cba.) en su art. 202, “Otras pruebas admisibles”, dispone que “*Cuando se ofreciere un medio de prueba idóneo y pertinente no previsto de modo expreso por la ley, el tribunal establecerá la forma de diligenciarlo, usando el procedimiento determinado para otras pruebas que fueren analógicamente aplicables*”.

En otras palabras, tal como señala la doctrina, “*cualquier avance de la ciencia podrá ser útil para esclarecer los hechos controvertidos*”², tal lo que sucede, precisamente -y en lo que refiere al presente trabajo- con los avances tecnológicos en el terreno de las comunicaciones por intermedio de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

De lo anteriormente expuesto, inferimos que, si bien los mensajes vía WhatsApp no están contemplados como un medio probatorio nominado, resultan aplicables las disposiciones del medio de prueba análogo, punto sobre el cual profundizamos en el apartado siguiente.

III. SEGUNDA PREMISA: WHATSAPP COMO UN INSTRUMENTO PARTICULAR NO FIRMADO

Prosiguiendo el análisis, corresponde señalar que, toda vez que se pretenden incorporar al proceso capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp, el medio probatorio análogo será, precisamente, la prueba

² ARAZI, ROLAND, *La Prueba en el Proceso Civil*, Tercera edición actualizada, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 104.



documental.

Consecuentemente, asume importancia superlativa ubicar a WhatsApp dentro de las diversas categorías de documentos contemplados en la normativa sustancial.

En efecto, el Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyCN) reglamenta el tópico en cuestión en el Libro Primero, “Parte General”, Título 4, “Hechos y actos jurídicos”, Capítulo 5, “Actos jurídicos”, la Sección 3° “Forma y prueba del acto jurídico”, en los arts. 284 y siguientes.

En primer lugar, el art. 284, “Libertad de formas”, cuyo texto dispone que *“Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley”*.

En segundo lugar, el art. 285, “Forma impuesta”, conforme al cual establece que *“El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad”*.

En tercer lugar, el art. 286 “Expresión escrita”, prevé que *“La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos”*.

En cuarto lugar, el art. 287 “Instrumentos privados y particulares no firmados”, establece que *“Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados.*

Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información”.

En quinto lugar, el art. 288, “Firma”, prescribe que *“La firma prueba la*



autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo.

En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”.

Este último precepto, se conecta directamente con la Ley de Firma Digital N° 25.506, conforme al cual establece que la firma digital genera una doble presunción “*iuris tantum*” de autoría (art. 7^{o3}) y de integridad (art. 8^{o4}).

Con arreglo al marco normativo citado precedentemente, podemos formular dos conclusiones. Por un lado, los instrumentos particulares no firmados pueden ser vehiculizados en cualquier soporte, aunque su lectura requiera medios técnicos. Por otro lado, la circunstancia que un documento cuente con firma digital trasciende al plano de los efectos al generar la doble presunción de autoría y de integridad, salvo prueba en contrario.

De acuerdo a lo expresado, sostenemos que los mensajes remitidos vía WhatsApp configuran un instrumento particular no firmado. Destacamos, asimismo, que al no contar tales mensajes con firma digital, en el supuesto de ser aportados al proceso judicial no resultarán operativas las presunciones de autoría y de integridad.

IV. TERCERA PREMISA: WHATSAPP COMO CORRESPONDENCIA Y SUS PROYECCIONES CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES

A lo anteriormente expuesto, cabe agregar las disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación atinentes a la correspondencia, normativa que es aplicable a los mensajes vía WhatsApp.

Concretamente, el art. 318 del citado cuerpo legal dispone que “La

³ Ley 25.506, art. 7°: “Presunción de autoría. Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma”.

⁴ Ley 25.506, art. 8°: “Presunción de integridad. Si el resultado de un procedimiento de verificación de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, salvo prueba en contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma”.



correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario, pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin consentimiento del remitente. Los terceros no pueden valerse de la correspondencia sin asentimiento del destinatario, y del remitente si es confidencial”.

En lo que refiere al ámbito de aplicación de la normativa en cuestión, la doctrina ha sostenido que *“Existe correspondencia cuando una persona (remitente) envía a otra (destinatario) un mensaje escrito por algún medio, sobre cualquier soporte. Puede tratarse de una carta, una tarjeta, un mensaje de correo electrónico, un mensaje de texto enviado telefónicamente, etcétera”*⁵.

Desde nuestra perspectiva, sostenemos que, conforme los términos de significativa amplitud utilizados por el legislador -en el sentido que la correspondencia puede ser canalizada *“cualquiera sea el medio para crearla o transmitirla”*- indudablemente cabe incluir a los mensajes a través de WhatsApp, tesis que -incluso- se ajusta a una interpretación dinámica de los tiempos actuales.

En lo tocante a la licitud de la prueba, la doctrina ha remarcado que *“...el art. 318 del Cód. Civ. y Com. autoriza la utilización de los medios de intercambio de comunicaciones electrónicas como prueba en juicio, pero siempre protegiendo el principio de confidencialidad de la correspondencia, de acuerdo con las exigencias del art. 18 de la CN que declara su inviolabilidad. Y por aplicación análoga extensiva, podemos extender la protección a la correspondencia tradicional a las comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y mensajería instantánea. Por lo tanto, cualquier tipo de comunicación gozará de las garantías de la correspondencia epistolar consagradas constitucionalmente”*. En particular, se expuso que *“estos elementos probatorios podrán ser llevados a juicio siempre que hayan sido obtenidos de manera lícita por quien la presenta, y que no sea de carácter*

⁵ D' ALESSIO, CARLOS MARCELO, comentario al art. 318, en LORENZETTI, Ricardo Luis (Director), *Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado*, Tomo II, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 235.



confidencial, para cuyo caso es necesario el consentimiento del remitente” y, consecuentemente “...de ser admitida dicha prueba documental, es necesario establecer que para su producción —en este caso, mensajes de WhatsApp— no debe haberse vulnerado un derecho fundamental como bien puede ser el derecho a la intimidad, consagrado por nuestra Constitución Nacional en su art. 19 o la garantía de inviolabilidad de la correspondencia, establecida por el art. 18” y “De así vulnerarse alguno de estos principios, la consecuencia será la exclusión de la prueba por causa de nulidad”⁶.

Dentro de este orden de ideas, se ha expresado que *“...con relación a la licitud de la prueba electrónica es importante recordar cuestiones relacionadas al derecho a la privacidad. Es el caso de mensajes de audio, correos electrónicos o mensajes privados por aplicaciones o plataformas. O sea, cuando se está ante una fuente de prueba susceptible de ser considerada comunicación personal que pueda caracterizarse como correspondencia. En ese caso se plantean límites legales para su aportación en juicio, especialmente cuando se trata de terceros involucrados”,* poniéndose de relieve que, *“Bajo esta calificación no solo se incluyen correos electrónicos sino los chats o sistemas de mensajería privada de las redes sociales”⁷.*

A la luz de lo expuesto, sostenemos que los mensajes remitidos vía WhatsApp constituyen un subtipo de correspondencia, con lo cual es preciso tener en consideración tal aspecto al momento de examinar la admisibilidad de la prueba y particularmente, su licitud o ilicitud, a los fines de no comprometer la garantía del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva (arts. 8 de la Constitución Nacional y arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

V. ACTIVIDAD PROBATORIA

⁶ BIELLI, GASTÓN E., “Los mensajes de WhatsApp y su acreditación en el proceso civil”, LA LEY 29/10/2018, 1, LA LEY 2018-E, 1210.

⁷ ILACQUA, MARCELA, “La prueba electrónica desde la perspectiva de los principios procesales del derecho de las familias”, RDF 105, 121, Cita: TR LALEY AR/DOC/1777/2022.



Sentado lo que antecede, corresponde a continuación abordar diversos aspectos procesales vinculados: **a)** al ofrecimiento; **b)** la admisibilidad; **c)** las actitudes que puede asumir la parte contra la cual se procura atribuir la prueba de WhatsApp; **d)** la carga de la prueba de la autoría y la integridad de los mensajes de WhatsApp y, por último; **e)** su valoración probatoria.

5.1. Ofrecimiento

En lo que refiere al ofrecimiento, no puede soslayarse que, resultando aplicables por analogía las disposiciones de la prueba documental, corresponde tener presente las oportunidades procesales previstas en la normativa procesal para tal medio de prueba.

En lo relativo a la forma, es posible acompañar capturas de pantalla de los mensajes enviados por WhatsApp, lo que -incluso- puede encontrarse certificado notarialmente para darle mayor valor probatorio.

5.2. Admisibilidad

Ofrecida la prueba, en el terreno de admisibilidad, el Tribunal debe examinar -entre otros aspectos- si se encuentran cumplimentados los requisitos de tiempo, punto sobre el cual -tal como señalamos- resultan de aplicación las reglas previstas para la prueba documental.

Un párrafo aparte merece destacar que el Tribunal debe indagar también en la licitud o ilicitud de la prueba de WhatsApp, para lo cual hay que tener en cuenta lo expuesto en materia de correspondencia (art. 318, CCyCN).

Conforme el citado precepto legal: **a)** la prueba de Whatsapp puede ser aportada como prueba por el remitente y destinatario; **b)** si se trata de una comunicación confidencial: **b.1)** puede aportarla el remitente⁸; **b.2)** puede aportarla el destinatario con el consentimiento del remitente y; **b.3)** puede

⁸ El art. 318 del CCyCN no consagra, en esta hipótesis -correspondencia confidencial- prohibición al remitente, con lo cual es aplicable el principio general según el cual *“Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”* (art. 19 de la Constitución Nacional).



aportarla un tercero con el consentimiento del remitente y el destinatario.

Desde nuestra perspectiva, el análisis de tales parámetros permite concluir si, en el marco de un caso concreto, se verifica un supuesto de prueba lícita o ilícita, todo lo cual repercute directa y necesariamente en el respeto o, por el contrario, la vulneración de la garantía del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 18 de la Constitución Nacional y arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

5.3. Actitudes que puede asumir la parte contra la cual se procura atribuir la prueba de WhatsApp

Una vez ofrecida y admitida la prueba de WhatsApp, notificada que fuera la contraparte, es preciso identificar las distintas actitudes que pueden asumirse en el proceso judicial.

5.3.1. Primera alternativa: silencio

En primer lugar, es posible que la parte a la cual se le pretenda atribuir la prueba en cuestión, nada diga, en cuyo supuesto resultan aplicables los apercibimientos previstos en la normativa procesal y, por ende, se los tenga por auténticos y por recibidos.

Por un lado, el CPCCN el art. 356 prevé que *“En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas de que intente valerse.*

Deberá, además:

1) Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen. Su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso...⁹.

⁹ Además, el citado art. 356 del CPCCN continúa precisando que *“No estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el defensor oficial y el*



Por otro lado, el CPCC Cba. en su art. 192 establece que *“En la contestación, el demandado deberá confesar o negar categóricamente los hechos afirmados en la demanda, bajo pena de que su silencio o respuestas evasivas puedan ser tomadas como confesión. La negativa general no satisface tal exigencia.*

Deberá también reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyan y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos que se acompañen, bajo pena de tenerlos por reconocidos o recibidos, según el caso.

Será aplicable a la contestación de la demanda lo dispuesto en el art. 182”.

Al respecto, la doctrina ha sostenido que *“Agregada prueba documental por el actor con el escrito de demanda y en los términos del art. 333, el demandado tiene la carga de reconocer o, en su caso, negar categóricamente la autenticidad de los que se le atribuyan. Si guardare silencio, se manifestare con evasivas o ambiguamente, a diferencia de lo que ocurre con la versión de los hechos, el juez tiene el deber de tenerlos lisa y llanamente por reconocidos”*¹⁰.

De lo expuesto, inferimos que, toda vez que una de las partes acompañe como prueba capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp que se atribuyan a la contraria, esta última tiene la carga procesal de reconocer o negar su autenticidad / recepción, bajo apercibimiento que, ante su incumplimiento, el Tribunal debe tenerlos por auténticos y por recibidos.

Dentro de este orden de ideas, en el horizonte jurisprudencial, en el marco de un caso en el cual se acompañaron capturas de pantalla de mensajes a través de “Whatsapp” y que, en su oportunidad, no fueron negadas o cuestionadas, la jurisprudencia sostuvo que *“Aunque se coincide con la anterior sentenciante en punto a que en la causa no se produjo prueba pericial que abone la autenticidad de los mismos, ello luce innecesario en la especie, en tanto la demandada*

demandado que interviniere en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba”.

¹⁰ Colombo, Carlos J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y Comentado, 4° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, p. 587.



siquiera negó ese extremo. Obsérvese que en el escrito de contestación de demanda al que ya se ha aludido en este pronunciamiento, Recaudadora S.A. no ha desconocido los documentos aportados por su contraria. Circunstancia que genera una presunción iure et de iure a su respecto y le otorga plena eficacia probatoria (arg. conf. arts. 356 y 498 CPr)”¹¹.

En otras palabras, tal lineamiento jurisprudencial ratifica la tesitura que aquí propiciamos.

5.3.2.- Segunda alternativa: reconocimiento

En segundo lugar, para el supuesto de reconocimiento, directamente se tratará de un hecho no controvertido y, por lo tanto, no será objeto de prueba.

5.3.3.- Tercera alternativa: negativa

En tercer lugar, otra de las actitudes que puede asumir la parte contra la cual se pretende atribuir la prueba de WhatsApp es negar la autoría y/o la integridad de la documental acompañada, en cuyo caso será preciso dilucidar tal extremo en la etapa probatoria.

5.4. La carga de la prueba de la autoría y/o la integridad de los mensajes de WhatsApp

Prosiguiendo el análisis, en la hipótesis que aportada al proceso se encuentre cuestionada la autoría y/o la integridad de la prueba de WhatsApp, la carga de probar tales extremos recae sobre la parte oferente.

Es que, tal como apuntamos *supra*, al no contar los mensajes de WhatsApp con firma digital no operan las presunciones legales “*iuris tantum*” de autoría y de integridad (arts. 7° y 8° de la Ley 25.506).

En tal sentido, en el derecho comparado externo, el Tribunal Supremo Español ha sostenido que “...*la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe*

¹¹ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, 15/11/2022, “Valdez, Alejandra Fátima c. Recaudadora S.A. s/ sumarísimo”, La Ley Online cita: TR LALEY AR/JUR/163401/2022.



ser abordada con todas las cautelas. La posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas, forma parte de la realidad de las cosas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo. De ahí que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria. Será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido”¹².

En el horizonte jurisprudencial nacional, con similar temperamento en orden a la carga de la prueba, se ha expresado que *“Respecto de las capturas de pantalla obtenidas de un teléfono celular referidas a fotos y mensajes y del grupo de WhatsApp de trabajo, coincido con el juez a quo en cuanto las mismas carecen de eficacia probatoria ya que resulta indispensable realizar una prueba pericial sobre los documentos que se aporten para identificar el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de sus interlocutores y la integridad de sus contenidos. De ahí que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria”¹³.*

En otras palabras, los lineamientos jurisprudenciales tanto del ámbito comparado, cuanto del ámbito nacional, se inclinan por la postura de que, negada la autoría y/o integridad, la carga probatoria recae sobre la parte oferente.

¹² Tribunal Supremo Español, Sala Penal, Sentencia 300/2015. El texto completo se encuentra disponible en la página oficial del Poder Judicial de España: <https://www.poderjudicial.es> (consulta: 01/09/2022).

¹³ Cámara de Apelaciones del Trabajo de Tucumán, sala IV, 19/11/2021, “Delgado, Mario Ivan c. Sanatorio Sarmiento S.R.L. s/ Cobro de pesos”, La Ley Online cita: TR LALEY AR/JUR/218572/2021.



De tal modo, aquí asume importancia superlativa la prueba pericial que se practique sobre el teléfono celular, a los fines de indagar en la emisión y recepción /desde y hacia los teléfonos celulares de titularidad de las partes intervinientes en el proceso-, así también como en la integridad del mensaje.

5.5. Valoración

Por último, corresponde abordar el tópico relativo a la valoración probatoria en el terreno de los mensajes de WhatsApp, para lo cual hay que distinguir diversas alternativas.

En primer lugar, en el supuesto que aportada la prueba de WhatsApp en el proceso judicial no haya sido cuestionada o bien el demandado guarde silencio, el Tribunal lo tendrá por auténtico y por recepcionada (art. 356, CPCCN y art. 192, CPCC Cba.).

En segundo lugar, en la hipótesis que ofrecidos los mensajes de WhatsApp sean reconocidos por el destinatario, no se tratará de un hecho controvertido ni, por ende, será objeto de prueba.

En tercer lugar, en el supuesto que aportada la prueba de WhatsApp en el proceso judicial haya sido cuestionada por la contraria, corresponde analizar el modo en el cual ha sido ofrecida en el proceso.

Así pues, si se ofrecieron capturas de pantalla, en el derecho comparado externo, la Corte Constitucional de Colombia (Expte. 040-20) le asigna el valor de prueba indiciaria, poniendo de relieve que *“...los avances tecnológicos que a nivel global se han dado en distintos campos (ciencia, medicina, aplicativos digitales), también han influido en el entendimiento y el ejercicio del derecho. Al efecto, en el ámbito probatorio, por ejemplo, los operadores judiciales diariamente deben analizar elementos extraídos de aplicaciones de mensajería instantánea, ya sea que se cuente con metadatos que permitan realizar un mayor rastreo de la información o solo capturas de pantallas respecto de ciertas afirmaciones o negaciones realizadas por una de las partes en el litigio. Sobre estas últimas, la doctrina especializada les ha concedido el valor de prueba indiciaria ante la debilidad de dichos elementos frente a la posibilidad de realizar*



*alteraciones en el contenido, por lo cual deben ser valoradas de forma conjunta con los demás medios de prueba*¹⁴.

Por nuestra parte, adherimos a la postura de la Corte Constitucional de Colombia en el sentido de que a las capturas de pantalla de los mensajes vía WhatsApp se le atribuya valor indiciario (art.163 inc. 5, CPCCN y art. 316, CPCC Cba.), tesis que -por cierto- también ha tenido recepción en la doctrina¹⁵. Ello, sin perjuicio que, tal como se explicitó precedentemente, corresponde examinar -de haberse ofrecido y entre otros aspectos- la prueba pericial y particularmente, si se logró acreditar la autoría y la integridad del mensaje.

VI. CONCLUSIONES

Finalmente, formulamos las siguientes conclusiones.

La prueba de WhatsApp puede ser aportada al proceso a la luz del principio de libertad probatoria en lo que refiere a los medios.

La prueba de WhatsApp configura un instrumento particular no firmado.

La prueba de WhatsApp constituye en sentido actual y dinámico un subtipo de correspondencia, más allá del soporte en el cual se vehiculiza.

Por último, propiciamos que la actividad probatoria resguarde la garantía del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes (arts. 18 de la Constitución Nacional y arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

Bibliografía

- ARAZI, ROLAND, *La Prueba en el Proceso Civil*, Tercera edición actualizada, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008.
- BIELLI, GASTÓN E., "Los mensajes de WhatsApp y su acreditación en el proceso civil", LA LEY 29/10/2018, 1, LA LEY 2018-E, 1210.
- ILACQUA, MARCELA, "La prueba electrónica desde la perspectiva de los principios procesales del derecho de las familias", RDF 105, 121, Cita: TR LALEY AR/DOC/1777/2022.
- COLOMBO, CARLOS J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y Comentado, 4° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975.

¹⁴ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia N° T-043-2020. El texto completo se encuentra disponible en la página oficial de la Corte Constitucional de Colombia: <https://www.corteconstitucional.gob.co> (consulta: 01/09/2022).

¹⁵ BIELLI, GASTÓN E., "Los mensajes de WhatsApp y su acreditación en el proceso civil", LA LEY 29/10/2018, 1, LA LEY 2018-E, 1210.



D' ALESSIO, CARLOS MARCELO, comentario al art. 318, en Ricardo Luis Lorenzetti (Director), *Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado*, Tomo II, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015.

WhatsApp: <https://www.whatsapp.com/about> (consulta:01/09/2022).

Legislación

- Constitución de la Nación Argentina
- H. Congreso de la Nación Argentina, Código Civil y Comercial de la Nación.
- H. Congreso de la Nación Argentina, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
- H. Congreso de la Nación Argentina, Ley 25.506.

Jurisprudencia

- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, 15/11/2022, “Valdez, Alejandra Fátima c. Recaudadora S.A. s/ sumarísimo”, La Ley Online cita: TR LALEY AR/JUR/163401/2022.
- Tribunal Supremo Español, Sala Penal, Sentencia 300/2015. El texto completo se encuentra disponible en la página oficial del Poder Judicial de España: <https://www.poderjudicial.es> (consulta: 01/09/2022).
- Cámara de Apelaciones del Trabajo de Tucumán, sala IV, 19/11/2021, “Delgado, Mario Ivan c. Sanatorio Sarmiento S.R.L. s/ Cobro de pesos”, La Ley Online cita: TR LALEY AR/JUR/218572/2021.
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia N° T-043-2020. El texto completo se encuentra disponible en la página oficial de la Corte Constitucional de Colombia: <https://www.corteconstitucional.gob.co> (consulta: 01/09/2022).



EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN LOS JUZGADOS DE JUICIOS DE COBROS PARTICULARES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

E-FILES OF THE JUDICIARY FOR THE EXECUTION OF PAYMENTS IN THE PROVINCE OF CÓRDOBA

Federico Martín Arce *

(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

Resumen:

El presente análisis se enfoca en el expediente judicial electrónico en los Juzgados de juicios de cobros particulares y se circunscribe espacialmente al ámbito de la Provincia de Córdoba. Se valora el desarrollo en el sistema jurídico nacional y se lo compara con el sistema provincial y particularmente el desarrollo jurisprudencial para admitir en forma válida el uso de las tecnologías en juicios de cobro particular.

Palabras clave:

Juicio de cobro particular; Poder Judicial de la Provincial de Córdoba; Derecho Procesal Civil y Comercial; Derecho Procesal y Tecnología

Abstract:

This article analyzes the irruption of new technologies for the judicial execution of payments. The legal system of the Nation of Argentina is compared with the legal development of the use of technologies at the Judiciary to claim payments.

Keywords:

Judicial execution of payments; Judiciary of the Province of Córdoba; Civil and Commercial Procedural Law; Technology and Procedural Law

* Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, UNC. Profesor Adjunto de la Cátedra A de Teoría General del Proceso, Facultad de Derecho de UNC. Integrante del equipo de investigación CONSOLIDAR “Los actos procesales y las nuevas tecnologías: hacia el expediente electrónico en el fuero civil y comercial en la Nación y en la Provincia de Córdoba” SECyT UNC. E-mail: federico.arce@unc.edu.ar Aceptado para su publicación: 01/03/2023.



Sumario: I. Introducción. II. El avance del expediente electrónico a nivel nacional. III. El expediente electrónico a nivel provincial. IV. Fallos que admitieron actos procesales por vía remota en el orden nacional. V. Fallos que han convalidado la utilización de nuevas tecnologías en el orden provincial para la realización de diversos actos procesales. VI. El desarrollo del expediente electrónico en los Juzgados de juicios de cobros particulares de la Provincia de Córdoba. VII. Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN

Las relaciones intrapersonales en la sociedad actual presentan un contexto totalmente disímil de lo que acontecía hasta hace no mucho tiempo atrás.

La tecnología, los sistemas de información y la internet han llegado para consolidarse y para transformar diametralmente la vida en sociedad.

Así, las relaciones modernas de la vida en sociedad no podían quedar al margen de tal desarrollo avasallante, en la medida que la presencia en nuestra vida cotidiana de una enorme variedad de instrumentos, aparatos o artefactos electrónicos son moneda totalmente corriente en las relaciones modernas.

Así, hemos llegado a estado de cosas en el que la omnipresencia de la interconectividad se ha impuesto de manera definitiva.

De tal modo, y debido al uso de las nuevas tecnologías, el acceso a Internet de manera plena es un hecho de nuestro tiempo, que, sin perjuicio de los riesgos que ello provoca, no tiene límites. Ello, además de que su utilización puede acortar las distancias, modificando así de manera radical las ideas del tiempo y espacio.

Los factores previamente señalados, obviamente, no podían estar ajenos al ámbito de lo jurídico, que no sólo debe reconocer esta realidad, sino que debe establecer nuevas formas de protección o tutela efectiva sobre los sujetos en el contexto actual.



De tal modo, esto ha provocado, entre otras cuestiones, la proliferación de las fuentes probatorias electrónicas, producto de la hiperdocumentación, hiperconexión e hiperrealidad reinante. Se trata de una tendencia cada vez más consolidada, que, por otra parte, se contrapone al retroceso del uso del soporte papel como forma de documentación y realización de los actos procesales.

Así, cada vez son más los hechos o los actos que voluntariamente o involuntariamente quedan registrados en artefactos electrónicos y que pueden ser llevados a juicio a los fines de generar convencimiento en el juzgador sobre la veracidad de las preposiciones deducidas, y así ganar el pleito.¹⁶

En el mismo sentido, se viene sosteniendo reiteradamente que asistimos a un fenómeno en virtud del cual se originan nuevas formas de expresión del consentimiento, mediante la digitalización de la voluntad de los sujetos intervinientes, a lo que se suma la versatilidad del documento electrónico para representar prácticamente todo lo representable (imagen, sonido, movimiento).

En este sentido, el nuevo panorama tecnológico brinda posibilidades excelentes para revertir las demoras de los tiempos procesales a raíz de una inadecuada o abusiva utilización, por caso, de los medios notificadorios “tradicionales”.¹⁷

II. EL AVANCE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A NIVEL NACIONAL

El expediente electrónico ha sido definido como *"el conjunto ordenado de información contenida en archivos electrónicos o documentos electrónicos y*

¹⁶ BIELLI, GASTÓN E. Y ORDÓÑEZ, CARLOS J; "el juez y la prueba electrónica"; II, 19 de diciembre de 2019, AR/DOC/3942/2019.

¹⁷ CAMPS, CARLOS E., "Los principios del derecho procesal electrónico en la práctica profesional", *Derecho Procesal Electrónico Práctico*. ED. EL DIAL, BS. AS. P. 25.



digitales de texto, imagen, audio o video relativos a un determinado asunto que sirven de antecedente y fundamento para su gestión resolución"¹⁸

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (en adelante TSJ) lo ha caracterizado como el expediente conformado con "*... documentos electrónicos y/o digitales firmados digitalmente por magistrados y funcionarios del Poder Judicial, documentos electrónicos y/o digitales firmados electrónicamente por abogados y documentos digitalizados de terceros incorporados por el Juzgado o por los abogados*".¹⁹

A nivel nacional, la ley 26.685 del año 2011 autorizó la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones, domicilios electrónicos y firmas digitales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales, a la vez que en el art. 2 dispuso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN) y el Consejo de la Magistratura de la Nación, de manera conjunta, reglamentaría su utilización y gradual implementación.

En ese contexto normativo, la CSJN en el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial de la Nación dictó las siguientes acordadas: 31/11; 3/12;8/12;29/12; 14/13; 15/3; 24/13; 35/13; 36/13; 38/13; 43/13, 2/14; 6/14; 11/14 y 3/15.

Obviamente, la situación de pandemia vivida a partir del año 2020 agilizó el proceso de cambio, motivo por el cual la CSJN dispuso que las presentaciones que se realicen en las causas sean completamente en formato digital, con firma electrónica, eximiendo la exigencia de su presentación en soporte material (Acordada 4/2020).

A su vez, el mismo tribunal aprobó el uso de la firma electrónica y digital, la celebración de acuerdos virtuales y la presentación de demandas, recursos

¹⁸ MAINA, NICOLÁS; *Expediente electrónico*; Ed. advocatus, cba., 2016, p. 33.

¹⁹ aTSJ, AC. REGL. nº 882, 17/05/07.



directos y recursos de queja por vía electrónica ante los distintos fueros. (Acordadas 11/2020 y 12/2020)³

En ese mismo marco, la CSJN en la Acordada N° 14/20 estableció que “... para la realización de todos los actos procesales, se deberá priorizar el empleo de las herramientas digitales disponibles que permitan la tramitación remota de las causas...”, criterio reafirmado mediante la acordada 31/20.

En uso de estas atribuciones, la CSJN ratificó -ya en el ejercicio de la función jurisdiccional- su atribución para regular mediante acordada la notificación electrónica, señalando que tiene asignadas las atribuciones necesarias para dictar disposiciones reglamentarias, en virtud de lo dispuesto por ley 48, art 18; ley 4055, art. 10; ley 25.488, art 4°, 2° párrafo y acordada 4/2007).²⁰

La doctrina ha señalado que a través de dicha normativa se establecieron las pautas ordenatorias de los actos procesales verificados en el nuevo sistema y, de tal suerte, se procedió a la estandarización de las carátulas, cédulas de notificación, formularios varios, entre otros.

Asimismo, la obligatoriedad de uso del Sistema Lex-100, comenzó a regir para todas las causas nuevas y también para aquellas que estuvieran en trámite, debiendo las partes, en tal caso, comenzar a efectuar las presentaciones digitales.²¹

Para fortalecer este camino en materia de digitalización, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 182/2019, regulando la actividad de los prestadores de servicios "de confianza", relacionado con los documentos electrónicos.

²⁰ CSJN, "Recurso de hecho deducido por la Asociación Médica de Almirante Brown en la causa Erskis, Gerardo Alberto c/ Clínica Estrada S.A. y otros s/ daños y perjuicios - resp. Prof. Médicos y Aux", 27/12/2016.

²¹ FLORES, DANIELA Y LÓPEZ MESSIO, EZEQUIEL; "SISTEMAS INFORMÁTICOS: LA NUEVA REALIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES", 29 DE MARZO DE 2021, WWW.SAIJ.GOB.AR, ID SAIJ: DACF210055, FECHA DE CONSULTA: 3/12/2022.



Dicho plexo legal, en su art. 36 establece que se entiende por Servicio de Confianza "... al servicio electrónico prestado por un tercero de confianza relativo a: 1. La conservación de archivos digitales. 2. La custodia de declaraciones de voluntad realizadas en formato electrónico, contratos electrónicos, y toda otra transacción que las partes decidan confiar a un tercero depositario. 3. La notificación fehaciente de documentos electrónicos. 4. El depósito de declaraciones de voluntad realizadas en formato electrónico. 5. La operación de cadenas de bloques para la conservación de documentos electrónicos, gestión de contratos inteligentes y otros servicios digitales. 6. Los servicios de autenticación electrónica. 7. Los servicios de identificación digital. 8. Otras prestaciones que determine el Ente Licenciante".

Por su parte, el art. 37 señala que podrán brindar servicios de confianza las personas humanas, jurídicas, consorcios, entes públicos, entes públicos no estatales, de acuerdo a los procedimientos, estándares y condiciones que determine la reglamentación.

La norma se inspira en la legislación española, que en el art. 25 de la ley 34/2002 establece que se puede pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. Además, adita que la intervención de dichos terceros no podrá alterar ni sustituir las funciones que corresponde realizar a las personas facultadas con arreglo a Derecho para dar fe pública, así como que también deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado que, en ningún caso, será inferior a cinco años.

III. EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A NIVEL PROVINCIAL

Como primer paso previo al análisis del expediente electrónico, corresponde referir previamente al Sistema de Administración de causas



(conocido coloquialmente como SAC), diseñado por el Área de Tecnología de Información y Comunicaciones del Poder Judicial.

Su implementación se inició en el año 2003 en el Juzgado de la ciudad de Cosquín (Acuerdo Reglamentario (en adelante AR) de 28/04/2003.

Después, mediante AR N° 700 de 24/02/2004 y N° 771 de 19/04/2005 se estableció el mismo sistema en el fuero civil y laboral de la Ciudad Capital respectivamente.

Ya en el 2008 se comenzó a aplicar el SAC mutifuerzo, que permite registrar en una única base de datos provincial cualquier operación que un tribunal realice en un expediente judicial, cualquiera sea el ámbito o instancia.

A continuación, referiremos de manera esquemática al marco normativo en la Provincia de Córdoba que ha permitido el avance del expediente electrónico en nuestra provincia.

A nivel procesal, se destaca la ley 10.457 del año 2017 que reformó el Código Procesal Penal se estableció lo siguiente: *"Artículo 166.- Domicilio Legal. En orden al proceso penal, el domicilio legal está integrado por el domicilio constituido y por el domicilio electrónico. Al comparecer en el proceso, las partes deberán constituir domicilio dentro del radio de la sede del órgano judicial y declarar bajo juramento que su domicilio electrónico se encuentra correctamente habilitado. Las notificaciones al domicilio se harán por medio electrónico, salvo que deban efectuarse a personas que no tengan la obligación de constituir domicilio."*

Por su parte, Ley 9401 del año 2007 la Provincia adhirió a la ley nacional N° 25.506 de firma digital. A su vez, por ley 10.177 estableció en sus artículos 13 y 14 la autorización para el uso de expediente electrónico, documento electrónico, comunicaciones electrónicas, firma digital, firma electrónica y domicilio electrónico constituido en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, con idéntica validez jurídica y valor probatorio que sus equivalentes



convencionales, facultando en el art. 14 al TSJ para reglamentar su uso y disponer su gradual implementación.

Desde tal cobertura legal, mediante AR N° 1363 de fecha 16/05/2016 se estableció el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y servicios públicos en forma segura a través de internet, así como procurar la gradual despapelización y mayor eficiencia del Estado en la gestión de sus recursos y la prestación de sus servicios. En dicho cuerpo normativo, se destaca lo dispuesto por la cláusula Tercera, en la que se señala que la utilización usuario y clave de identificación personal por el abogado, importa el registro personal de su intervención en una determinada operación informática que puede o no, conllevar connotación procesal; motivo por el cual, es responsabilidad excluyente del mismo el cuidado que para con ella tenga, y/o la reserva que de la misma efectivamente haga.

Avanzando en el tiempo, mediante AR N° 1582 de fecha 21/08/2019, se dispuso aprobar el plan tendiente a la tramitación íntegramente electrónica de los expedientes judiciales y disponer que su ejecución se efectúe de manera gradual, para toda la provincia por un plazo inicial no mayor a doce (12) meses (art. 1). Por su parte, el art. 4 extendió el alcance de la implementación de firma digital a todas las resoluciones judiciales que deban ser suscriptas por parte de los magistrados y funcionarios de toda la provincia, ya sea en actuaciones dentro de expedientes electrónicos o para resoluciones protocolizadas, aunque se trate de expedientes papel.

Resulta de mención respecto a esta disposición del TSJ, el hecho de que dicha norma apruebe el Reglamento General del Expediente Judicial Electrónico. En efecto, en el correspondiente anexo establece pautas de evidente importancia para el despliegue del expediente electrónico. Así, el art. 3 prescribe que las constancias de datos y movimientos de la causa que contenga el sistema informático serán consideradas válidas sin necesidad de respaldo en soporte papel.



Por su parte, el art. 5 establece que los letrados, auxiliares de justicia y demás usuarios habilitados podrán acceder y visualizar las causas a las que hubiera resultado vinculado por registración en el sistema informático. A su vez, el art. 11 de dicho Reglamento refiere que los letrados y auxiliares de justicia, deberán bajo su responsabilidad tomar las medidas necesarias a fin de tener asignado nombre de usuario y clave personal que los habilite a intervenir en función de la participación que les corresponda en el trámite judicial. El usuario y clave personal suministrados a los letrados y auxiliares de justicia para el acceso al sistema informático del Poder Judicial de la Provincia, constituye su firma electrónica, por lo que las presentaciones efectuadas a través de la plataforma prevista en la Extranet del Poder Judicial de la Provincia se entenderán suscriptas por el usuario al que pertenece dicha firma electrónica.

Finalmente, el art. 22 prescribe que la presentación de escritos electrónicos en el sistema por un abogado cuando sea requerida la firma de su patrocinado deberá realizarse adjuntando copia escaneada del escrito generado en la plataforma del PJC donde esté consignada la firma ológrafa de la persona patrocinada, e implica una declaración jurada de autenticidad, quedando bajo responsabilidad de los letrados conservar los escritos con la firma ológrafa hasta la finalización del proceso, los que podrán ser requeridos por el Tribunal interviniente en cualquier oportunidad.

Específicamente en materia de notificaciones, corresponde señalar que la notificación electrónica ha sido adoptada por el TSJ mediante el AR N° 1103 (27/6/2012), por el que se estableció en Córdoba que las notificaciones de providencias, decretos y resoluciones a todos los efectos derivados de los procesos y que según los Códigos de Procedimientos de los respectivos fueros, deban efectuarse al domicilio constituido en la medida, forma y tiempos que determine el TSJ a través cédula de notificación digital, en el domicilio electrónico constituido mediante el nombre de usuario y contraseña que posee todo Abogado para hacer uso del Servicio Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba en Internet (art. 1).



Además, se estableció que se practicarán en el domicilio electrónico constituido perteneciente a los letrados de las partes y demás auxiliares del Poder Judicial, todas las notificaciones mencionadas en el Art. 145 del Código Procesal Civil y Comercial y en las respectivas normas procesales específicas de cada fuero, sin perjuicio de la cédula en soporte papel que podrá ser confeccionada por el tribunal o a instancia de parte (art. 3).

Esta normativa fue ampliada al fuero de Familia (AR N° 1152 de 23/4/2013), a las causas laborales que tramitan en los Juzgados del fuero civil y comercial, conciliación y familia de las Sedes Judiciales de Alta Gracia, Villa Carlos Paz, Jesús María y Río Segundo de la Primera Circunscripción Judicial (AR N° 1174 de 23/7/2013), procesos en que intervengan los Señores Asesores Letrados del Trabajo y que tramitan en los Juzgados de Conciliación de la Ciudad de Córdoba (AR N° 1142 de 4/3/2013), los procesos que tramitan en las Salas de la Cámara Única del Trabajo de la Ciudad de Córdoba y en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (AR N° 1176 de 21/10/2013).

A su vez, mediante AR N° 1493 de fecha 21/5/2018, el TSJ amplió el alcance de este sistema al Fuero Civil y Comercial, implementando la utilización obligatoria de la cédula de notificación digital dirigida a abogados y asesores civiles que intervengan en los Juzgados, Cámaras y Tribunal Superior de Justicia del fuero Civil y Comercial, para aquellos actos procesales que deban notificarse de oficio y los que a criterio de las respectivas dependencias así lo justifique,

En aplicación de estas normas, la Sala Laboral del TSJ ha resuelto que si en el proceso se opera con domicilio electrónico, no corresponde rechazar un recurso con el argumento de que el impugnante no constituyó domicilio legal, ya que en estos casos tal exigencia ha perdido relevancia.²²

Obviamente, la pandemia del COVID 19 alteró y aceleró el proceso en curso. En virtud de esta situación, el Alto Cuerpo estableció mediante AR N°

²² TSJ, SALA LABORAL, AUTO INTERLOCUTORIO N° 246, 7/7/2017, AUTOS "TULA JEREMIAS OMAR C/ TRANSPORTE MERCURIO S.A. ORDINARIO-DESPIDO" RECURSO DIRECTO 1199611.



1620 del 16/03/2020, un receso judicial extraordinario por razones sanitarias para la segunda quincena del mes de marzo, en toda la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, que luego extendió durante más tiempo dada la extensión de la pandemia.

A su vez, mediante AR N° 1624 de fecha 09/05/2020 se dictó (en el anexo I) el Protocolo de actuación y recomendaciones generales para servicio presencial de justicia en la Provincia de Córdoba durante la emergencia sanitaria por covid-19". En esta normativa se destaca la temática vinculada a la tecnología aplicada a la reducción de la circulación, tales como la esa de entradas y barandilla virtual; el contacto por medios digitales; y la utilización del correo electrónico y teléfonos oficiales a los fines de facilitar la comunicación remota con los justiciables y los letrados.

Ya consolidada la vigencia del expediente electrónico, tanto a nivel provincial como nacional, se han dictado diversos fallos en los que se ha hecho aplicación de toda esta normativa, aspecto que referiremos a continuación.

IV. FALLOS QUE ADMITIERON ACTOS PROCESALES POR VÍA REMOTA EN EL ORDEN NACIONAL

Primero la pandemia, y luego la generalización del expediente electrónico ha provocado una gran cantidad de fallos en los que se receptó la posibilidad de realizar diversas actuaciones de manera remota.

Así, en materia de familia, se admitió al accionante que notifique al demandado vía correo electrónico y WhatsApp una demanda de divorcio, argumentando que, en el marco de la emergencia, la falta de previsión legal no empiece a que desde la jurisdicción se busquen las soluciones necesarias



encaminadas a zanjar las situaciones que se vayan presentando por WhatsApp y correo electrónico.²³

En el mismo sentido, se admitió, haciendo eje en la flexibilidad de las forma y la tutela judicial efectiva, notificar al correo electrónico al cónyuge residente en Inglaterra sobre la petición de divorcio unilateral.²⁴

En otro orden, en el marco de un reclamo alimentario, también se admitió la utilización del WhatsApp como medio de notificación.²⁵

Desde la misma perspectiva, se permitió la notificación de la ejecución forzada de un incidente alimentario familiar por la vía del WhatsApp, dado que lo debido era el pago del alquiler de la vivienda que habita la niña con su madre y por la que el locador habría promovido juicio de desalojo con motivo de la falta de pago del canon.²⁶

Por su parte, y en el marco de un caso de violencia familiar, se autorizó la utilización, como prueba de la situación de violencia, la comunicación tenida entre las partes vía WhatsApp, así como la notificación de la sentencia por esa vía.²⁷

A su vez, en materia societaria se permitió la celebración de la reunión del Consejo Directivo de la Asociación por videoconferencia y su notificación por la aplicación WhatsApp.²⁸

²³ CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL, SALA II, MORÓN, ACT. JUR, REV. FAMILIA Y NIÑEZ, N° 208.

²⁴ JUZGADO CIVIL N° 92 M., J. C/ S., M. S/ ALIMENTOS BUENOS AIRES, 9 DE DICIEMBRE DE 2021.

²⁵ JUZG. N.° 1 FLIA. TANDIL, 29/07/2020, "G. E. A. C/ W. B. S/ DIVORCIO POR PRESENTACIÓN UNILATERAL".

²⁶ CNCIV., SALA A, 30/06/2020, "L., M. A. C/ C., W. C. S/ DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR".

²⁷ CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA I 08/05/2021, "M., J. L. c/ M., D. A. J. s/DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR".

²⁸ CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA J, 28/05/2021, "G., R. H. Y OTRO C/ A., C. C. P. Y OTRO S/ AMPARO".



También ha sido admitido la validez de la audiencia virtual realizada en el marco de un beneficio de litigar sin gastos.²⁹

En materia laboral, se ha autorizado la utilización de la aplicación "Google maps" para identificar el recorrido del trabajador a los fines de calificar el accidente ocurrido como "in itinere".³⁰

Asimismo, se declaró válido el certificado de trabajo notificado al empleador mediante la aplicación de WhatsApp, por lo que fue declarado inválido el despido producido bajo esa causa.³¹

En materia civil, también ha sido admitido como prueba -incluso oficiosa- la constatación del estado de la rampa para discapacitados obtenida a través de la aplicación "Google Maps".³²

Incluso la utilización de este tipo de herramientas ha sido autorizada en materia penal. Por ejemplo, se aceptó realizar la indagatoria por videollamada dado que no corresponde paralizar el expediente a la espera de que el imputado regrese al país, pues, nada impide que su declaración sea recibida bajo esa modalidad, debiendo su asistencia técnica arbitrar los medios necesarios para que aquél pueda ejercer plenamente su derecho de defensa.³³

²⁹ CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA M, 04/03/2021"LOTO, JEREMIAS NICOLAS s/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS".

³⁰ CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO, SALA X, 23/04/2022 "QUINTANA LEONARDO MAXIMILIANO C/ CHOCORISIMO S.A. S/ DESPIDO".

³¹ CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO, SALA IX, 16/04/2021, "MIÑARRO TAPIA, MARCELO EZEQUIEL c/ HONDURAS 69 S.R.L. s/DESPIDO".

³² CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA H, 14/06/2021.

³³ CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, SALA 5, 13/10/2020, Exp. 68016/2019.



En la misma línea, también se ha admitido producir la indagatoria por zoom,³⁴ y hasta el reconocimiento del imputado a través de esa vía, dada la imposibilidad de realizar tal diligencia de manera presencial.³⁵

También fue aceptada la posibilidad de que el imputado reconozca el hecho, circunstancia acreditada por la captura de pantalla por whatsapp,³⁶ así como también se ha admitido la validez de la indagatoria por videoconferencia, dado que se trata de un elemento técnico que da mayor eficiencia a los actos procesales sin mengua del derecho de defensa de las partes.³⁷

Específicamente en materia de juicio ejecutivo, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Azul admitió como prueba en una ejecución hipotecaria una constancia de pago en soporte electrónico, considerando que el ejecutado había opuesto excepción de pago parcial, había traído en apoyo de su defensa un recibo –sin firma– expedido por el banco actor por medios electrónicos, con evidentes visos de verosimilitud, y que por lo tanto incumbía al banco actor demostrar que las leyendas y constancias consignadas en ese instrumento privado no se corresponden con la realidad que reflejan.³⁸

En otro precedente relacionado con el juicio ejecutivo, también se ha dicho que no puede admitirse que mensajes de texto vía celular demuestren el supuesto pago de intereses sobre el capital del mutuo cuando, ya que el medio requerido para ello lo constituye el recibo extendido por el acreedor que aluda, en forma clara y precisa, a la obligación que se ejecuta, es decir, consignado la deuda saldada. Por ello, resulta impropia la prueba aportada por el

³⁴ CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6, 13/07/2020, "TOMARO, Nahuel Uriel y otro s/ queja".

³⁵ CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, SALA 5, 25/08/2020,

³⁶ NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, SALA 6, 20/05/2020.

³⁷ CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, SALA 7, "GUTIÉRREZ SANABRIA, D. C.", 11/11/2020.

³⁸ CÁMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL DE AZUL, BS. AS., CIT. EN MOLINA QUIROGA, EDUARDO, " PRUEBA DOCUMENTAL. SUPUESTOS PARTICULARES. SOPORTES ELECTRÓNICOS";: [HTTP://WWW.DPI.BIOETICA.ORG/MOLINA.HTM](http://www.dpi.bioetica.org/molina.htm), FECHA DE CONSULTA: 22/11/2022.



excepcionante para fundamentar su defensa en un proceso ejecutivo particular, en tanto los aludidos mensajes de texto no conforman un documento apto para acreditar pagos, en los términos exigidos, en un proceso de esta naturaleza por la legislación adjetiva.³⁹

Finalmente, también se ha decidido que la prueba del envío de un correo electrónico –aún si estuviera firmado digitalmente por el emisor–, nada dice sobre su recepción por el destinatario ya que los protocolos de comunicación que se utilizan regularmente para enviar correos electrónicos no implementan sistemas de acuse de recibo confiables. Es decir que aún en el caso de correos electrónicos cuyo envío haya sido probado, podría ser necesario producir prueba adicional para acreditar su recepción por el destinatario.⁴⁰

V. FALLOS QUE HAN CONVALIDADO LA UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL ORDEN PROVINCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS ACTOS PROCESALES

La convalidación de actuaciones electrónicas también se ha producido a nivel provincial, en donde, en general, la jurisprudencia se ha manifestado rechazando las diversas impugnaciones que se han impetrado contra el sistema de expediente y notificación electrónicos.

Así, se decidió rechazar un planteo de nulidad de una notificación electrónica enviada durante la feria judicial. Para rechazar el planteo el tribunal entendió que pese a que no se encontraba disponible en la sección “novedades”, dado que el letrado tiene la carga de revisar en el servicio extranet.⁴¹

³⁹ CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL, SALA A, 05/06/2012, AUTOS “BARCOS JUAN CARLOS C/URCELAY GUSTAVO S/EJECUTIVO”.

⁴⁰ CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL, SALA F, 27/08/2010, AUTOS “HEYNALD SA C/PALLANCH, ALBERTO ENRIQUE Y OTROS S/EJECUTIVO S/INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE HONORARIOS”.

⁴¹ CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL 7° NOM, 29/04/2021, AUTOS “BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA C/ GAZ SA- ORDINARIO- CONSIGNACIÓN – EXPTE. 5781418”.



En otro caso, y en el marco del servicio de justicia brindado durante la pandemia por COVID-19, se resolvió dar por decaído el derecho de usar para expresar agravios por no encontrarse firmado por los apelantes el escrito de expresión de agravios presentado de manera electrónica por el letrado patrocinante. Frente a ello, los apelantes interpusieron recurso de reposición, argumentando que no obstante haber realizado todo el procedimiento electrónico para enviar el archivo en PDF con el escrito firmado por las partes legitimadas, no se cargó por motivos técnicos que no le eran imputables y que desconocían. Así, el tribunal hizo lugar al recurso deducido, revocando el decreto atacado y teniendo por expresados los agravios de los apelantes, dado que entre el apego estricto a las formas y el derecho al recurso o acceso a la doble instancia debía prevalecer este último.⁴²

No obstante, en sentido contrario se ha dicho que debe practicarse una nueva notificación de la sentencia a la demandada atento que la e-cédula había sido realizada en un día inhábil (primeros días del receso judicial correspondiente a la feria de enero). Para ello, se consideró que al encontrarse en juego la posibilidad del pleno ejercicio de derecho de defensa de la accionada dado el especial acto que se le estaba anoticiando -resolución sobre el fondo del amparo- la notificación así practicada, no cumplía con las exigencias de forma para salvaguardar el derecho de defensa. Al respecto, se añadió que quien cursa la notificación en esas circunstancias, coloca al notificado en una situación de desventaja respecto de las posibilidades con las que sí hubiera contado de practicarse la notificación en el lapso de actividad judicial. Máxime frente a la entidad del acto que se anoticia -resolución sobre el fondo- y la consecuencia que implica en cuanto a la pérdida de derechos de uno de los litigantes (v.gr. para recurrir el resolutorio en uso del derecho a la doble instancia).⁴³

⁴² CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL 5º NOM., AUTO N° 134, 16/10/2020.

⁴³ JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 1º INST. Y 10º NOM., AUTO N° 110, 12/04/2021.



A su vez, y haciendo eje en el cambio de paradigma que implica el expediente electrónico a nivel provincial, la jurisprudencia ha señalado que la omisión de acompañar junto con el escrito de interposición del recurso directo, las copias exigidas por el art. 402 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba (en adelante CPC), contrastada con la literalidad de la norma, exigirá pronunciarse por el rechazo del recurso directo en el que no se acompañan las copias que exige el dispositivo.. Sin embargo, los radicales y paradigmáticos cambios en el sistema de tramitación de las causas judiciales obligan a reflexionar sobre la razonabilidad de sostener la exigencia en tiempos en que los expedientes y sus contenidos se encuentran al alcance del operador, en la misma pantalla en la que a diario se trabaja. Es que, cabe recordar, la Ley 8465 fue sancionada en abril de 1995 cuando los expedientes tramitaban totalmente en papel y la consulta de sus constancias por una dependencia judicial diferente a la de su radicación, exigía su traslado físico. Es así que las disposiciones del art. 402 del rito fueron concebidas para posibilitar el conocimiento y análisis de las circunstancias de la denegatoria recursiva por un tribunal de grado inferior, y hacer de soporte a la autosuficiencia de la queja que se presenta “directamente” ante el superior al solo efecto que habilite la instancia revisora. Por ello, atento que hoy en día es suficiente la introducción del número de expediente o, simplemente clicar en el ítem “expedientes relacionados” de la ventana informática correspondiente, no es posible denegar formalmente el medio impugnativo por la sola omisión del cumplimiento del recaudo normativo previsto en el art. 402 inc. 2 del CPC.⁴⁴

Como se advierte de lo expuesto, el fundamento principal de las resoluciones previamente referidas está constituido por el principio de instrumentalidad de las formas o finalismo, según el cual los actos procesales son válidos y eficaces si, aun cuando no cumplen la forma preestablecida en la

⁴⁴ CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL 4º NOM., AUTO N° 37, 12/03/2021.



ley, se celebran de un modo tal que cumple su finalidad y no afecta el derecho de defensa de las partes.

VI. EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN LOS JUZGADOS DE JUICIOS DE COBROS PARTICULARES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La instrumentación del expediente electrónico en los Juzgados de juicios de cobros particulares de la Provincia de Córdoba tuvo diversos antecedentes.

El primero de ellos fue que el TSJ, en ejercicio de las facultades previstas en el art. 12 inc. 24º de la Ley 8435, dispuso por AR N° 1172 de 11/09/2013 asignar competencia excluyente y exclusiva para la atención de ciertas causas tramitadas en el fuero Civil y Comercial a los Juzgados de Primera Instancia de 14º y 47º Nominación del Centro Judicial de la Capital.

Luego, el sistema fue avanzando en base a la experiencia positiva recogida tanto en Capital como el interior, por la creación de oficinas con competencia exclusiva y excluyente en materia fiscal, como en la implementación de Oficinas de Ejecuciones Particulares. Todo ello, a través de los siguientes Acuerdos: AR N° 1215 de 26/06/2014, AR N° 1251 de 16/12/2014, AR N° 1254 de 23/12/2014 y AR N° 1384 de 17/10/2016, entre otros.

Particular relevancia adquiere al respecto el dictado del AR N° 1495 de 28/05/2018, se dispuso que a partir del 4/06/2018, los Juzgados de Primera Instancia de 14º y 47º Nominación de Capital fueran designados como “Juzgados de procesos de cobros particulares”, y se les asigne competencia en forma exclusiva y excluyente en relación a las causas en las que se pretenda el pago de obligaciones de dar dinero, cuyas causas fuentes sean de la siguiente naturaleza: 1. Tarjetas de crédito 2. Expensas comunes 3. Ejecución de sentencia penal 4. Ejecuciones hipotecarias 5. Ejecuciones prendarias y secuestros prendarios 6. Cheques, Letras de Cambio y Pagarés 7. Saldos de Cuenta Corriente Bancaria 8. Mutuo Dinerario 9. P.V.E. de los títulos indicados



precedentemente, en su caso y todo juicio declarativo posterior de los procesos mencionados anteriormente.

De tal modo, se estableció que en dichos juzgados se concentre la tramitación y gestión total de las nuevas causas que se inicien correspondientes a dichas categorías, cualquiera sea su trámite (ejecutivo, abreviado u ordinario) y su acreedor (personas humanas o jurídicas), en forma unitaria o múltiple.

A su vez, en el mismo dispositivo, y con el objeto de lograr un mayor grado de eficiencia en la gestión y resolución de las causas judiciales, se creó una oficina de soporte y apoyo común a la actividad jurisdiccional de los “Juzgados de procesos de cobros particulares”, la que funciona bajo la categoría de Secretaría de Primera Instancia, opera bajo la dependencia directa de los mencionados Juzgados, y. fue designada como “Secretaría de Gestión Común de los Juzgados de procesos de cobros particulares”.

La justificación de un fuero específico tiene diversas razones fundantes. Una de ellas, es que de las aproximadamente 22.000 causas anuales ejecutivas y de cobranzas iniciadas ante los Juzgados de Primera Instancia de Capital, el nivel de controversia no supera el 10%; tramitándose el resto en rebeldía.

Por esa razón, el modelo implantado persigue organizar, encauzar y concentrar funciones en el contexto de la actual oficina judicial con relación a la gestión de determinados actos procesales. A los fines de dar adecuada respuesta a esta realidad, con la creación de dicha Secretaría de Gestión Común se buscó concentrar y organizar la gestión de los procesos de las causas no contenciosas, permitiendo darle mayor celeridad en los procesos donde no se haya cuestionado la legitimidad del crédito reclamado, reservándose así a los “Juzgados de procesos de cobros particulares” la sustanciación de los juicios contenciosos, que requieren otros tiempos de tramitación y una diferente respuesta jurisdiccional en materias controversiales.

Como complemento de lo expuesto, mediante AR N° 1498 de 06/06/2018 se puso en marcha con fecha 12 de Junio de 2018 la tramitación íntegramente



electrónica de expedientes judiciales, para las causas que en se promuevan ante la Secretaría de Gestión Común de los Juzgados de Procesos de Cobros Particulares de esta Ciudad.

De particular importancia resulta la Resolución N° 3 de 28/05/2019, mediante la cual se estableció que a partir del 03/06/2019 se tramiten de manera íntegramente electrónica todas las causas que se inicien en la Secretaría de Gestión Común de los Juzgados de juicios de cobros particulares de la Provincia de Córdoba.

En dicha disposición, se estableció que los abogados apoderados o patrocinantes de las partes podrán presentar peticiones los 365 días del año, estando disponible el sistema las 24hs., salvo los periodos de ventana técnicos para tareas de mantenimiento que se realizarán preferentemente en horarios no hábiles.

A su vez, los abogados deberán iniciar las demandas o presentar sus escritos judiciales mediante el sistema de expediente electrónico sobre la base de un catálogo de demandas y escritos estandarizados. A la demanda se adjuntará el título o documento base de la acción escaneado, el que se presentará en original para su reserva en secretaria.

En el mismo sentido, y con relación a la prueba documental, se estableció que luego de adjuntar documental digitalizada, los documentos originales serán preservados por la parte, sus letrados y auxiliares de justicia actuantes hasta la finalización del proceso en carácter de depositario judicial; debiendo presentarse para su compulsación en caso de ser requerido por el Tribunal.

A su vez, la presentación de escritos electrónicos en el sistema por un abogado cuando sea requerida la firma de su patrocinado deberá realizarse adjuntando copia escaneada del escrito donde esté consignada la firma ológrafa de la persona patrocinada, e implica una declaración jurada de autenticidad. Todo ello, bajo responsabilidad de los letrados conservar los escritos originales hasta la finalización del proceso, los que podrán ser requeridos por el Tribunal



interviniente en cualquier oportunidad, revistiendo en todos los casos como fecha de presentación del escrito electrónico la otorgada por el sistema, la que suple al cargo manual. Si la presentación se realiza en día y hora inhábil se la considerará ingresada al sistema desde la primera hora del día hábil siguiente.

VII. CONCLUSIONES

La característica distintiva de esta investigación es que se desarrolló durante la pandemia del COVID 19, lo que precipitó -por la fuerza de las circunstancias- un desarrollo indetenible del expediente electrónico. Todo ello sin perjuicio de los avances concretados antes de la pandemia.

Tampoco puede dejar de mencionarse que, durante el desarrollo de la presente investigación, el Poder Judicial de la Provincia sufrió un ciberataque que obligó al TSJ a declarar inhábiles muchos días durante el mes de agosto de 2022 (AR N° 1778 de 15/08/2022 y AR 1781 de 19/08/2022).

En este sentido, el ciberataque produjo demoras y dificultades, aunque no pérdidas de información, dado que el Poder Judicial tiene actualizados todos los sistemas de seguridad y contratados los servicios de líderes globales del mercado tecnológico (Microsoft, Cisco, Trend micro) y de los especialistas más renombrados del ámbito tecnológico local (Punto Net Soluciones, e-Mozart, Cotech, Cedi Consulting, Intertron y Procom).

No obstante, es necesario poner de relieve la necesidad de que la información sea preservada de atacantes que, lamentablemente cada vez con más frecuencia y sofisticación, intentan dañar sistemas operativos públicos y privados.

En cualquier caso, entendemos que el proceso electrónico en general, y el desarrollo del expediente electrónico en materia de ejecución de juicios ejecutivos particulares en especial, permite lograr diversos objetivos loables en el proceso judicial.



En primer término, debe considerarse que todo proceso debe insumir el menor tiempo posible, sin solución de continuidad, evitando toda parálisis y respondiendo las solicitudes de manera expedita.

En este marco, el expediente electrónico permite la informatización del sistema documentario jurídico (búsqueda y adquisición de datos almacenados), ya que en el devenir de la actividad de magistrados y funcionarios el aporte de la información jurídica relevante para el caso concreto optimiza, sin ninguna duda, el uso del tiempo disponible para resolver.

Por otra parte, la protocolización electrónica permite la rúbrica digitalizada de las distintas resoluciones, favoreciendo el dinamismo del sistema.

Específicamente en lo relativo a los juicios de cobros particulares, el nuevo diseño de la oficina judicial a través de la Secretaría de Gestión Común contribuye a que los jueces puedan concentrar sus esfuerzos temporales en la tarea que les resulta constitucionalmente propia: resolver los verdaderos conflictos de intereses entre el Estado y los particulares y hacer cumplir sus resoluciones, sin que obste a dicha función, la realización de otras tareas que pueden ser llevadas a cabo por el emplazamiento de una logística diferente en la oficina tradicional.

Por otra parte, no debe perderse de vista que la información que se publica por medios electrónicos tiene carácter oficial, pues la emisión de mensajes de datos puede considerarse un acto de comunicación procesal que pone en conocimiento a las partes, terceros u otras autoridades judiciales o administrativas de las providencias y órdenes de jueces y fiscales en relación con los procesos sometidos a su conocimiento. Conforme a ello, la información electrónica que provenga de una fuente oficial y se incorpore a un proceso digital, puede considerarse siempre confiable.

También resulta de mención el principio de la inalterabilidad, según el cual se garantiza mediante la aplicación de protocolos de extracción y copia y mediante el adecuado manejo de las reglas de cadena de custodia.



Todo lo expuesto deja en claro que la utilización del expediente electrónico ha producido un verdadero cambio de paradigma en la administración de justicia.

Sin duda, los desafíos son importantes, sobre todo para mantener la confiabilidad y el resguardo de la información, ante la posibilidad de ataques como los que, lamentablemente han ocurrido de modo reciente.

Tales dificultades, no deben hacernos perder de vista que también la utilización del papel implica riesgos de pérdida de información, dado que se trata de un tipo de documento que se encuentra expuesto a los peligros, ya sea por el mero paso del tiempo, como por fenómenos imprevisibles que pueden hacer perder la información (incendios, inundaciones, etc.).

Específicamente en materia de los juicios de cobros particulares, el expediente electrónico ha posibilitado la gestión de muchísimas causas con mucha más eficacia, permitiendo que la Secretaría de Gestión Común pueda dedicarse a la tarea rutinaria -cuando no existe controversia-, reservando a los jueces el cumplimiento de sus funciones específicas asignadas por la Constitución, concretamente la de administrar justicia.

En ese marco, resulta conveniente profundizar el camino emprendido, desarrollando nuevas herramientas que, por un lado, permitan una mejor gestión de las causas, y por el otro aseguren a los justiciables un adecuado respeto a la garantía de defensa en juicio.

Bibliografía

BARBERÁ, ELENA Y BADÍA, ANTONI. *Educación con aulas virtuales*; Ed. Machado Libros S.A. Madrid, 2004.

BEJERANO GUERRA, FERNANDO. "Herramientas para la implantación de los juicios rápidos"; *Revista Iuris* (actualidad y práctica del Derecho). N° 72, mayo, La Ley, Bs. As., 2003.

BERIZONCE, ROBERTO O.; "Nuevos principios procesales y su recepción en los ordenamientos jurídicos nacionales (influencias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos). UNLP, La Plata, 2012.



BIELLI, GASTÓN E. Y ORDOÑEZ, CARLOS; "El juez y la prueba electrónica"; LL, 19 de diciembre de 2019, AR/DOC/3942/2019.

BIELLI, GASTÓN E. Y ORDOÑEZ, CARLOS J., "La prueba electrónica. Teoría y práctica", Ed. La Ley, Bs. As., 2019.

CAMPS, CARLOS E.; "Los principios del derecho procesal electrónico en la práctica profesional" , en Derecho procesal electrónico práctico. Ed. El Dial, Bs. As..

DE URBANO CASTRILLO, EDUARDO; "El documento electrónico: aspectos procesales". *Cuadernos de Derecho Judicial. Escuela Judicial* (CGPJ). Madrid. 2001.

GRANERO, HORACIO R.; "E-mails, chats, mensajes de texto, facebook y dvd. Validez probatoria en el proceso civil, comercial, penal y laboral", Ed. El Dial, Bs. As., 2015.

LIKSENBERG, MARIANA Y CRISTIANO, MARÍA J. "Constancias digitales del SAC como medio de prueba. Admisibilidad y régimen normativo aplicable". *Semanario Jurídico*, N° 1595, Cba., 2007.

MAINA, NICOLÁS, *Expediente electrónico*, Ed. Advocatus, Cba., 2016.

NAVARRO, DAVID. "La era del homo tecnológicus". *Revista Escritura Pública*. N°43 (enero-febrero de 2007). Consejo General del Notariado. Madrid.

PÉREZ BUSTAMANTE, ROGELIO. "La nueva arquitectura judicial española: Ciudades de la Justicia". *Revista Abogacía Española*. N° 34, Consejo General de la Abogacía Española. Madrid, 2015.

VÁZQUEZ, CARMEN (Coord.); *Manual de Prueba pericial*, Ed. Escuela Federal de Formación Judicial, México, 2022.



LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CIVIL ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE EXECUTION OF CIVIL JUDGMENT

Santiago Molina Sandoval*

Resumen

El presente analiza la inteligencia artificial aplicada a la ejecución de sentencia civil. Para ello se analiza la regulación de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al Poder Judicial y en particular en la gestión judicial y el programa “Justicia 2020”. Además, se analiza nociones de inteligencia artificial y la ejecución de sentencia. Se concluye con una propuesta personal.

Palabras clave

Inteligencia artificial; Ejecución de Sentencia; Proceso Civil

Abstract

In this article its analyzed artificial intelligence applied to the execution of civil judgments. First, it is analyzed the regulation of technology of information and communication applied to the Judiciary and the case management in the “Justicia 2020” program. It is also analyzed the application of A.I. to the execution of civil judgments. Finally, a proposal is presented.

Keywords

Artificial intelligence; Execution of judgment; Civil Procedure

Sumario: I. Introducción; II. Caracteres de la tecnología aplicada al Poder Judicial. III. La regulación de las TICs aplicada al Poder Judicial. IV. El uso de la tecnología como estrategia de gestión judicial. el gobierno judicial abierto. El programa “justicia 2020”. V. Nociones sobre la Inteligencia Artificial. VI. Ejecución de sentencia e Inteligencia Artificial. VII. Propuesta personal. VIII. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y de la comunicación (en adelante, TICs) se encuentran en permanente evolución. El proceso judicial, por su parte, ha evidenciado mejorías a partir de su implementación. Ello trae aparejado una

* Abogado (UNC). Especialista en Derecho Procesal (UNC). Profesor de la Cátedra B de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Prosecretario Letrado (Provincia de Córdoba). Integrante del equipo de investigación CONSOLIDAR dirigido por la Prof. Dra. Rosa Avila Paz de Robledo: “Los actos procesales y las nuevas tecnologías: hacia el expediente electrónico en el fuero civil y comercial en la Nación y en la Provincia de Córdoba”, SECYT UNC. Aceptado para su publicación: 01/03/2023.



suerte de entrecruzamiento de la necesidad del operador jurídico con la factibilidad técnica.

En otras palabras, solamente quien opera el Derecho puede encontrar resquicios a mejorar con la utilización de las TICs. Pero solo el programador, el técnico en informática, podrá viabilizar la solución a partir de los avances existentes al momento de su intervención.

Esta circunstancia impone a los operadores jurídicos profundizar en los alcances de la contribución de las TICs. Vale decir, ellos pueden focalizar en qué actos procesales las TICs pueden contribuir. En la complejidad y diversidad de las cuestiones del proceso judicial, los aportes desde esta perspectiva favorecen, por más superficiales que parezcan, a una transitoriedad de la serie procedimental¹ y a un debido proceso. Máxime, cuando la actividad mejorada se repite continuamente.

En este informe individual, se propone determinar los ejes para la aplicación de las TICs en la ejecución de sentencia, con particular referencia al fuero civil y comercial del Poder Judicial de la Nación y de la Provincia de Córdoba. En forma específica, habida cuenta la amplitud del tema, se enfocará en la Inteligencia Artificial (en adelante IA) a los fines de realizar propuestas de implementación de la herramienta en esta etapa procesal.

II. CARACTERES DE LA TECNOLOGÍA APLICADA AL PODER JUDICIAL

La experiencia en la utilización de las TICs en el proceso judicial evidencia ciertos caracteres que la describen².

i.- Transversalidad

¹ Una posición respecto a los principios procesales puede verse en ALVARADO VELLOSO, ADOLFO, *Lecciones de Derecho Procesal Civil*, FUNDECIJU, Córdoba, 2012. 258-263.

² En este sentido, MOLINA SANDOVAL, SANTIAGO, "Implicancias del fenómeno tecnológico en el proceso judicial", *Semanario Jurídico*, 06.09.2019.



La tecnología no entiende de fueros ni de secciones. Su utilización es comprensible con independencia de la materia que vehiculiza.

La experiencia en la decisión de la implementación puede evidenciar diversas razones. Un aspecto a tener en cuenta está relacionado al trámite procesal diseñado. Por ejemplo, en aquellos fueros en los que el trámite es de oficio, la implementación de la cédula de notificación electrónica resultó más adelantada en el tiempo que quizás en los procesos netamente dispositivos.

Otro aspecto relevante está puesto en la naturaleza de los derechos ventilados en el marco del proceso judicial. Por ejemplo, ciertas audiencias cuyo contenido reúna aspectos sensibles –como aquellos relativos al derecho a la intimidad– difícilmente puedan tomarse como ensayo o pruebas pilotos de implementación habida cuenta la dificultad en su reproducción.

ii.- Gradualismo

La implementación de la tecnología debe ser gradual o en grados. Ello no implica solo una elección provisoria de “parcelas” de implementación de la tecnología sino una debida transición que debe recorrer dicha decisión. El Congreso de la Nación ha explicitado el gradualismo en el uso de las tecnologías³.

En efecto, la idea comienza con un proyecto de implementación que delinea en forma general qué se pretende introducir. Necesariamente en su lineamiento, la discusión debe ser interdisciplinaria en base a las posibilidades técnicas que proporciona la tecnología.

Este proyecto se cristaliza a partir del dictado de una norma que regula la llamada prueba piloto. Esta norma puede consistir en una ley –que emana del poder legislativo– o en un reglamento –producto de la función administrativa del poder ejecutivo, legislativo o judicial–. Son comunes en este aspecto las reglamentaciones de los tribunales supremos provinciales o la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ciertos casos, habrá relación entre la

³ Cfr. art. 2 de la ley nacional n.º 26.685.



reglamentación y la ley que fija pautas generales. En otros casos, la regulación reglamentaria estará fundada en las funciones de superintendencia de las Cortes.

Luego de la prueba piloto, habrá un análisis de la experiencia ofrecida que llevará a la corrección de aquellas deficiencias⁴ y la decisión final en torno a la implementación definitiva a todos los grados.

Todo este proceso forma parte del gradualismo que importa la introducción de la tecnología en el servicio de justicia.

iii.- Progresividad

La progresividad es la tendencia de expansión de la tecnología en el servicio de justicia. El constante progreso autosuperador de las TICs es cada día mayor y consecuentemente su utilización es mayor⁵.

A ello se suma la aceptación de los operadores judiciales ante los resultados favorables. Ello permite establecer lazos de confianza en el sistema y ensaya nuevas implementaciones más complejas.

iv.- Vehicular

Las TICs representan un fenómeno extrajurídico y no importan una nueva teoría en el derecho procesal sino que se traducen en una herramienta vehicular que, como tal, hace más eficiente el camino transitado por un acto procesal.

En este entendimiento, la tecnología reconoce dos estadios. Un primer momento, en carácter de complemento, en base a que coadyuva en la tramitación clásica del expediente. Por su parte, un segundo estadio –quizás más avanzado– marca a las TICs como sustituto de las formas tradicionales. Ello será

⁴ Es comprensible también que en el ensayo y error del uso diario se vayan corrigiendo “sobre la marcha” distintas cuestiones técnicas.

⁵ Piña (PIÑA, MARÍA DEL CARMEN, “Nuevas tecnologías como instrumento de eficacia de las resoluciones judiciales”, *XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2013, pp. 316-325) explica que la velocidad con que afloran todos estos medios técnicos en pocos años desplazan a los considerados novedosos y pasan a ser obsoletos.



perceptible a partir de la evolución⁶ en la implementación influenciada, por supuesto, por los caracteres del gradualismo y de la progresividad.

Así, por ejemplo, un sistema operativo que permita a los operadores jurídicos visualizar las actuaciones del expediente judicial puede ser asumido como un complemento de las formas clásicas; mientras que un verdadero expediente digital o electrónico –sin tener sustento en soporte papel– se traduce en un sustituto ejemplar⁷.

El carácter vehicular de las TICs evidencia su carácter prescindible en la medida que no cumplan con el fin establecido. En efecto, en las pruebas de ensayo y error puede ocurrir que la tecnología no reconozca acabadamente sus alcances establecidos. En estos casos, la decisión de implementar perfectamente puede dar un paso hacia atrás y recuperar las formas anteriores.

Ello también importa entender a la implementación en el marco de una flexibilidad⁸ y adaptación. En otras palabras, el uso de las TICs no debe “atar” rígidamente a su utilización como necesaria sino que pueden evaluarse continuamente los resultados de su existencia.

III. LA REGULACIÓN DE LAS TICs APLICADA A PODER JUDICIAL

La tecnología debe constituir una verdadera acción positiva a los fines de equilibrar las relaciones jurídicas procesales y dotarle al proceso judicial de

⁶ Corvalán (CORVALÁN, JUAN GUSTAVO, “Hacia una óptima Administración digital e inteligente”, *La Ley* (19/10/2017), 5, cita online: AR/DOC/2784/2017) explica en este sentido que “la revolución digital y de la inteligencia artificial ya no sitúa a los ordenadores, máquinas y programas informáticos en el rol de meros instrumentos para mejorar nuestras capacidades físicas”.

⁷ Es lo que Cosentino (COSENTINO, GUILLERMO RAFAEL, “Justicia del conocimiento. Ecosistemas de gestión, tecnologías de la información y datos”, *XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2022, pp. 313-323) describe como el Registro Electrónico del Caso (REC).

⁸ En igual sentido, LEGUISAMÓN, HORACIO, “Sobre la inseguridad del domicilio, notificación y presentaciones electrónicas”, *XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2017, pp. 160-172; ÁVILA PAZ DE ROBLEDO, ROSA, “Recepción de las nuevas tecnologías en el proceso civil. A propósito de la notificación electrónica y del Google Street View”, *XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, pp. 154-159.



transparencia, acceso igualitario a la información y un canal de rápida tramitación.

El art. 75 de la Constitución Nacional, en su inc. 19, prescribe, entre otras cuestiones, que corresponde al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Probablemente, el enfoque constitucional histórico no haya sido direccionado desde la utilización de la tecnología en el proceso judicial sino a una mirada más ligada a la ciencia y la economía. Sin embargo, en una interpretación actual referida a las necesidades corrientes de los justiciables, se impone la idea de la implementación en el servicio de justicia.

La inserción de la tecnología como política pública parte del decreto presidencial N° 378 del año 2005, en el que se concibe la idea de un Plan Nacional de Gobierno Electrónico. Entre sus ideas impulsoras, ordena a los organismos a desarrollar, mantener y promover sistemas integrados basados en Internet para la prestación de servicios y la provisión de información al público (art. 3, inc. c).

Ello fue reafirmado a partir de la Ley Argentina Digital⁹ del año 2014 (ley 27.078) que explicita el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones, el reconocimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de nuestra Nación y la promoción del rol del Estado como planificador, incentivando la función social que dichas tecnologías poseen, como así también la competencia y la generación de empleo mediante el establecimiento de pautas claras y transparentes que favorezcan el desarrollo sustentable del sector, procurando la accesibilidad y asequibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el pueblo.

⁹ Para un análisis interesante de la ley, véase ORTEGA, JOSÉ – ESPÓSITO, SANTIAGO, “Argentina digital. Consideraciones generales sobre la ley 27.078”, *DJ* 30/12/2015, 75.



En relación al proceso judicial, la ley nacional 26.685 del año 2011 realiza un verdadero salto cualitativo al autorizar la utilización de recursos electrónicos en los expedientes.

La Corte Suprema de Justicia ha dictado numerosas acordadas en reglamentación de la ley 26.685.

En primer lugar, la acordada 31/11 reglamenta la constitución de domicilio electrónico y el sistema de uso de notificaciones electrónicas. Esta reglamentación ha sido gradual y complementada por las acordadas 3/2012, 29/2012, 35/2013, 36/2013, 38/2013, 43/2013, 7/2014 y 11/2014, entre otras.

En cuanto al sistema operativo de ingreso de las causas, se destacan las Acordadas 3/2012, 29/2012, 35/2013, 36/2013 y 43/2013 que ponen en manifiesto una progresiva incorporación al sistema de las causas diligenciadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esta línea, la acordada 3/2015 aprueba pautas ordenatorias para garantizar el adecuado y actualizado uso de los nuevos sistemas informáticos que se encuentran implementados.

En el caso de la provincia de Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia ha dictado numerosas acordadas¹⁰ que incorporan las TICs en el proceso judicial. Se destacan las que regulan las e-cédulas¹¹, la fianza electrónica¹², el expediente electrónico¹³, la subasta electrónica¹⁴, el protocolo electrónico de

¹⁰ Sobre el alcance de las funciones reglamentarias de los Tribunales Superiores de las provincias, ver MOLINA SANDOVAL, ob. cit.

¹¹ Entre ellas, se destacan: el AR 1103 de fecha 27.06.2012, primera reglamentación de la e-cédula en la provincia de Córdoba; y el AR 1493, que recepta la e-cédula para el fuero civil.

¹² Conforme el AR 1357 de fecha 02.05.2016.

¹³ Entra las distintas acordadas dictadas se destacan: el AR 1205 de fecha 13.05.2014, que reglamenta la desmaterialización del expediente en soporte papel; el AR 1363 de fecha 16.05.2016, que implementa el expediente electrónico a los juzgados con competencia en ejecución fiscal y el AR 1498 de fecha 06.06.2018, que hace lo propio respecto a los juzgados con competencia en cobros particulares; el AR 1582 de fecha 21.08.2019, que recepta el reglamento del expediente judicial electrónico; el AR 1657 de fecha 18.09.2020, que regula el expediente electrónico mixto.

¹⁴ Se destaca la evolución en la reglamentación del instituto a partir de las siguientes acordadas: el AR 121 de fecha 01.07.2014, el AR 147 de fecha 09.05.2017 y el AR 155 de fecha 22.04.2018.



Autos y Sentencias¹⁵, oficios electrónicos¹⁶, audiencias virtuales en virtud de la emergencia sanitaria¹⁷, entre otras cuestiones.

IV.- EL USO DE LA TECNOLOGÍA COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN JUDICIAL. EL GOBIERNO JUDICIAL ABIERTO. EL PROGRAMA “JUSTICIA 2020”

La implementación de la tecnología en el proceso judicial responde a un plan de gobierno genérico: reflejar la transparencia a partir de un acceso igualitario y tecnológico a la información con participación ciudadana.

Este modelo ha sido tomado por la administración¹⁸ y también por los tribunales supremos provinciales y la Corte Suprema a partir de sus funciones de superintendencia del Poder Judicial reflejadas en el dictado de acordadas que reglamentan la tecnología aplicada al proceso judicial.

Se ha descrito en este sentido como un gobierno judicial abierto¹⁹ que no solo implica incorporar las tecnologías de la comunicación sino fortalecer al proceso judicial desde la eficacia y calidad en la prestación del servicio de justicia no solo en la reducción de tiempos y costos sino en el impacto ambiental para la sociedad²⁰.

Ello trasunta en un diseño estratégico del proceso que hará uso de una verdadera gestión de calidad en la justicia para lograr sus fines. Para ello, existen verdaderos estándares mundiales de la organización como las normas ISO. La adopción de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica para

¹⁵ Conforme AR 1537 de fecha 26.11.2018.

¹⁶ Conforme AR 1494 de fecha 21.05.2018 y AR 1514 de fecha 27.08.2018.

¹⁷ Conforme AR 1665 de fecha 01.10.2020.

¹⁸ Cfr. CORVALÁN, ob. cit., 2017.

¹⁹ En igual sentido, ÁVILA PAZ DE ROBLEDO, ob. cit. y ROBLEDO, DIEGO, “Jueces y abogados ante el escenario de las redes sociales e internet en un gobierno judicial abierto. Reflexión ética y procesal”, *Primer Encuentro Nacional de Ética*, pág. 33/43. Ediciones Saij, Biblioteca Digital, recuperado de <http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/1715>. Consulta: 19.09.2022). Este último autor describe a esta política de estado como una aplicación al campo judicial del Gobierno Abierto como un movimiento de escala mundial que inició Barack Obama con su directiva de Gobierno Abierto y Transparencia.

²⁰ En igual sentido, ROBLEDO, ob. cit.



la organización judicial y es susceptible de generar una mejora continua en el desempeño global.

Por último, es de destacar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación lanzó un programa llamado “Justicia 2020” que se traduce en un espacio de diálogo institucional y ciudadano cuyo objetivo es la elaboración, implementación y evaluación de políticas para construir, junto a la sociedad, una justicia que genere resultados socialmente relevantes y permita la solución de los conflictos en forma rápida y confiable. Este movimiento se apoyó en la tecnología como medio para lograr los fines trazados.

V. NOCIONES SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La evolución en las TICs implicó, como se ha referido, analizar su utilización no solo como un simple complemento sino en una implementación con verdadera trascendencia en el ámbito judicial. Es en este punto que surge la IA y las ideas alrededor de su aplicación en el proceso judicial.

Existe cierta dificultad en definir a la IA. Probablemente, esta circunstancia tenga sustento en su continua evolución, la que deja sin efecto las notas que la caracterizaban como tal. Lo que hoy es IA, quizás mañana no lo sea o, al menos, represente una rudimentaria forma de ella. Por ello, se destacan definiciones amplias como “el aprendizaje de una máquina de determinadas funciones u operaciones que se consideran exclusivamente humanas²¹”.

Es de destacar que no corresponde una equiparación total de la IA con el algoritmo. El algoritmo se relaciona más con el método en la obtención de un resultado. En cambio, la IA enfatiza en el resultado: la imitación del pensamiento humano, sin perjuicio del método o procedimiento. En este sentido, se ha dicho: *“Mientras que la primera (IA) es un sistema que al simular la inteligencia personal genera soluciones cuyo resultado es análogo al logrado por el pensamiento humano; los segundos (algoritmos) son una estructura procedimental, un*

²¹ RODRIGO, JUAN MANUEL, “La eficacia del proceso a través de la inteligencia artificial”, *XXXI Congreso de Derecho Procesal*, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2022, p. 433.



*conjunto de reglas y secuencias, que debe ejecutar la máquina para obtener una respuesta concreta*²².

En la actualidad, la IA tiene dos grandes funciones. La primera es que permite automatizar actos que se repiten constantemente. Por ello, se ha identificado como un ámbito propicio para su utilización a los juzgados de cobros particulares o de ejecución fiscal, en tanto las causas no difieren en demasía una de otra y evidencian asimismo una notoria secuencialidad. En segundo lugar, la IA permite el procesamiento de gran cantidad de datos. Esta función se ha relacionado con la identificación de la jurisprudencia aplicable al caso²³.

A los fines de clarificar el concepto de la IA, se propone formularle tres clasificaciones²⁴, teniendo en cuenta el alcance, las técnicas y los objetivos.

i.- Según el alcance

En este punto, se identifica la IA débil, también denominada estrecha, restringida o blanda y la IA fuerte.

En la IA débil se engloba al procesamiento de datos para resolver problemas y tomar decisiones mediante el uso de algoritmos inteligentes, con el objeto de obtener resultados específicos en ámbitos concretos²⁵. En cambio, la IA fuerte se identifica con aquella capaz de ejecutar las mismas tareas intelectuales que el ser humano²⁶. La IA fuerte aún no se ha desarrollado.

²² En este sentido, RODRIGO, ob. cit., p. 434.

²³ Por ejemplo, el sistema Prometea tiene esta función. Se trata de un software aplicado desde noviembre de 2017 en la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Prometea predice si se configuran situaciones y hechos respecto de los cuales existe una tendencia jurisprudencial firme y crea un documento vinculado a esa predicción. Además, sirve para buscar normas, fallos, y abrir documentos o plantillas que pueden servir como base para la toma de decisiones (cfr. CORVALÁN, JUAN GUSTAVO, *Prometea*, Astrea, Buenos Aires, 2019, pp. 49-52).

²⁴ En este sentido, MOLINA SANDOVAL, SANTIAGO - PASTORE, MARIANELA – RIVAS, FEDERICO - RÍOS, LUCAS, “La valoración de la prueba pericial a partir de sistemas basados en Inteligencia Artificial”, *Inteligencia Artificial*, investigación de la Comisión de Jóvenes Procesalistas, AADP, en prensa.

²⁵ CORVALÁN, JUAN GUSTAVO, “Inteligencia artificial y proceso judicial. Desafíos concretos de aplicación”, *Diario DPI*, 9 de septiembre de 2019.

²⁶ GRANERO, HORACIO, *Inteligencia artificial y derecho, un reto social*, Albremática, Buenos Aires, 2020, p. 99.



ii.- Según las técnicas

Dentro de la IA débil, hay diferentes técnicas que se podrían dividir en dos grupos:

- a) simples, tales como los árboles de decisión de los sistemas expertos;
- b) complejas, como el aprendizaje automático (o machine learning, en inglés), en el que la máquina tiene la capacidad de aprender por sí sola –y no mediante la programación explícita– a través de los datos que se utilizan para su entrenamiento y testeo.

Ambas procesan datos y los emplean en pos de cumplir objetivos específicos.

A su vez, el aprendizaje automático²⁷ puede ser:

- 1) supervisado, cuando se conocen los datos que emplea el sistema, ya que fueron procesados previamente por personas;
- 2) no supervisado, cuando se usan enormes cantidades de datos sin etiquetar y el sistema o modelo funciona sin intervención humana;
- 3) por refuerzo, cuando el sistema aprende a través de prueba y error, mediante la retroalimentación del análisis de datos;
- 4) profundo (deep learning), cuando se incorporan redes neuronales de capas sucesivas que permiten al modelo aprender de los datos de manera iterativa.

iii.- Según los objetivos

Finalmente, las distintas técnicas pueden utilizarse, solas o combinadas, para cumplir distintas finalidades, tales como reconocer la voz humana y procesar el lenguaje natural, reconocer imágenes e identificar objetos en ellas, analizar datos para detectar patrones, desarrollar la robótica, entre otras.

VI. EJECUCIÓN DE SENTENCIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

²⁷ IBM, ¿Qué es machine learning? Recuperado el 19.09.2022 de <https://www.ibm.com/ar-es/analytics/machine-learning>.



Como se refirió en la introducción, a partir de su labor diaria, los operadores jurídicos pueden encontrar las cuestiones a optimizar mediante las TICs. En el caso del presente informe, se buscarán aspectos de la ejecución de sentencia que pueden ser complementados por la IA.

Para ello, se partirán de breves nociones relativas a la ejecución de la sentencia civil para luego focalizar en dichos aspectos.

VI.1. Breves nociones de la Ejecución de Sentencia²⁸

La ejecución de sentencia presupone la tramitación de un proceso ordinario anterior²⁹. Asimismo, debe tratarse de un proceso de condena, es decir, que el accionante haya perseguido la declaración de certeza por el tribunal de una obligación de dar, hacer o no hacer exigible al demandado. En consecuencia, no es admisible una ejecución de sentencia en un proceso meramente declarativo (cfr. art. 413 CPCC Cba.; art. 322 CPCC Nación), pues no se verifica un objeto ejecutable, por cuanto la resolución del tribunal satisface la pretensión del actor.

En el estadio de ejecución de sentencia, se hace valer un título ejecutorio, cuya nota distintiva es la certeza el ordenamiento jurídico le da: un título cierto³⁰. La declaración de existencia que realiza el juzgador imprime certeza a los hechos alegados y torna operativo la aplicación de las consecuencias jurídicas de la norma.

La ejecución de sentencia se caracteriza por un marco limitado de discusión y prueba. No hay contestación de la demanda sino una citación para oponer excepciones, las que, a su vez, son defensas específicas. Como todo

²⁸ Para una profundización en el tema, véase PALACIO, LINO ENRIQUE, *Derecho Procesal Civil*, Abeledo Perrot, 2011, Tomo VII, pp. 172 y ss.; GOZAINI, OSVALDO A., *Tratado de Derecho Procesal Civil*, Tomo V, La Ley, 2009, pp. 509 y ss.; VÉNICA, OSCAR HUGO, *Código Procesal Civil y Comercial comentado*, Lerner, Córdoba, 1997, Tomo V y VI.

²⁹ En este punto, se diferencia de la ejecución de la sentencia ejecutiva en razón de que tiene propias características que la describen.

³⁰ A diferencia del título ejecutivo que es presumiblemente cierto. Es decir, hay una diferencia en la concepción de certeza: mientras que en uno el ordenamiento la presume –título ejecutivo–, en la ejecución de sentencia el juez la conoce.



proceso de ejecución, por regla general, no puede indagarse en la causa de la obligación que surge del título o, en rigor, no pueden discutirse hechos anteriores al dictado de la sentencia.

El trámite de la ejecución de sentencia inicia con una instancia de ejecución (art. 802 CPCC Cba.; art. 499 Nación) y contempla una citación al ejecutado para oponer excepciones (arts. 808-810 CPCC Cba.; arts. 505-508 Nación). Debe verificarse, asimismo, la existencia de una sentencia firme o en condiciones de ser ejecutoriada³¹.

Las excepciones son acotadas: solo se admite falsedad de la ejecutoria, prescripción de la ejecutoria, pago, quita, espera o remisión. Ellas son fundadas en hechos posteriores al pronunciamiento de la sentencia (cfr. art. 809, tercer párrafo CPCC Cba.). Las excepciones se sustancian y son resueltas.

Luego, el trámite diferirá según se trate de una obligación de dar dinero, dar cosa, de hacer o no hacer o de dar cosa.

En el caso de que se trate de una obligación de dar dinero, conviene diferenciar si se trata de una obligación de dar dinero líquida o ilíquida. Será líquida cuando el tribunal establezca el alcance de la obligación de dar dinero o al menos determine las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación (art. 333 CPCC Cba. y 165, primer párrafo, CPCC Nación). En este caso, debe formularse la planilla de liquidación de la deuda, la que, previa vista al ejecutado, será aprobada (art. 811 remite al art. 564 CPCC Cba; art. 503 y 504 CPCC Nación). El ejecutado podrá impugnar la planilla formulada por el ejecutante. Una vez aprobada la planilla, previa instancia del ejecutante, se ordenará la realización de los bienes del ejecutado, la que variará según la naturaleza de ellos.

En el caso que se trate de una obligación de dar dinero ilíquida y existieren elementos objetivos que acrediten bases suficientes para llegar a la

³¹ En relación a la ejecución provisoria de la sentencia, ver a FERRER, SERGIO ENRIQUE, "Ejecución provisoria. Ejecución inmediata. Ejecución anticipada. Género y especies de la ejecución de resoluciones sujetas a impugnación", XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2013, pp. 46-67.



determinación del monto, el ejecutante debe formular una relación de daños³² de conformidad a las bases ordenadas en la sentencia (art. 334-335 y 812 CPCC Cba.; art. 165 CPCC Nación). Previo traslado al ejecutado, se resolverá la aprobación de la relación de daños y la consecuente realización de los bienes.

Tratándose de la ejecución de sentencia que condena una obligación de dar cosa (art. 820 CPCC Cba.; art. 515 CPCC Nación), se ordenará un mandamiento para desapoderar al vencido de la cosa. En caso de imposibilidad, el ejecutado responderá por el valor de la cosa y los daños y perjuicios, cuyas bases han sido determinadas en la sentencia.

Por último, en la ejecución de sentencia que condena una obligación de hacer o no hacer (arts. 818-819 CPCC Cba.; arts. 513-514 CPCC Nación), cabe referir que el tribunal no podrá autorizar el ejercicio de violencia sobre la persona, por lo que si no se verifica un cumplimiento espontáneo, en caso de imposibilidad el ejecutado responderá por el valor de los daños y perjuicios, cuya bases han sido determinadas en la sentencia. En el caso de la obligación de hacer, podrá autorizarse la ejecución por un tercero, a costa del ejecutado (art. 821 CPCC Cba.).

VI.2. Propuestas de IA en la Ejecución de Sentencia

Las propuestas que aquí se formulan tienen el carácter de funcionar como complemento de la labor judicial y no como un sustituto. Se entiende que la IA debe ser suministrada en la actualidad con una supervisión del operador y no en un automático desempeño.

³² El CPCC de Cba. establece en el art. 335 que el tribunal podrá fijar prudencialmente el monto de la obligación cuyo pago se reclama, mediando las siguientes circunstancias: i.- Que la existencia de la obligación y su exigibilidad hayan sido demostradas; ii.- Que la duda del tribunal recaiga solo sobre el número, el valor de las cosas o la cuantía de los daños y perjuicios que se reclamen; iii.- Que no haya sido posible determinar los extremos a que se refiere el inciso anterior, pese a la diligencia puesta por aquel a quien incumbe la carga. Agrega a continuación que la determinación del monto de la condena deberá responder a lo que es habitual en circunstancias análogas a las demostradas en autos, optando por la más moderada. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba (TSJ, Sent. 138 del 16.12.2002 en autos "Amarilla, Lidia contra Roberto E. Gatti – Ordinario – Recurso Directo - "A" 21/01") ha realizado en primer término una interpretación literal de la norma al exigir que la imposibilidad de prueba no sea imputable a quien le incumbe la carga de probar.



Se propone un sistema de “inteligencia aumentada³³” de modo que se complemente la tarea del juez y no la sustituya. No se trata, entonces, de un reemplazo de la tarea profesional o judicial sino de automatizar aspectos con supervisión de modo que se ahorren tiempos y costos, pero sujeto a un contralor del operador.

VI.2.1.- Mejora en la automatización del trámite. Requerimiento automático de los informes. Notificación automática a terceros interesados.

La automatización en el trámite es predicable respecto de todo el proceso judicial y no solo de la ejecución de sentencia. En la actualidad, el sistema se vale de una suerte de plantillas. Es decir, el operador jurídico puede identificar un título de un decreto o un escrito judicial y el sistema arroja un modelo previamente configurado que se corresponde con dicho título. Meroi³⁴ ha expresado que las “planchas” o “plantillas” se componen de datos fijos y datos variables, lo que habilita su trazabilidad y concatenación. Los datos fijos están compuestos por aquello que necesariamente no varía o lo hace de manera lineal. Por ejemplo, el lugar del juicio o la fecha del dictado en un decreto. Los datos variables componen la propia particularidad del caso en cuestión y deben ser incorporados por el operador.

Ahora bien, entiendo que desde el plano de la jurisdicción el actual sistema es susceptible de ser mejorado a partir de la utilización de una herramienta de IA de mayor complejidad. En efecto, se propone un entrenamiento del sistema a los fines de que pueda interpretar los términos de una petición de un letrado y anticipe o predetermine el proyecto del decreto a dictar. Es decir, se postula pasar del sistema de plantillas –en la que el operador

³³ Este juego de palabras con las mismas iniciales de la inteligencia artificial (IA) es utilizado por Vincenzo Aquaro en el prólogo de la obra de Corvalán (Prometea, ob. cit.).

³⁴ MEROI, ANDREA A., “Gestión del proceso e Inteligencia Artificial (entre ilusiones utópicas y pesadillas distópicas), *XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Rubinzal Culzoni, 2022, p. 341.



elige el decreto previamente configurado— a un sistema automático de resolución, sujeto, por supuesto, al contralor del funcionario judicial.

Este sistema también puede ser entrenado en la presentación de escritos del letrado siempre que las propias características del proceso lo permitan. Resulta claro que es difícil que un sistema anticipe la estrategia procesal ejercida por el letrado pero tratándose de casos sin mayor dificultad el procedimiento es lineal y la herramienta puede ser favorable.

En la ejecución de sentencia, la propuesta se fortalece desde que el trámite suele ser más lineal que en la sustanciación del proceso de conocimiento.

Además, en las diligencias previas a la subasta judicial, el sistema puede ser entrenado a los fines del libramiento automático de los informes a los entes estatales, prestatarios de servicios y administración de consorcios (art. 569 CPCC Cba. y art. 576 CPCC Nación). En ese orden, fijada la subasta, el sistema podrá confeccionar automáticamente las cédulas de notificación³⁵ al ejecutado, a los acreedores hipotecarios o prendarios y comunicar a los tribunales por cuya orden se anotaron o trabaron embargos u otras medidas cautelares (art. 571 CPCC Cba.; art. 575 CPCC Nación).

La propuesta precedente transita por un carril independiente de la discusión respecto a si el trámite en el proceso civil deber ser de oficio o a petición de parte. Simplemente, la postura se dirige a regularizar la realización del bien de propiedad del ejecutado. Ello presupone la instancia de la ejecución, la selección del bien, su embargo, la designación del martillero, todas cargas procesales del ejecutante que en modo alguno se propone aligerar.

VI.2.2.- Automatización de las planillas de liquidación

La experiencia indica que uno de los focos de mayor conflictividad en la etapa de ejecución de sentencia reside en la liquidación de la deuda. Aun cuando se trate de cuestiones fácilmente liquidables, como los intereses, la

³⁵ En este sentido, VALENTÍN, GABRIEL, "Inteligencia artificial y sistemas de justicia: dónde estamos y hacia dónde vamos", *XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Rubinzal Culzoni, 2022, pp. 29-43.



sustanciación de una primera planilla permite de manera corriente la introducción de incidentes impugnativos con las dilaciones y costas que ello genera.

Una propuesta interesante³⁶ estaría dada en que una herramienta de IA permita un cálculo objetivo anticipado de la liquidación de la deuda. La herramienta podría basarse en una técnica de árboles de decisión a partir de la cual el juzgador o las partes introduzcan los datos correspondientes a cada componente de la planilla, por ejemplo, capital, intereses, gastos, honorarios, etcétera, y que el propio sistema realice el cálculo aritmético. En este caso, estaríamos ante una IA débil de técnica simple y se asemeja al sistema de actual por medio del cual los letrados y el tribunal liquidan la condena.

Una mayor complejidad en la herramienta de IA podrá advertirse cuando el programador entrene al sistema para que pueda interpretar los propios términos de la sentencia de modo que identifique, por un lado, el capital condenado y el cómputo de los intereses a realizar y, por otro, los honorarios regulados. Asimismo, el sistema deberá ser entrenado para identificar los gastos de naturaleza tributaria –tasa de justicia y aportes previsionales– y otros gastos en los que pueda haber incurrido la parte actora –por ejemplo, notificaciones, gastos en oficiales de justicia, gastos administrativos, etcétera–. En este caso, estaríamos ante una IA débil compleja supervisada.

El sistema propuesto puede determinar la modificación del trámite de ejecución de sentencia. En rigor, si el propio sistema es capaz de formular la liquidación de conformidad a las pautas de la sentencia, resulta redundante exigir a las partes dicha actividad. Ahora bien, debe asegurarse el derecho de defensa de las partes de controlar la liquidación de la deuda, máxime cuando las pautas en la sentencia pueden estar sujetas a la interpretación de las partes. En este sentido, se propone que luego de la citación al ejecutado sin que haya opuesto excepciones o, si se opusieran, una vez resueltas, el tribunal ordene colocar los autos “a la oficina” a los fines del contralor de la planilla automatizada por el sistema. *De lege ferenda*, se propone modificar los arts. 564 CPCC Cba. y 591

³⁶ En este sentido también, VALENTÍN, ob. cit.



CPCC Nación de modo que resulte formulado en la parte pertinente de la siguiente manera “...una vez automatizada la liquidación por el sistema, el tribunal ordenará colocar los autos a la oficina por tres días fatales”. Luego, el trámite en caso de impugnación es el mismo, con la particularidad de que ambas partes (ejecutante y ejecutado) puede impugnar la planilla automatizada.

Indudablemente, el sistema ahorra en tiempo y costos que puede generar una impugnación de la planilla.

VI.2.3.- Propuesta de distribución de fondos. Alerta en los embargos de fondos.

Una vez aprobada la subasta por el tribunal y consignado por el adquirente en subasta el saldo del precio del bien adquirido en la cuenta a la orden del juzgado, el tribunal debe distribuir los fondos producidos por la realización del bien. Esta ardua tarea puede ser aliviada con una herramienta de IA que efectúe una propuesta en la distribución de los fondos, atendiendo a los gastos de justicia, la última liquidación de la deuda aprobada, los créditos fiscales, las tercerías de mejor derecho, los embargos sobre el remanente, la restitución del remanente al ejecutado, entre otras cuestiones.

El informe realizado por la herramienta puede determinar en forma anticipada el alcance en el pago de cada crédito a los fines de una reserva de fondos para créditos con prelación cuando no exista suficiencia para el pago de todos los acreedores que concurren en la realización.

El *software* de gestión puede contar con sistemas de alerta o alarma de la existencia de embargos de remanente a los fines de evitar una injustificada restitución de fondos al ejecutado.

En definitiva, tratándose de un momento de gran relevancia en el proceso, la colaboración de una herramienta de IA puede coadyuvar a evitar errores judiciales susceptibles de generar daños irreparables en los justiciables.

VI.2.4.- Selección del bien a afectar a la ejecución



Algunos autores³⁷ han propuesto que la IA colabore en la elección del mejor sistema de realización forzada de esos bienes. Ello puede ser posible a partir de la elaboración de un informe en el que surja el bien más apto, ya sea por su valor, sus posibilidades de realización, la determinación de la mejor forma de realizarlo forzosamente, sea por remate presencial o en línea, venta a través de agentes especializados o en bolsas o mercados específicos o a través de aplicaciones o sitio webs especializados³⁸.

A ello se puede agregar que, si bien no forma parte propiamente de la ejecución de sentencia, un informe de esta índole durante la tramitación del proceso puede combatir la traba de los embargos extorsivos, esto es, cuando la parte actora solicita una medida cautelar con el fin de generarle un daño al demandado, más allá del fin genérico de asegurar el cumplimiento de una resolución a dictarse. Es decir, la herramienta de IA podrá aconsejar un bien alternativo.

Las propuestas de referencia permiten, al menos, interrogarnos acerca del rol del abogado en la búsqueda de los bienes del demandado. Si la realización de los bienes del patrimonio del deudor permite efectivizar o materializar la sentencia dictada en un proceso judicial, ¿por qué no se podrá utilizar una tecnología que cuente con información crediticia o relativa a los bienes del demandado? ¿No será posible aplacar la labor investigativa en los bienes del demandado por el letrado? A la vez, se permitiría evitar embargos de bienes muebles en el domicilio del demandado o intervenciones de caja en empresas pequeñas que generan un mayor daño que la propia utilidad de asegurar el resultado de la sentencia.

³⁷ VALENTÍN, ob. cit.; ONFRAY VIVANCO, ARTURO FELIPE, "Algunas reflexiones sobre lo digital, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial como aportes a una reforma del proceso civil", *Revista de Estudios de la Justicia* N° 35, 2021, pp. 37-72; NIEVA FENOLL, JORDI, *Inteligencia artificial y proceso judicial*, Marcial Pons, 2018.

³⁸ En este sentido, VALENTÍN, ob. cit.



VI.2.5.- Otras propuestas. Determinación de la posibilidad de cumplimiento en la obligación de hacer. Prueba de valores objetivos en las condenas de dar dinero ilíquidas. Determinación de la porción ejecutable.

La complejidad propia del proceso judicial permite seguir pensando en propuestas de implementación de IA en él.

En el caso de la condena de una obligación de hacer, una herramienta de IA podría valorar la posibilidad de cumplimiento por un tercero y establecer un precio objetivo de dicha prestación a cargo del demandado. Se estaría, claro, ante un examen de fungibilidad de la prestación y la determinación de un precio objetivo por la realización.

Asimismo, en el caso de una condena de dar dinero ilíquida, la IA podría coadyuvar con la determinación de un valor objetivo, esto es, un precio del mercado³⁹. Contribuye a una mayor racionalidad en el prudente arbitrio del tribunal respecto al alcance de la obligación.

Por último, en el caso de una sentencia apelada, el sistema de IA puede identificar al momento de la expresión de agravios qué parte de la sentencia ha resultado firme a los fines de la ejecución. Por ejemplo, si, al momento de expresar agravios, el apelante cuestiona la imposición de costas, el sistema podría indicar en forma automática que el resarcimiento condenado ha resultado firme y, en consecuencia, es susceptible de ser ejecutado.

VII. PROPUESTA PERSONAL

En suma, a partir del presente informe individual se realizan las siguientes propuestas de implementación de IA en la etapa de ejecución de sentencia:

- Instaurar en el trámite procesal un sistema automático de resoluciones, sujeto al contralor del funcionario judicial, en el que la herramienta pueda interpretar los términos de una petición judicial y anticipar, predecir o predeterminar el proyecto del decreto a dictar.

³⁹ En este sentido, MOLINA SANDOVAL, SANTIAGO, "Inteligencia artificial y prueba. Propuesta en torno a la corroboración del valor a resarcir", *XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Rubinzal Culzoni, 2022, pp. 418-424.



- Implementar en la etapa de ejecución de sentencia un sistema de libramiento automático de los oficios a los entes estatales, prestatarios de servicios y administración de consorcios, de notificaciones automáticas de la fijación de la subasta a los interesados y las comunicaciones a los tribunales por cuya orden se anotaron o trabaron embargos y otras medidas cautelares.
- Establecer la automatización de las liquidaciones de las deudas de modo que la herramienta de IA interprete los términos de la sentencia e identifique los gastos correspondientes a incluir en la planilla. *De lege ferenda*, se propone modificar los arts. 564 CPCC Cba. y 591 CPCC Nación de modo que resulte formulado en la parte pertinente de la siguiente manera “...una vez automatizada la liquidación por el sistema, el tribunal ordenará colocar los autos a la oficina por tres días fatales”.
- Implementar una propuesta de IA en la distribución de los fondos obtenidos en la subasta, atendiendo a los gastos de justicia, la última liquidación de la deuda aprobada, los créditos fiscales, las tercerías de mejor derecho, los embargos sobre el remanente, la restitución del remanente al ejecutado, entre otras cuestiones. El informe podrá determinar en forma anticipada el alcance en el pago de cada crédito a los fines de una reserva de fondos para créditos con prelación cuando no exista suficiencia para el pago de todos los acreedores que concurren en la realización.
- Establecer un sistema de alerta o alarma de la existencia de embargos de remanente a los fines de evitar una injustificada restitución de fondos al ejecutado.
- Implementar una propuesta de IA que determine el bien más apto a realizar, ya sea por su valor, sus posibilidades de realización, y que, asimismo, determine la mejor forma de subastarlo.



- Implementar una propuesta de IA en el caso de la condena de una obligación de hacer que valore la posibilidad de cumplimiento por un tercero y establezca un precio objetivo de dicha prestación a cargo del demandado.
- Implementar una propuesta de IA, en el caso de una condena de dar dinero ilíquida, que determine un valor objetivo requerido ilíquido.
- Establecer un sistema que identifique al momento de la expresión de agravios qué parte de la sentencia ha resultado firme a los fines de la ejecución.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- ALVARADO VELLOSO, ADOLFO, *Lecciones de Derecho Procesal Civil*, FUNDECIJU, Córdoba, 2012.
- ÁVILA PAZ DE ROBLEDO, ROSA, “Recepción de las nuevas tecnologías en el proceso civil. A propósito de la notificación electrónica y del Google Street View”, *XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, pp. 154-159.
- CORVALÁN, JUAN GUSTAVO, “Hacia una óptima Administración digital e inteligente”, *La Ley* (19/10/2017), 5, cita online: AR/DOC/2784/2017.
- CORVALÁN, JUAN GUSTAVO, “Inteligencia artificial y proceso judicial. Desafíos concretos de aplicación”, *Diario DPI*, 9 de septiembre de 2019.
- CORVALÁN, JUAN GUSTAVO, *Prometea*, Astrea, Buenos Aires, 2019.
- COSENTINO, GUILLERMO RAFAEL, “Justicia del conocimiento. Ecosistemas de gestión, tecnologías de la información y datos”, *XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2022, pp. 313-323.
- FERRER, SERGIO ENRIQUE, “Ejecución provisoria. Ejecución inmediata. Ejecución anticipada. Género y especies de la ejecución de resoluciones sujetas a impugnación”, *XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2013, pp. 46-67.
- GOZAINI, OSVALDO A., *Tratado de Derecho Procesal Civil*, Tomo V, La Ley, 2009, pp. 509 y ss.
- GRANERO, HORACIO, *Inteligencia artificial y derecho, un reto social*, Albremática, Buenos Aires, 2020.
- IBM, ¿Qué es machine learning? Recuperado el 19.09.2022 de <https://www.ibm.com/ar-es/analytics/machine-learning>.
- LEGUISAMÓN, HORACIO, “Sobre la inseguridad del domicilio, notificación y presentaciones electrónicas”, *XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2017, pp. 160-172.



MEROI, ANDREA A., “Gestión del proceso e Inteligencia Artificial (entre ilusiones utópicas y pesadillas distópicas), *XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Rubinzal Culzoni, 2022, p. 324-355.

MOLINA SANDOVAL, SANTIAGO - PASTORE, MARIANELA – RIVAS, FEDERICO - RÍOS, LUCAS, “La valoración de la prueba pericial a partir de sistemas basados en Inteligencia Artificial”, *Inteligencia Artificial*, investigación de la Comisión de Jóvenes Procesalistas, AADP, en prensa.

MOLINA SANDOVAL, SANTIAGO, “Implicancias del fenómeno tecnológico en el proceso judicial”, *Semanario Jurídico*, Córdoba, 06.09.2019.

MOLINA SANDOVAL, SANTIAGO, “Inteligencia artificial y prueba. Propuesta en torno a la corroboración del valor a resarcir”, *XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Rubinzal Culzoni, 2022, pp. 418-424.

NIEVA FENOLL, JORDI, *Inteligencia artificial y proceso judicial*, Marcial Pons, 2018.

ONFRAY VIVANCO, ARTURO FELIPE, “Algunas reflexiones sobre lo digital, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial como aportes a una reforma del proceso civil”, *Revista de Estudios de la Justicia* N° 35, 2021, pp. 37-72.

ORTEGA, JOSÉ – ESPÓSITO, SANTIAGO, “Argentina digital. Consideraciones generales sobre la ley 27.078”, *DJ* 30/12/2015, 75.

PALACIO, LINO ENRIQUE, *Derecho Procesal Civil*, Abeledo Perrot, 2011, Tomo VII, pp. 172 y ss.

PIÑA, MARÍA DEL CARMEN, “Nuevas tecnologías como instrumento de eficacia de las resoluciones judiciales”, en *XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2013, pp. 316-325.

ROBLEDO, DIEGO, “Jueces y abogados ante el escenario de las redes sociales e internet en un gobierno judicial abierto. Reflexión ética y procesal”, *Primer Encuentro Nacional de Ética*, pág. 33/43. Ediciones Saij, Biblioteca Digital, recuperado de <http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/1715>. Consulta: 19.09.2022.

RODRIGO, JUAN MANUEL, “La eficacia del proceso a través de la inteligencia artificial”, *XXXI Congreso de Derecho Procesal*, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2022, pp. 433-438.

VALENTÍN, GABRIEL, “Inteligencia artificial y sistemas de justicia: dónde estamos y hacia dónde vamos”, *XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Rubinzal Culzoni, 2022, pp. 29-43.

VÉNICA, OSCAR HUGO, *Código Procesal Civil y Comercial comentado*, Lerner, Córdoba, 1997, Tomo V y VI.



LA SUBASTA JUDICIAL ELECTRÓNICA EN ARGENTINA

ELECTRONIC JUDICIAL AUCTION IN ARGENTINA

Por Carolina del Valle Vallania*

(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

Sumario: I. Introducción. II. La Subasta Judicial: Concepto. III. Subasta Judicial Electrónica en las Provincias Argentinas: Dos Modelos. III.1. Subasta judicial modelo propio. 1.1. *La subasta judicial electrónica en la provincia de Buenos Aires.* 1.2. *La subasta electrónica en la provincia de Catamarca.* III.2. Subasta judicial modelo tercerizado. 2.1. *La subasta judicial electrónica de Córdoba.* 2.1.1. *El proceso de incorporación de la subasta judicial electrónica en Córdoba.* 2.1.2. *Algunas cuestiones en torno a la responsabilidad estatal por la implementación del portal de subastas electrónicas.* 2.2. *La subasta judicial electrónica en la Provincia de San Luis.* 2.3. *La subasta judicial electrónica en Entre Ríos.* 2.4. *La Subasta Judicial electrónica en la Pampa.* IV. La Subasta Judicial a nivel nacional: Adopción parcial de las TIC para este procedimiento. 1. Utilización del DEO. 2. Publicación web de subastas programadas. 3. Acreditación de participantes y Registro de Oferentes. V. La Subasta Judicial en el Derecho Comparado. 1. La subasta judicial electrónica en España: Sistema estatal externo al Poder Judicial. 2. Sistema de subasta judicial electrónica de Perú: Modelo propio Nacional con posibilidad de adhesión jurisdiccional. V. Conclusiones y Propuestas.

I. Introducción

En los últimos años se ha dado una vertiginosa evolución de la tecnología aplicada al desarrollo de los procedimientos judiciales, cuya incorporación progresiva, a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), tuvo y tiene como objetivo primordial brindar seguridad, transparencia y trazabilidad a los procesos judiciales. En el caso de la subasta, se conjuga además el propósito de evitar las “ligas” de compradores que perjudican la obtención de un precio justo de los bienes subastados, por ejemplo; a través de

* Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Integrante del equipo de investigación CONSOLIDAR dirigido por la Prof. Dra. Rosa Avila Paz de Robledo: “Los actos procesales y las nuevas tecnologías: hacia el expediente electrónico en el fuero civil y comercial en la Nación y en la Provincia de Córdoba”, SECYT UNC. Email: carolina.vallania@unc.edu.ar

Aceptado para su publicación: 01/03/2023.



la colusión en las posturas, las obstrucciones para ingreso a las salas de los posibles compradores, etc.

La subasta electrónica brinda la posibilidad de conocer la oferta por posibles compradores de distintos puntos del país, favorece una mayor posibilidad de obtener un precio a valores de mercado, tiene menores costos en la publicidad, equivalencia en la información para los postores, menor dispendio de tiempo para muestra de los bienes, y posibilidad de subsanar circunstancias comunes en una subasta presencial con diversas figuras legales propias de este sistema, entre otras bondades. A estas razones se sumó en el 2020 la necesidad de adoptar formas virtuales o no presenciales de llevar a cabo las distintas etapas del proceso debido al aislamiento obligatorio dispuesto por la pandemia de COVID 19, lo que terminó por afianzar la expansión del expediente digital y de extender la subasta judicial electrónica a todo tipo de bienes. No obstante, lo cierto es que en Argentina el funcionamiento de este sistema no es uniforme, toda vez que a nivel nacional y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se mantiene la subasta judicial presencial, con algunos avances en la adopción de medios electrónicos en que hace a los procedimientos previos. Por su parte, en las pocas provincias argentinas donde se ha adoptado el sistema de subasta electrónica, su desarrollo ha sido de diferente manera, como así regulado con distintos instrumentos legales. A continuación, se analizará la subasta judicial electrónica en las provincias de Argentina donde se encuentra vigente tal modalidad, la situación en los tribunales nacionales y la modalidad adoptada por España y Perú, donde se adoptan otros modelos, todo con el objeto de verificar las ventajas y desventajas de los diversos sistemas y si existen procedimientos no previstos o figuras que puedan ser incorporadas por los sistemas existentes en Argentina.

II. La Subasta Judicial: Concepto



La subasta es la venta pública de bienes al mejor postor, hecha por mandato judicial.¹ En algunos casos puede operar como modo de satisfacer la voluntad de las partes o subsanar su disconformidad (división de condominio o venta de bienes de la herencia) pero en otras se suscita de manera coactiva o forzosa,² como modo de liquidar los bienes para pagar a los acreedores, con prescindencia de la voluntad de los dueños de los bienes y sujeta a las normas que atañen a la ejecución de sentencia y las reglas fijadas por el juez. La subasta, realizada en el marco de un procedimiento judicial, no se trata de un remate privado, en el cual los dueños de los bienes eligen al martillero o casa de subastas que va a proceder a la liquidación, pueden convenir con el martillero el precio base a partir del cual habrán de rematar el bien, etc. sino que aquellos se encuentran limitados por las normas de ejecución de sentencia del Código Procesal Civil respectivo. Acertadamente Palacios³ entiende que la subasta se trata de un acto procesal donde “al proceder a la venta forzada el órgano judicial ejerce un poder de imperio ínsito en la función jurisdiccional, el que ninguna relación guarda con los eventuales poderes sustanciales que los sujetos privados del proceso tienen con respecto al bien o a los bienes sobre los que versa la enajenación. El órgano tampoco actúa, por lo tanto en sustitución del deudor, sino en virtud del ejercicio de un poder autónomo y a raíz del pedido de venta formulado por el ejecutante en el período correspondiente al cumplimiento de la sentencia de remate”. En definitiva, se trata de un acto público, y no de un acto privado entre partes, en donde el martillero actúa, tal como dice Podetti y Vénica⁴, como delegado del juez.

¹ PODETTI, J. RAMIRO, *Tratado de las ejecuciones*, 3° edic., actualizada por Víctor A. Guerrero Leconte, ed. Ediar, Buenos Aires, 1997 p.441

² RAMACCIOTTI, HUGO, *Compendio de derecho procesal civil y comercial de Córdoba*, t. II, ed. Depalma, Buenos Aires, 1980, p. 416-417

³ PALACIO, LINO ENRIQUE, *Derecho Procesal Civil*, t. VII, ed. Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1982, p. 567

⁴ PODETTI, J. RAMIRO Ob.cit., VÉNICA, OSCAR H. *La subasta Judicial en Córdoba*, 3° edic., ed. Marcos Lerner editora Córdoba, 1998, p.21



La subasta judicial electrónica se trata del procedimiento de liquidación de bienes realizado a través de internet por medio de un sitio web dispuesto por el Estado, mediante el cual se publicita la subasta y se liquidan los bienes que ordena el tribunal, mediante un proceso interactivo de puja continua e ininterrumpida que realizan postores, previamente identificados en un registro, durante el tiempo que establece la ley, a cuyo término se adjudica el bien al mejor postor. En Argentina, el procedimiento de subasta es de índole procesal y por ello materia no delegada al Congreso de la Nación. Esta es la razón por la cual cada provincia ha resuelto implementar o no el sistema de acuerdo a sus posibilidades y en los casos en que lo ha efectuado, con las modalidades que a su criterio ha considerado más aptas. En el caso de establecerse una norma nacional sobre el procedimiento de subasta electrónica la vigencia a nivel provincial dependería de una adhesión por parte de cada provincia. A continuación se analizarán los sistemas implementados en las provincias que disponen de subasta judicial electrónica y la situación a nivel nacional, para luego abordar dos sistemas de subasta electrónica en el derecho comparado.

III. La Subasta Judicial en las Provincias Argentinas: Dos Modelos

La subasta electrónica en Argentina comenzó a desarrollarse en el año 2010 en la Provincia de Buenos Aires y 2012 en Córdoba, pero no comenzaron a subastarse bienes sino hasta 2014 siendo Córdoba la Pionera, seguida de la Provincia de Buenos Aires en 2015. Sin embargo, su utilización no se expandió rápidamente a las otras provincias. Recién en el año 2018 se ordena su implementación por San Luis. Catamarca y Entre Ríos lo hacen en 2020 y finalmente en La Pampa 2021. En todas las demás provincias, como también a nivel nacional y en CABA, la subasta judicial continúa realizándose de manera presencial. Se pueden clasificar dos modelos a los que puede denominarse “propio” y el de “tercerización”. En ambos casos se trata de un portal que opera dentro de la página oficial de cada poder judicial, pero en algunas provincias es el propio poder judicial el que ha desarrollado el sistema dentro de sus dependencias (Catamarca y Buenos Aires) y en otras, el sistema de subasta



judicial electrónica ha sido desarrollado por una empresa privada. En estos casos, la característica es que en todos lo ha sido por la misma empresa, Argentina Vende SA, pudiendo accederse desde el portal oficial de cada poder judicial o bien desde una página externa: <https://esubasta.ar/>, que aglutina estos portales oficiales judiciales junto a otros de subastas administrativas correspondientes a diversos municipios.

III.1. Subasta judicial modelo propio

1.1. La subasta electrónica en la Provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires fue la primera que comenzó a legislar sobre la subasta electrónica, aunque no fue la que primero la puso en funcionamiento. En esta provincia la implementación de la subasta electrónica, surge por una cuestión de transparencia, eficacia, conveniencia económica y para evitar la colusión entre postores. Esta provincia incorporó la subasta electrónica mediante una norma legislativa. En mayo del año 2010 la Corte Suprema de Justicia de esa provincia por Resolución 1381/10⁵ propició ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo el dictado de una norma que contemplara modificaciones a la ley 7425 (Código Procesal Civil y Comercial) a fin de posibilitar la introducción de las subastas judiciales por medios electrónicos. A tal efecto, elevó un Proyecto de reforma elaborado por esa Corte sobre la base de otro sobre modificación del sistema de remates que le fuera presentado en marzo de ese año por la Secretaría de Planificación. Es importante señalar que la Dirección de Subastas Judiciales había sido auditada por la Corte Suprema de la Nación, con la finalidad de aplicar parámetros de gestión judicial a dicha dependencia y establecer pautas de transparencia y calidad. En función de ello y sobre la base de aquel proyecto elevado por la Corte Provincial, el 15/12/2010 se sanciona La ley 14238⁶, pero su entrada en vigencia se dispuso a los 180 días de su publicación,

⁵ <https://www.scba.gov.ar> (cons.20/08/2022)

⁶ Ley 14238 Provincia de Bs.As, Sanción : 15/12/2010, Promulgación: 10/01/2011, Publicación 5/01/2011 BO 26521 <https://www.scba.gov.ar/subastas/documentos/Articulos14238.pdf>, (cons.20/08/2022), <https://normas.gba.gov.ar/documentos/BeA37H7B.html>, (cons.20/08/2022)



lo que ocurrió el 25/1/2011. Esta normativa modificó los Artículos 558 a 585 del CPC⁷ de la Provincia de Buenos Aires y fue reglamentada mediante Acuerdo 3604⁸ de la Suprema Corte de Justicia de esa provincia⁹, siendo el Anexo I el reglamento para los usuarios. La ley 14238 expresamente establece que la página web debe contar con características de seguridad apropiadas y funcionalidad adecuada a la realización de la subasta electrónica. Asimismo, la necesidad de que la reglamentación establezca criterios y procedimientos para que el público en general pudiera inscribirse en un registro de postores y garantizar la seriedad y eficacia de la subasta, así como la sencillez y economía de recursos. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires desarrolló el sistema de subasta electrónica en sus propias dependencias dando intervención a la Subsecretaría de Tecnología Informática de la Corte que, en colaboración con la Secretaría de Planificación, tomaron las medidas necesarias para la puesta en funcionamiento del sistema y su implementación práctica, que se realizó de manera gradual y progresiva¹⁰, a propuesta de la Secretaría de Planificación y la Subsecretaría de Tecnología Informática con colaboración de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales, y por medio de Resoluciones (equivalentes a los Acuerdos) de ampliación dictadas por la Suprema Corte. Las Secretarías de Servicios Jurisdiccionales y de Planificación y la Subsecretaría de Tecnología Informática en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales, fueron quienes llevaron a cabo las actividades de capacitación y difusión ante los jueces, funcionarios, martilleros y operadores externos del sistema de subastas judiciales. Por su parte, se dispuso el Registro General de Subastas judiciales, con sus diversas seccionales en los distintos departamentos jurisdiccionales, comenzando la seccional de la capital (La Plata) a funcionar receptando las

⁷ Código de Procedimiento Civil

⁸ Acuerdo 3604 SCBA, 08/8/2012, <https://www.scba.gov.ar/subastas/documentos/AC%203604.pdf> (cons.20/08/2022)

⁹ <https://www.scba.gov.ar/subastas/documentos/Reglamento.pdf> (cons.20/08/2022)

¹⁰ Res. 102/12 Sec.planificación de la SCBA, https://www.scba.gov.ar/subastas/documentos/Ver_resolucion_102-14.pdf (cons.20/08/2022)



solicitudes de usuarios desde el 1/9/2014. Sin embargo, no fue sino hasta 2015 que comenzaron a efectuarse los remates por esta vía¹¹ en La Plata ya que primero se llevó a cabo una simulación en tiempo real de diversas subastas judiciales por medios electrónicos y luego, en base a los informes positivos emitidos por el Registro General de Subastas Judiciales, la Secretaría de Planificación y la Subsecretaría de Tecnología Informática, se dispuso que a partir del 01/10/15 se comenzaran a realizar los actos de ejecución forzada a través de los medios electrónicos. Para ello, previamente se emitieron una serie de recomendaciones destinadas a funcionarios y magistrados, relativas al contenido de los decretos de subasta, a fin de incluir aquellas aclaraciones sobre figuras no previstas en el código procesal y que eran relevantes para que la subasta fuera exitosa, tales como el precio de reserva, la postura máxima secreta, la forma de devolución de las reservas, etc.¹² En Octubre de 2018 comenzó el avance de implementación de la subasta en electrónica a otros departamentos de la Provincia de Buenos Aires (San Martín, Mercedes , Mar del Plata , San Isidro y Bahía Blanca)¹³, en Agosto de 2019 a Quilmes, Lomas de Zamora, La Matanza y Morón, el 2 de Marzo de 2020 de ese año a Nechochea, Zarate Campana, Junín , Azul y Pergamino¹⁴ y el 08/6/21 en Dolores, Moreno – General Rodríguez , San Nicolás Trenque Lauquen.¹⁵

En lo que respecta a los bienes a subastar, desde un principio mediante el Artículo 562, la Ley 14.238 dispuso la subasta judicial electrónica a través de

¹¹ Res. 1950/15 Sec. Serv. Jurisdiccionales, SCBA
<https://www.scba.gov.ar/subastas/documentos/Ver%20Resolucion%201950-15.pdf>
 (cons.20/08/2022)

¹² Res. 2129/15 23/09/15 Sec. Serv. Jurisdicc. SCBA
https://www.scba.gov.ar/subastas/documentos/Ver_resolucion_2129-15_y_anexo.pdf
 (cons.20/08/2022)

¹³ Res. 955/18 13/6/2018, Sec. Serv. Jurisdicc. SCBA
<https://www.scba.gov.ar/subastas/documentos/Resolucion%20955-18.pdf> (cons.20/08/2022)

¹⁴ Res. 3162/19 27/11/2019 Sec. Serv. Jurisdicc. SCBA
https://www.scba.gov.ar/subastas/documentos/Res_3162-19.pdf (cons.20/08/2022)

¹⁵ Res.3161 19/02/2021 SCBA
<https://www.scba.gov.ar/subastas/documentos/Res%20118.pdf> (cons.20/08/2022)



internet para bienes de cualquier naturaleza mediante un programa automatizado revestido de adecuadas condiciones de seguridad. Como desde el comienzo se ordena esta modalidad, incluso para remate de bienes registrables, se dispone de específicas medidas de seguridad para reducir los riesgos de adjudicatarios remisos, estableciendo que se podría exigir el empleo de firma electrónica o de firma digital para validar las ofertas realizadas y/o para la suscripción del boleto de compraventa, como también la constitución de un depósito del 5 % del valor de base del bien , cuando el juez lo considerase conveniente en función de la naturaleza o significación económica del bien a subastar, o una suma razonable cuando no hubiere base, siendo obligatorio cuando la subasta fuere de bienes registrables. Los depósitos de quienes no resultaren ganadores se reintegran de manera inmediata, excepto que el oferente solicite su reserva a efectos de lo normado en el artículo 585, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial (posibilidad de postor remiso).

En cuanto a la duración de la subasta, tiene un plazo más extenso que en Córdoba y San Luis, ya que estas prevén 5 días hábiles a diferencia de Bs. A.s en la que se establece una duración por un período de diez (10) días (corridos) finalizando la misma en un día y hora determinado, pero con una extensión de tiempo en caso de posturas los últimos tres minutos. En ese caso se extiende 10 minutos mas. Durante todo ese período se reciben las ofertas, que serán públicas para permitir la puja permanente, adjudicándose el bien al postor que hubiera efectuado la oferta más alta, mediante un programa que enviará automáticamente una comunicación al ganador. Esta información figurará en la página web, como asimismo la totalidad de las ofertas realizadas durante el período de la subasta, indicando monto, día y hora de su efectivización. En caso de no haberse fijado base y cuando la importancia del bien lo amerite, el Juez podrá fijar un precio de reserva por debajo del cual no se adjudicará el bien. Se permite el empleo de medios de pago electrónicos o la transferencia electrónica de fondos, tanto para integrar la garantía referida en este artículo, cuando corresponda, como para abonar la postura que resulte ganadora de la subasta.



En lo que hace a como se efectúa la subasta y las modalidades, no tiene diferencias sustanciales con el sistema de Córdoba, salvo que:

- Se podrá exigir firma electrónica o digital para validar las ofertas y suscripción de documentación.
- Prevé depósito en garantía obligatorio para subastas de Inmuebles y reserva de depósito.
- Establece la figura de la Postura Máxima Secreta.
- Admite compra en comisión.

Ello consiste en la posibilidad de que el postor, antes de la subasta, ingrese el precio máximo dispuesto a pagar marcando uno de los tramos (Ej. Hasta ...\$ xx). Con ello el sistema puja automáticamente en su nombre hasta alcanzar ese tramo. De allí en más el oferente debe aumentar la oferta manualmente. Si hay dos o más posturas máximas secretas equivalentes se otorga prioridad a la que tenga fecha y hora de ingreso anterior.

Es importante señalar, en lo que respecta a la responsabilidad del Poder Judicial por la utilización de este medio que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resulta responsable por los perjuicios causados por los desperfectos del sistema o intromisión de terceros, pese a que en el reglamento establecido en el Acuerdo 3604 por Anexo I se exime de responsabilidad ante el caso fortuito, fuerza mayor, urgencia y terceros contratistas. Ello así en tanto la Ley 14238 le atribuye la función de seguridad del sistema. En la misma línea, y en contradicción con el reglamento, la propia Corte reconoce en la Res¹⁶. 3001-28219-2021 que las ventajas en la utilización del ciberespacio plantea un enorme desafío en torno a su protección y seguridad, atento a las potenciales amenazas y peligros a los que se ven expuestos los sistemas de información por lo cual es necesario adoptar medidas de ciber seguridad, a cuyo fin la Subsecretaria de Tecnología y Seguridad Informática de la Corte ha desarrollado en 2021 un “Plan Integral de Seguridad Informática”¹⁷ para impedir y/o mitigar los riesgos y

¹⁶ Resolución.

¹⁷ Res. 3001-28219-2021 Anexo I



vulnerabilidades para la seguridad informática a fin de que esos riesgos sean conocidos, asumidos, gestionados y mitigados por la Corte de manera documentada, sistematizada, estructurada de manera repetible, eficiente y adaptada a los cambios que se produzcan en los riesgos en su entorno y en la tecnología. Además, establece la creación de un Comité de Implementación y Seguimiento del Plan de Contingencia y adhiere al Plan Integral de Ciberseguridad de la Provincia de Buenos Aires establecido por Dec.¹⁸ 2021-8-GDEBA, con reserva de que su evaluación e implementación quede a criterio del Comité.

1.2. La subasta electrónica en la Provincia de Catamarca

Catamarca crea el sistema de subastas judiciales por Ley 5664 del 03/9/2020¹⁹, para empezar a regir a los 180 días de su publicación (BO²⁰ 17/11/2020). Al igual que San Luis, la ley dispone el sistema de subasta electrónica para todo tipo de bienes, salvo que por su valor probable de venta o motivo debidamente fundado se justifique el procedimiento tradicional u otra modalidad prevista legalmente. Asimismo, se establece su implementación todas las causas de todos los fueros, siempre que resulten compatibles con las normas sustanciales, procesales y reglamentarias propias de aquellos, especialmente en los remates ordenados en el fuero civil, comercial, de ejecución fiscal y de concursos y quiebras. Catamarca instaura la subasta judicial electrónica con la misma modalidad que Buenos Aires, mediante una ley que modifica el Código de Procedimiento local, al igual que ocurre respecto a la responsabilidad y titularidad del sistema ya que ordena la creación del portal en el ámbito del Poder Judicial de Catamarca, bajo dependencia y control de la Corte de Justicia, o del área específica que ésta determine vía reglamentaria, donde específicamente pone a cargo de la Corte

¹⁸ Decreto

¹⁹ <http://www.saij.gob.ar/5664-local-catamarca-creacion-sistema-subastas-judiciales-electronicas-procedimientos-aplicables->

²⁰ Boletín Oficial



de Justicia la habilitación de una página web con características de seguridad apropiadas y funcionalidad adecuada a la realización de la subasta electrónica, para ser utilizada en todas las circunscripciones judiciales existentes o a crearse en todo el territorio de la Provincia de Catamarca. No obstante, prevé que la Corte puede disponer su implementación en etapas y periodos de prueba, como lo hizo la Provincia de Buenos Aires, para lo cual la ley le otorga el plazo de un año como máximo, (a mediados de mayo de este año). Sin embargo, a la fecha la página judicial de Catamarca no cuenta aún con un portal de Subastas electrónicas. Es más, todavía se está implementando la primera etapa del Sistema de Expediente Digital (SED-IURIX) para los juzgados civiles de primera y segunda nominación²¹, por lo que la creación del Portal, como así la reglamentación de la Ley 5664, devendría prematura e incluso inútil hasta que la digitalización sea total o por lo menos de los fueros civil, comercial y concursal. No obstante, lo positivo es que ya se encuentra encausado el rumbo de las futuras ejecuciones forzadas de esa provincia.

Es importante señalar que la normativa mencionada establece expresamente que el sistema tendrá condiciones de seguridad adecuadas. Lo que significa dos cosas: responsabilidad frente a perjuicios que puedan suscitarse debido a un hackeo, si no las tuviera o tuviera resguardos deficientes. Ello corrobora lo dicho anteriormente, en orden a que no puede considerarse que una maniobra de este tipo sea un caso fortuito o hecho de un tercero por el cual no se debe responder, de manera automática.

La ley adopta el modelo de la Provincia de Buenos Aires en la creación del Registro de Postores en el ámbito de la Corte, donde se podrán registrar personas físicas o jurídicas a través de un formulario on line de declaración jurada existente en el portal, pero deberá llevar la documentación en soporte papel a la dependencia en la Corte de Justicia para la validación de los datos. Si admite la solicitud, envía un correo para la creación de una cuenta con usuario y

²¹ Acordada Corte Suprema de Justicia de Catamarca Nro. 4575 del 03/8/2022. <https://juscataamarca.gob.ar/PDF/acordadas/ACORD4575-ImplementacionSED.pdf> (cons. 08/09/2022)



contraseña y si rechaza la inscripción también se envía un correo pero para conocer la causa debe comparecer personalmente. Las causales de exclusión están contenidas expresamente en el Artículo 13 de la norma regulatoria.

En cuanto a la publicidad de la subasta se prevé en 8 días corridos y debe publicarse dentro de las 48 hs. de dictado el decreto. La publicidad debe contener el precio base (estimado sobre el valor de mercado que debe informar el martillero antes del dictado del decreto) o si es sin base y el valor de las pujas, puede incluir fotos, videos, una descripción más detallada del bien y datos del martillero, la fecha de comienzo y de fin, si se ha solicitado eximición de consignar por el ejecutante. Cada vez que se haga una postura el sistema debe informar al postor el monto, más las comisiones e impuestos y aranceles adicionales que haya que abonar.

- No se admite compra en comisión
- El tiempo de duración es de 5 días hábiles continuos e ininterrumpidos. Si se suspende se debe informar en la pagina. El horario de referencia es el del Portal
- Ser postor remiso es causal de exclusión del registro de postores

El ganador debe ser informado por el portal y dentro de las 48 hs debe abonar el saldo o el porcentaje del precio informado. El sistema debe informar también los datos del postor al martillero para generar el contacto y si no abona en dicho plazo se lo considera postor remiso (causal de exclusión del registro de postores). No se han establecido multas para este supuesto.

III.2. Subasta judicial modelo tercerizado

2.1. La subasta Judicial electrónica en Córdoba

En Córdoba, con anterioridad a la pandemia ya venía manifestándose desde 2012 la intencionalidad del TSJ²² de incorporar la subaste electrónica como método de liquidación de bienes. Para tal fin, a partir del dictado de Acuerdos Reglamentarios ha ido reformando paulatinamente el procedimiento de subastas

²² Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba



estableciendo modalidades, plazos, obligaciones y cargas procesales no reguladas en el CPC. Para obrar de tal modo, el TSJ ha utilizado como fundamento el Art. 12 inc. 1 de la Ley Orgánica del poder Judicial 8435, en cuanto, como suprema autoridad judicial de la provincia, ejerce la superintendencia de la administración de justicia en ésta y el inc. 33, que le otorga la facultad de ejercer las demás atribuciones que le confieran las leyes, entre estas, el CPC (L 8465) en sus arts. 577 y 578 del CPC. El primero, en cuanto dispone que el TSJ puede establecer medios de publicidad que sustituyan o complementen los edictos, y el segundo, en la medida que le otorga facultades para crear un sistema de subastas propio u organizarlo a través de entidades oficiales pignoraticias, sin publicidad particularizada, para bienes muebles de escaso valor. La interpretación de esta norma ofrece varias posibilidades, ya que la redacción no es suficientemente clara. Una de ellas importa la facultad otorgada al TSJ de crear un sistema de subastas propio, (con un alcance para todo tipo de bienes), o encargarlo a un tercero (que solo podría ser una entidad pignoraticia oficial), pero en este caso solo para bienes muebles de escaso valor. La hermenéutica alternativa importa entender que la ley solo le otorga facultades para crear un sistema de subastas propio o por intermedio de un tercero (entidad pignoraticia oficial), autorizándose que sea sin publicidad particularizada en el caso de bienes muebles de escaso valor. Si se adopta la primera interpretación, el TSJ estaría autorizado a crear un sistema para la liquidación de todo tipo de bienes, aunque en este caso es clara la norma en cuanto dispone que el sistema debe ser “propio”. Si opta por tercerizarlo, entonces debería hacerlo mediante una entidad pignoraticia oficial con lo cual la palabra “pignoraticia” importa que solo podría tercerizar en el caso de bienes muebles. Este examen resulta de importancia, en la medida que el TSJ no ha instrumentado un sistema “propio”, tan es así que el Acuerdo reglamentario es claro en cuanto a que el sistema utilizado no le pertenece. Asimismo, se habría excedido al tercerizar el sistema con una empresa privada y, además de ello, instrumentar a través de esta vía, también la subasta de bienes inmuebles. El sistema de subasta judicial electrónica comenzó utilizándose para bienes muebles no registrables. Sin



embargo, debido al buen funcionamiento, se ha ido extendiendo paulatinamente a todo tipo de bienes. No obstante, no es obligatorio en el caso de bienes muebles registrables e Inmuebles, supuesto en el cual tiene que haber acuerdo de ambas partes.

2.1.1 El proceso de incorporación de la subasta electrónica en Córdoba.

El sistema de subasta de Córdoba no fue desarrollado por la Dependencia del Poder Judicial encargada de los sistemas informáticos. En el año 2012, por medio del AR²³ Nro. 259 C del 20/11/2012 se llamó a licitación para desarrollar un sistema de subasta electrónica de bienes muebles no registrales, proceso en el que se adjudicó la contratación a la empresa Argentina Vende SA. El objetivo era implementar un sistema de amplia difusión y que fuera más justo, tanto en beneficio del ejecutado como del ejecutante e interesado al contribuir a aumentar la cantidad de postores y realizar un procedimiento más honesto, ya que en las subastas presenciales siempre se caracterizaron por tener una escasa asistencia y por lo general de las mismas personas que lograban bajar el precio de los bienes a valores irrisorios por debajo de los de mercado, con perjuicio del ejecutado y ejecutante. Posteriormente, por medio del AR 590 10/4/2013 se forma una comisión técnica jurídica de apoyo para llevar a cabo el asesoramiento jurídico de la empresa que desarrollaría el sistema y el reglamento del procedimiento de subasta electrónica. Poco más de un año después, una vez desarrollado el sistema a través de un portal en la página web del Poder Judicial de Córdoba, el AR 121 B 1/7/2014²⁴ aprueba el reglamento de subasta electrónica elaborado por la comisión para la subasta de bienes muebles no registrales, se le encomienda la capacitación del personal y se dispone la implementación gradual del sistema para los tribunales de los diversos fueros y sedes jurisdiccionales, utilizando como fundamento normativo de esa decisión el Art. 577 in fine del CPC. Dos meses después, se consolida la primera etapa y

²³ Acuerdo Reglamentario

²⁴ <http://jurisprudenciacba.justiciacordoba.gob.ar/cordoba.php>



por AR 122 B 02/09/2014²⁵ se impone la subasta electrónica de bienes muebles no registrables en Córdoba Capital, Alta Gracia, Jesús María y Cosquín a partir del 15/9/2014 a través del portal “Subasta Judicial Electrónica” en el sitio web, se habilita desde esa fecha el registro de postores para participar como usuario y poder ofertar, se aprueba un texto modelo de decreto de subasta. Esto estandariza el procedimiento, evitando distintos criterios que pueden ocasionar confusiones no solo para las partes sino también para los postores y se dispone también la digitalización de acta de embargo y secuestro – constataciones. Los oficiales de justicia, luego de llevar a cabo estos procedimientos deben pasar el acta en formato Word y remitirlo a la cuenta del Secretario o Pro secretario del Juzgado, el que firmará el oficio para que sea subido por la oficina de subasta al panel de control, siendo la oficina de Administración del Poder Judicial la que establecerá las condiciones de la publicidad que se comercializará tales como formato, letra , etc. Asimismo, por AR 1233 A 16/9/2014²⁶ se reglamenta la Oficina de Subastas para el funcionamiento de las subastas presenciales y electrónicas. Al año siguiente, por AR 133 B 3/11/2015²⁷ se dispone que desde el 1/2/16 todas las subastas de bienes muebles se lleven a cabo de manera electrónica en todas las circunscripciones y que todas las subastas deben ser publicitadas obligatoriamente en el portal de subastas desde esa fecha.

En el año 2017 comienza la extensión de la subasta electrónica a otro tipo de bienes. Para ello se tuvo en cuenta que la Ley 10.411 (28/12/2016) dispone que en las causas donde sea parte el Estado provincial y municipal y se persiga el cobro de tributos tasas y contribuciones, las subastas serán realizadas conforme lo reglamente el TSJ. Por este motivo y por el buen resultado que se venía observado en la subasta electrónica, al disminuir la influencia de la liga, por medio del AR 147 B 9/5/2017²⁸, se extiende la reglamentación de subasta

²⁵ ídem

²⁶ ídem

²⁷ ídem

²⁸ ídem



electrónica a la ejecución de estos bienes, pero el TSJ además la extiende también a las causas donde interviniese el estado como parte, aunque no fueran de tipo fiscal. Además, crea y aprueba el reglamento de subasta judicial electrónica que empezaría a regir desde el 1/6/2017 y dispone la posibilidad de uso de la plataforma por otros poderes del estado mediante convenio. En este sentido hubo un convenio para la subasta de colectivos de TAMSE²⁹ aprobado por AR 262 del 16/4/2018³⁰, con un cargo a favor del PJ por el uso del portal pagado por el comprador. Se advierte aquí, que el proceso es inverso a lo ocurrido en España en donde, como se verá más adelante, el sistema fue desarrollado por un organismo de la administración pública, no pertenece al Poder Judicial sino al Boletín Oficial del Estado, pero aglutina los remate oficiales administrativos y también los judiciales. En Abril de 2018 por AR 155 22/4/2018 se modifica el reglamento dispuesto por el acuerdo 147 B y se deroga el reglamento original de 2014 (121) en el entendimiento de que había que realizar modificaciones y precisiones. El nuevo reglamento se agrega como anexo y comienza a regir desde el 1/6/18 previendo:

- Subasta electrónica para bienes muebles no registrables y para bienes de todo tipo (Inmuebles o Muebles Registrables) dispuesta por los juzgados de Concurso y Quiebras y los juzgados de Ejecución Fiscal, además de todos los demás bienes que disponga el TSJ que se subasten por este sistema. Es opcional para los demás bienes registrales, sin perjuicio del cumplimiento de la reglamentación del CPC.

Excepción: Que la subasta ya se hubiere ordenado para realizarse después de 6/18 por el otro sistema o que no habiéndose ordenado se justifique la inconveniencia de la subasta electrónica y que sea mejor por otro mecanismo.

²⁹ Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado

³⁰ Idem



- Notificaciones: La notificación en el portal será notificación suficiente de todo lo relacionado con el remate
- Valor de Mercado: debe ser informado obligatoriamente por el martillero al Tribunal
- Duración de la subasta: 7 días durante los cuales se podrá ofertar
- No se admite la compra en comisión

En el año 2020 con motivo de la Pandemia, por AR. 153 /20 extiende la obligatoriedad del procedimiento de subasta electrónica a todo tipo de bienes debido a las medidas de protección sanitaria que hacían imposible la subasta presencial de muebles registrales e inmuebles. No obstante, la modalidad siguió utilizándose. Finalmente, en junio del año 2022 se modifica el AR 155 B del 22/4/2018 por AR 165 B del 24/6/22, para extender de manera definitiva la subasta a todo tipo de bienes con base en el proyecto de reforma elaborado por la Comisión Técnica de Subasta Electrónica junto con el encargado de la Oficina de Subastas, lo que comienza a regir desde el 1/7/2022. El ámbito de aplicación es para bienes a ejecutar en todos los fueros, siendo obligatoria para los bienes muebles no registrales y para todo tipo de bienes, siempre que sean causas del fuero concursal o de ejecución fiscal y en las que el TSJ haya dispuesto ese sistema. En los demás casos de bienes registrales, procede siempre que resulte compatible con las normas sustanciales, procesales y reglamentarias y las partes hayan optado de común acuerdo por este sistema (Artículo 3). A excepción de que por el valor probable de venta u otro suficiente se justifique la venta por otro mecanismo o se haya ordenado conforme reglamentación vigente anterior.

Introduce normas modificatorias del sistema dispuesto por el CPC, a saber:

- Decreto de subasta: modifica de hecho el art. 571 del CPC, que condiciona el dictado del decreto a que estén cumplidas todas las diligencias previas establecidas por el art. 569 y 570 del CPC, estableciendo como límite un plazo de tres meses desde el secuestro de



los bienes como máximo, en el caso de bienes muebles, registrales o no, y de seis meses en el de inmuebles. Ello obedece a evitar que el producido de la subasta electrónica se vea disminuido por otros gastos relacionados con la venta, debiendo ser los gastos posteriores a esa fecha soportados por el martillero o el ejecutante (reiteraciones de bloqueos registrales que caducan por demoras, tardanza en la obtención de los informes impositivos, etc. También es importante para que no existan variaciones de relevancia en el valor de los bienes, máxime cuando existe inflación, todo lo cual es positivo aunque no se disponga por modificación legislativa.

- Notificaciones: La publicación en el portal de todas las circunstancias y resoluciones dictadas con relación al trámite de la subasta electrónica será notificación suficiente y adecuada conforme el art. 574 del CPC para todos los interesados, lo que modifica el régimen de notificaciones, de manera tal que las partes deberán estar pendientes del portal una vez publicada la subasta
- Duración de la Subasta: El plazo de duración se reduce a 5 días hábiles, igual que lo regula San Luis, salvo que el tribunal considere necesario un plazo distinto por la naturaleza de los bienes.
- Mantiene la oferta de último minuto: Al haber una oferta en el último minuto, se genera un minuto adicional para contraofertar y así sucesivamente hasta que pase el minuto sin haber contraoferta.
- Mantiene la imposibilidad de compra en comisión,
- Garantía de disponibilidad del portal las 24 hs, durante todos los días del año: El TSJ a través de la oficina de subastas judiciales, el área de TIC en coordinación con la prestataria del servicio son las encargadas de tomar todas las medidas necesarias a tal efecto y establecer los medios de pago a través del portal, pudiendo ser variados a propuesta de la prestataria del servicio con anuencia de la oficina de Administración General.



- Incumplimiento del Adjudicatario: Deberá abonar el 20% del valor ofertado como clausula penal por incumplimiento de la oferta. Ante la declaración por el Tribunal de postor remiso se emite un certificado de deuda en los términos del 347 del Código Tributario (L6006) cuyo cobro será perseguido por la Dirección de Administración.
- El pago del precio se realiza a través de “Pay per TIC SA”, con opciones para tarjeta de debito, crédito, Pago Fácil o Rapi pago transferencia electrónica, todo ello dependiendo del monto a pagar, lo que agiliza el oblado de importes y otorga incluso facilidades como cuotas cuando se paga con tarjeta de crédito, todo lo que hace más conveniente la compra. Hoy en día³¹ se han realizado 16.209 subastas y suspendido 3105, existen 29 vigentes y 28 próximas a realizarse.

2.1.2. Algunas cuestiones en torno a la responsabilidad estatal por la utilización del Portal de Subasta Electrónica

En el Acuerdo reglamentario 165/22 mencionado precedentemente, así como lo hizo en los anteriores, el TSJ garantiza la operatividad del sistema durante las 24 hs. todos los días del año (Art.5). Sin embargo, a continuación, mediante el Art. 6 autoexcluye su responsabilidad por interrupciones, suspensiones o mal funcionamiento en el acceso u operatividad del portal de subastas. La reglamentación causa perplejidad en tanto la atribución de responsabilidad se encuentra determinada por normas nacionales que regulan la materia, así como las exclusiones. En este sentido, dentro de las exclusiones de responsabilidad se encuentran los casos de ruptura del nexo causal, tales como el caso fortuito, la fuerza mayor y el hecho de terceros. Sin embargo, se trata de terceros por quien no se debe responder. En el caso de la subasta electrónica, conforme el análisis efectuado anteriormente del art. 578 del CPC y la propia del TSJ, al utilizar un sistema electrónico abarcativo de todo tipo de bienes (aunque sea opcional), el alto cuerpo debería haber desarrollado un sistema propio cuya

³¹ 15/09/2022



operatividad y seguridad para los usuarios debiera ser su responsabilidad. Claramente no podría pretender desligarse de responsabilidad frente a los usuarios si elige imponer un sistema desarrollado, mantenido y resguardado por un tercero, pero es del caso que el Acuerdo reglamentario mencionado dispone que la subasta de bienes registrables e inmuebles – los mas valiosos - es opcional para las partes. Surge la pregunta entonces si lo que se ha pretendido por esta vía, siendo que el reglamento es público, es que las partes que han optado por esta modalidad asuman el riesgo ante un posible hackeo que genere un eventual daño, no asumiendo responsabilidad por el servicio contratado³². En efecto, siendo la subasta un acto tan trascendental y que reviste de autoridad pública el sistema debe contar con resguardos informáticos de seguridad suficientes y alertas tempranas para impedir un hackeo.

Es importante señalar que, pese al hackeo del sistema del Poder Judicial que tuvo lugar en fecha reciente³³, el portal de subastas electrónicas se mantuvo siempre en funcionamiento y sin problemas - lo que prima facie revela o pone en alerta sobre las deficiencias en las medidas de seguridad internas o propias que Poder judicial de Córdoba posee en su sistema de trámite digital de expedientes. En el entendimiento de que un Acuerdo Reglamentario no puede servir para eximirse de responsabilidad por un servicio que ofrece, aún como opción, en tanto los usuarios en tanto, siendo una autoridad pública debe asumir los riesgos si ofrece efectuar un acto público de esa manera. Caso contrario el ofrecimiento pierde seriedad y confiabilidad. Por su parte, queda fuera de discusión la responsabilidad del Poder Judicial frente a los usuarios si terceriza el servicio en el caso de bienes muebles, en tanto la subasta es un acto público cuya

³² Se ha entendido que existe responsabilidad estatal por los daños que cause un martillero con motivo del ejercicio irregular de sus funciones. “Es ésta una responsabilidad por riesgo administrativo derivado del monopolio de impartir justicia que se ha reservado el estado, siendo que todo el procedimiento de la subasta judicial de los bienes para la satisfacción de crédito ha sido regulado por aquel y se cumple con el nombramiento de un auxiliar de la justicia inscripto en un registro que lleva el propio Estado (CNFed.Cont.Adm. Sala IV, LL 1987 –A-225) citado por VENICA , Oscar H., ob. cit

³³El 13/08/2022 el Poder Judicial de Córdoba sufrió un ciber ataque a través de un “ransomware” que comprometió la disponibilidad de servicios informáticos por varios días y con ello la tramitación electrónica de expedientes.



modalidad no es de elección de quienes lo utilizan, sino que por reglamentación se obliga a utilizar este sistema, sin que pueda llevarse a cabo la subasta por medio presencial. Tal razón determina que no pueda excluir su responsabilidad frente a los usuarios por eventuales perjuicios que se produzcan. En tal sentido, si el sistema de la prestataria es hackeado, esta empresa no es una tercera por la cual el poder judicial no debe responder. Hoy en día el hackeo no es un “hecho fortuito” sino una posibilidad que existe dentro de lo previsible, tanto para la prestataria como para el TSJ, por lo cual el mero hecho de que el sistema sea “hackeado” por un tercero no puede servir de causal de exclusión de responsabilidad, sino solo de comprobarse que el sistema ha tenido todos los resguardos suficientes y adecuados, a la vez que la intromisión ha sido imposible de evitar o frenar (asimilable a la fuerza mayor), pese a tener todos los resguardos de seguridad y repaldo adecuados. Resulta inconstitucional que mediante un Acuerdo Reglamentario se intente sobrepasar normas nacionales de atribución de responsabilidad y es cuestionable que si el Poder Judicial terceriza con una empresa privada el sistema para llevar a cabo actos públicos de ejecución forzosa de bienes, que son de suma trascendencia como una subasta, pretenda excluir su responsabilidad ante desperfectos del sistema provocados por terceros por el mero hecho de consignar esta situación en el mismo acuerdo reglamentario donde garantiza disponibilidad, máxime cuando esta situación es un riesgo esperable o propio de la utilización de sistemas electrónicos o informático. Lo mismo ocurre aunque las partes ejercitaran la opción por esta modalidad, en la medida que las partes no estarían optando por realizar la subasta por fuera del poder judicial, a través de una empresa privada). Existe una variedad de software de seguridad que debe ser utilizado como prevención³⁴, a la vez que es conocida la necesidad de realizar permanente back up de la información como plan de contingencia informático en previsión de

³⁴ [McAfee LTAM](https://www.mcafee.com/blogs/es-es/enterprises/ransomware-una-amenaza-renacida-y-negocio-lucrativo/?gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgouM3i4T0J_ST5aVt9VRAS4_o0mfQ90XGtSu86DQnBvBgUTpkmxjYBoCdJUQAvD_BwE), “Ransomware, una amenaza renacida y negocio lucrativo”. 06/06/2016, https://www.mcafee.com/blogs/es-es/enterprises/ransomware-una-amenaza-renacida-y-negocio-lucrativo/?gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgouM3i4T0J_ST5aVt9VRAS4_o0mfQ90XGtSu86DQnBvBgUTpkmxjYBoCdJUQAvD_BwE (cons.09/09/2022)



intromisiones inesperadas³⁵. Lo dicho no obsta a la responsabilidad de la empresa prestataria frente al poder judicial y el usuario, todo ello teniendo en cuenta que el acceso a la subasta electrónica del poder judicial de Córdoba también puede ser realizado desde otras páginas privadas, tal como esubasta.ar³⁶ y cualquier otra con la que se pudiere contratar.

2.2. La subasta judicial electrónica en la provincia de San Luis

En la Provincia de San Luis se incorpora la subasta electrónica, mediante Acuerdo Reglamentario 192 del 16/04/2018³⁷ para comenzar a funcionar recién el 01/06/2018. A diferencia de Córdoba, el STJ³⁸ estableció el sistema desde un principio para toda la jurisdicción y para todo tipo de bienes, San Luis contrató directamente a la misma empresa privada que Córdoba como proveedora del sistema, la que desarrollo el mismo modelo de software y también se tomo a su cargo la capacitación. Es decir, que tercerizó el servicio, copiando la política adoptada por el Poder Judicial de Córdoba, pero implementándolo más rápido en toda la provincia, posiblemente por los buenos resultados de la experiencia cordobesa. El desarrollo del portal es similar al portal de Córdoba y el reglamento contenido en el Anexo del acuerdo es en su mayoría también similar, incluida la limitación de responsabilidad ante el hecho de terceros respecto a lo cual cabe señalar las mismas consideraciones efectuadas con anterioridad al tratar el sistema de Córdoba en cuanto a la responsabilidad que le cabe por obligar a las partes y postores a utilizar esta vía para comprar bienes en liquidación. Igualmente ocurre con los medios de pago, toda vez que el sistema también el

³⁵ Por AR "A" 1778 15/8/22 Poder judicial de la Provincia de Córdoba. Indisponibilidad de servicios informáticos. "Plan de contingencia". Aprobación. Revista Jurídica Semanario Jurídico Nro. 2368, 25/8/22, ed. Comercio y Justicia. P.(retiración de tapa).

³⁶ <https://esubasta.ar/> Cabe señalar respecto a esta página que el servidor es de la misma empresa que desarrollo el servicio del portal del Poder judicial de Córdoba, La Pampa, San Luis y Entre Rios a los que aglutina como también portales de varios municipios de la provincia de Córdoba.

³⁷ <https://www.justiciasanluis.gov.ar/wp-content/uploads/Documentos/Administrativa/SinCategoria/ACUERDO/2018/04/16/Acuerdo-192.pdf>

³⁸ Superior Tribunal de Justicia



provisto por la empresa contratada, que lo gestiona a través de pay per TIC SA, pudiendo abonar con tarjeta de crédito/débito, a través de Pago Fácil o Rapipago y transferencia electrónica, todo ello dependiendo del monto a pagar. Como diferencias puede señalarse que la sanción al postor remiso es del 25 % del valor ofertado. Es decir un 5% mas, ya que en Córdoba es del 20%. Al día 15 de Septiembre de 2022 existen 3 subastas vigentes, 3 próximas a realizarse 49 suspendidas, lo cual es notable ya que es aproximadamente un tercio de las terminadas y 159 terminadas, siendo pocos los procedimientos teniendo en cuenta que funciona hace más de tres años.

2.3. La subasta judicial electrónica en Entre Ríos

El sistema de subasta electrónica desembarcó en Entre Ríos en el marco de la pandemia Covid-19 y ante un requerimiento del Colegio de Martilleros, presentado en el Área de Asuntos Administrativos del Superior Tribunal de Justicia, mediante el cual se solicitaba un protocolo para poder efectivizar los remates, y se realizaban propuestas a tal efecto. Por tal motivo, el Superior Tribunal de Justicia, reunido en Acuerdo General N° 20/20 del 22-09-20, aprobó las propuestas formuladas de reglas para subastas judiciales del fuero civil y comercial –Anexo I-y del fuero laboral-Anexo II³⁹ y dispuso la entrada en vigencia de ambos reglamentos a partir de su publicación en la página web del Poder Judicial. La rapidez tuvo su razón en que ya se había solicitado un sistema de subasta electrónica con anterioridad. El Proyecto de Reglamento que se ponía a consideración tenía ya como antecedente el expediente “Subasta electrónica s/ Proyecto”, N°000741/2019, en donde se requería un sistema de subasta electrónica como medio de realización de los remates públicos, tal como los que ya tenían los Poderes Judiciales de Córdoba, San Luis, y la Provincia de Buenos Aires, proceso que se aceleró por las necesidades imperiosas de llevar a cabo los remates pendientes. Tan es así que, provisoriamente y hasta que se contara con el software y hardware adecuado se establecieron Reglas para subastas por

³⁹ <https://www.jusentrieros.gov.ar/subastas/>(cons. 10/09/2022)



videoconferencias aprobadas por Ac. Gral⁴⁰. N° 20/20, punto 6°). De esta suerte, el STJ mediante la tercerización del sistema por la misma empresa que desarrollo los portales de Córdoba y San Luis, pudo garantizar una mayor seguridad y eficacia, al poder realizar un ilimitado número y frecuencia de remates (lo que no era posible bajo el sistema de videoconferencias, por las licencias disponibles y el uso de internet), mayor accesibilidad y consecuente amplitud en el alcance de las convocatorias, con una mejora en las expectativas para las partes sobre el resultado económico de la venta, y la posibilidad de sobrellevar contingencias no previstas que impidan la reunión de personas, como la ocurrida en el contexto mencionado.

El Acuerdo pone de manifiesto que la armonización del reglamento 20/20/20 y las normas procesales del CPC es posible merced a la delegación legislativa efectuada por la ley 10.500 para el expediente digital. A diferencia de Córdoba que se funda en normas del propio Código Procesal. Es importante señalar la intención de que en un futuro se desjudicialicen las subastas, encomendando a una oficina especializada (cuyo germen puede ser la Oficina de Subastas Judiciales cuya creación se propone), que, en conexión digital con los restantes organismos públicos competentes, imprima agilidad a la ejecución de bienes, la haga más simple, menos costosa, y más eficaz.

El primer acto de subasta que se llevó a cabo fue de un automóvil y se inició el 29 de noviembre de 2021 con resultado sumamente positivo⁴¹. Al 9/9/2022 existen unas 162 subastas vigentes y unas 158 ya previstas para realizarse, entre las que hay todo tipo de bienes, ya se han finalizado 353 y solo se han suspendido 43.

Como particularidades pueden señalarse las siguientes:

El encargado de la oficina de subastas debe resguardar la información de las subastas electrónicas, mediante el correspondiente “back up” periódico del

⁴⁰ Acuerdo General

⁴¹ <https://www.jusentrerios.gov.ar/2021/10/27/comenzaran-las-subastas-judiciales-electronicas-en-entre-rios/> (Cons. 12/09/2022)



sistema; f) diagnosticar e informar al Superior Tribunal de Justicia las mejoras que requiera el Portal, la presente reglamentación, o los protocolos o guías de buenas prácticas que se dicten; g) administrar y desarrollar distintas vías de comunicación y acceso a la información sobre las subastas judiciales electrónicas, difundir y dar a publicidad dicho sistema, y organizar las capacitaciones que fueran necesarias. Art 3 inc. e). Ello es igual en el caso de La Pampa, pero el de Córdoba no dice nada respecto a estas responsabilidades.

- **PLAZO DE PUBLICIDAD DE LA SUBASTA:** En el portal deben realizarse con una antelación mínima al comienzo de la subasta de 6 días hábiles, y durante todo ese lapso, salvo que se tratare de bienes perecederos, o que las circunstancias justifiquen un plazo menor

- **INCENTIVO DE POSTORES EN VIVO:** Se establece que, conforme a la posibilidad que brinda el sistema, el martillero podrá incentivar a los postores mediante transmisión en vivo a través de la plataforma habilitada, siempre que se trate de una subasta de un único bien, un lote de bienes, o que los bienes o lotes de bienes que la integran finalicen en distintos horarios. A estos fines, el Martillero deberá contar, a su solo costo y riesgo, con las herramientas e infraestructura tecnológica necesarias para una transmisión estable y continua.

- **GARANTÍA DE LA OFERTA:** Eventualmente el Juzgado podrá disponer, en caso de bienes de valor significativo, que el postor deba ofrecer una garantía de cumplimiento de oferta que puede ascender hasta el cinco por ciento (5%) de la base antes del inicio del acto del remate, a través de los mecanismos dispuestos en el Portal, garantía que se aplicará al pago del precio de quien resulte ganador de la subasta y a los demás se les reintegrará dentro de los tres (3) días de finalizada la subasta, a excepción del segundo y tercer mejor postor a quienes se les reintegrará a los tres (3) días de acreditado el pago por el postor que le preceda o de rechazada su intención de compra, lo que suceda primero. Esta posibilidad no está regulada en Córdoba, pero sí en Buenos Aires.



-EMBARGO y SANCIONES AL POSTOR REMISO : Cuando el incumplimiento se verifique en la subasta de bienes inmuebles en relación a la integración del precio, las sumas que el postor hubiere entregado, quedarán embargadas a los fines de cubrir el perjuicio que liquide el acreedor. Además, el postor remiso podrá ser condenado por el juez de la causa al pago de los perjuicios ocasionados, a pedido del acreedor. Determinada la situación de postor remiso, deberá comunicarse a la OSJ quien, ante la verificación objetiva del segundo incumplimiento del mismo usuario informado, aunque no fuera dentro del mismo período de inscripción, procederá a la exclusión y notificación al postor excluido. En Córdoba, no se establece el embargo sino una multa del 20 % valor ofertado como cláusula penal que se procede a certificar y ejecutar por la Oficina de Administración.

RESPONSABILIDAD DEL PODER JUDICIAL: Prevé que el Portal se encontrará disponible las veinticuatro horas y durante todos los días del año, en condiciones técnicas, de accesibilidad y seguridad óptimas. Esta última palabra es relevante, toda vez que si expresamente el PJ asume esta condición del sistema, luego no podría deslindar responsabilidad por un hackeo externo. Discrimina las obligaciones de los usuarios internos y externos: Los usuarios del sistema pertenecientes al Poder Judicial y los Martilleros, deben operar el sistema conforme al presente reglamento, las capacitaciones que al efecto se impartan y los protocolos o guías de buenas prácticas que se implementen. Los visitantes y postores registrados, contarán en el Portal con la información necesaria para su uso correcto, que debe ser responsable y de buena fe. Finalmente entra en contradicción con la garantía de seguridad expresada con anterioridad en cuanto, al igual que lo hacen todas aquellas Provincias donde se ha tercerizado el sistema, no asume responsabilidad por las interrupciones, suspensiones o el mal funcionamiento en el acceso u operatividad del Portal, cuando tuvieren origen en situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o provocadas por terceros, no siendo cuestionable las dos primeras, pero sí la tercera, máxime cuando el



sistema no es opcional. Hoy en día existen 329 subastas vigentes en el portal, 189 a realizarse, 46 suspendidas y 354 terminadas.

2.4. Sistema de subasta judicial electrónica de La Pampa

El Tribunal Superior de La Pampa desarrollo el sistema de subasta electrónica con fundamento en la Ley provincial 2925 que autoriza “la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas y digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan por ante el Poder Judicial de la provincia de La Pampa, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales”, permitiendo que este Cuerpo reglamente su utilización y gradual implementación. La Pampa tomó el modelo de Córdoba y desarrollo el sistema de subasta de la misma manera y a través de la misma empresa, la que llevó a cabo también la capacitación. El sistema de subastas electrónicas se crea la justicia pampeana el 9/2/22, a partir del Acuerdo 3830 del Superior Tribunal de Justicia, que también dispuso un reglamento similar al de Córdoba, convirtiéndose en la cuarta provincia en adoptar el sistema de la empresa Argentina Vende SA. La acordada del STJ previó la creación de un Registro General de Postores, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales, y también el dictado del reglamento que –entre otras cosas– establece el deber de confidencialidad y responsabilidad en el uso de la plataforma. Antes de comenzar a subastarse bienes el sistema ya disponía de 43.000 usuarios únicos en el país, y unos 700 que ya se habían registrado, lo que revela un alto nivel de confianza en el funcionamiento del sistema y de la posibilidad de comenzar su implementación con una alta cantidad de posibles postores⁴². No obstante, dada la novedad del sistema, al 08/09/2022 se encuentran publicados solo dos bienes (automóviles), se encuentran próximas a realizarse otras dos y se han realizado quince (15 subastas). El portal de formato

⁴² <https://justicia.lapampa.gob.ar/mas-noticias/1503-subastas-electronicas-un-sistema-que-funciona-bien.html> publ.del 11/03/2022. (Cons. 08/09/22)



similar al de Córdoba, San Luis y Entre Ríos, está habilitado para las causas que se tramitan ante los organismos de los fueros civil, comercial y de minería; laboral; contencioso administrativo; de ejecución, concursos y quiebras; y de familia, niñas, niños y adolescentes de las cuatro circunscripciones judiciales.

El sistema de subastas se accede a través del Portal de Subastas Judiciales Electrónicas (PSJE), según lo establece el reglamento aprobado por el STJ. El sistema fue licitado por el propio Superior Tribunal y abarca tanto a bienes muebles registrables y no registrables, aunque también se puede acceder por medio del portal esubastas.ar. La reglamentación es similar a la de Córdoba y en general a la de los portales desarrollados por Argentina Vende SA con algunas diferencias dispone:

- Implementación obligatoria para todo tipo de bienes de manera obligatoria, salvo que por las características de los bienes a subastar, su valor probable de venta u otro motivo suficiente, justifique la realización de los bienes por mecanismos tradicionales u otras modalidades previstas en la legislación vigente.

- Disponibilidad las veinticuatro (24) horas, durante todos los días del año, en condiciones técnicas, de accesibilidad y seguridad óptimas. A tal efecto, el portal funciona dentro de la Órbita de la Secretaría de Servicios jurisdiccional dependiente de la Dirección de Administración, tiene a su cargo el Registro de Postores Supervisar el debido uso del Portal de Subastas para su adecuado funcionamiento y confiabilidad, informando y articulando lo pertinente con los organismos judiciales, martilleros, usuarios y la empresa prestataria del servicio y resguardar la información de las SJE mediante el correspondiente “back up” periódico del sistema. Ello resulta contradictorio con lo que se dispone en el artículo 29 del reglamento, como en todos los demás casos donde se ha implementado el sistema por la empresa Argentina Vende SA, en tanto prevé que el Poder Judicial de la Provincia de La Pampa no será responsable por las interrupciones, suspensiones o el mal funcionamiento en el acceso u



- operatividad del portal, cuando tuvieren origen en situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, o provocadas por terceros.
- La subasta debe cargarse 24 hs. después de que este firme el decreto de subasta. El Plazo de publicidad es de 7 días corridos y la duración de la subasta 5 días hábiles al igual que en Córdoba.
 - El registro de postores se realiza de la misma forma que en Córdoba, la cuenta de usuario es de uso personal e intransferible, quedando terminantemente prohibido su acceso por parte de un tercero distinto a su titular, como así también su transmisión o cesión por cualquier causa o recargar el sistema.
 - El incumplimiento de las obligaciones establecidas y compromisos asumidos por el usuario facultará a la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales a suspenderlo por un plazo de hasta dos (2) años.
 - El postor remiso, además de las responsabilidades establecidas en el artículo 544 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Pampa, será suspendido por el plazo de seis (6) meses y si fuera reincidente la suspensión será por el lapso de dos (2) años calendario, pero no se prevé multa como en Córdoba y San Luis

Contiene un norma hermenéutica en el artículo 32 del Reglamento, que no poseen los otros casos, según la cual Los conflictos que pudiesen suscitarse con motivo de la aplicación del presente reglamento deberán resolverse con criterio amplio y flexible, evitando cualquier exceso de rigorismo formal, priorizando siempre la adecuada protección del derecho de defensa, el cumplimiento de la finalidad del acto que se pretenda controvertir y el debido proceso.

Hoy en día⁴³ en el portal de subastas se registran existen vigentes 3 subastas , 3 a realizarse y 15 terminadas.

IV. La Subasta Judicial Electrónica a nivel nacional: Adopción de las TIC

⁴³ 15/9/2022



A nivel nacional la CSJN no ha implementado aún la Subasta electrónica para los remates llevados a cabo por los tribunales nacionales y federales, manteniéndose el sistema de subasta presencial. Sin embargo, se utilizan medios electrónicos, en algunos aspectos, para garantizar en cierta medida seguridad y seriedad, como así agilizar algunas etapas.

1. Utilización del DEO

Con fecha 19/03/2012 se dispuso la sustitución del soporte papel por uno digital para solicitar fecha de subasta a la Dirección de Subastas Judiciales de la CSJN⁴⁴ por medio del Sistema de Diligenciamiento Electrónico de Oficios (DEO), como así comunicar la suspensión de la misma, pero ello solo limitado a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.⁴⁵ Dicha modalidad fue implementada por Res. Interna 303/12 de la CSJN en donde se expresa que se ha tenido en cuenta para admitir su uso que la aplicación diseñada por la Dirección de Sistemas de la CSJN es interna, es decir, se encuentra en un ámbito tecnológicamente seguro por estar radicado y administrado enteramente por la CSJN. Con ello se advierte una cierta reticencia a permitir el acceso del público en general a sistemas abiertos que puedan quedar expuestos a modificación, supresión o utilización de datos, o bien sistemas desarrollados por terceros ajenos al poder judicial. Por otro lado, con motivo de la pandemia se estableció un protocolo de acreditación on line de participantes en la página web de subastas de la Corte Suprema, y algunas disposiciones complementarias que se debe cumplir por quien desee participar de manera previa al acto.⁴⁶

2. Publicación de las Subastas Programadas

⁴⁴ Corte Suprema de Justicia de la Nación.

⁴⁵ <https://subastas.csjn.gov.ar/ofisubastas/files/res3032012.pdf> (cons.09/09/2022)

⁴⁶ <https://subastas.csjn.gov.ar/ofisubastas/files/protocolo.pdf> (cons. 09/09/2022)
<https://subastas.csjn.gov.ar/ofisubastas/files/dc.pdf> (cons.09/09/2022)



Las subastas programadas son publicadas en la página Web de la Corte⁴⁷. En ella se puede acceder al listado de los remates programados en la sección “Avisos” donde se informa fecha y hora del remate, fuero, Tribunal, autos, el bien a rematar y el precio base.

3. Acreditación de participantes y registro de oferentes

Aquellas personas interesadas en participar de una subasta judicial deberán registrarse, La inscripción inicia diez (10) días antes de la subasta, a las 12 hs y debe hacerse dos días hábiles antes de la subasta como mínimo en forma digital en la Central de Turnos que opera en la página web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se accede en la página al link de turnos y se puede optar para participar o registrarse como postor. A tal fin, se deberá completar un formulario, con los datos personales y correo electrónico de contacto, pero además en el caso del registro como postor también solicita CBU⁴⁸. Sin embargo, también deberá presentarse ante la Oficina de Subastas para presentar la documentación en formato papel. Este registro dura un año, debiendo en lo sucesivo solo solicitar el turno. Una vez registrado el sistema le otorgará un turno por orden de inscripción que le será comunicado a ese correo electrónico con un código, con los cuidados que se deberán observar y las disposiciones por seguir, permitiéndose la asistencia a una sola subasta por semana por interesado, lo que se controla por la Oficina de Subastas Judiciales, pudiendo ser retirados del recinto quienes no cumplan con los protocolos sanitarios o las indicaciones del personal de la oficina. Los postores deberán estar registrados en el Registro de Postores con una antelación no menor a siete (7) días de la fecha de la subasta en la que pretendan participar. Una vez realizado el registro y confirmado el turno todos los pasos siguientes son presenciales: el inscripto al remate deberá presentarse en la puerta de la Oficina de Subastas Judiciales, con DNI⁴⁹, copia

⁴⁷ <https://www.csjn.gov.ar/transparencia/remates/remates-programados> (cons.09/09/2022)

⁴⁸ Clave Bancaria Uniforme

⁴⁹ Documento Nacional de Identidad



de mail de confirmación de inscripción al remate y certificado de vacunación que se obtiene a través de www.miargentina.gob.ar. Aquellas personas que tengan otorgado un turno y no concurren a una subasta, deberán cancelarlo por el sistema, con una antelación no inferior a 24 horas hábiles de su realización, bajo sanción de ser inhabilitado para participar en futuras subastas.

IV. La Subasta Judicial Electrónica en el Derecho Comparado

1. La subasta judicial electrónica en España: Sistema estatal externo al Poder Judicial

La subasta judicial en España se realiza por fuera del ámbito judicial, mediante un portal que aglutina todo tipo de subastas realizadas por el estado. Este sistema se puso en marcha en Octubre del 2015 a través de un portal único denominado “Portal Único de subastas judiciales y administrativas en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado”⁵⁰. La creación de este portal fue dispuesta por la ley 19/2015, de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil (13/07/15)⁵¹, y otorga a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado la misión de crear un portal único de subastas judiciales con el objeto de dar mayor transparencia al procedimiento y obtener el mayor rendimiento posible de la venta de los bienes que integra o modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil Española posteriormente retocada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre. Señala José María de Pablos O’Mullony⁵² que todas las subastas oficiales judiciales y notariales celebradas en España, hasta el año 2015, eran presenciales; “dotadas de escasa publicidad, de una liturgia encorsetada y estrecha que fiaba al puro formalismo la garantía de su realización; era un sistema poco evolucionado, mucho más próximo al siglo XIX que al XXI y que en nada aprovechaba las posibilidades técnicas existentes ya

⁵⁰ <https://subastas.boe.es/ayuda/ManualPortalSubastas.pdf> (09/09/2022), y

⁵¹ https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-a-2015-7851 (Cons.12/09/2022)

⁵² O’MULLONY, José María de Pablos, *Código de Subastas Electrónicas, Ed. actualizada al 3 de Agosto de 2022 Ed. Agencia Boletín Oficial del Estado, Madrid, p.2.* [www.boe.es.biblioteca_jurídica/\(cons.14/09/2022\)](http://www.boe.es.biblioteca_jurídica/(cons.14/09/2022))



desde hacía dos décadas. Estas circunstancias hicieron del sistema un coto prácticamente cerrado a los mismos acreedores o a los profesionales de las subastas, no necesariamente “subasteros” en el peyorativo significado del término, que parece siempre incluir prácticas inmorales, sino de personas que habían hecho de la intermediación en las subastas su forma de vida, exprimiendo a su favor la limitadísima publicidad de aquellas. Y esto es así porque, con excepción de un sistema piloto en la región de Murcia, en cuanto a subastas judiciales, y de las subastas de la Agencia Tributaria, ambas con publicidad en internet y con posibilidad de pujar de forma remota o telemática, aunque con realización presencial en todo caso, ninguna otra subasta oficial convocada para la transmisión de bienes o derechos gozaba de más publicidad que una triste publicación de un edicto en el tablón de anuncios de un remoto juzgado o de un anuncio perdido entre la maraña de anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado. El sistema cambia radicalmente con la publicación de varias normas referentes a las subastas judiciales y notariales, llevando las mismas en pocos meses desde el siglo XIX al XXI en una apuesta decidida por el futuro y por procedimientos electrónicos. Un modelo de subasta en la red, a cargo y con la garantía de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, a través de un solo portal de subastas electrónicas, con una amplísima publicidad que se mantiene durante todo el tiempo de celebración de la subasta, invirtiendo los términos existentes hasta entonces que se resumían en un gran plazo de anuncio -con la poca efectividad que ya se ha comentado- y un solo día de realización”.

Las subastas judiciales electrónicas pueden incluir distintos tipos de bienes:

- Bienes inmuebles: viviendas, garajes, solares, etc.
- Bienes muebles: maquinaria, mobiliario, etc.
- Vehículos: turismos, vehículos industriales, y otros vehículos.



La convocatoria de la subasta se anuncia en el “Boletín Oficial del Estado”, cuya pagina web es “subastas.boe.es”.⁵³ Una vez que el Letrado de la Administración de Justicia (lo que en Argentina sería la Secretaría) ante el que se siga el procedimiento de ejecución ha ordenado la publicación del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado” y en el portal de de la Administración de Justicia (en este último solo con el fin informativo). Asimismo, otra oficina estatal denominada “Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)”, que funciona dentro del Ministerio de Justicia, se encarga de auxiliar a los órganos judiciales y a las fiscalías en la localización de activos y en la gestión de los bienes incautados, embargados o decomisados, a fin de evitar actuaciones antieconómicas y garantizar, dentro del respeto a la ley y con el cumplimiento de todas las garantías procesales, el máximo beneficio económico. Es decir, cumple algunas funciones que en Argentina son llevadas a cabo por el martillero.

Una vez que la subasta judicial esta publicada en el portal del BOE , para poder participar de una subasta judicial en España, se debe acceder al Portal de Subastas electrónicas de la Agencia Estatal el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE). El sistema de búsqueda permite localizar las subastas en base a distintos criterios tales como el origen, el tipo, el estado, dirección, fechas, el identificador, etc. Garantizar la fiabilidad de las transacciones a través del control de usuarios mediante certificados electrónicos. Garantizar la transparencia mediante la implantación del sello de tiempo y la trazabilidad de todos los procesos. Cualquier persona puede acceder al portal para obtener información básica, pero para poder obtener información más detallada y ofertar hay que ser usuario registrado y tener certificado digital de registro como postor. Los usuarios que no tienen certificado electrónico no son válidos para operar en el Portal de subastas, por no alcanzar el nivel de seguridad requerido por el Portal. Durante el proceso de registro, el Portal le asignará un usuario debiendo registrar una contraseña. Es posible obtener un certificado como representante.

⁵³ El artículo 645.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, después de la modificación introducida por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil



Los usuarios registrados son los que podrán operar en el sistema y suscribirse para recibir alertas.

Para poder pujar en una subasta hay que registrarse y constituir depósito obligatorio para cada subasta del 5 %. El sistema le indicará el importe establecido para el depósito y le solicitará una clave identificatoria de una cuenta bancaria (como si fuera el CBU) en la que el usuario sea titular. La constitución de un depósito desde una cuenta en la que el usuario es un representante autorizado (no es el titular de la cuenta), sólo podrá realizarse si el usuario se ha identificado en el Portal de Subastas con certificado electrónico. Para la constitución de los depósitos, el Portal de Subastas utilizará la pasarela de pagos que la Agencia Estatal de Administración Tributaria pone disponible para tal efecto (el equivalente a AFIP⁵⁴ argentina). De esta forma, el Portal de Subastas ordena automáticamente la devolución de los siguientes depósitos: Los depósitos realizados por postores no ganadores que no hayan solicitado reserva de postura, se devuelven cuando la ejecución de la subasta concluye en el Portal. Los depósitos realizados por postores no ganadores que hayan solicitado reserva de postura, cuando la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos finaliza la subasta (sería el equivalente a la aprobación). Cuando la subasta es cancelada, se devuelven todos los depósitos existentes.

Se puede hacer compras en comisión indicando en la primera puja si lo va a hacer en propio nombre (la persona física registrada), en régimen de gananciales o en representación de un tercero o también se puede pujar a medias con otra persona, lo que es novedoso. Las pujas sucesivas se entenderán realizadas con las mismas características de la primera puja. En el supuesto de actuar en nombre de un tercero y resultar ser el mejor postor, una vez finalizada la subasta, tendrá que remitir un correo a la dirección administracionbienes.org@mjusticia.es que deberá contener la siguiente información: identificación de la subasta, Número de referencia del lote en el que

⁵⁴ Administración Federal de Ingresos Públicos



ha sido mejor postor, datos personales y bancarios, copia del poder o nombramiento que acredite la representación

Para realizar una puja, el usuario deberá entrar en el sistema utilizando sus credenciales (certificado electrónico o identificador y contraseña), localizar la subasta en la que desea pujar y constituido el depósito correspondiente. Una vez efectuado el sistema ofrece un desplegable con las 100 primeras pujas posibles y si el postor desea realizar una puja superior puede ir al "Rango siguiente" para obtener en el desplegable los importes de las 100 siguientes pujas posibles. Podrá repetir esta operación tantas veces como necesite hasta que se muestre en el desplegable el importe deseado para su puja. Cuando el postor avance en los rangos de puja, el Portal también le permitirá volver a los rangos anteriores habilitándole el botón seleccionable "Rango anterior".

VERIFICACION DE PUJAS: En el momento del envío de la puja, como medida adicional de seguridad, el portal enviará un SMS o un correo electrónico al postor con un código para verificar la puja. Además, si el postor está realizando su primera puja en una subasta, el sistema le pedirá que indique si actúa en su nombre, en régimen de gananciales o en el de terceros y si desea reservar su mejor puja hasta que se produzca la adjudicación definitiva o no. En caso de actuar en régimen de gananciales o en nombre de terceros, el usuario tendrá que aportar los datos correspondientes y estar en disposición de aportar la documentación que lo acredite en caso de resultar ganador de la subasta. El portal admitirá pujas por importe igual o inferior a la más alta ya realizada a los efectos de reservarlas para el caso de falta de consignación del resto del precio de adquisición por el vencedor. Estas pujas solamente podrán realizarse con reserva de postura. Por cada puja realizada y confirmada, el postor recibirá por correo un documento que acredite su puja. En todo momento, el postor podrá comprobar cuál es el importe de su puja máxima y de la puja máxima para la subasta. Una vez que se realizó la puja no se puede modificar ningún dato confirmado por el postor y registrado en el sistema, por eso, hay que estar bien seguro antes de realizar la puja.



RESERVA DE PUJA: El sistema brinda la posibilidad de reserva de puja que es un mecanismo previsto por la ley para el caso de que el mejor postor no pague el precio que ha ofrecido por el bien subastado, permitiendo a los demás postores pujar por debajo de ese precio y quedar a la espera de que si el mejor postor no lo paga, se pueda adjudicar al siguiente mejor postor por el precio que éste haya ofrecido. Para ello al realizar la primera puja, hay que indicar que se desea realizar reserva de su puja máxima. Si no se realiza reserva el depósito correspondiente será devuelto en el momento de conclusión de la subasta en el Portal de Subastas, si el postor no ha resultado ganador. En caso contrario, el depósito será retenido, aunque la puja máxima haya sido superada por otro postor, hasta que la subasta sea adjudicada y finalizada por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, para contemplar el caso de que los postores con pujas más altas no resulten finalmente adjudicatarios y pueda ser este postor el nuevo ganador. En este caso, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos nombrará como nuevo adjudicatario al segundo o sucesivo mejor postor que hubiera solicitado la reserva de su puja.

Es posible realizar pujas por debajo de la puja más alta, en particular cuando los precios ofertados por otros postores puedan parecer altos y no ajustados al valor de mercado del bien. Si de verdad le interesa el bien, puede reservar su puja pujando por debajo del precio más alto lo que considere ajustado, aunque el depósito estará retenido un tiempo más amplio al finalizar la subasta. Una vez finalizada la subasta el sistema únicamente facilita a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos los datos del mejor postor y del precio que ha ofrecido. Sólo en el caso de que el mejor postor no pague el precio en el plazo establecido, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos pedirá información de quién es el siguiente mejor postor que haya reservado postura, y así sucesivamente. Es importante señalar que el postor que haya reservado postura no puede renunciar a ella y solicitar la devolución de su depósito, sino que deberá esperar a que finalice el trámite de pago del resto del precio por el mejor postor. Si éste no paga, y le llega el turno de pago al que reservó postura, se le dará un plazo para



pagar y si no paga perderá el depósito previo. En virtud de lo dispuesto en el artículo 32.5 del Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, si ninguno de los rematantes consignase el precio en el plazo señalado o desistieran de su oferta, decaerán automáticamente en su derecho y perderán el depósito que hubieran efectuado, sin menoscabo del resarcimiento de los daños y perjuicios que hubieran podido ocasionar en lo que exceda de la caución efectuada y siempre que lo acredite la Administración Pública. Los depósitos no devueltos se ingresarán en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Oficina y tendrán la consideración de producto obtenido por la gestión de la Oficina.

DURACION DE LA SUBASTA Y OFERTA DE ULTIMA HORA : El plazo de apertura de una subasta es mucho mas amplio. La subasta permanecerá abierta durante veinte días corridos, desde su inicio hasta su cierre, y no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, siempre que ésta fuera superior a la mejor realizada hasta ese momento, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de veinte días hasta un máximo de 24 horas desde el cierre previsto inicialmente (a diferencia de lo que ocurre en los sistemas de Argentina donde solo se prorrogan minuto a minuto). Si durante la hora siguiente a la última postura no se hiciera ninguna puja, la subasta se cerraría antes, pero también permite la incorporación de nuevos postores hasta que se cierre definitivamente la subasta.

PAGO DEL PRECIO: Cuando la subasta concluye en el Portal, este mismo ordena la transferencia del importe consignado por el primer postor, a través de la AEAT (Como la AFIP) y el Banco de España, a la cuenta de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. La diferencia del precio ofrecido, debe ser ingresado por el postor ganador en la cuenta de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en el termino de diez (10) días hábiles, en subastas de bienes muebles y vehículos, y cuarenta (40) días hábiles en las de inmuebles. Una vez pagado el precio, en general el plazo para retirar los bienes es de cinco días hábiles desde el ingreso del precio y su comunicación a la Oficina de



Recuperación y Gestión de Activos, pudiendo establecerse otro en las condiciones generales de venta.

2. Sistema de Subasta Judicial Electrónica de Perú: Modelo propio Nacional con posibilidad de adhesión jurisdiccional

En Perú el sistema de subasta electrónica funciona a través del (REM@JU). El REM@JU consiste en un portal de modelo propio creado dentro de la página web del Poder Judicial Nacional, en cumplimiento y en consonancia con los principios establecidos en 2014 por la Ley 30229 del Congreso de la República del Perú (10/07/2014)⁵⁵ que adecúa el Uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Sistema de Remates Judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la ley orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo, en todo lo referido al Remate Electrónico Judicial. La ley 30229, regula los remates judiciales electrónicos y encomienda al Poder Judicial la creación del Sistema para ello (REM@JU) y su reglamentación. A tal efecto, la normativa hace lo que no realizó ninguna de las otras normas analizadas: establece una serie de principios a los que debe ajustarse el sistema⁵⁶:

- Equivalencia Funcional: establece la misma validez jurídica de los remates electrónicos y los comunes presenciales
- Neutralidad Tecnológica: El sistema debe cumplir con requisitos de seguridad jurídico – informática en el uso de normas tecnológicas de autenticación de la información, accesibilidad y trazabilidad que cumplan con estándares nacionales e internacionales.

⁵⁵ Ley 30229 (10/07/2014) <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/292148-30229>

⁵⁶ <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/356709/30229.pdf>



- Eficiencia: Adopción de las medidas necesarias para que los remates se realicen preservando los recursos de la entidad, y cumpliendo los objetivos programados conforme el tiempo y plazos previamente establecidos
- Igualdad: Posibilidad de solicitar acceso en igualdad de condiciones
- Imparcialidad: el sistema informático debe responder de manera imparcial a las acciones de usuarios y postores
- Inclusión: El sistema debe permitir a una universalidad de usuarios el acceso a nivel de hardware, contenido y aplicaciones.
- Transparencia: El sistema debe permitir ver sin restricciones las reglas de la subasta, la características de los bienes, el estado del proceso, la participación de usuarios postores, la visualización de las ofertas durante el desarrollo del remate y la adjudicación al mejor postor

Además, la ley exige al Poder Judicial para poder habilitar el sistema :

- Confidencialidad de la identidad de los postores
- Garantizar bajo responsabilidad administrativa, civil o penal que correspondiere la confidencialidad de la identidad de los postores la integridad, disponibilidad, confiabilidad y trazabilidad de la información , la que debe evitar el uso ilícito o ilegítimo que pueda lesionar los intereses o derechos de los titulares de la información
- Generar los medios para poner a disposición y compartir la información, funcionalidades y tecnología como así contar con trazabilidad de los registros que permita identificar y analizar situaciones generales o específicas de los servicios digitales
- Constituirse como prestador de servicios de certificación digital ante la INDECOPI⁵⁷

Todo ello revela que el sistema debe cumplir altos niveles de seguridad a la vez que expresamente se pone en cabeza del Poder Judicial la responsabilidad frente a la omisión en su cumplimiento. En función de estas pautas es que el

⁵⁷ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Perú



REM@JU fue creado en el año 2016 dentro del Poder Judicial ,mediante Res.268/2016 CE PJ del Consejo Ejecutivo que también aprueba la Directiva 008/2016 regulatoria de su funcionamiento, pero no fue implementado sino hasta 2020 en que se modificó la Directiva 008/16 para incorporar mejoras y modificaciones del reglamento y del procedimiento de remate electrónico que permitieran su implementación, siendo la vigente la Directiva 001/20 aprobada por Resolución Administrativa N° 015-2020-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial⁵⁸.

El sistema comenzó a funcionar en Lima para el fuero civil con subespecialidad Comercial y de allí se fue extendiendo a medida que cada corte iba realizando las adecuaciones técnicas en coordinación con el Consejo Ejecutivo y la Gerencia de Informática de la Gerencia General. El sistema de subasta electrónica REM@JU es obligatorio para todas las dependencias judiciales de Perú a nivel Nacional y para todas aquellas jurisdicciones que quieran implementar la subasta electrónica, a diferencia de lo que ocurre en Argentina donde el Poder Judicial de cada provincia no depende de la Nación y se implementa de manera independiente y con el procedimiento que estime conveniente.

El procedimiento previsto es el siguiente: dictado el decreto de remate, si no hay oposición dentro de los tres días, el secretario debe cargar la resolución en el portal. El decreto debe prever una eventual segunda y tercera convocatoria automática. Cargado el decreto, el portal automáticamente establece el cronograma, plazo para las ofertas y finalización. Una particularidad es que si el bien a rematar esta fuera de la jurisdicción del Tribunal que ejecuta debe comisionarse electrónicamente al Secretario de aquella otra para que cargue el aviso en la plataforma de su jurisdicción y mande el acta de aviso para incorporar al expediente.

⁵⁸ <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/68f579804d339ee487de8f3325f35162/RA.+N%C2%B0+015-2020-CE-PJ.pdf>



El trámite de registro de postores es similar al del sistema argentino, para ser postor hay que hacer un registro de casilla electrónica como persona “natural o jurídica”, llenar los datos y llevar la documentación que se requiera de forma física al Operador de Casilla Electrónica para que los verifique y valide. Si efectúa el registro como postor, informa a la casilla de correo electrónico dentro de los cinco días hábiles.

Como particularidades pueden mencionarse el plazo de publicación de la subasta que es por diez días calendario, pero la duración de la subasta es la más corta de los sistemas analizados, siendo solo de 24 hs; el depósito en garantía obligatorio para cualquier remate del 10% del monto de tasación del bien en el Banco de la Nación. En este caso, el Tribunal, como proceso interno, controla los depósitos dentro de los 3 días hábiles de publicado el remate y los valida, pudiendo pujar solo los postores validados. Otra particularidad es que el remate comienza a las 12 hs. de la fecha fijada y termina a las 12 hs. del día siguiente. El sistema automáticamente, al finalizar, emite un reporte del resultado para ser visto por todos los postores quienes también pueden ver allí el plazo para efectuar el pago y de devolución del depósito para los que no ganaron. Por otro lado, si en la subasta no hubo postores, el sistema genera una nueva fecha y eventualmente la tercera. El postor ganador que consigna el sistema debe realizar el pago del saldo mediante certificado de depósito judicial electrónico y el tribunal debe validarlo dentro de los tres días hábiles. Una vez validado se emite un certificado de postor ganador firmado digitalmente por juez y secretario que se manda a la casilla del postor. Al igual que en todos los otros sistemas, se admite la eximición de consignar si el acreedor fue el mejor postor y en este caso el certificado de postor ganador es automático. A los demás postores no ganadores se les genera un certificado de pago virtual con un código de orden de pago para recuperar el depósito, pero la recuperación no es automática sino que debe ir al banco. Solo es automática en caso de que el remate se suspenda, circunstancia que habilita al Secretario del Tribunal a activar esta opción, devolviéndose automáticamente los importes. Finalmente, si el remate resulte



desierto los postores tienen la opción de mantener el depósito para las posteriores convocatorias o retirarlo.

VI. Conclusión y Propuestas

- En la totalidad de los casos en que se ha decidido implementar la subasta judicial electrónica se ha tenido en cuenta que el sistema permite mayor transparencia en el proceso como así obtener una liquidación de los bienes a valores de mercado, facilita la publicidad y la extiende fuera de la jurisdicción de la subasta permitiendo un aumento sensible en el número de postores, con lo cual también aumenta las posibilidades de que el remate resulte exitoso, baja los costos de publicidad, permite identificar fácilmente a los postores, asegurar el pago y excluir a postores incumplidores.
- La subasta judicial electrónica reduce considerablemente el planteo de incidentes al ser un sistema automatizado que no da lugar a controversias durante el proceso, a la vez que evita el dispendio de tiempo para los funcionarios que deberían estar presentes en una subasta, como así del martillero, pudiendo realizarse varias subastas de un mismo tribunal al mismo tiempo. No se han encontrado fallos que cuestionen el procedimiento de subasta electrónica. Sin embargo, posee los típicos riesgos informáticos que el estado debe evitar y en su caso asumir
- La subasta judicial electrónica es un acto estatal por más que se tercerice el desarrollo y mantenimiento del software que provee el servicio y en algunos casos sea un procedimiento opcional. Por tal motivo, en los casos de modelo tercerizado, como Córdoba, San Luis, La Pampa y Entre Ríos el poder judicial debe estar en condiciones de ofrecer confiabilidad a las partes y a los postores, como así garantizar y responsabilizarse de que la empresa contratada implemente todo aquel software de seguridad que sea adecuado y necesario para evitar intromisiones indeseadas, como así



la existencia de plan de contingencia y back up de datos, ya sea desarrollado por la misma empresa o por el propio poder judicial.

- El Poder Judicial no puede eximirse de responsabilidad cuando implementa la subasta electrónica, tanto si lo hace mediante un sistema “propio” como si adopta el modelo tercerizado. Ello así en tanto delega una función estatal. Sin perjuicio de la mayor o menor intervención que la ley pueda conferir al martillero en los actos preparatorios, el sistema electrónico elegido sustituye a aquel en el acto público de liquidación del bien. De esta suerte, siendo que el martillero es el delegado del juez en el acto de liquidación, si el estado lo sustituye por un procedimiento electrónico de subasta, aunque con esta modalidad se obtenga mayores beneficios, no deja de ser un acto público. En consecuencia, si el estado implementa esta modalidad, a la vez que se beneficia de las ventajas que otorga a la propia administración y a los ciudadanos, debe asumir el riesgo administrativo que importa la elección de este medio de liquidación, al haberse reservado el monopolio de impartir justicia.
- Si el poder judicial se exime de responsabilidad por el hecho de terceros envía una señal de vulnerabilidad del sistema como así de falta de control a la prestataria. Asimismo, asume una actitud que no se compadece con la seguridad y seriedad que debe brindar el Estado sino con la de una empresa privada.
- Los avances tecnológicos, sumado a la adopción de la subasta electrónica en distintos países, como así la globalización hacen recomendable que los sistemas de subasta judicial electrónica sean periódicamente revisados a fin de incorporar instituciones comparadas que agilizan el procedimiento, ofrecen mayor seguridad, aumentan las posibilidades de éxito de la subasta y reducen los riesgos de postores remisos. A tal fin los poderes judiciales deberían crear una comisión de actualización periódica de los sistemas de subasta con la función de investigar las figuras existentes en otras jurisdicciones nacionales e internacionales para incorporarlas o adaptarlas al propio sistema, pudiendo



generar pilotos para evaluar su conveniencia. De acuerdo al análisis efectuado en el presente trabajo se propone:

- Incorporación de la “reserva de depósito” contemplada en la subasta de la Provincia de Buenos Aires, en la de España y Perú, en los sistemas que no lo tienen, para los casos en los que se haya establecido depósito y a fin de poder pujar, vencido el plazo para el depósito del saldo por el postor ganador, y obtener un mejor precio, en lugar de pasar al ofrecimiento del segundo mejor postor.
- Incorporar la “segunda y tercera convocatoria automática”, prevista en el REM@JU de Perú, para el caso de subastas desiertas de bienes muebles o lotes de bienes muebles, a fin de evitar la tardanza que irroga pedir nueva fecha de subasta, que el decreto quede firme y volver a cargar todos los datos en la página permitiendo que, ante la falta de postores, el sistema mantenga la publicación vigente y el día fijado el sistema abra nuevamente la puja.
- Incorporar la “postura máxima secreta”, prevista por la provincia de Buenos Aires, lo que permite participar en una subasta donde ya se ha analizado las posibilidades de valores y el máximo dispuesto a pagar por un bien determinado de antemano a fin de que el sistema puje automáticamente sin necesidad de estar pendiente de las pujas durante el proceso
- Incorporar la posibilidad de que se hagan pujas a medias en bienes inmuebles de cuantioso valor, como prevé la subasta electrónica de España.



Revista de Derecho Procesal y de Derechos Humanos
Journal of Procedural Law and Human Rights,
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina,
Año 2022, Vol. 1, N°1

ISSN en trámite

SUBASTA J. ELECTRONICA	PCIA. BS.AS.	PCIA DE CORDOBA	PCIA. DE SAN LUIS	PCIA. CATAMARCA	PCIA. DE ENTRE RIOS	PCIA DE LA PAMPA	ESPAÑA	PERU 295
NORMA	Ley 14238	Revista de Derecho Procesal y de Derechos Humanos <i>Journal of Procedural Law and Human Rights</i> , Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Año 2022, Vol. 1, N° 1	AR 192/16/4/18 del STJ	Ley 5664 IS (03/9/20)	Decreto 20/20 (29/11/21)	Ley 2925 y AR3830 del 9/2/22	Ley 19/15 13/07/21	Ley 30229 10/07/2014 R.A. 015-2020 –CE-PJ
MODELO	Propio del PJ	tercerizado	tercerizado	Propio del PJ	tercerizado	tercerizado	Estatal del BOE	Propio del PJ
SITIO WEB	Subastas.scba.gov.ar	subastas.justiciacordoba.gov.ar	Subastas.justiciasanluis.gov.ar	No posee todavía	subastas.jusentrieros.gov.ar	Subastas.justicialapampa.gov.ar	Subastas.boe.es	Rem@ju.pj.gob.pe
IMPLMENT	01/10/2015	15/09/2014	01/06/2018	No pose	29/11/2021	09/02/2022		2020
BIENES	Todo tipo	Muebles : obligatorio MR e I: opcional	Todo tipo	Todo tipo	Todo tipo	Todo tipo	Todo tipo	Todo tipo
DEPOSITO p/ PUJA	Obligatorio para Inm. Y b. sin base	Sujeto a decisión del juez, no prevé % determinado	No prevé	No	5% valor ofertado a criterio del juez	No prevé	Obligatorio del 5%	Obligatorio
RESERVA DE DEPOSITO	Si prevé	No prevé	No prevé	No	No	No	Si	Si
PLAZO DE PUBLICIDAD. DURACION	Publicidad: 10 d. antes Duración: 10 d. corridos	7 d. corridos 5 d. hábiles	7 d. corridos 5 hábiles	8 d. corr. 5 hábiles	6 d. hábiles antes 5 d. hábiles, Posib. incentivo de postores en vivo	7 d. corridos 5 d. hábiles	20 corridos se superpone	10 corridos y 24 hs. de duración
EXTENCION DE DURACION	Of. dentro de los 3 ult. Min extiende 10m	Oferta de último minuto se extiende 1 mas	Idem Córdoba	Idem cba	Idem Córdoba	Idem Córdoba	Of.de ult. h. se ext una mas	No prevé



POST.MAX.SE CRETA	Si	No	No	No	No	No	No	No
POSTOR REMISO	Debe pagar la diferencia de precio perdida inter y costas	Multa 20% del valor ofertado Inhabilitación por 6 meses. Exclusión por reincidencia	Multa del 25% del valor oferta	Causal de exclusión como postor	Embargo de sumas deposito + d y p acreditados + susp. por 6 meses	Susp. 6 meses Reinc.: 2 años Resp. por la disminuc. del precio e intereses y costas	Perdida del depósito +d y p que acredite la administ.	
Responsabilidad	La ley no lo exime Tiene plan de contingencia Comité de impl. y seg. En el regl. Se exime por caso fort. fuerza mayor urgencia y terceros contratistas	Garantiza disponibilidad 24/7 Se exime de resp. Por caso fortuito, fuerza mayor y terceros -no tiene plan de contingencia previo - no tiene comité de control	Idem Córdoba	De la Corte por ley. Eximición no prevista	Garantiza disponibilidad y seguridad pero se exime al igual que Córdoba	Asume el control de confiabilidad y hace back up pero se exime igual que Córdoba	Asume responsabilidad no se exime	Asume resp. Back up Certificación Obligatoria
Forma de pago	Electrónico	Electrónico or pay per tic Tarjeta, debito, transferencia No admite deposito	Idem Córdoba	No implementado	Idem Córdoba	Idem Córdoba	Electrónico a través de plataforma de pagos tributarios	Certificado de depósito judicial electrónico
COMPRA EN COMISION	Si	No	No	No	No	No	Si	No

Tabla N° 1: Cuadro de Subasta Judicial Electrónica analizada en el Derecho Procesal Comparado. Fuente: Elaboración propia.

Abreviaturas:

b.: bienes



Revista de Derecho Procesal y de Derechos Humanos
Journal of Procedural Law and Human Rights,
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina,
Año 2022, Vol. 1, N°1

ISSN en trámite

d.: días
Corr.: Corridos
Posib.: posibilidad
Ult. : último
ext.: extiende
of.: oferta
d y p: daños y perjuicios
Resp o resp.: responsabilidad
Regl. o regl: reglamento
disminuc.: disminución
administrat. Administrativa
impl. y seg. :implementación y seguridad
fort. : fortuito



BIBLIOGRAFIA

AVILA PAZ DE ROBLEDO, ROSA A. (Directora) Manual de Teoría General del Proceso, Ed. Advocatus, Córdoba, 2006.

PALACIO, LINO ENRIQUE, *Derecho Procesal Civil*, t. VII, Ed. Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1982

PODETTI, J. RAMIRO, *Tratado de las ejecuciones*, 3° edic., actualizada por Víctor A. Guerrero Leconte, Ediar, Buenos Aires, 1997

RAMACCIOTTI, HUGO , *Compendio de derecho procesal civil y comercial de Córdoba*, t. II, ed. Depalma, Buenos Aires, 1980

VÉNICA, OSCAR H. *La subasta Judicial en Córdoba*, 3° edic., ed. Marcos Lerner editora Córdoba, Córdoba, 1998

O'MULLONY, JOSÉ MARÍA DE PABLOS, *Código de Subastas Electrónicas*, ed. Agencia Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2022 (edición actualizada al 3 de Agosto de 2022).

- **Revistas jurídicas**

Revista Jurídica Semanario Jurídico Nro. 2368, 25/8/22, ed. Comercio y Justicia, Córdoba, 2022

- **Sitios web oficiales nacionales**

<https://www.scba.gov.ar>

<http://www.saij.gob.ar>

<https://normas.gba.gob.ar>

<https://juscataamarca.gob.ar>

<http://jurisprudenciacba.justiciacordoba.gob.ar>

<https://www.justiciasanluis.gov.ar>

<https://www.jusentrerios.gov.ar>

<https://justicia.lapampa.gob.ar>

<https://subastas.csjn.gov.ar>

<https://subastas.justiciacordoba.gob.ar>

<https://subastas.scjba.gob.ar>

<https://subastas.justiciasanluis.gob.ar>

<https://subastas.justiciaentrerios.gob.ar>

<https://subastas.justicialapampa.gob.ar>

- **Sitios web oficiales internacionales**

<https://subastas.boe.es>

<https://www.boe.es>

https://www.boe.es.biblioteca_jurídica



<https://www.cdn.gob.pe>
<https://www.pj.gob.pe>
<http://remaju.pj.gob.pe>
<https://www.gob.pe>

- **Sitios web privados**

<https://www.mcafee.com>
<https://esubasta.ar>

- **Legislación**

Buenos Aires

Ley 14238 de la Provincia de Bs.As.
 Ley 7425 Código de Procedimiento Civil y comercial Provincia de Buenos Aires
 Acuerdo 3604 SCJBA, 12/8/2012,
 Res. 102/12 Sec.planificación de la SCBA,
 Res. 1950/15 Sec. Serv. Jurisdiccionales, SCBA
 Res. 2129/15 23/09/15 Sec. Serv. Jurisdicc. SCBA
 Res. 955/18 13/6/2018, Sec. Serv. Jurisdicc. SCBA
 Res. 3162/19 27/11/2019 Sec. Serv. Jurisdicc. SCBA
 Res.3161 19/02/2021 SCBA

Catamarca

Ley 5664 de la Pcia. de Catamarca
 Acordada CSJ Catamarca Nro. 4575 del 03/8/2022.

Córdoba

Ley 8435
 Ley8465
 Ley 10411
 AR 259 /12 TSJ 20/11/2012
 AR 590/13 TSJ 10/04/2013
 AR 121 B TSJ 01/07/2014
 AR 122 B TSJ 02/09/2014
 AR 1233 A TSJ 16/09/2014
 AR 133 B TSJ 03/11/2015
 AR 147 B TSJ 09/05/2017
 AR 262 TSJ 16/04/2018
 AR 155 B TSJ 22/4/2018
 AR 153/20 TSJ
 AR 165 B TSJ 24/06/2022
 AR "A" 1778 15/8/22

San Luis

AR 192 16/04/2018

**Entre Ríos**

Ley 10.500
Ac.Gral. 20/20

La Pampa

Ley Pcial. 2925
Acuerdo 3830 09/02/2022

España

Ley de Enjuiciamiento civil Española 1/2000
Ley 19/15 de medidas de Reforma administrativa en el ámbito de la administración de justicia y registro civil
Ley 42/2015

Perú

Ley 30229
Res. 268/2016 – CE-PJ
Res. 015/2020-CE-PJ
Directiva 008/16 –CE-PJ
Directiva /20-CE-PJ